Los incontrolados

[*crónicas de la españa salvaje 1976-1981*]

Coeditan:

- Editorial Klinamen *[www.klinamen.org]*

- Biblioteca Social Hermanos Quero *[www.bsquero.net]*

ISBN: 609 - 2543 - 9

Déposito legal:

Primera edición: Noviembre 2004

Índice

LOS AÑOS GRATOS

"Libertad, realización de la libertad:
¿Quién puede negar que estas palabras estén
ahora en el orden del día de la historia?"
Bakunin, La Reacción en Alemania, 1842.

Al empezar la década de los setenta, en las postrimerías del franquismo, mientras la mayoría se conformaba con la libertad que proporcionaba el refugio en la vida privada y el resto se apuntaba a la oposición política al régimen de Franco, aportando bien su mentalidad reformista o bien su delirio militante, unos pocos descarriados entre los que me encontraba, inaptos para la vida política convencional, buscaban la libertad no en una nueva forma del Estado, sino en su abolición. Imbuidos de una emoción hasta cierto punto histórica, se interesaban en las huelgas obreras que entonces ocurrían con frecuencia, y veían en ellas el comienzo de una acción revolucionaria, la esencia de cuyo desarrollo debía ligarse con la memoria de las batallas históricas del proletariado, principalmente las de la guerra civil. Como alguien dijo, la historia era la historia de la lucha de clases y esta lucha era contemplada por la gente como yo como el devenir de la libertad disolviendo las condiciones opresivas imperantes. Las formas en que se materializaba la lucha social, las asambleas, los delegados elegidos y revocables, los piquetes, las comisiones de información, las huelgas, los sabotajes, el absentismo, etc., eran la figura misma objetivada de la libertad, y las fábricas o los barrios populares, el lugar de su existencia máxima. En resumen, las vicisitudes de la lucha de clases eran el huevo de la historia.

Sin embargo, estábamos lastrados con deficiencias en el terreno teórico demasiado evidentes, lo cual hacía que nuestros enfrentamientos con las ideologías militantistas vigentes, todas ellas leninistas, todas ellas "científicas", se saldasen en falso, a menudo mediante la intensificación de la acción callejera. Así las cosas, el impacto que causó en mí la crítica situacionista -yo que profesaba un vago anarquismo existencial- fue profundo. Por fin me encontraba ante una teoría revolucionaria completa con la que interpretar la realidad y sacar las conclusiones más radicales posibles con la convicción absoluta de dar en la diana. Vivir es comprender y los textos de la I. S. constituyeron, pese a mi mal francés, las herramientas fundamentales de mi aprendizaje vital. Como las publicaciones situacionistas eran prácticamente desconocidas en España, no encontré a otro que hubiese emprendido un camino similar al mío hasta

que un mal paso me llevó al exilio. En París, allá por 1975, en septiembre u octubre, conocí a Jaime Semprún, un sesentayochista que en materia de preparación me llevaba bastante ventaja. Su escrito sobre Portugal me había impresionado. Juntos redactamos LA CAMPAÑA DE ESPAÑA DE LA REVOLUCIÓN EUROPEA, un manifiesto que trataba de mostrar al proletariado hispano su propio estilo de lucha con el fin de que adquiriera la conciencia necesaria del combate que libraba ya contra todas las fuerzas del orden. Firmamos como LOS INCONTROLADOS, aquel epíteto que los defensores del orden burgués lanzaran contra los revolucionarios durante la Guerra Civil, y que empezaba a sonar de nuevo cada vez que los trabajadores más conscientes rechazaban las directrices de sus autoproclamados dirigentes políticos y sindicales. Al ocurrir los hechos de Vitoria comprendimos que nos hallábamos en un momento crucial, de esos en los que un movimiento se enfrenta a la alternativa de echar hacia adelante y progresar o pararse y retroceder. No lo comprendió así el propietario de Champ Libre, Gerard Lebovici, que se negó a publicar el soberbio manuscrito que Semprún escribió para la ocasión. Quizás tuvo que ver en el caso el distanciamiento entre Debord, muy influyente en la editorial, y Semprún, lo que motivó un intercambio de cartas publicado por Champ Libre en 1978. En lo esencial, Debord afirmó que se había limitado a no recomendarlo. Yo resumí el libro hasta darle la forma de folleto, me trasladé a Barcelona y lo publiqué con su título original de MANUSCRITO ENCONTRADO EN VITORIA. El escrito tuvo mejor fortuna que el anterior y fue reeditado varias veces. Seguramente ha sido el texto radical sobre la fallida revolución española más leído.

En el verano de 1977 se formó el grupo libertario de los TRABAJADORES POR LA AUTONOMÍA PROLETARIA Y LA REVOLUCIÓN SOCIAL. Apenas fuimos más de doce en nuestro mejor momento, pero desarrollamos una intensa actividad de agitación, en parte reflejada por la reedición de Likiniano "Abajo los partidos y sindicatos, vivan las asambleas y piquetes". Básicamente defendíamos la independencia de la clase obrera a través de la consolidación de los mecanismos de la democracia directa, de base, que no podían ser otros que la asamblea soberana y los medios de lucha emanados de ella y controlados por ella, frente a la acción liquidadora de los partidos políticos y los sindicatos. No teníamos nada que ver con la moda autonomista italiana, a la que considerábamos la última forma del leninismo, y sí con los aspectos revolucionarios del anarcosindicalismo, precisamente aquellos que la CNT reconstruida pugnaba por desprenderse. Nuestra posición podía resumirse en acción directa menos sindicalismo. Para ilustrar la encrucijada en la que se hallaba el movimiento obrero asambleario escribí los COMENTARIOS ACERCA DE LA ESPAÑA SALVAJE EN

el prólogo de su segunda revolución. En esa lucha desigual por la autonomía de la clase, los proletarios se llevaron la peor parte. El resultado fue la derrota de las asambleas. Entonces escribí los nuevos comentarios acerca de la españa salvaje mojándome en espinosos temas como el de la neocnt, la casa común de sindicalistas extraviados, aventureros, anarquistas folklóricos y provocadores, y el no menos espinoso del independentismo obrerista, partidario de disimular la cuestión social tras una cuestión nacional, dividiendo a los trabajadores por nacionalidades e imponiéndoles objetivos extraños a su lucha. Al final, llamábamos a los proletarios a reinventar la revolución definiendo fines, empleando medios y formulando un proyecto, como los situacionistas. El grupo dejó de actuar como tal acabándose ya 1979. Pese a las renuncias que se producían por todas partes, me mantuve activo. Entre otras cosas, colaboré con Debord en la campaña que promovía a favor de los presos libertarios pegando su manifiesto "A los libertarios" en las paredes de varias ciudades. También retomé las discusiones con Semprún sobre la cuestión española, fruto de las cuales fueron las reflexiones sobre la descomposición del estado español, tercer y último folleto de "Los incontrolados". En él destacaría el tratamiento del terrorismo inducido por infiltrados y dobles agentes como herramienta de grupos de poder enfrentados para dirimir sus diferencias y desactivar de paso los rescoldos revolucionarios, inspirado en los análisis hechos por Debord y Sanguinetti de la experiencia italiana conocida como "estrategia de la tensión". En 1981 estábamos en pleno reflujo social y costó difundir el folleto, del que se repartieron no más de trescientos ejemplares. Los trabajadores habían caído en manos de los sindicatos, todavía necesarios para frenar la resistencia a la reestructuración económica, y abdicaron definitivamente como clase en 1988, cuando se sometieron a una vergonzosa huelga general mediática en apoyo de la institucionalización ventajosa de los artífices sindicales de su derrota. No volví a escribir sobre el tema hasta 1984, cuando en la redacción de la revista encyclopédie des nuisances hicimos inventario del "segundo asalto del proletariado a la sociedad de clases" y publicamos la "Histoire de dix ans". Recientemente unos compañeros han editado en Valencia mi contribución con el título de "Informe del Movimiento Asambleario".

Los años ochenta fueron los verdaderos años de transición, el final de una época marcada por la lucha de clases. Desde entonces los años han sido siempre malos para la buena causa de la libertad. Con la ayuda de la tecnología el capitalismo pudo dar el salto hacia adelante de la mundialización y las clases se transformaron en masas. La mercancía penetró por todos los rincones de la vida cotidiana, aislando a los individuos y sometiéndolos a los imperativos del

consumo técnicamente equipado. Cualquier rastro de sociabilidad o de vida comunitaria fue irremisiblemente borrado. El resultado ha sido la esclavitud más abyecta. En esas estamos y no se podrá avanzar un solo paso sin recobrar la conciencia de todo lo que hemos perdido. Para eso será conveniente repasar de vez en cuando los combates de antaño, porque en ellos los que tomaron parte aprendieron a ser libres.

Miguel Amorós, Abril de 2004.

Comentarios acerca de la España salvaje en el prólogo de su segunda revolución.

1. ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS CLASES EN ESPAÑA A LA HORA DEL RELEVO DEL FRANQUISMO.

«No hay nada más improbable, más imposible, más fantasioso que una revolución una hora antes de que estalle; no hay nada más simple, más natural y más evidente que una revolución cuando ha librado su primera batalla y sacado su primera victoria.»
Rosa Luxemburg, Der Kampf. 7-IV-17 .

Hoy es casi trivial decir que la crisis general por la que atraviesa España es la causa de la evolución democrática del franquismo. Es la misma crisis que sacude a todos los países del mundo, burgueses o burocráticos, agravada -como en Portugal, Grecia o Polonia- por un largo inmovilismo fruto de una contrarrevolución y una descomposición acelerada de las políticas de relevo. No contemplamos, pues, la instalación de una sociedad nueva, sino un senil renacimiento ibérico de la sociedad que muere en todas partes.

El franquismo fue la defensa extremista de la burguesía española amenazada por la revolución proletaria, una contrarrevolución constante que mediante el estado de sitio logró que la sociedad capitalista española se salvase y se diese una primera racionalización de urgencia, incorporando el Estado a su gestión. Pero cuando pasase a ser la forma más costosa del mantenimiento del orden capitalista, tendría que dejar el escenario, en provecho de formas de este orden más racionales y fuertes.

Al tomar preponderancia los tecnócratas católicos en el Estado, capitanearon un desarrollo industrial aprovechando la expansión del mercado mundial de los 60 (y por lo tanto las inversiones de capital extranjero) y el turismo, y eliminando los excedentes de mano de obra en el campo. La producción agraria perdió el peso que había tenido hasta entonces en la economía nacional, y con

ella la burguesía rural perdió importancia política en provecho del capital financiero. Pero cuanto mayores fuesen los éxitos del proyecto de industrialización de los tecnócratas franquistas, mayores serían las perspectivas de fracaso de la burguesía histórica española, contenidas necesariamente en él: acumulando capital, la burguesía acumulaba proletariado y creaba su propia negación en proporciones mucho más grandes que en el pasado del que intentaba distanciarse.

La política salarial de la dictadura llegó en el umbral de los años 70 a sus máximas posibilidades de evolución, cuando el movimiento obrero había alcanzado un importante grado de radicalismo y abandonaba el reformismo legalista en el que estalinistas y cristianos pretendían encajonarle, tras la recuperación por éstos de sus primitivas y limitadas formas de lucha, las Comisiones Obreras, nacidas espontáneamente como comités de huelga irregulares durante las huelgas asturianas y vascas de los años 62-64. Al mismo tiempo se declaraba la crisis energética internacional que condenaba la expansión industrial fundada en el reavituallamiento de petróleo a bajo precio, fórmula que tocó a su fin con el fin del colonialismo clásico. Los aumentos de precio del petróleo y materias primas provocaron tales desplazamientos de los equilibrios económicos y financieros que obligaron a todos los Estados a un repliegue económico proteccionista, emprendiendo planes de contención de la moderna anarquía económica. La sociedad franquista -paralizada por la proliferación de intereses de grupos burgueses particulares, contrabalanceándose unos con otros, y por la burocracia estatal, aferrada a los empleos, producto de la gestión franquista del poder- caminaba hacia la bancarrota. El franquismo iba a caer con la peseta. Habiéndose instalado en virtud de las armas, iba a reventar en virtud del dinero. Apenas unos meses de quiebra anularían su victoria de treinta y cinco años.

La crisis energética, sin embargo, no era sino una manifestación parcial de una crisis de mucho peores consecuencias: la crisis del fenómeno económico, la crisis de la economía, visible por el desarrollo del sabotaje individual y colectivo del mundo de la mercancía y del trabajo, como un gigantesco esfuerzo anónimo de descolonización de la vida cotidiana por parte del proletariado, quien con el absentismo, el robo en almacenes, la práctica de la insubordinación contra los mandos de las empresas, el deterioro consciente de los productos de su trabajo, la negativa al consumo, etc., y sobre todo con las huelgas salvajes, reaparece criminalmente como clase histórica, afirmando sus deseos de enterrar este mundo y trabajando en ello.

Desde la huelga de la construcción de Granada en el 69, el franquismo tenía que soportar cada año graves huelgas extensas y violentas, que habían arruinado su sistema sindical. Por otra parte, la ilegalidad impedía el sindicalismo de opo-

sición. En tanto que movimiento organizado de masas, no hubo movimiento sindical antes de 1976. Hubo grandes huelgas, pero los sindicatos sólo existían bajo formas embrionarias dentro de la CNS. Para los trabajadores no había otra elección que el sindicalismo de Estado o la huelga salvaje. Tanto duró esta situación que dificultó sobremanera la actividad sindical moderada en favor de formas de lucha autónomas y radicales, como asambleas, delegados revocables, comités de huelga, comisiones independientes, aunque éstas no superaron la frontera ambigua entre la democracia directa y la recuperación partidista.

Débil e irresoluto, sin saber vivir ni morir, si el franquismo se acordó en último momento de la máxima de Maura -o hacemos los cambios desde arriba o nos harán revoluciones desde abajo-, fue inspirado por su ruina y no inspirado por su vitalidad. De no haberle la necesidad pisado los talones, hubiese flotado eternamente en la indecisión. Si el franquismo se presentó siempre como una reacción que ganó, ahora tenía que hacerlo como el remedio más barato y más seguro a todos los males que él mismo había producido, y como el único capaz de librar a la sociedad de sí mismo. La democracia apareció como una razón de Estado, una reconstitución política del orden burgués dirigida desde el Estado franquista, que, por medio de una zona de convivencia entre el franquismo y la oposición, apuntalase la sociedad burguesa e hiciese del proletariado una masa amorfa y obediente, sometida por sus nuevos sindicatos a los imperativos económicos de la burguesía.

Después de Franco, el falso enfrentamiento del fascismo y el antifascismo desapareció de escena como una mentira de siempre, y la cuestión social afloró como una vieja verdad. La oposición, incluso antes de reconciliarse con su viejo enemigo, tuvo que hacer frente a uno nuevo. La clase obrera iba ocupando en la calle y en las fábricas el terreno que el retroceso del poder dominante dejaba libre, el terreno de la política y el sindicalismo en gran parte vacío de partidos y de sindicatos. Fue frecuente a lo largo de 1976 el espectáculo de los sindicatos ofreciendo sus servicios a la puerta de fábricas en huelga. Desde el comienzo del movimiento de huelgas, en enero del 76, los trabajadores tomaron la costumbre de la democracia directa, llegando a formular reivindicaciones particularmente subversivas, como el reconocimiento por parte de los patronos de los delegados asamblearios y de las asambleas generales como únicos órganos negociadores, o, como en el caso de la huelga de Madrid, la negociación conjunta de todos los sectores en huelga a través de la elección de un comité central de huelga. Cuando los sindicatos pudieron organizarse, se encontraron frente a los trabajadores ya educados ellos mismos en la organización de sus luchas, celebrando asambleas, eligiendo delegados y formando piquetes.

La burocracia político-sindical se enfrentaba a una dificultad particular: dejaba de oponerse al franquismo y fundamentaba su poder desarrollando sus organizaciones en un momento en el que en los demás países capitalistas dicha burocracia estaba ya comprometida en la lucha decidida contra el proletariado revolucionario, y en que sus fusiones políticas eran superadas en la conciencia de los trabajadores. En España, en donde la miseria política del franquismo existe con toda su secuela de viejas y remozadas instituciones en descomposición, y en donde la nueva miseria política de la oposición no se puede presentar como esencialmente diferente, existe, consecuencia de la integración económica española en el capitalismo mundial, la moderna oposición entre burocracia obrera y proletariado, con la lucha que resulta de ello. La lucha antiburocrática es también lucha de clases. La burocracia obrera española, pues, se encuentra, como la burguesía, en oposición al proletariado, incluso antes de haberse constituido como tal, antes de haberse organizado. Ha elevado su barrera sin romper la que tenía delante, apareciendo como mezquina sin haber podido aparentar ser heroica, de modo que sin terminar el combate por su reconocimiento en un lado, no es ya reconocida por el otro.

La histórica debilidad de la oposición política al franquismo es debida al doble rechazo de la burguesía y del proletariado, de su papel de mediadora en la lucha de clases. Así ha tenido que esperar la revuelta de las capas sociales que el capitalismo arrojaba una por una hacia abajo, después de frustrar sus ilusiones de ascenso: intelectuales, estudiantes, curas, profesionales de todas clases y todos los despojos de las clases medias. La oposición antifranquista ha sido el sedimento político de todas esas capas y la representación general de su mediocridad. Aún a mediados de 1976, la oposición sólo contaba con un verdadero partido, los estalinistas, con los restos viejos de otro, la socialdemocracia, y con la calderilla maoísta. Todo lo demás eran pequeños círculos en torno a personajes de derechas, en su mayoría ex-franquistas. No podían representar ningún interés general, sino una reserva de cortesanos envejecidos en la trastienda con una avidez en ocupar puestos en la política oficial en proporción al tiempo que lo habían deseado.

La oposición fue lanzada a escena -quizás con la excepción de los estalinistas- no por sus propias fuerzas, sino mediante una transacción pacífica con el Gobierno de Suárez. Como nadie les había abierto camino sino el propio Gobierno, no tenían que defender más que sus propios intereses; a sus ojos las instituciones negociadas no eran más que una pantalla donde ocultar sus intereses, la intocabilidad de sus intereses y las formas políticas correspondientes a dichos intereses, y esto traducido al lenguaje constitucional debía significar la intocabilidad de

la forma burguesa de gobierno, del gobierno burgués al fin, con su columna vertebral franquista. Apenas fue llamada a palacio, la oposición dejó de hablar de ruptura pactada para hablar claramente de negociación y disolver todos sus organismos unitarios (mesas regionales, coordinación democrática, la Asamblea de Cataluña), vueltos ahora impedimentos de ella. Para los estalinistas, la entrada en las Cortes estaba suspendida de la incapacidad de los socialdemócratas en destruir la autonomía organizativa del proletariado. Eran el destacamento plebeyo de la burguesía. Tanto valía el servicio que le prestaban, tanto valía a los ojos de ésta su partido y su sindicato; haciendo valer uno se cotizaban los otros. Ellos hicieron valer su oficio todo lo que pudieron, y fueron mucho tiempo imprescindibles, en el sentido de que no se pudo romper una huelga sin ellos.

Pero cuando la lucha de los trabajadores es reprimida en primer lugar por los sindicatos y partidos, ello es un signo precursor de un segundo y más profundo asalto proletario contra la sociedad de clases. Cuando se contempla en España cómo los sindicatos son organizados para desarticular el movimiento huelguístico, la cuestión sindical sólo puede ser considerada por los proletarios como una reedición del vertical, como una falsa cuestión. De golpe, el movimiento obrero español recupera el atraso que sobre este punto le habían mantenido los treinta y cinco años de sindicalismo franquista, y acabándose así el particularismo hispano, se comprueba que para nosotros, los ibéricos, la historia no creó leyes de excepción.

2. LAS ASAMBLEAS OBRERAS COMO NEGACIÓN Y COMO PRELUDIO.

«Frondoso: ¿Quién mató al comendador?
Mengo: Fuenteovejuna lo hizo.
Frondoso: Justo es que honores le den.
Pero decidme, mi amor,
¿quién mató al comendador?
Laurencia: Fuenteovejuna, mi bien.
Frondoso: ¿Quién le mató?
Laurencia: Dasme espanto,
pues Fuenteovejuna fue.»
Lope de Vega, Fuenteovejuna.

Las acciones que ponen en movimiento a centenas de miles de trabajadores, trastornan de tal manera la vida corriente que no pueden mantenerse estaciona-

rias. Una vez iniciada la batalla, o se avanza extendiendo la lucha y convocando a todos los trabajadores formulando los objetivos precisos del movimiento, o es necesario retirarse. El movimiento de huelgas de enero-marzo del 76 se halló pronto ante la alternativa de dar un nuevo salto adelante o empezar a retroceder. Dividido por la acción de los enlaces estalinistas que impedían siempre que podían la formación de órganos radicales de lucha, y, cuando no, los aislaban o saboteaban, fue forzado a una retirada en desorden, sin garantías efectivas ante los despidos y sanciones, cuando los sindicatos se reincorporaron al trabajo y llamaron a terminar las huelgas, con hermosas excepciones que dieron lugar a acciones ejemplares, como el asalto de los trabajadores de Terpel, en Madrid, al tribunal que dirimía su causa. La burguesía, continuamente solicitada por los partidos, podía determinar todos los movimientos de sus sindicatos, hacer que rompiesen el movimiento fábrica por fábrica, y que terminase todo con la promesa de alguna concesión aparente o de no efectuar represalias.

El PCE intentó dar al movimiento un carácter democrático burgués, pidiendo a la burguesía la adhesión para presionar una negociación conjunta con el gobierno moribundo de Arias y Fraga. Desechada su petición, se decidió a poner fin al movimiento huelguístico y, gracias a un hábil empleo de su fuerza disponible, pudo reducirlo a una serie de huelgas yuxtapuestas y liquidarlas una por una, cuando cara a la totalidad de ellas la correlación de fuerzas le era desfavorable y su poder de maniobra no alcanzaba, al comienzo, el 10% de las masas puestas en movimiento. Todas estas violaciones metódicas de los acuerdos asamblearios, esos engaños y manipulaciones con los que los estalinistas se distinguieron, constituyeron su arma más fuerte contra los obreros dispersos en sus mismas asambleas, sin poder concebir en días lo que ellos tardaban sólo minutos en ejecutar.

Los estalinistas, y el resto de la oposición en general, buscaban dar al poder toda clase de garantías de sus buenas disposiciones. Mientras los obreros querían ajustar cuentas, la oposición sólo quería hacerse sitio. Todo enfrentamiento con la burguesía, toda lucha de clases, tenía que poner en conflicto a los partidos y sindicatos con los proletarios radicalizados, y en la medida en que los desbordasen se encontrarían con la policía de frente. Estas dos verdades fueron confirmadas ampliamente a lo largo del año. De una podemos contar los muertos; de otra, ver cómo la oposición puso al pan de semanas ofrecido por el Gobierno hambre de años. Los trabajadores no les dieron la importancia que tenían, no preocupándose de organizar la defensa de las asambleas y de separar completamente su movimiento de los partidos y sindicatos. Las consecuencias fueron decisivas en la derrota de todas las luchas posteriores.

Un resultado inmediato del primer movimiento de huelgas fue la pérdida de la supremacía de los estalinistas en la representación de la invisibilidad del proletariado, por su desgaste, y la consolidación de las centrales sindicales socialdemócratas, insignificantes hasta entonces. CCOO tuvo que abandonar su proyecto de una central sindical única por la apropiación de la CNS y coordinarse con la UGT y la USO en la COS para «conseguir la unidad de acción entre las organizaciones que lo integran», es decir, para intentar unir a los trabajadores tras los sindicatos. Ante la perspectiva de que los trabajadores tomasen en sus manos el movimiento que iba a desencadenarse en otoño, los sindicatos hacían de la unidad de acción su caballo de batalla. La unidad de los sindicatos está en razón inversa al aislamiento de los trabajadores. Las asambleas, al romper ese aislamiento, empujaban a los sindicatos a unirse contra ellas, sabiendo bien que la consigna de Vitoria «todo el poder a las asambleas» significaba «ningún poder a los sindicatos».

La más alta realidad de la lucha de clases moderna en España, de una trascendencia internacional, la constituyó sin duda el movimiento de las Asambleas Obreras, auténticos Consejos Obreros modernos. Si los partidos dispondrán de mejores medios de control sobre los trabajadores en los sindicatos, los trabajadores disponen ya de mayores facilidades para procurar su autonomía en las asambleas.

En vez de esperar a los benéficos decretos del Gobierno, las masas obreras recurrieron al único medio que en verdad conduce a su emancipación: la lucha contra el capital; y el único medio encontró la única forma en las asambleas de huelguistas, concentrando en ellas todas las decisiones de decisión y ejecución, y federándose por medio de delgados responsables ante la base y revocables en todo momento. Las huelgas asamblearias que desde principios del 76 no dejaron de declararse, no eran controversias sindicales más o menos banales con el tira y afloja de las negociaciones salariales, ni un apoyo de los recursos diplomáticos de los sindicatos en un momento de gran tensión social, sino la respuesta natural de los trabajadores a la violenta conmoción que han experimentado desde entonces las relaciones con el capital a raíz de la crisis de la burguesía española, respuesta situada en el comienzo de una lucha generalizada entre la burguesía y el proletariado. Las huelgas asamblearias no han sido un acto aislado, sino todo un período de lucha de clases, que está aún lejos de acabarse. Liberan las fuerzas sociales vivas de la revolución moderna e inauguran un período de actividad directa de los trabajadores en que los enfrentamientos con los sindicatos y la policía son la música de acompañamiento. Las huelgas asamblearias presentan rasgos típicamente revolucionarios que por el

momento no han podido cristalizar en una revolución; son más bien una fase previa a las verdaderas huelgas insurreccionales. No son, pues, un producto artificial de una táctica deliberada, sino un fenómeno histórico de la lucha de clases. La ley del movimiento de las asambleas no reside en las huelgas en sí mismas, en sus peculiaridades técnicas, sino en la relación de las fuerzas sociales de la revolución. Las asambleas de huelguistas son la forma que adopta la lucha revolucionaria en el actual momento histórico. Todo desequilibrio en la división de las clases o en la posición de la contrarrevolución influye inmediatamente en la relación de las mismas de variadas maneras. Sin embargo, la acción no se detiene; no hace más que revestir otras formas, modificar su extensión, sus objetivos, sus efectos. Es un pulso vivo de la revolución a su motor más poderoso.

Las asambleas obreras, tal y como hoy aparecen, no son, pues, un método ingenioso inventado para reforzar la lucha proletaria, sino que representan el movimiento mismo de la clase, la forma de manifestación de la lucha proletaria española en el curso de su segunda revolución. En las asambleas, la conciencia de los trabajadores en lucha equivale a la organización práctica de las mismas, y es inseparable de su intervención coherente en la historia. En ellas el proletariado echa por tierra la idea de las vanguardias dirigentes, dándose cuenta de que hasta entonces su propia fuerza en manos de representaciones exteriores a él, partidos y sindicatos, concurre al refuerzo del capitalismo. Descubre, pues, el secreto de la revolución de este siglo, que es la clase enemiga de toda exteriorización y especialización del poder, que la revolución no debe dejar nada al exterior de sí misma, que su emancipación pasa por la destrucción de los partidos y los sindicatos.

3. SUPREMO RECLUTAMIENTO DE LAS FUERZAS DEFENSORAS DEL ORDEN Y REVELACIÓN DE SU VALOR EFECTIVO EN EL PRIMER OTOÑO.

«En este país el pueblo está siempre con el partido más dispuesto a la acción.»
Carta de J. Mesa a Engels, 10-III-1873.

Cuando Suárez subió al poder, el Estado se tambaleaba tanto por los preludios proletarios como por los manejos de las facciones franquistas descontentas. Tuvo que hacer de salvador para ser salvado. Si hablamos de condiciones de la lucha de clases, la victoria va frecuentemente tras la clase que, cuando las condiciones se mueven contra ella, sabe parar los efectos, y cuando los ve mo-

verse para la parte contraria, sabe sacar el mayor partido de ello. La burguesía hizo lo primero en el otoño del 76 y lo segundo en el otoño del 77. Suárez la capacitó para parar los golpes que los obreros le iban a dirigir. En realidad, sin embargo, no paró nada; eso fue la obra de los partidos y de los sindicatos que habían constituido la COS a tal efecto. La oposición, queriendo participar como fuese, estaba dispuesta a servir en todo. Suárez, llevando los hilos de todos lados, pudo escoger la combinación de la acción de la policía y de la de los sindicatos más útil para conjurar la victoria sobre los obreros, y adquirir así el complemento de fama necesario para la magia de su futuro papel.

El éxito de los sindicatos en recuperar las comisiones negociadoras de los convenios, en el pasado movimiento de huelgas, y alejarlas de las asambleas, les hacía creerse capaces de aislar en sus fábricas al conjunto de los trabajadores, de formular en su nombre sus propias reivindicaciones, y de hacerles adoptar sus propios acuerdos con el Gobierno. Pero no es fácil repetir la misma jugada impunemente dos veces en tan corto espacio de tiempo. Cuando un dirigente de CCOO llegó a León con el propósito de reforzar a los estalinistas locales en el sabotaje de la huelga de la construcción, los huelguistas lo expulsaron de la asamblea sin contemplaciones. Entonces fue el turno de la policía y la aplicación de una política de represión, que unas veces detiene el movimiento, aquí lo precipitó. En septiembre estallaron varias huelgas asamblearias, largas y duras, donde los trabajadores mantuvieron fuertes enfrentamientos con la policía: huelga general de Tenerife, huelga general de Euskadi, huelga nacional de Correos, huelga del metal de Sabadell, huelga de la construcción de León, Coruña, Burgos, Palencia y Valladolid etc. En Euskadi, la muerte de un trabajador puso a 600.000 obreros en huelga, que pasaron por encima del llamamiento al trabajo de los sindicatos. En Vizcaya, después de una serie de asambleas multitudinarias, se creó la Coordinadora Unitaria de Asambleas de Fábrica formada por delegados revocables y representando a 120.000 trabajadores, forma altamente significativa del antisindicalismo organizado. La participación masiva en huelgas y manifestaciones que los partidos y sindicatos condenaban, mostraba hasta qué punto la fuerza desplegada por los trabajadores era incontrolable por ellos. En Madrid un nuevo muerto elevó la tensión a tal grado que partidos y sindicatos se vieron obligados a convocar una jornada de huelga el primero de octubre, seguida por 300.000 obreros, para reducir al mínimo sus efectos y evitar el desbordamiento general que sufrieron en Euskadi. El miedo de todos los burócratas se estaba volviendo pánico. Buscaban la sumisión de los trabajadores y se encontraban con su rebeldía. Ellos hubiesen deseado un proletariado que sólo discutiese las modalidades de obediencia y

no las de ataque, y sin darse cuenta de que la obra era otra y otro el auditorio, empleaban, como autores pasados de moda, el mismo lenguaje vetusto: «El movimiento obrero y las fuerzas democráticas deberán medir con exactitud las formas y los ritmos de respuesta. De su acierto dependerá en gran medida el que entremos en una fase resolutiva pacífica de la crisis que arrastramos desde hace años o nos deslicemos hacia situaciones de involución que serán trágicas para todos» (Triunfo, 16-X-76).

Pero en vano podía remediarse su tragedia usando la farsa del golpe militar. Los trabajadores no picarían apoyando la farsa de la democracia y reduciendo sus luchas a acciones simbólicas y desfiles de domingo. Ahora bien, reaccionaban de inmediato a una situación política dada, devolviendo golpe por golpe y, dispuestos a todas las eventualidades de la lucha, tiraban todo el peso de su acción sobre la burguesía y el Estado. El 11 de octubre empieza en Vizcaya la primera gran huelga completamente asamblearia, la huelga de la construcción. Los obreros montaron un engranaje solidario de asambleas diarias: asambleas de tajo, asambleas de zona (con 15.000 a 20.000 asistentes), en donde se tomaban acuerdos discutidos luego en la asamblea general, motor de la huelga, de donde dependían la coordinación de delegados, la comisión gestora, la comisión suplente, los piquetes, la caja de resistencia, la redacción del boletín de huelga. Por primera vez se reconocía a los sindicatos, sin tapujos, como enemigos de los trabajadores, y se actuaba en consecuencia, privándoles de la palabra y no permitiéndoles repartir propaganda en las asambleas, ostentar sus siglas e incluso recoger dinero para la caja mediante sus siglas. «Todo es llevado por los trabajadores de la construcción y firmado por trabajadores de la construcción», habían decidido los trabajadores en su primera asamblea. La patronal, que estaba dispuesta a ceder con tal que la COS o la STV fuesen aceptados como mediadores, tuvo que hacerlo al final sin condiciones para que la huelga terminase. El odio de los burócratas sindicales hacia los huelguistas fue expresado y recogido ampliamente en la prensa. Preludiando su actitud para con otras huelgas asamblearias, los burócratas acusaban a las asambleas de estar manipuladas, mientras la policía hacía su trabajo. Ese autoritarismo ideológico que llama manipulación a la libre discusión y politización al sometimiento a los partidos, recordaba los viejos tiempos de las provocaciones estalinistas. Este género de interpretaciones precedía -como antes en Krondstadt o en mayo del 37- de poco a su demostración represiva: la policía terminó en la calle lo que los sindicatos empezaron en las fábricas.

Los sindicatos constataban la impresión profunda causada entre los obreros por la lucha directa en curso. Humillados en varias huelgas, su autoridad

se resquebrajaba en las zonas que controlaban, el prestigio de sus budas, cultivado a manos llenas con la demagogia de mártires, se derrumbaba. Los efectos de la larga época de reacción franquista, maravillosamente adecuada para restablecer a esos charlatanes desacreditados en encarnaciones de la voluntad popular, habían sido usados hasta el agotamiento. Y el ambiente de las grandes capitales se iba cargando por momentos. Entonces la COS llamó a una jornada de huelga general el 12 de noviembre. Los burócratas políticos y sindicales querían acabar con la tensión ambiental y ponerle punto final al movimiento de huelgas de otoño, organizando masivamente una jornada de fogueo, «pacífica y responsable»: «Vamos a pedir legalmente manifestaciones en la calle, vamos a hablar con las autoridades eclesiásticas y militares para que entiendan nuestro planteamiento y no lo vean como maniobra subversiva», (D. Vacas, dirigente de Valencia de CCOO); «Estamos dispuestos a una huelga siempre que no supere las 24 horas, así como a explicar a los empresarios la motivación político-laboral de la jornada» (E. Barban, dirigente de Asturias de UGT, declaraciones a Cambio 16, # 257, 8-XI-76). Los burócratas buscaban su mérito principal en no asustar a nadie, en asustarse a sí mismos y en defender su existencia organizando la derrota de los trabajadores en todos lados. Los estalinistas en acción se distinguieron particularmente: «Al mismo tiempo -esto no deberían olvidarlo nuestras autoridades- el ambiente laboral de Madrid se va cargando por momentos. La huelga de EMT se produce a doce días de la convocatoria general de veinticuatro horas lanzada por la COS... sectores importantes del metal y otros podrían ponerse en funcionamiento en solidaridad con la EMT desencadenando una huelga de grandes proporciones» (Triunfo, 16-X-76). En lugar de sacarle concesiones al Gobierno con el espectro de la crisis revolucionaria, esta crisis era una espada de Damocles con la que el Gobierno les obligaba a hacerlas: los estalinistas impidieron la solidaridad con tan inoportuna huelga; los transportes urbanos fueron militarizados y los trabajadores de la EMT, desmoralizados y vapuleados, volvieron al trabajo sin condiciones, dejando un saldo de cuarenta despedidos y ocho procesados por sedición.

La actitud tan resueltamente antiproletaria de los sindicatos y los partidos es fácil de comprender si se miran sus relaciones con la burguesía y con el Estado. Son los políticos burgueses los que determinan en último extremo el programa de los partidos y sus medios de lucha. La tarea de los partidos era sólo transmitir a la clase obrera las consignas de la burguesía política en la fase de autotransformación del franquismo, y darle música plebeya a la huelga burguesa. En toda esta etapa los políticos burgueses del Gobierno eran los

auténticos jefes de la oposición, y los partidos de ésta, sus ejecutantes sumisos, protegiéndose con ellos la sociedad burguesa contra la revolución social. La jornada del 12 de noviembre fue entonces un compromiso forzado entre la hostilidad a las huelgas de los sindicatos y la energía combativa e impetuosa de los proletarios.

Como era imposible domar de otro modo la voluntad proletaria, se propuso esta jornada, único medio de calmar a las masas obreras, de extinguir su entusiasmo combativo y de desarticular en sus bases el movimiento huelguista. Para los burócratas fue una demostración de su poder de control sindical. Para el proletariado revolucionario, un error seguir a quienes no tenían la iniciativa. Todos los sindicatos y partidos sin excepción eran enemigos de la autonomía obrera. Después de la jornada, el punto de equilibrio entre proletarios y burócratas se desplaza poco a poco hacia éstos; el movimiento de huelgas no pudo generalizarse y perdió coordinación.

Todo tenía que depender de la correlación de fuerzas en las fábricas entre los obreros, separados y aislados, y la potencia conjunta de la patronal, los sindicatos y el Estado. Todas las huelgas posteriores, las de la construcción en Zaragoza, Navarra, Tenerife y Valencia, la de Osram en Madrid, Roca de Gavá, Tarabusi en Bilbao, etc., se enfrentaron en esas condiciones.

Los burgueses poco podían temer una lucha de un día, anunciada como una procesión de Semana Santa, lucha que no quería otra cosa que la paz. La patronal se encontró en la posición más cómoda para aprovechar la ocasión de deshacerse de los luchadores más radicales en la fábricas donde aún no habían logrado despedirles. Así fueron provocadas huelgas con ese objetivo, como las de Tarabusi y Roca. Contra los huelguistas se emplearon todos los medios una vez que los sindicatos se pronunciaron en su contra: calumnias, cárcel, la policía, la guardia civil, la extrema derecha. El poblado de Roca fue cercado militarmente por las fuerzas represivas, mientras los sindicatos de la cos lo cercaban económicamente. La empresa exigía negociar con los sindicatos y no con los delegados de la asamblea de trabajadores, y suspendía todo a esta exigencia. Los obreros de Roca buscaban asociar su lucha a otras huelgas del momento, pero la patronal cedía en ellas para solucionarlas rápido y mantener a Roca aislada (la más destacada fue la del Puerto de Barcelona). Rompieron el cerco informativo haciendo pública su huelga en España y otros países, lo que dio lugar a un gran despliegue de solidaridad económica por parte del proletariado que impidió que la huelga pereciese por desgaste. Cuando la sentencia de la Magistratura de Trabajo fue favorable a los obreros, la huelga amenazó con desencadenar una cascada de huelgas solidarias. En esos momentos era la

huelga a abatir, se había convertido en la huelga contra toda la patronal catalana y los sindicatos. Estos, cambiando de táctica organizaron la desmovilización mediante la proclamación de una solidaridad superficial, un día de huelga en Barcelona, que les permitió tranquilizarse sobre su poder de control de la situación y tranquilizar a la patronal: la huelga no se convertiría en la huelga de toda la clase obrera de Cataluña. Una de las primeras victorias de los proletarios de Roca fue provocar a los partidos y sindicatos a que se pronunciasen contra ellos de la forma miserable en que lo hicieron. Se sabía de qué lado iba a ponerse esa basura, mas no venía mal la publicidad de su ignominia. Pero al aceptar en último momento sus ayudas destejieron en un día lo que habían tejido en todos los otros. Si los sindicatos organizaban manifestaciones y paros de «sostén», era para impedir toda solidaridad real. El no echarles a la cara sus monedas era como disculpar las felonías de la víspera. Los trabajadores de Roca, sólo por el radicalismo de su acción, podían decir escandalosamente a la cara de todos lo que querían. Para comunicar su acción sólo podían contar con su radicalidad. La huelga de Roca terminó, pues, agotando todos los recursos, con los puños cerrados y con cuarenta y seis despedidos. Puede considerarse como una derrota para la clase obrera al no haber afectado para nada -al revés de Vitoria- los acontecimientos posteriores.

Las conclusiones de todo este período de la lucha de clases fueron expuestas admirablemente en un manifiesto a los trabajadores de la Comisión representativa de la asamblea de Tarabusi.

«Toda responsabilidad recae en los aparatos burocráticos que tenemos en nuestras filas, en las centrales sindicales que solamente se preocupan de buscar un lugar privilegiado en esa democracia burguesa que están negociando con la patronal y con el Gobierno.

Nosotros afirmamos desde nuestra propia experiencia que estas alternativas sindicales favorecen a los patronos y no a los obreros y que solamente se podrá llamar organización de los trabajadores a aquella que nosotros levantemos desde las asambleas de cada fábrica y que luche decididamente uniendo a todo el pueblo trabajador contra los capitalistas.

Queremos desde aquí poner en guardia a todos los trabajadores de Euskadi y del Estado español, porque los despidos de Tarabusi y Roca sólo son el inicio de una situación que ya se está generalizando...

No evitamos estos problemas afiliándonos a centrales como CCOO, UGT, USO, ELA-STV. Sólo lo solucionaremos luchando organizados y unidos, por nuestros intereses, que no pasan por pactos con el capital y con su gobierno» (Bizkaia, Euzkadi, Febrero 77).

4. LA DEMOCRACIA COMO TABLA DE SALVACIÓN Y COMO CONSOLIDACIÓN DEL PODER DE TODO LO REACCIONARIO.

«Es imposible partir de aquí sin combatir, pues si no marchamos hacia el enemigo, él nos seguirá cuando nos marchemos y se tirará sobre nuestras espaldas... en cuanto a esta gente, estoy seguro y estadlo vosotros también que, si les atacamos, no nos esperarán, pero, si retrocedemos, sabemos todos que osarán seguirnos.»

Jenofonte, Anabasis.

En España, como en otras partes, no nos encontramos en un conflicto entre dos partes dentro de una misma sociedad, entre dos opciones políticas dentro de una misma sociedad, la democracia o la dictadura, sino en un conflicto entre dos sociedades, un conflicto social que ha desbordado toda forma política; es la lucha entre la vieja sociedad burguesa y la nueva sociedad sin clases que pugna por salir de sus entrañas, la lucha entre las clases que representan ambas sociedades: la burguesía y el proletariado. Entre dos poderes sólo la fuerza puede decidir. Ninguna solución aparente de ese conflicto puede ser una solución real. Se trata de una revolución social cuyo alcance no se extingue con una derrota.

El proletariado respondió al cambio político de la burguesía colocándose en el terreno de la revolución, obligando al Estado a transformar las frases democráticas en hechos policiales. Los relativos e inciertos éxitos de la patronal y el Estado, ayudados decisivamente por los partidos y sindicatos, fueron pagados con la destrucción de todas las quimeras de la democracia alegre. La última ilusión debía de desvanecerse cuando ya claramente éstos se pasaron del lado de los polizontes y se convirtieron totalmente en partido del orden, aprovechando la sensación causada por una combinación de excesos policiales, comportados por la debilidad del Estado al reformar las instituciones franquistas de excepción (TOP, policía política) y los golpes desesperados de la extrema derecha expulsada del poder, para declarar su sostén incondicional al gobierno y firmar conjuntamente un manifiesto. Ese día fue domingo para los burócratas. Los muertos de febrero dieron pie al montaje por la oposición del rumor de un golpe militar, destinado a asustar a las clases medias y a los sectores menos radicalizados del proletariado, y paralizar así la marcha de los trabajadores hacia su autonomía. «Las centrales dieron muestras de responsabilidad procurando no extender las huelgas en unos meses tan delicados para el país» (Cambio 16, 26-VI-77). En la situación actual, la burguesía más rapaz y la oposición más miserable de Europa, temiendo constantemente el ascen-

so a un nuevo período revolucionario, incapaces de realizar un terror activo sobre el proletariado, intentaban pasar a su propio terror pasivo, su miedo a la revolución. Que el proletariado tuviese miedo de sí mismo. Toda la prensa colaboró en esta operación, alguna de cuyas consecuencias fue que la violencia de la policía quedase bien cubierta y que se promulgase una ley contra los piquetes de huelga.

Los golpes de Estado como los de Chile o Argentina han sido productos inmediatos de situaciones revolucionarias precedentes que amenazaban alterar los mecanismos de defensa estratégica del bloque americano y sus intereses económicos, respaldados por clases dominantes que perdían su predominio social y para las que un golpe militar era el único recurso del restablecimiento de su poder. Los que ven en los excesos verbales de algunos generales franquistas los signos precursores de un golpe de Estado a la española o a la chilena, han olvidado sacar conclusiones de la evolución social en España durante los últimos cuarenta años. El franquismo, después de haber desembarazado la sociedad española de escollos revolucionarios y asentar el predominio burgués sobre todos los aspectos de la vida social, no tiene otra manera de mantenerse por más tiempo, en tanto que expresión política del dominio de la burguesía, y llevar una existencia normal, que mediante su transformación democrática, probando así a la sociedad burguesa que sabe adaptarse a sus intereses. El franquismo, pues, no puede preparar un golpe contra sí mismo. Los militares aseguraban sus privilegios y su papel en la democracia post-franquista tanto o más que en la pasada dictadura. Las provocaciones de la extrema derecha no podían siquiera preparar el terreno para una agitación pregolpista, ni mucho menos crear las fuerzas motrices de un golpe. Un golpe de Estado es posible sólo si la solución militar es la única solución posible de la lucha de clases; si el proletariado amenaza seriamente los fundamentos del Estado burgués en España con la consiguiente alteración del statu quo militar en Europa. Cuando Carrillo, al ser insultado por huelguistas americanos en su estancia en los Estados Unidos, se quejaba de los sindicatos manejados por la CIA, olvidaba que el objetivo de su viaje era justamente dar garantías al Gobierno americano -y por lo tanto a la CIA- de que su partido respetaría los acuerdos militares entre España y EE.UU., es decir, la disposición estratégica de la organización militar americana en España.

La distancia que separaba al movimiento de huelgas de una revolución era la misma que separaba a las asambleas de las milicias. Las raíces de la crisis eran otras. La introducción de la democracia como forma más adecuada de dominación de la burguesía, se veía acompañada de una agudización de la cuestión

social. Se pintaba la situación como grave para ocultar el triste papel de la oposición en esos momentos. Al prometerle el Gobierno legalidad y elecciones, hacía del mantenimiento del Gobierno la línea directora de su conducta. De la negociación había pasado al sostén. Pero para justificar su adhesión al fiasco del Gobierno tenía que negar tal fiasco que antes afirmaba, dar serrín por miga de pan. El paso siguiente era justificar al Gobierno y buscar no lo que le separaba, sino lo que le aproximaba a él. De este modo su política era una política puramente burguesa donde toda veleidad oposicional había desaparecido. Con la oposición como aliado seguro, el Gobierno podía terminar el combate contra la autonomía proletaria y sentirse lo bastante fuerte para asegurar su porvenir con la preparación de leyes antiobreras y la creación de una estructura de sindicatos y partidos implantados con que construir la colaboración de clases. En marzo la COS se disolvía a iniciativa de la UGT, capaz de llevar una política asamblearia propia. El relajamiento de la oposición obrera era visible en el dislocamiento de los aparatos burocráticos. Los sindicatos y los estalinistas fueron legalizados definitivamente, aunque la amplia tolerancia que gozaban ya era una forma de legalidad. La burguesía no podía permitirse el lujo de mantenerlos en la oposición.

Desde comienzos de año, las huelgas habían decaído en número pero crecido en duración y conciencia asambleísta. Huelgas fuertes, como Induyco en Madrid o Acerinox en Cádiz, son los mejores ejemplos de la resistencia de los obreros a la desesperación de su acción de clase. Pero fueron en su mayoría derrotadas. Como siempre se busca evitar más las dificultades seguras que las posibles, los sindicatos engañaban fácilmente a muchos delegados independientes de las asambleas. Estos estaban dispuestos a la paz al ver las inconveniencias de una lucha contra ellos, olvidando que los sindicatos la provocaban y que de esta forma se ponían en sus manos y ponían a las huelgas en sus manos, huelgas que no tardaban, bajo uno u otro pretexto, en liquidarse. En las huelgas de la construcción de Barcelona, Valencia y Asturias, los obreros fueron hurtados con manipulaciones inconcebibles meses antes, por los mismos que ya lo hicieron en las huelgas de la construcción del año anterior. El desenlace material de estas luchas devolvía a los sindicatos su influencia y poder de manipulación en puntos claves y fábricas claves (ver los resultados de la desastrosa huelga de la Ford para el movimiento de asambleas en Valencia), después de no haber podido resistir las asambleas su acción disolvente ni superar el aislamiento e imprimir su sello en la marcha de los acontecimientos. No obstante, no era fácil recoger los frutos de la victoria sobre las asambleas obreras. Los sindicatos, al no tener ningún margen de reforma social, no podían con éxitos salariales

recabar la victoria lograda. Las huelgas asamblearias habían producido en la clase obrera una impresión difícil de borrar, y apenas se planteaban nuevas huelgas los trabajadores osaban otra vez lo que habían osado antes. La intensidad revolucionaria de la época favorecía la aparición de las asambleas en cada conflicto que se presentase por nimio que fuese. El control del poder sobre la clase obrera provenía de su permanencia como una masa informe de solitarios enlatados en su miseria personal. Bastaba que los proletarios se reuniesen abatiendo las barreras que la supervivencia cotidiana alzaba en torno a cada uno, para que pudiesen comprobar que ellos no dependían del sistema, sino que el sistema dependía de ellos. Las asambleas eran el signo material y patente del proceso unificador de la clase obrera. Surgidas en todas partes, se convirtieron de incidentes particulares en un hecho capital. Exponían a las miradas de todos lo que aún sólo era manifiesto para algunos. Haciendo ver de qué lado estaba la fuerza, decidían de qué lado iba a estar al final la victoria.

La prohibición del Gobierno de la celebración del 1º de Mayo «pacífico» por las burocracias sindicales, obedecía a su temor de ver concentrarse más gente de la que los burócratas podían controlar; a los ojos del poder era como amontonar brasas desperdigadas; la cobardía de la oposición, incapaz de arriesgar su piel frente a los obreros, podía provocar un motín queriendo demostrar un aborregamiento. Sin embargo nada podía prohibir en Euskadi, el más sólido bastión revolucionario, porque nadie iba a hacerle caso.

Los sindicatos estaban desahuciados y los trabajadores habían adquirido la costumbre de imponer y no recibir órdenes. Una revista como Cambio 16, conciencia y mala conciencia de la burguesía emprendedora, tenía que dejar el tono elogioso y chabacano de sus editoriales y volverse trágica y patriota: «Todos los elementos de una potencial crisis de la convivencia nacional se dan allí (en el País Vasco). Y lo peor de tal crisis es que arrastraría consigo a todo el país y puede dinamitar nuestra marcha hacia la democracia» (23-V-77). Cuando hay «crisis de la convivencia nacional», es decir, cuando el poder de la burguesía se halla en juego, una única e inviolable ley subsiste: la supervivencia del poder burgués. «Nuestra marcha hacia la democracia» no puede significar en esos momentos más que balas para el proletariado. Las manifestaciones pro-amnistía en el País Vasco y Navarra se saldaron con seis muertos y numerosos heridos. La respuesta de los trabajadores fue convocar una huelga general que apenas trascendió fuera de Euskadi porque los sindicatos la desconvocaron en todas partes -sobre todo ccoo-, salvando así al Gobierno. El orden se construía sólidamente bajo la alianza con la oposición. Sólo un mes antes, los estalinistas celebraban el que los trabajadores de Vitoria, en el primer aniversario de su

batalla, hubiesen tenido la valentía de ser cobardes dejándose masacrar por la policía sin defenderse (veinte heridos). Triunfo concluía: «Y así se salvó para hoy la clase obrera de Vitoria, adquiriendo conciencia de tal, de su especialidad, conciencia de sus limitaciones frente a otras fuerzas que la rodean e intentan sofocarla, y conciencia de que unida y autocontrolada puede enfrentarse incruentamente con esas fuerzas con las que ha de convivir» (12-V-77).

Para los estalinistas, como para todos los partidos, como para la burguesía, se trataba de eliminar toda huelga o manifestación para permitir las elecciones. La suerte de todos ellos dependía de la incapacidad del proletariado en volver a tomar la ofensiva a escala nacional. Después de la segunda semana de mayo, las fuerzas del orden controlaban la situación. La burguesía organizaba sus partidos *ad hoc* para preparar sus victorias electorales. La composición política de las Cortes reflejó el reparto del triunfo sobre el movimiento obrero por los diferentes partidos. Con la celebración de elecciones y el refuerzo considerable del poder, la burguesía realizaba sus objetivos políticos y preparaba la resolución de los económicos.

5. CONSIDERACIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LOS AVANCES DEL MOVIMIENTO DE LAS ASAMBLEAS DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES Y SUS RETROCESOS.

«En lo que concierne a nuestra guerra, es una gran verdad el que, de siempre, cuando los hombres combaten entre sí, imagínanse alienados en la mayor de las guerras, y que una vez vuelta la paz, prefieren llevar su admiración a las guerras de antaño. Sin embargo, el simple examen de los hechos nos hará ver que de lo que aquí se trata es de un conflicto más importante que todos los del pasado.»

Tucídides, Las guerras del Peloponeso.

Las Asambleas Obreras, defendidas por piquetes y coordinadas por delegados revocables, no sólo son el arma de la revolución social, sino su señal. Suponen que la clase obrera, atravesada por una multitud de organizaciones que la dividían en mil partes, se unifica; que ninguna división tiene ya vida particular, que toda la clase se apresta a una existencia comunitaria, con iguales intereses y formulando sus propias ideas, es decir, sacándolas de su práctica. Las asambleas no nacieron como órganos de poder, sino como la forma más fuerte y representativa de organizar huelgas, para tratar en ellas los obreros sus problemas concretos e inmediatos y negociar su solución con la patronal. Antes de ejercer un poder actuaban como órganos de defensa del interés co-

tidiano. En ese estadio de lucha el proletariado no se daba una coordinación permanente y asegurada entre sectores y ramos, zonas, provincias y a nivel estatal, lo que indica que no se planteaba una ofensiva sistemática y en gran escala contra el poder dominante. Pero al ponerse en marcha simultáneamente en varios puntos, la lógica histórica de su lucha convertía a las asambleas en órganos de poder, de cuya enorme fuerza no eran plenamente conscientes. Cuando existen, un poder real, las asambleas, y un poder ficticio, los sindicatos, juntos, la opción se pone al orden del día. Es un equilibrio sobre el filo de la navaja. ¡O asambleas o sindicatos! Los sindicatos eran demasiado débiles para oponerse a las asambleas, pero el proletariado no era suficientemente consciente para sentir la necesidad de liquidarlos. A lo largo de la primera mitad del año, una alternativa se planteaba en lo inmediato: o la afirmación autónoma del proletariado o la derrota del movimiento. La situación imponía a los sindicatos una alternativa inversa: o perder su posición dominante, conferida por la burguesía y el Estado, de interlocutores de los obreros, o acabar con el movimiento de las asambleas y encuadrar a los trabajadores en sus organizaciones. Los sindicatos debieron aceptar las conquistas de los obreros y reconocer el poder de las asambleas en espera de liquidarlo en el momento de reflujo. Los obreros, para conservar sus conquistas, estaban obligados a continuarlas; tenían que extender el movimiento a todos los sectores y todas las poblaciones, y defenderlo. El final de un combate sólo podía considerarse como el comienzo de otro, más tenaz y decisivo. De no ser así, si no utilizaban las victorias obtenidas para radicalizar y asentar su lucha en otras partes, y disolvían sus asambleas tras el desenlace más o menos favorable de las huelgas, disolviendo con ello sus líneas de comunicación, se tenían que ver en la insólita situación del ejército victorioso que abandona el terreno ganado al enemigo vencido, como en Mayo del 37. Los sindicatos recuperarían las posiciones perdidas y entonces los obreros empezarían la siguiente huelga en peores condiciones que antes. Nunca una victoria puede tener repercusiones si no es explotada. La persecución de un adversario vencido debe comenzar desde el instante en que éste, abandonando la lucha, deja el lugar del combate, las asambleas debían de llegar hasta la dispersión de las organizaciones sindicales. El proletariado debía saber terminar una huelga guardando sus líneas de retirada -que son las mismas por las que ha avanzado- para poder empezar la siguiente en mejores condiciones.

Se puede decir que en España la sociedad burguesa declina rápidamente, y ese hundimiento de la burguesía pasa delante de la evolución del proletariado, de su desarrollo, de su desarrollo revolucionario. Durante el franquismo, la mayor parte de las huelgas transcurrían aisladas unas de otras, con pocos lazos

entre sí, y separadas por intervalos durante los cuales la lucha se detenía y no seguía existiendo más que en forma latente o difusa. Cada zona, sin resolver las distancias con las otras de un modo satisfactorio, no se ocupaba más que de sí misma y prestaba poca o ninguna atención a las demás. La descentralización de la lucha obrera, distribuida variadamente entre los diferentes centros industriales, ha salvado al proletariado de ser descabezado en uno o pocos golpes, multiplicando los recursos de la lucha y colocando a sus enemigos ante la falta de un centro que poder herir decisivamente, desorientándolos al descubrir que el centro de la agitación no se encontraba en ninguna parte y estaba en todas. Pero una forma de lucha sistemática y coherente es necesaria cuando el movimiento ha progresado suficiente sobre el plano local, cuando puede enfrentarse a la represión con éxito y cuando aparecen los sindicatos como colonizadores de las relaciones entre trabajadores de diferentes lugares. Hoy, que la burguesía ha puesto en escena una estructura sindical nacional, todo un movimiento basado en luchas locales dispersas y que encontraba en esta dispersión un medio de seguridad, se hunde. Si una tropa de «dirigentes» hábiles sostenidos por el Estado y la burguesía, luchan contra la autonomía obrera, son capaces de hacer singularmente difícil la victoria de esta última, aunque todas las demás condiciones le sean favorables.

La guerra de posiciones que mantenía el proletariado bajo el franquismo correspondía a la situación defensiva en la que se encontraba. Pero habiendo comenzado el proceso de disolución del capitalismo, el proletariado tenía que pasar a la ofensiva; tras la muerte de Franco la posibilidad y la necesidad de pasar al ataque eran dictadas por la situación misma.

Los obreros radicales formados en el medio de las huelgas contra el franquismo ante un movimiento que venía a sorprenderles dentro de su localismo de fábrica, parecían como marinos de agua dulce tirados de golpe en pleno mar. Lo poco que aprendieron les turbaba más que les servía en este gran combate y se mostraban a menudo más inciertos que los que combatían por primera vez. Los revolucionarios formados en el curso de los acontecimientos disponían de muy poco tiempo -o de ninguno- para desembarazarse de todo el peso muerto legado por el período anterior de luchas, de todas las supervivencias ideológicas de luchas precedentes. Tuvieron que aprender en su carne todo lo que son capaces de hacer las burocracias político-sindicales; y confundirse por la influencia aún mantenida por la basura militante con algún prestigio, debido a pasadas persecuciones bien explotadas publicitariamente, a una honestidad anterior hoy corrupta o a esa charlatanería que a fuerza de repetir diariamente y en voz alta su oposición termina por agenciarse una

reputación de contrabando. Esos individuos entorpecieron la acción de clase y el desarrollo del movimiento tanto como pudieron. Ningún grupo consciente previno el sentido profundo del movimiento y comprendió su desarrollo, y menos actuó con más radicalismo y consecuencia. Las ideas radicales del movimiento se perdían ante la falta de teoría coherente y organizada, comprendida y elaborada por todos, y quedaban como consignas vacías y muertas en la boca de los partidos o como afirmaciones desarmadas y subestética de la fracción lírica y festiva de la alienación anarcoide. Sindicalistas minoritarios del LAB o la CNT, o independientes y grupúsculos obreristas, lanzaron las consignas de las asambleas y de la autonomía obrera sin moverse de la esfera de los sindicatos. Hasta intentaron la mediación de los sindicatos cuando el conflicto entre éstos y los obreros había estallado ya. Contribuyeron a nutrir las ilusiones del proletariado sobre un sindicalismo asambleísta. Su prosa ideológica asamblearia ayudó a falsificar los diálogos reales que empezaban en todos lados. Como fuerza de inercia antihistórica, ha pesado decisivamente en el platillo de la contrarrevolución, cuando no pudieron hacerlo los sindicatos. Constituyeron la memoria en blanco de los trabajadores. Para ellos bastaba que las asambleas se quedasen en meras reacciones espontáneas contra el oportunismo de los sindicatos grandes; que les proporcionasen espacio. La contradicción existente en España entre la gran indigencia teórica y la enorme riqueza de hecho, fue el terreno abonado para el surgimiento de las ideologías activistas próximas al radicalismo pequeñoburgués, enterradas en todas partes desde hace tiempo: neoanarquismos, nacionalbolchevismos, autogestionismos, etc. En parte, el movimiento proletario asambleísta las ha hecho surgir como productos degradados que asimilaban algunas ideas radicales con premisas ideológicas diversas. En parte eran promocionados por la sociedad burguesa como propia negación espectacular. Dadas las condiciones que de hecho existen en España, era casi inevitable que se formasen estas sectas intermedias intentando reconciliar el movimiento revolucionario naciente y las ideas conformistas de la izquierda oficial. Incluso era inevitable que muchos obreros radicales llegasen a posturas revolucionarias coherentes por ese rodeo. Pero, aparte de esto, esas corrientes han posibilitado el reciclaje de los milagreros y aficionados a la nueva ola, a embaucadores y burócratas en paro, a comerciantes de ideas modernas dispuestos a explotar en su provecho el movimiento revolucionario. La ausencia de verdaderas luchas teóricas apasionadas y llenas de sentido ético, han hecho que, en principio, parte del movimiento del proletariado revolucionario discurra y piense a través de toda la literatura de esos círculos, vulgar en su originalidad, original en su vulgaridad.

La clase obrera española entró por la senda de las grandes acciones, desencadenando un movimiento radical de huelgas cuyas consecuencias aún duran. Hizo lo esencial, pero no hizo nada más, y dejó la ocasión a fuerzas exteriores a ella de desposeerla de sus logros y de hablar en su lugar. La celebración de elecciones en un ambiente de momentánea pacificación confirma cuánto se desestima el talento de la burocracia política en oponer al ímpetu del proletariado la mediocridad de las clases medias y del filisteísmo hispano. El PCE jugó su mejor papel desde la liquidación del POUM y de las colectividades aragonesas en la guerra civil. Fue la principal fuerza contrarrevolucionaria que trabó el movimiento. Ni la burguesía, ni la policía, ni la socialdemocracia pudo combatirlo tan eficazmente. Sólo los estalinistas poseían una larga tradición rompedora y una familiaridad con los defectos de las luchas.

Pero todos los obstáculos objetivos no hubieran resistido los efectos de una huelga como la de Roca, o las del País Vasco, si los obstáculos subjetivos propios al proletariado no hubieran estado presentes. El proletariado movilizado partió de muy bajo, la ausencia de una corriente revolucionaria definida era total y a lo largo del movimiento no llegó a definirse. La decadencia de la sociedad burguesa produce una profunda crisis entre los obreros, cuya expresión ideológica y organizativa son los partidos y los sindicatos. Amplias masas de trabajadores no se liberan de la influencia ideológica de la sociedad burguesa más que difícilmente, y se aterran incluso con más fuerza a las ilusiones que la burguesía pone en circulación. No se soporta impunemente varios decenios de historia contrarrevolucionaria. Los efectos corruptores de diez años de supervivencia consumista y el retraso de la conciencia teórica han tenido las más graves consecuencias. El rechazo de la miseria de la vida cotidiana, de la esclavitud asalariada, de las jerarquías, del Estado, de la alienación del mundo de la mercancía, han estado presentes pero no suficientemente conscientes. Los proletarios han entrado en lucha espontáneamente, armados sólo con su rebeldía; la profundidad y la violencia de su acción es la réplica inmediata del insoportable sistema capitalista, pero finalmente no han tenido tiempo de tener una conciencia exacta de lo que han hecho. El retraso teórico -la insuficiente conciencia histórica, pues- ha engendrado todas las insuficiencias prácticas que han contribuido a dispersar, aplazar o paralizar la lucha. Y la conciencia histórica es la condición *sine qua non* de la revolución social.

La lucha de clases niega por su esencia a la sociedad burguesa. Esto implica un sistema de conducción de la lucha, es decir, unas vías de la inteligencia práctica, unas formas positivas del empleo de fuerzas, en el que el proletariado no se deje subyugar por las formas y medios que la sociedad burguesa ha construido

para sus propios fines, los partidos y los sindicatos. Implica un tipo de lucha donde la iniciativa esté en manos del proletariado. A consecuencia del declive de la sociedad burguesa, la acción espontánea de los trabajadores asume una dirección revolucionaria en las asambleas. Las asambleas no son propiamente un arma defensiva, sino que indican que el proletariado ha entrado en una fase de lucha, consecuencia de la correlación de fuerzas con sus enemigos y de su experiencia, en la que combate a la burguesía y el Estado con métodos propios. Los trabajadores deben evitar que la burguesía les coloque en situación defensiva. En situaciones defensivas el proletariado está obligado a parlamentar, a reconocerse débil. Pero incluso si como consecuencia de una derrota del movimiento, un freno, desgaste o rotura de la ofensiva, se ven obligados a llevar a cabo una lucha de posiciones, entonces tienen que preparar la defensiva de tal manera que la iniciativa táctica quede siempre en sus manos y que los ataques de la burguesía resulten desventajosos para ella misma.

En la fase ofensiva de la lucha no sólo la burguesía y los estratos sociales guiados por ella son los que se encuentran agrupados contra el proletariado, sino las organizaciones nacidas durante el período actual con el objeto de reducirle a la defensiva: los partidos y los sindicatos. La crítica ya no debe dirigir sus golpes en primera línea contra la burguesía -ésta ya ha sido juzgada por la historia-, sino contra los partidos y los sindicatos, la quinta columna del movimiento obrero, sin cuya ayuda el capitalismo no tendría hoy en país alguno la mínima posibilidad de superar -aun temporalmente- su propia crisis.

6. PRESENTIMIENTOS OSCUROS Y TEMORES CIERTOS DE LA CLASE DOMINANTE Y LA BUROCRACIA POLÍTICA EN VÍSPERAS DEL SEGUNDO OTOÑO.

«Patronos y sindicatos están de esta manera situados ante un mismo problema -la crisis económica- y por ende obligados a entenderse en los próximos meses.»
Editorial de Diario 16, 12-VII-77 .

«Las centrales no tienen fuerza suficiente, como en otros países europeos, para garantizar un pacto social. Pueden iniciar un conflicto, pero no se sabe, como hemos comprobado en casos recientes, si tienen capacidad para frenarlo.»
Declaraciones de Félix Mansilla, líder de CEOE, a Cambio 16, 18-IX-77.

Después de las elecciones el capitalismo mundial debía pagar la factura de ver consolidadas sus posiciones en el flanco sur de Europa, renegociando

empréstitos y concediendo nuevos créditos y préstamos -los trust bancarios norteamericanos y europeos, el FMI- con los que el Gobierno español podría cubrir el déficit comercial y sostener expedientes financieros de urgencia. Tratando de despejar del horizonte toda posibilidad de amenaza revolucionaria, se había asegurado su cotización en los estamentos financieros internacionales. Pero el crédito internacional sólo cubría una mínima parte de las necesidades del capitalismo español y con la política antiinflacionista se había enajenado el crédito de las finanzas nacionales, visible en la bajada de la Bolsa. Con la concentración del mercado mundial y las medidas proteccionistas de la CEE y los EEUU subsiguientes que tendían a reducir las importaciones, la industria exportadora española entraba dentro de una crisis cuya gravedad aumentaba con las múltiples deficiencias estructurales de las diferentes ramas de producción: siderurgia, textil, calzado, construcción naval. La necesaria contracción del mercado interior y la caída de la inversión que está ligada a toda baja continuada de los beneficios empresariales (del 50% en los últimos dos años) extenderían la crisis a toda la industria, empezando por la transformadora (automóvil, bienes de equipo, material de transporte...) y volviendo a la productora de bienes de consumo, a la construcción, a la agricultura, a la pesca. Las industrias se veían atenazadas entre la alternativa de disminuir el ritmo de fabricación, bajando la productividad, puesto que los obreros se oponían con toda clase de medios agresivos al despido disfrazado o no de quiebra, o a la acumulación de stocks, con el aumento de necesidades financieras. En la industria española la autofinanciación alcanza sólo el 30% de sus necesidades por término medio; el resto de los recursos depende de los créditos y de las emisiones de títulos en la Bolsa. Visto esto, la última palabra estaba en la Banca, puesto que el Estado se oponía al aumento de precios para no provocar huelgas, y las industrias agotaban sus propios fondos, acercándose al punto crítico de la infra o superproducción, según hubieran emprendido un camino u otro. Pero la crisis económica no sólo había roto la unidad de intereses entre los burgueses de fuera de las Cortes y los burgueses de las Cortes, entre los capitalistas y sus representantes políticos, sino entre el capital financiero y el capital industrial autónomo. La Banca reservaba los canales de crédito a las empresas dependientes de ella y los cerraba a las demás, ahogándolas. Grandes industrias caían arrastrando a su constelación de empresas auxiliares (276 empresas suspendieron pagos y 54 quebraron en los ocho primeros meses de 1977: grandes empresas como Ensidesa, Seat, Astilleros Españoles, Babcock-Wilcox, Segarra, Altos Hornos del Mediterráneo estaban envueltas en una crisis de superproducción). En España, de algo más de un millón de empresas, casi un 90% cuenta con menos

de 250 operarios. Hay sólo un millar de empresas grandes que ocupan un 15% de los asalariados. Tal estructura del capitalismo español resulta muy vulnerable a la crisis, que multiplica sus efectos en las pequeñas empresas, indefensas ante cualquier oscilación negativa del crédito o la demanda (en 1977 un 60% de pequeñas y medianas empresas estaban atravesando dificultades financieras; en Madrid se presentaban todos los meses cien expedientes de crisis, en Vizcaya, en julio y agosto se presentaron más de cien expedientes, en Barcelona se declararon suspensiones de pagos en cadena; se calculaba que en 1978 podían desaparecer diez mil empresas).

Las mejoras salariales, conseguidas por numerosas huelgas y una eficiente práctica del absentismo, al no ir acompañadas de un aumento en la producción y los beneficios, cosa que la crisis mundial no permite que ocurra en España, forzaban a la patronal a un contraataque. No podían encontrarse holgados más que reduciendo los costes de la fuerza de trabajo a un nivel inferior al europeo -como en los viejos tiempos del franquismo-, para lo cual era necesario sacarle al Gobierno la medida del despido libre y barato, y pactar con los sindicatos el aplastamiento de la acción autónoma de los trabajadores. Los sindicatos, en la reunión cumbre con los empresarios, el 6-VII-77, se mostraban dispuestos a participar en la operación siempre que se les dejase participar después en los resultados. Pero la presión obrera en las huelgas asamblearias de agosto y septiembre -la hostelería, el calzado en Alicante, los montajes en Vizcaya, etc.-, les enseñó que no serían seguidos en un pacto social con los empresarios y que no podrían acabar con las asambleas enfrentándose a ellas. Entonces intervino el Gobierno suscribiendo un pacto con todos los partidos parlamentarios. El interés general de la clase de la burguesía primaba por encima de los intereses inmediatos de sus diferentes sectores. El pacto de la Moncloa inauguraba un período nuevo de la política de colaboración de clases. «Obligaba a imponer limitaciones económicas que situaban a las empresas en la imposibilidad de ceder ante reivindicaciones excesivas». Es decir, aseguraba la inamovilidad práctica de los salarios. Los fallos del pacto de la Moncloa venían de que era una solución económica a los problemas políticos del partido en el poder. Para los empresarios, la no concesión del despido libre gratuito y de una ley contra las asambleas, era demasiado. Pero en un ambiente de crisis social, la manera de realizarse las medidas políticas y económicas es la expresión de la marcha de la lucha de clases. El pacto de la Moncloa tenía como primer objetivo parar una previsible ofensiva proletaria durante el otoño haciendo frente común con los partidos. La situación extremadamente antagónica de las clases en lucha posibilitaba organizaciones tales como el Movimiento Asambleario, asambleas

coordinadas de huelguistas de la industria del calzado en la provincia de Alicante y otros lugares. La prensa reaccionaria se hacía eco de las inquietudes del poder y de sus aliados: «Políticos, incluso fuentes del gobierno comparan esta situación de conflictos obreros que se avecina con la misma situación que se produjo en el invierno de 1975-76, a las pocas semanas de la muerte de Franco, contra las medidas de congelación de salarios impuestas por el Gobierno de Arias» (Hoja del Lunes de Barcelona, 14-XI-77). El segundo objetivo del pacto era el hacer de los sindicatos los perfectos ejecutores de las decisiones económicas del poder, reduciendo a los obreros al papel de ejecutantes sumisos a las órdenes de los burócratas sindicales, mediante futuras leyes contra las huelgas salvajes y a favor de la acción sindical.

Emprendiendo la industria un camino descendente, el éxito sindical era imposible. La patronal, para resarcirse de las pérdidas sufridas en la crisis, tenía que recurrir a la parte correspondiente a los trabajadores que los topes fijados por el pacto le ofrecían, porque la contención de salarios y la reducción de puestos de trabajo vía expedientes, muchos simulados, es uno de los principales medios para mantener los márgenes de beneficios descendentes. Los sindicatos se veían impotentes, incapaces de conseguir reformas importantes y aumentos salariales verdaderos.

En esta coyuntura los sindicatos no podían crecer si no los apoyaba el Estado, y éstos le acusaban de ser el causante de su debilidad frente a los trabajadores por no haberlos apoyado bastante: «¿Qué capacidad de respuesta y oposición tienen los sindicatos? Su debilidad numérica y su falta de implantación (sólo el 15% de la población laboral) les impiden tomar una posición de fuerza y en el ambiente flota la amenaza del otoño caliente con huelgas incontroladas... Por un camino u otro se puede llegar en el otoño a una situación que no desemboque en una huelga general (a la cual son reacias las centrales obreras, porque las posibilidades de control serían escasas una vez iniciada), pero sí a un estado de huelga permanente que fuera rotando el descontento y la lucha por aumentos salariales por toda la geografía y ramas profesionales del país...» (Cambio 16, # 296, 14-Vlll-77).

Las asambleas obreras no permitían que los partidos se hiciesen ilusiones sobre una democracia burguesa estable y, cuando más les dejaban de lado, más rabiosamente respondían deslizándose en la pura reacción. Las académicas disertaciones en las Cortes con un final previsto de antemano, las falsas contiendas y los lugares comunes destinados a entusiasmar al filisteo hispano, no podían disimular la existencia de la lucha de clases, de la que los partidos iban deslindándose hasta coincidir por entero con el poder do-

minante. De ahí su enfrentamiento con los obreros, con gran espanto de los pequeños burgueses intelectuales, vedettes, periodistas, abogados y estudiantes, que venían de fabricar para su propio uso todos esos idolillos de cera. Un mismo lenguaje estaba en boca de burgueses, estalinistas y socialdemócratas, rememorando los negros tiempos de Negrín. Diario 16 sintetizaba: «La asamblea -órgano esporádico, sin control de asistentes manipulables, sin reglas y minoritaria- está jugando un papel negativo al despreciar e incluso impedir de hecho en algunas ocasiones el desarrollo de las centrales sindicales. El asamblearismo se resiste a comprender que su época heroica de lucha contra el sindicalismo fascista ya ha pasado. Que ahora los protagonistas deben ser otros, los sindicatos libres» (27-XI-77). Lo que anunciaban tales palabras era una pronta transformación policial de las «conquistas democráticas» al persistir los obreros en su autonomía.

7. CÓMO LOS SINDICATOS, DEJANDO DE SER POPULARES, SIGUIERON SIENDO EFECTIVOS EN LA NEUTRALIZACIÓN DEL AVANCE PROLETARIO.

«De tal manera se mantienen libres de un ataque, que las ciudades de España no son tomadas con facilidad por los enemigos.»
Julio César, La guerra de España.

Era previsible que el acuerdo entre los partidos parlamentarios y el Estado no iba a ser respetado por los trabajadores, quienes, sin sentirse afectados, proseguían su movimiento por encima de los sindicatos. Las asambleas de huelguistas de Santana en Linares, y sobre todo la batalla insurreccional de Cádiz, seguida de la inmediata formación de la coordinadora de trabajadores, manifiestamente antisindicales, daban cuenta de que el término del primer acto no fue el final del drama. Los partidos se hallaban en el punto más alto de su descrédito; una vez pasado el asombro entre los trabajadores ante sus actuaciones nefastas, estallaba el furor, y el proletariado, comprendiendo que en este mundo no tenía más que enemigos y falsos amigos, quedaba sin otra dirección que la de su ira. Los sindicatos, por su parte, no pudiendo ser reformistas con grandes resultados, tenían que aceptar huelgas y asambleas que no deseaban en absoluto, para no ser rechazados y perder todo control sobre los trabajadores. Los filisteos reprochaban esa actitud a CCOO: «El señor Camacho se muestra favorable a un asambleísmo controlado porque considera a Comisiones con la experiencia, habilidad y fuerza suficientes para ejercer tal control. Pero no

es nada seguro que ese optimismo se vea refrendado por los hechos» (El País, 22-X-77). No obstante, el hecho mismo de que los estalinistas adoptasen semejante táctica revelaba que sus esperanzas de triunfo contra los proletarios no podían basarse contando sólo con el apoyo de la patronal, como lo hacían la UGT o STV, sino también con la tolerancia de estos.

La comicidad del gobernador civil de Cádiz prohibiendo hablar de Vitoria, a falta de poder prohibir la realidad, combina con la de los partidos gaditanos reuniéndose «para controlar la situación» antes de que ésta les controlase. Diferentes representaciones del poder descubren su unidad fundamental en la misma impotencia de sus gestos. Cuando lo que llaman normalidad es alterada, es decir, cuando la circulación de mercancía es interrumpida a un grado elevado, al capitalismo sólo le queda la ocupación militar del territorio. Y a su oposición leal, la colaboración «cívica» con las unidades de policía, lo que volvería a ser confirmado un mes más tarde en Málaga. En el curso de una anodina manifestación autonomista, proclamando la fraternidad de todas las clases andaluzas, sin dejar por ello de explotar unas a otras, hecho que se consideraría más adelante como un hecho de patriotismo andaluz, una provocación policial fortuita evidenció los intereses contradictorios de sus asistentes, con neto predominio en la calle de los obreros radicales, quienes no solamente respondieron a la provocación de la policía, sino a otra más humillante, la de la mercancía, adueñándose de sus lugares de exposición y devastándolos. La guerra social se expresaba esta vez como una gran fiesta del saqueo del barrio comercial de Málaga, y en este sentido de guerra contra la mercancía, aportaba a la tarea de clarificación revolucionaria una importante contribución en actos.

La soberana impotencia de los sindicatos, que iba más allá de la propia lucidez de los trabajadores, se debía a la situación anormal en la que se encontraban, pues al estar atados por sus pactos con la burguesía, no podían cumplir siquiera lo único que les justificaba, la lucha por las reformas sociales. Su acción conducía directamente al empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera. Haciéndose una cuestión de supervivencia la lucha contra los sindicatos, las huelgas tenían que ser asamblearias por necesidad. Las grandes centrales tuvieron que montar el espectáculo de su enfrentamiento para repartirse rotativamente las tareas del esquirolaje; todas las huelgas del otoño presentan esta falsa contienda rematada con una colaboración final en el rompimiento de las luchas: la de la construcción de Zamora, la de la cerámica de Castellón, la de Santana en Linares, la del transporte de mercancías de Madrid, la nueva huelga general de Tenerife, las huelgas zaragozanas de diciembre, la del comercio de Madrid, etc.

Cogidos en sus jugadas, muchos dirigentes sindicales recibieron agresiones físicas e innumerables insultos. En la asamblea final de los huelguistas del transporte de mercancías de Madrid, por citar un ejemplo, fueron apaleados varios miembros de CCOO, y todos ellos expulsados. A fines de año, las centrales habían perdido buena parte de sus afiliados, miles de carnets eran rotos tras cada huelga vencida. Llegaban a veces al extremo de dejarse desbordar para no vaciarse. Pero la crisis del sindicalismo no fue acompañada de un incremento de la conciencia revolucionaria del proletariado. La marcha de los obreros hacia posturas radicales se llevó a cabo en la mayoría de los casos de forma elemental, bajo la presión de las vivencias inmediatas y sin alcanzar rápidamente todas sus consecuencias ni desvelar todo su contenido.

Hacía falta superar las deficiencias esenciales del movimiento en su fase anterior, principalmente el subdesarrollo teórico. Así, la interacción entre reivindicación económica y lucha revolucionaria no se realizó paso a paso. De este modo se explica cómo la composición de las comisiones negociadoras quedase retrasada en relación al desarrollo de las luchas y ejerciesen siempre un peso decisivo en la dirección de las mismas, en provecho de los sindicatos introducidos en ellas, y empujando siempre en ese sentido. Las comisiones mixtas se convirtieron en una poderosa arma en manos del contrapeso burgués de las asambleas -los sindicatos-, facilitando a esos enemigos de los trabajadores una superior organización de sus fuerzas. Las comisiones mixtas no podían funcionar bien porque el acuerdo mutuo entre sus componentes, los delegados de las asambleas y los representantes de los sindicatos, suplantaba a las decisiones mayoritarias de los proletarios reunidos en las asambleas. Con esa fórmula bastarda, los obreros asamblearios acudían a la negociación en minoría o al menos con una representatividad recortada, cuando en las fábricas y en la calle eran una mayoría aplastante. Sin apreciar convenientemente los trabajadores en su lucha su propia fuerza, desplazaban por esa vía mixta de la negociación el lugar de decisión de las asambleas a la mesa negociadora, y ayudaban inconscientemente a transformar la lucha de clases en mera colaboración con sus patronales. La amenaza que pesaba en los días de huelga sobre los sindicatos si éstos se decidían a enfrentarse abiertamente a las huelgas, desaparecía. Todo lo que tenían que hacer era adaptarse a una situación que de hecho sólo podía evolucionar favorablemente para sus propósitos, puesto que mediante las comisiones mixtas quedaban fijadas las bases de la unión sagrada de los defensores del orden de cosas, que iba a presidir la derrota de los huelguistas.

El pacto de la Moncloa no fue finalmente desautorizado por un movimiento generalizado de huelgas, como el Gobierno y los sindicatos temían.

Creó el terreno propicio, como antes lo había creado el decreto de congelación salarial de Villar Mir, pero el movimiento no fue más allá de una serie de huelgas, importantes pero casi siempre locales, atravesadas por los sobresaltos de Cádiz, Málaga y La Laguna. Las huelgas del segundo otoño eran antes que nada combates de retaguardia. Consideradas en relación con el movimiento de lucha, no constituían una ofensiva contra los nuevos acuerdos de sus enemigos, sino un repliegue defensivo contra los mismos, crudamente confirmado a principios de este año. El desgaste de dos años de lucha intensa y la agobiante presión del paro habían creado un clima de cansancio. Las condiciones de presión económica han actuado contra el proletariado, cuando antes éste las hizo actuar contra la burguesía. La burguesía usó su propia crisis para reducir la lucha de los trabajadores a una defensa del empleo. Con el reflujo de las huelgas, los sindicatos llegaron a conseguir que en muchos lados los obreros se rebajasen a niveles humillantes, suscribiendo planes ridículos de reestructuración empresarial, como en Seat, o asimilando una retórica lacrimosa y suplicante que llegaba hasta comprometerse a no declararse en huelga ni formular reivindicaciones a cambio de una garantía en el empleo.

Esta vez no fueron los sindicatos los principales artífices de la derrota. Ellos se limitaron a ocupar un lugar abandonado y organizar las elecciones sindicales. De la consolidación electoral de las centrales dependían dos cosas: el cumplimiento de los acuerdos de la Moncloa y la superación de la opción asamblearia como método de dirección, representación y decisión de los trabajadores. Los obreros, después de haber derrocado a los sindicatos, no aseguraron las asambleas y les dejaron en libertad para defender el orden social en las fábricas, recomponiendo pieza a pieza sus aparatos burocráticos, ayudados por la parte mediocre y sin pasiones de los trabajadores, que aparece con fuerza en los momentos de decepción y de calma. Los obreros sucumbían no al retorno de las ilusiones del pasado, retorno demasiado artificial y orquestado por el poder, sino por haberlas ignorado y haber permitido que se instalasen a su lado. La abundancia de gestos antisindicales de todo este tiempo era inútil, al no unificarse en un mismo movimiento que los transformara en leyes de guerra. Las asambleas, cohabitando con su negación sindical, se hacían sus sostenedores, y esta tara del movimiento prolongaba la ignorancia de las condiciones necesarias de su extensión revolucionaria, colocando sobre la ilusión sindical la ilusión de un asambleísmo sindicalista, de una delimitación de las asambleas al terreno de los sindicatos, el de la negociación perpetua de la forma de explotación de la fuerza de trabajo. Las corrientes identificadas con esa ilusión participarían en la reorganización sindical de la empresa como candidaturas

independientes o no afiliadas, conciliando a expensas de los obreros las diferentes fuerzas en presencia. Pero no hay que atribuirles a ellas mismas el éxito relativo de estas candidaturas, pues no indican en modo alguno una penetración elevada de sus posiciones ambiguas, sino una postura de resistencia pasiva al avance de los sindicatos por parte de los proletarios, presionados por el paro y resentidos por la parte de impunidad que todavía gozan los sindicalistas.

Si las elecciones parlamentarias fueron una gran derrota del movimiento de las asambleas tras año y medio de luchas, las elecciones sindicales son el acabamiento y confirmación total de esa derrota. El proletariado ha salido muy debilitado de este proceso. Se puede decir de modo general que ha pasado desordenadamente a la defensiva, durante los dos meses y medio que han durado las elecciones. Es una ley vital para la revolución el avanzar rápidamente, derribando todos los obstáculos y poniendo miras en metas cada vez más elevadas, si no quiere ser devuelta inmediatamente a su frágil punto de partida y disuelta por la reacción. Pero no hay que olvidar que la revolución es la única forma de guerra en la que la victoria final es la consecuencia de una serie de derrotas.

8. EL ORDEN REINA EN LA EMPRESA.

«No nos guardéis rencor por la política que el gobierno va a llevar y del orden que hará reinar en las calles de nuestras ciudades.»

Declaraciones de Jaroszowick, jefe del gobierno polaco a los huelguistas de Szezecin, el 24-I-71. Sacado de Lucha de clases en Polonia, 1970-71, ICO, ed. Spartacus, París.

La decadencia del movimiento de las asambleas, total a principios de año, marca una nueva etapa en el avance de la contrarrevolución en España. Hasta entonces la reacción había avanzado al abrigo de la colaboración con los asambleístas neutros y los sindicalistas minoritarios que servían de puente entre el programa netamente burgués de los sindicalistas mayoritarios y las inclinaciones revolucionarias de las asambleas obreras. Con las elecciones sindicales llegó el momento en que el bloque sindical socialista-estalinista podía prescindir de todos ellos. La historia conoce bien el proceso. Cuando los sabotajes de las huelgas han hecho retroceder las posiciones asamblearias entre los trabajadores, la reacción puede dejar de lado a todos sus aliados cuyos servicios le fueron indispensables para llevarlos a cabo. El resultado de la derrota de los obreros asamblearios es un refuerzo de los sindicatos que más contribuyeron a la mis-

ma. Tal fue el resultado de la represión de los espartaquistas por el socialista Noske. La consigna de UGT y CCOO de elecciones sindicales significaba acabar con las asambleas. Tal es la finalidad del proyecto de ley de «acción sindical y representación de los trabajadores en la empresa» en el que la UGT viene presionando por sus perspectivas más antiasamblearias a base de conseguir un máximo de atribuciones para el comité de empresa y la sección sindical.

Pero la escalada contra el proletariado no se está efectuando sólo en los lugares de trabajo, ni son los sindicatos y partidos sus principales agentes. En la actualidad el enorme tamaño de las fuerzas productivas confiere a las interrupciones de la producción y de la circulación de mercancías una efectividad tan grande que provoca profundas perturbaciones en el sistema. Conocemos, gracias a los mineros norteamericanos, los efectos de la paralización de la producción de carbón. Y sin necesidad de salir fuera sabemos que una huelga del transporte, de los empleados de Campsa, o simplemente de empleados de banca, si se prolonga tiempo suficiente tiene consecuencias mortales para el sistema. Contra esa vulnerabilidad el sistema se tiene que proteger reforzando el control policial sobre la sociedad, en nombre de la seguridad y la protección, invocadas con variados pretextos: la delincuencia social -justificación del aumento de la plantilla policial en las grandes ciudades, las cuales han pasado a un estado de semiocupación-, el terrorismo -justificación de la organización de comandos especiales y, ahora, del proyecto de Martín Villa de creación de una policía política-, o, en fin, la amenaza de catástrofes ecológicas, químicas, nucleares o de cualquier otro tipo que las aberraciones del propio capitalismo puede producir.

Los planes de emergencias incluyen, claro está, medidas como la militarización y la colaboración del ejército y «asociaciones cívicas» creadas por los partidos. Hasta el momento, esta siniestra conspiración contra el proletariado ha circulado ingenuamente por la prensa. El diario El País del 2-II-78, hablando de la reforma de la Ley de Orden Público, decía: «El proyecto de ley dedica varios artículos a la determinación de los estados de alarma pública, a la fórmula de su declaración y a las medidas necesarias para hacer frente a los mismos. El estado de alarma podrá ser declarado en caso de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, paralización de servicios públicos esenciales y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Entre las medidas que las autoridades podrán adoptar en tales casos figuran varias restrictivas, entre ellas requisas temporales de todo tipo de bienes y la imposición de prestaciones personales obligatorias, la revocación de permisos de tenencia de armas, la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, la ocupación transitoria de industrias,

fábricas y talleres, y el racionamiento del consumo, de los servicios o artículos de primera necesidad. El proyecto de ley prevé la colaboración de unidades militares bajo sus mandos naturales para prestar determinados servicios o para controlar los ejecutados por terceras personas, así como la colaboración de asociaciones cívicas creadas para tal fin».

Si las relaciones de producción burguesas están condicionadas por la posición de cada país en el mercado mundial, el proletariado no puede romperlas en un lado sin hacer que se resientan en todos los otros, e inversamente, una solución revolucionaria en un país determinado depende totalmente de la situación de la lucha de clases en los demás. Porque una revolución proletaria no puede durar mucho si no se extiende en varios países, si no tiende hacia una comunidad de acción internacional. La lucha contra el capital no puede constituir el contenido nacional de la revolución. La medida del internacionalismo es exactamente la medida de la conciencia de la realidad revolucionaria. No hace falta escuchar al explícito general Haig para saber que «la pertenencia de un país a la OTAN es una garantía contra el desarrollo de determinados procesos revolucionarios» y que, caso de producirse alguno, «la OTAN no dudaría en intervenir en España», como no hace falta que se produjesen las intervenciones militares contra el proletariado en Berlín, Hungría o Checoslovaquia para saber lo mismo de la Organización del Pacto de Varsovia. No hay que atribuir, pues, a la política africana de España la conversión de las Islas Canarias en una base militar, sino a la misma estrategia antiobrera, usada ya por Franco en el 36, sin esperar a que una incorporación formal de España en la OTAN lo confirme. El capitalismo mundial no podría soportar una revolución, aún sólo local, por tiempo indeterminado. Toda revolución social debe enfrentarse al peligro de una intervención militar, sin detenerse por ello, antes bien extendiéndose. Debe tenerse muy presente ahora que una lucha se mantiene en varios países en las mismas condiciones: Polonia, Portugal, España y la mayoría de los países mediterráneos y del Este.

9. PERSPECTIVAS NUCLEARES DE LA VICTORIA MOMENTÁNEA SOBRE EL PROLETARIADO.

«A todos los que aquí non he nombrado / de cualquier ley e estado e condición / les mando que vengan muy toste priado / a entrar en mi dança sin escusación»
(Anónimo europeo del siglo XIV, Danza de la Muerte).

Pasado lo fundamental de la presión proletaria, puede pensarse en una nueva ofensiva capitalista que proporcione a las fuerzas productivas el espacio

vital necesario para un nuevo auge, siguiendo el doble proceso internacional: un avance de la burocratización de la sociedad, tomando el Estado la reestructuración de sectores industriales deficitarios a su cargo, y un nuevo proceso de acumulación dirigido a los sectores capitalistas más ligados a las multinacionales en base a la reorganización cibernético-nuclear del proceso productivo. Los atrasos parciales del capitalismo español, con toda la secuela de anacronismos que le sigue, están llamados a jugar solamente un papel accesorio y financiarse con la supresión de mano de obra paulatina.

La cuestión nuclear tiene que estar presente en todo análisis teórico radical, como dato central de la guerra social y elemento esencial de la tentativa de reestructuración capitalista en curso en el mundo. La energía nuclear, en su desarrollo como en sus resultados, expresa la dominación acabada del trabajo muerto sobre el trabajo vivo del capital fijo sobre el capital variable: en otros términos, no es creadora de empleos por lo que no puede ser una solución de la crisis económica. En cambio sí podría ser una solución de la crisis de la economía, ese tipo de solución cuyo secreto posee el capitalismo, salto en adelante y profundización de la contradicción. El viejo proyecto burgués de emancipación de la naturaleza realizándose como pesadilla y yendo en contradicción de la propia naturaleza del hombre: poniendo en peligro la supervivencia de la especie. La separación entre crisis económica y crisis de la economía no hace más que seguir a la división del trabajo entre los agentes de la economía de mercado, entre las burocracias obreras y los capitalistas, sin pretender negar los conflictos posibles y reales entre ellos, siempre negociables y garantizados por el Estado, que regula la colaboración. La parte más avanzada de los capitalistas ha practicado ante la crisis social una política de la tierra quemada, abandonando al Estado (y en cierta forma a los burócratas) la gestión de la crisis de los sectores atrasados, ganando tiempo para desarrollar las bases de la reconquista, las tecnologías avanzadas (informática, electrónica, nuclear, etc.). Existe un conflicto real, puesto que las burocracias obreras, en tanto que representantes del capital variable, tienen que luchar contra su expulsión por el capital fijo; se pueden observar en la industria española casos en que las burocracias sindicales han negociado una no-introducción de maquinaria moderna que reduciría los puestos de trabajo contra la promesa de no formular reivindicaciones; en el futuro estos hechos serán más frecuentes. Todas las formas de autogestión de la miseria (hemos visto ejemplos prácticos en la «autogestión» de Roselson o en la de Eurostyl) militan también en ese sentido, mientras que el capitalismo más moderno reconstituye sus fuerzas en otra parte para una nueva ofensiva. Cuando oímos levantar la voz a los capitalistas contra el intervencionismo

estatal a causa de que, no sólo no crean necesario aumentar todavía más el papel económico del Estado, sino también porque ese aumento haría franquear al proceso de la burocratización un umbral que implicaría asociar la gestión estatal a las burocracias obreras. Ni que decir tiene que éstas luchan por ese aumento, no solamente como brillante perspectiva de porvenir, sino porque hoy necesitan al Estado para mantener con vida los sectores industriales tradicionales, de donde sacan su mayor fuerza.

Puede surgir una oposición como la que ha surgido entre la Banca y las eléctricas, y el Estado, a propósito del programa de nacionalización de las centrales nucleares y del control estatal de las empresas de transporte de energía eléctrica de alta tensión, entre las fuerzas capitalistas privadas protagonistas de la nuclearización y el personal político protagonista de la burocratización, pero será meramente accidental; en el caso particular español el conflicto se ha saldado a favor del capital privado, con la dimisión de Fuentes Quintana, aun siendo el Banco de España el accionista más importante del sector eléctrico, como consecuencia de la política seguida de compra de acciones para sostener la Bolsa.

Como reacción inconsciente del organismo capitalista enfermo, las nacionalizaciones y la planificación estatal -aún parcial e indicativa- de la producción, nos indican las formas burocráticas que tiende a crear la propiedad y la contradictoria necesidad para el capitalismo de la introducción de una energía planificada. Desde el punto de vista social estas tendencias pueden ser consideradas en atención a una supresión parcial de la propiedad privada y a un acrecentamiento de las fuerzas productivas. Mientras se imponen ciertos límites y estos fenómenos se manifiestan de forma esporádica, las características sociales propias a la cualidad de la economía en que aparecen, la economía de mercado, se mantienen intactas. Pero si el fenómeno se generalizase el mismo tipo de economía cambiaría. En un momento determinado la economía, a causa de la progresión de las nacionalizaciones, perdería su carácter capitalista privado y el Estado dejaría de representar políticamente a la burguesía para pasar a hacerlo a la burocracia constituida en él. Por eso el capitalismo moderno obliga a su Estado a fijar su intervención a los sectores conflictivos y quebrados. De otra forma una nueva clase amenazaría con erigirse para resolver en el dominio de la producción los fracasos del capitalismo y frenar las arremetidas proletarias; una clase compuesta de funcionarios y tecnócratas provenientes de la empresa pública y privada, fusionados con los aparatos dirigentes de los partidos y sindicatos y con los altos mandos policiales y militares. Podrá parecer una exageración del maquiavelismo de los dirigentes, pero, si bien tiene una

gran importancia el lado objetivo del proceso, la evolución espontáneamente burocrática de la lógica del capital, no hay que desestimar la conciencia que puede existir en los dirigentes respecto a que su mantenimiento es en todos los momentos una operación de guerra contra el proletariado. La extensión de su poder a la totalidad de la sociedad depende de que el proletariado, aun arrinconando a la burguesía en su lucha, no logre ser capaz de destruir el Estado y los aparatos burocráticos que tienden a mantenerlo. La guerra social no entiende de derechos, ni de moral, ni de culpas, ni de injusticia. El proletariado perderá su esclavitud asalariada sólo si gana la guerra. Sabrá también que puede perder en ese combate inevitable. Merecería la derrota si perdiese, como merecerá la victoria si gana.

Trabajadores por la autonomía proletaria
y la revolución social, Abril 1978.

Nuevos comentarios acerca de la España salvaje.

1. SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA TRAS LAS ELECCIONES SINDICALES.

«Cuando vuestras armas habrán perdido su filo, cuando vuestras fuerzas estarán agotadas y cuando vuestra tesorería se verá reducida a nada, los soberanos vecinos se aprovecharán de vuestros apuros para actuar. E incluso si tenéis consejeros advertidos, ninguno de ellos estará en la medida de levantar planes adecuados para el porvenir.»
Sun Tzu, El Arte de la Guerra.

Los cambios sociales del futuro -y las revueltas que les preceden y acompañan- serán profundamente influenciados por la comprensión del proletariado de lo que realmente ha pasado y de lo que realmente ha hecho. El movimiento de las asambleas obreras, el mismo movimiento de la lucha de clases, ha llegado lo suficientemente lejos como para necesitar comprender sus obras y las consecuencias que se han desprendido de las mismas, a fin de avanzar conociendo la lógica total de su juego, *sabiendo pues el terreno que pisa*, condición indispensable para entrar en las batallas que inevitablemente tiene que librar con el viejo mundo, con un máximo de posibilidades de triunfar en ellas.

El movimiento de las asambleas no pudo afirmar su cohesión ofensiva. Sin embargo no podemos comprender ese fallo sino con relación a lo que conquistó y a lo que hubo de combatir. Por sí mismo constituye ya una situación a la que no se puede dar marcha atrás. Es el espectro que asedia la buena conciencia de todas las cabezas de la vieja sociedad española, después de recorrerla durante más de dos años. ¿No se acusaban mutuamente, el Gobierno y la oposición, de fomentar el «asambleísmo» durante la discusión del artículo 9 del proyecto de ley de Acción Sindical? Pero su principal mérito no es el haber existido y por lo tanto demostrado la posibilidad revolucionaria de una democracia directa entre los proletarios, sino el haber obligado a sus adversarios a oponérsele abiertamente, a formar una «contrarrevolución compacta» frente a él. Esta verdad

histórica se verá reconocida más tarde por los proletarios que pudieron preservar la organización y radicalidad de su movimiento. En efecto, en un hermoso comunicado de la Comisión Investigadora de la Asamblea de Rentería, puede leerse: «los que vivimos aquellos días de lucha en la calle comprobamos de nuevo que la rebelión es posible, que la pasividad y el aislamiento se pueden romper... fue entonces cuando mejor conocimos quiénes son y cómo juegan ahora nuestros enemigos... la lucha cuando es colectiva nos da la posibilidad de conocer lo que en la normalidad es imposible...» (*Reflexiones sobre la huelga general de julio*). Las asambleas obreras han sido reconocidas como una fuerza peligrosa por todos los defensores del orden burgués. Los revolucionarios no tienen que disimular o subestimar la existencia de esa contrarrevolución, conducida por los partidos y sindicatos, sino al contrario, circunscribirla y ponérsele enfrente, porque está en juego la autogestión de las luchas, la autonomía proletaria. *Eso es lo que les va a distinguir de los falsos amigos del proletariado*.

Las situaciones de doble poder durante las cuales el proletariado puede adquirir su total autonomía respecto del capital son siempre fugaces; rápidamente le conducen a la encrucijada, donde tiene que elegir entre asumir la inmensidad de las tareas que se le presentan o retroceder, o lo que es lo mismo, perder el envite. A lo largo de 1977 se le presentó al proletariado varias veces, la alternativa de entrar en *la fase superior* de su lucha contra el capital y el Estado, destruyendo a los partidos y sindicatos que trababan su lucha o permitirles que reconstituyesen los eslabones del aparato de dominación desprendidos. En esos momentos de la lucha el instinto de clase no es suficiente, la *conciencia de los intereses de clase* es el factor decisivo; el proletariado no puede vencer si no dispone del conocimiento del conjunto de las condiciones reales de su lucha, del movimiento histórico que se desarrolla bajo sus ojos. La teoría hecha por todos. La fuerza de los acontecimientos no bastó para que las asambleas se consolidasen, ni que los asambleístas formasen una tendencia radical organizada entre los trabajadores, que -en palabras del *Manifiesto*- opusiese «a la leyenda del fantasma un manifiesto del partido». Sin resolverse las tareas teóricas del movimiento, mal podían plantearse las prácticas, lo que ocasionaba un gran desperdicio de fuerzas. Tras las elecciones sindicales, la situación de la clase obrera podía entenderse tal como un revolucionario asesinado por los estalinistas analizaba un período anterior de la lucha de clases: «No es que el proletariado atenúe su acción combativa porque ocupan el poder las fuerzas reaccionarias, sino que las fuerzas reaccionarias ocupan el poder a consecuencia de un debilitamiento momentáneo de la potencia proletaria» (Andreu Nin, *Nueva Era*, 6, Julio 1936).

Las clases luchan con los medios que les son impuestos por las situaciones y el grado de tensión social. Ante un peligro de incendio el capitalismo usó todos los medios que le proporcionó su ininterrumpido pacto social para extinguirlo. La amenaza era la *independencia* de la acción proletaria, condición indispensable para la lucha por la abolición del dominio burgués. Por consiguiente, el capitalismo debía recuperar el control sobre los obreros, y los sindicatos y partidos eran el mecanismo esencial de ese control. Ni el Gobierno ni la patronal podían sentirse seguros mientras los sindicatos no fuesen dueños absolutos de la decisión de los obreros en las fábricas, cosa que a finales de 1977 todavía estaban lejos de lograr. Pero en cuestiones de guerra social, las conquistas de la primera victoria no se consolidan sino mediante una segunda, más radical. Las huelgas asamblearias de Vitoria, Roca de Gavá, calzado de la provincia de Alicante, etc., aseguraron la independencia de los trabajadores durante casi un año. Pero a los proletarios no se les ocurrió que era necesario asegurar firmemente su poder y organizarlo nuevamente. Allí donde las luchas habían estallado, había quedado evidente el papel de los sindicatos y partidos, con lo que una nueva forma de organización de la lucha había surgido: las asambleas. Pero un coloso se desploma y queda hecho pedazos por su propio peso cuando la base que le sostenía llega a faltarle. Una época revolucionaria exige decisiones revolucionarias. Las asambleas habían hecho retroceder a los sindicatos. Pero los obreros no ocuparon el terreno que sus enemigos abandonaron al retroceder. No hay que suponer que la burocracia sindical fue vencida porque las asambleas obreras se impusieron. Su retirada era organizada. A pesar de las roturas de carnets guardaban lo esencial de sus efectivos, lo mejor de sus escorias, y el aparato intacto. Las asambleas la marginaron un tiempo, pero ni la desarmaron ni la vencieron. El movimiento de las asambleas se fue agotando sin poder dar el golpe decisivo, a falta de simultaneidad en el ataque, de solidaridad consciente, de coordinación de fuerzas elementales desencadenadas, a falta de buena organización y de objetivos generales, de ideas, de coherencia... La atmósfera hipocondríaca de las miserias de la vida cotidiana pudo deslizarse entre tanto esfuerzo mal acoplado y hacer estragos en la conciencia despertada por las asambleas. La retirada que era inevitable, no fue compensada con un avance en la coordinación que generalizando el plan de defensa, le hiciera uniforme y vigoroso, y sin descuidar los intereses particulares y locales, cuidase de entretener, mejorar y aumentar las relaciones entre los obreros, procurase apoyos y subviniese a todas las necesidades de la clase, dando con esto un alivio y confianza a las coordinaciones sectoriales y locales para que se ocupasen bien de la defensa de su correspondiente zona.

Aunque los sindicatos habían acusado el golpe, y mostrado en momentos decisorios una impotencia reveladora, con *las elecciones sindicales* ganaron con creces lo que anteriormente perdieron. Las elecciones decidieron la suerte de las asambleas. En adelante -con la valiente excepción del País Vasco- no serían sino una caricatura de lo que fueron. Al faltarles la fuerza o la decisión de destruir a su enemigo, los trabajadores dieron armas a sus explotadores y se entramparon en la red de su dominación, para ser tratados con pocas contemplaciones. Cuando están en juego los intereses, se abolen los convencionalismos. En España las elecciones sindicales resolvieron el dilema que sufrían tanto la clase dominante como sus servidores burócratas. La consecuencia inmediata para los trabajadores fue la paralización de su proceso emancipador, de su clarificación necesaria. El protagonismo se desplazó enseguida hacia los delegados sindicales, y de estos a las comisiones negociadoras de convenios, en detrimento de los trabajadores -desarmar al adversario vencido es un deber para el vencedor si no quiere que la lucha renazca en el momento menos pensado-. Los delegados de las comisiones, casi siempre sin ser elegidos, llevarán las negociaciones con la patronal, relegando el arma natural de la lucha de clases, la huelga, a último término, como un medio de presión de su diplomacia, del que hay que evitar servirse en la medida de lo posible, mientras que los obreros permanecerán pasivos contemplando su propio tráfico.

El desarrollo de la conciencia de clase no tiene nada de fatal; el sentir de todos puede muy bien permanecer en un momento dado latente, sin manifestarse; es posible que no sean percibidas todas las posibilidades que encierra una situación determinada, o simplemente que no se sepa en el momento justo enunciarlas coherentemente y hacerlas entender; la historia del proletariado europeo nos ofrece sobrados ejemplos de acontecimientos que abortaron como consecuencia de los desfallecimientos de la conciencia de clase. También es de temer el retorno de las costumbres rutinarias de la vida privada, cuando los obreros han arrancado una victoria o han efectuado un repliegue táctico. El conservadurismo, la estupidez, el egoísmo estrecho, la vanidad... vuelven a aparecer siguiendo el curso de la vida alienada. La mediocridad, la vulgaridad, se esforzarán en vallar el camino de la vida auténtica. En ese ambiente la acción proletaria respira un aire de rebeldía fallida, y la sensación de cansancio se apodera de muchos. Ante una perspectiva resignada la mayoría de los partidarios de las asambleas se presentaron a las elecciones sindicales, junto con gente no alineada sindicalmente, como *independientes*, como medio para asegurar sus posiciones. Olvidaban el principio de la lucha de clases, de que «no se combate la alienación con medios alienados», que sólo las asam-

bleas, reafirmando la capacidad del proletariado a autodirigirse, detendrían a los sindicatos y partidos. Desde ese instante los independientes eran «un partido distinto» del proletariado. La historia de los «independientes» es una sucesión de vacilaciones y pasos atrás. Tentados y atraídos sucesivamente por las asambleas que les impulsaron y por los sindicatos que les ofrecían empleo, por la democracia directa y por el liderismo, dieron pruebas abundantes de su poca altura. Y con la erosión y desplome del movimiento de las asambleas, esa vanidad pequeñoburócrata que tiende a asegurarse el puesto como de su propiedad, supo imponerse en sus espíritus mediocres y vacilantes abriéndoles a componendas con los sindicatos; el paso siguiente fue entrar en ellos, unos en USO, otros en CNT, otros en CCOO..., extendiendo la servidumbre sindical que antes combatieron. A esas gentes sin partido las circunstancias colocaban en una situación demasiado grande para la pequeñez de sus aspiraciones, y una vez alejados de ella tomaban de buena gana las seguridades burocráticas por los peligros asamblearios. Para ellos no había contradicción entre las asambleas y la militancia sindical, puesto que su antisindicalismo había sido coyuntural y no de táctica o principios. Y generalmente no había pasado de ser una actitud más bien neutral que reacia. Si habían cambiado de bando con tanta comodidad, es porque la distancia a franquear era corta. Y ese interés, o esa ineptitud, esa ausencia de sentido de la realidad que les hacía entrar en los sindicatos cuando los obreros no dejaban de salir les convertía de rebeldes de ayer en contrarrevolucionarios de hoy. En las zonas donde mejor se apreció el fenómeno de las asambleas -Barcelona, Vizcaya, Pamplona, Vitoria, Elche- mejor se vio esta decadencia que contribuyó tanto como las maniobras sindicales, a que el proletariado se viese por momentos como apéndice de los partidos, y por consiguiente de la burguesía con la que colaboraban.

Ningún teórico previno las asambleas de huelguistas ni su papel. Quienes pueden presumir de haber contribuido a su creación, no supieron sacarles todo el partido posible. La mayoría no hizo más que adaptarse al hecho consumado. Una vez batido el movimiento de las asambleas entraron en crisis las ideologías que se promocionaron en su ascenso -el consejismo, el cenetismo, los diversos asambleísmos-, y las organizaciones que se apoyaron en él con fines propios perdieron sus efectivos en menos tiempo que faltó para enrolarlos. La relación de la corriente seudoasambleísta -de los independientes, de los grupúsculos, los sindicalistas minoritarios- con las asambleas, no había sido nunca apasionada; era un matrimonio de conveniencia. Las necesitaban pero sin que pensasen compartir con ellas los días resplandecientes y los sombríos. Al suscribir la actitud antisindical de las asambleas no tomaban de ellas más que lo

que les convenía: la neutralización de los sindicatos mayoritarios, sus rivales. La finalidad de esta corriente sin principios, era asegurarse su existencia, y si para alcanzarla no rehuían la lucha asamblearia, en la elección de aliados y en su táctica no se dejaban llevar por el menor escrúpulo de principio. Su último intento de envergadura *la coordinadora de empresas en crisis de Vizcaya*, durante noviembre y diciembre del 77, se hundió porque las grandes centrales le negaron su ayuda. Estas esquivas características de estos aliados temporales de las asambleas tienen hondas raíces en el pasado histórico de la burocracia obrera. Necesitaban a las asambleas para entrar en las comisiones negociadoras, pero una vez dentro coqueteaban con los sindicatos que se servían de ellos para que las propuestas radicales no prosperasen en las asambleas, o tuviesen una mayoría insuficiente, lo que se traducía en una marcha de continuas indecisiones que permitían a los sindicatos el sabotaje cómodo de las huelgas. Asequibles a toda clase de tentaciones y sobornos, contentos de su miniexistencia, no veían que lo que los sindicatos mayores les daban con una mano se lo quitaban con la otra. Al pagar el precio de ser reconocidos como negociadores con la venta de las asambleas, incrementaban las prácticas comunes y las normas en vías de legalidad, encaminadas a combatir la acción asamblearia, la base única de su fuerza.

Una mención especial merece esa corriente ecléctica, llamada a sí misma *pro-autoorganización de la clase*, o *por la autonomía obrera*, desaparecida a mediados del año pasado, con las revistas en que se expresaba, *Lucha obrera, Emancipación, Negaciones, Palante, Teoría y Práctica*; no a causa de su importancia -nunca fue otra cosa que un puñado de grupúsculos- sino porque fue el único intento de construcción de una ideología asamblearia no sindical y porque su rápido fracaso, por encima de su mucha ineptitud, demuestra hasta qué punto los tiempos no permiten ya las ideologías revolucionaristas. Desde luego el proletariado no perdió nada perdiéndolos a ellos. Esta corriente se consideraba a sí misma como la expresión más avanzada del movimiento de las asambleas y no como un subproducto. Afirmando el punto de partida -la autoorganización- creían tener el final, y proclamando dos o tres generalidades seudocríticas sobre el movimiento obrero, flotando en un mar de confusiones, creían que ya habían expresado sus necesidades prácticas. Si repasamos toda esa rapsodia impresa en pésimo lenguaje, no nos asombraremos en descubrir que el fondo es digno de la forma, que lejos de resolver en sentido revolucionario cualquier cuestión teórica, recogían todos los tópicos y mentiras de la izquierda política: la unidad sindical, el nacionalismo, el feminismo, la ecología, el Tercer Mundo, los países «socialistas», etc., expuestos con ese tono heroico

del que sabe que interpreta los prejuicios vulgares de moda, o los mitos de la vieja burocracia. Toda esa literatura, confusionista y maniquea, era la expresión más acabada de ausencia de pensamiento crítico que jamás se encontró cerca de los medios obreros. Explotadores de todo lo que había de retardatario en las asambleas, se acomodaban con sus apariencias más tranquilizadoras (la negociación responsable, manifestaciones pacíficas, comunicados a la prensa, festivales de recogida de fondos, la autogestión...), tanto que se podía decir que lo que les acercaba a ellas eran sus defectos, de los que el proletariado debía alejarse. La definición misma que hacían del término «autonomía obrera» traicionaba las intenciones de su empleo. En un texto publicado por la más infame de todas esas revistas, *Emancipación*, (Interrogantes para una coordinación de los autonomistas, E. núm. 6, abril 78) se disipaban dudas sobre el filisteísmo autonomista y su grado móvil de contubernio con la burocracia política y sindical: «¿Quién es "verdadero autonomista" y quién no lo es? ¿cuál es el criterio que define los contornos del área de la autonomía obrera? Hay en efecto grupos autonomistas que en su día defendieron la entrada en Coordinación Democrática (...) hay grupos autonomistas que defienden la necesidad de construir un partido no sustituista -esto es, cuya relación con las masas sea cualitativamente distinta a la de los partidos clásicos- (...) hay grupos autonomistas que estando en contra de cualquier clase de partido defienden la necesidad de una vanguardia de nuevo tipo (...) hay grupos autonomistas que esperan que la CNT llegue a ser la organización de la clase (...) hay autonomistas que intentan trabajar desde USO o CCOO por la autonomía (...) pienso que lisa y llanamente todos ellos son autonomistas (...) autonomista es todo aquel que defiende -de palabra y de hecho- la retención por la clase de todos los poderes de discusión, decisión y gestión sobre los asuntos que le conciernen, sean de cualquier nivel (económico, político) en cualquier ámbito (estatal, local, de fábrica o barrio) y en cualquier etapa del proceso de liberación (desde ya hasta la mismísima extinción del Estado obrero). Para mí todo el que guía su práctica por ese criterio es autonomista, independientemente de que esté o no en partidos, vanguardias o antivanguardias, de que participe o no en Coordinación Democrática o en procesos electorales, de que espere o no convertir a algunos de los sindicatos existentes en la organización de clase.» Y así pues, la clase obrera puede conquistar su autonomía en condiciones que la destruyen, porque según la lógica de nuestro cretino la autonomía obrera no es incompatible con nada. Una opinión así sólo puede darla un burgués filántropo o un indecente burócrata. Tan pronto como esta seudoautonomía se volviese práctica aparecería como una aceptación de lo existente, y pondría

en evidencia su carácter reaccionario y su charlatanería. Los autonomistas, como tantos burócratas, confundieron al proletariado con su organización en un momento determinado; no veían en el proletariado sino el espectáculo del proletariado, por eso eran asambleístas. Pero las formas de organización proletarias son pasajeras y pueden abandonarse si no expresan de modo preciso las necesidades de la lucha de clases, o si el proletariado no es capaz de asumirlas. Del mismo modo que el agua no tiene forma estable, no existen en la guerra social condiciones permanentes que aseguren un determinado tipo de organización. Cuando las asambleas iban decayendo y el espectáculo debilitándose, la «unidad», o sea el espectáculo del proletariado, podía todavía mantenerse por la ayuda de los sindicatos, por eso se pronunciaban por «la unidad sindical». La confusión de origen les llevó a sobreestimar las posibilidades de los sindicatos minoritarios -sobretodo USO y CNT- y a creerse el asambleísmo de circunstancias de CCOO, que no era más que una concesión a la realidad de las luchas, que sería desechada tan pronto como éstas remitiesen. Su himno a las asambleas se volvió un himno a los sindicatos, en los cuales sin pena ni gloria se disolvieron la mayoría de sus efectivos. La escuela autonomista, que en origen no era más que la reedición con algunas aberraciones ideológicas de más, del obrerismo obtuso y apartidista de los años 70-75 (el de los GOA, las comisiones obreras autónomas, las plataformas anticapitalistas), muestra en su quiebra, el fin de la ideología asamblearia, el fin pues de todo modernismo edificado sobre la lucha de clases, por no proporcionar ésta cimiento sólido que mantenga siquiera por un tiempo sus castillos de arena.

2. DE LA CNT CONSIDERADA EN SUS RELACIONES CON EL PROLETARIADO.

«La troupe interpreta la pieza en escena: aquél hace de padre, ese otro de hijo, el tercero tiene nombre de rico. Pero cuando el libreto se cierra sobre sus papeles, su verdadero rostro reaparece, el falso desaparece.»
Petronio, Satiricón.

Es una peculiaridad de los periodos de fuerte tensión social, el que figuren al lado de los revolucionarios, personajes de otra naturaleza. Unos, supervivientes de revoluciones pasadas que conservan su devoción a las formas que representaron o se supone que representaron al movimiento obrero de una época ya caduca; otros, simples intrigantes fracasados en anteriores aventuras políticas que ven en la explotación de viejos mitos un medio de agenciarse

una reputación que les permita medrar, a la sombra de la confusión reinante; finalmente, una masa de charlatanes, fanáticos y seguidores de modas, que buscan esconder su insignificancia personal bajo el manto escénico de un «revival» heroico. En la medida que pueden, entorpecen la verdadera acción de la clase obrera; constituyen un mal inevitable, que con el tiempo se le quita de en medio. Y la clase obrera dispone de tiempo.

En el alumbramiento de la CNT repetida se ha citado toda esa antítesis grotesca de un pasado trágico, y como la comedia sucede a la tragedia, ese renacimiento no ha podido ser más que una parodia. La resurrección de los muertos pues, sirve en esta lucha a parodiar las revoluciones antiguas, no a concebir las nuevas, a poner en circulación el fantasma, no a encontrar su espíritu. Alejada de las luchas precedentes del proletariado, en las que no tomó parte siquiera como mistificación, la CNT ha debido conformarse en un papel de relleno, no estando en condiciones de apropiarse de una mayor porción de la representación alienada de los trabajadores.

Plantearse una crítica del anarcosindicalismo como una tarea pendiente de los revolucionarios de hoy equivale a querer pasar un ejercicio escolar por un trabajo teórico y, a falta de metal puro, vivir con moneda falsa. Tal crítica fue hecha en su tiempo por los revolucionarios de entonces, en el fragor de las batallas del primer asalto proletario contra la sociedad de clases, y la verdad de las luchas es fácil de descubrir dada la cantidad de material publicado al respecto que la rescataron de la falsificación que sufre en las revoluciones perdidas. Los libros de Munis, Morrow, Nin, Orwell, Molins, Bolloten, Richards, etc., son fáciles de obtener; las publicaciones radicales, El Amigo del Pueblo, Guerra di clase, Nosotros, La Batalla, Libertad, etc., son más o menos asequibles. Un nuevo estudio del proyecto revolucionario clásico en España, no tendrá nada que ver con la seudopolémica respecto a los sindicatos mantenida en el interior o en los alrededores de la CNT, no menos que con un deseo de erudición o con una actividad especializada tan cara a las revistas y editoriales del medio libertario, sino con el objetivo de servir a la formación del nuevo movimiento revolucionario, mediante un examen de la historia pasada que favorezca la comprensión de los signos que anuncian el retorno de la revolución social.

El sindicalismo, del que el anarcosindicalismo no sería hoy más que una variante ideológica, como lucha por la organización del mercado de la fuerza de trabajo, hace mucho tiempo que mostró su incapacidad en dar forma concretamente revolucionaria a la conciencia de los trabajadores; su papel ha sido juzgado por la historia. Hoy como retorno de la parte vencida del proyecto proletario es una fuerza doblemente reaccionaria, pero ha perdido su poder de

ilusión; queda menos criticarle que conocerle en sus menores detalles a fin de debilitarle, acecharle, encerrarle en sus contradicciones y finalmente batirle.

La CNT reconstituida, se ha debatido entre una agresividad oratoria, propia de todos los sindicatos minoritarios o una participación reducida, o sea sin peso en las decisiones, en las acciones y maniobras de los sindicatos mayoritarios. En la medida que pudo actuar como un sindicato, no se distinguió en nada del resto de ellos, y en cuanto a su asambleísmo, basta comprobar cómo varias veces asoció su postura a la de la UGT, el enemigo más declarado de las asambleas. Nadie puede tomar en serio las afirmaciones redentoristas de la CNT; no son hechos, «la más popular, la más poderosa y la más irresistible de las propagandas» (Bakunin), sino frases, desempolvadas de un pasado en el que la CNT se comprometió. La verdadera CNT murió entregada a desesperados esfuerzos por reconstruir un aparato sindical clandestino en la época terrorista del franquismo. Pero esa heroica e inútil muerte no la podrá aliviar de su responsabilidad histórica en la peor derrota que haya sufrido el proletariado ibérico, sólo comparable con la que sufrió el proletariado alemán a manos de la socialdemocracia, o el ruso durante la contrarrevolución de Lenin y Trotsky.

No fue la realización de la ideología cenetista -la extensión de su modelo sindical a toda la vida social- lo que condujo a la CNT a la burocracia y al Estado. La burocracia la creó un crecimiento rápido que originó necesidades de control del aparato a los viejos militantes, sus propietarios. Desde 1931 se desarrolló la lógica burocratizante en el seno de los sindicatos, y con ella una tendencia moderada, los *treintistas*, cuyos miembros fundadores ya habían roto el apoliticismo de la CNT colaborando con la burguesía republicana en la caída de la monarquía, deseosa de que la CNT tuviese la valentía de ser lo que era, como hubiera dicho Berstein y que abandonase los métodos «peliculeros» de la tendencia opuesta, los *faístas*. La escisión duró hasta la unificación del Congreso de Zaragoza, donde la ideología se reconciliaba con su realidad burocrática en una delimitación de competencias, no sin que los treintistas descontentos fundasen el Partido Sindicalista. Con el contraalzamiento proletario del 19 de julio, que impidió la negociación de los militares insurrectos con el gobierno republicano, la CNT, que ya había demostrado que la máxima intransigencia verbal puede ir acompañada de una gran propensión al compromiso, no se decidió a hacer progresar la revolución para ganar la guerra, y renunció a todo menos a sí misma, entrando en el gobierno de la burguesía republicana y de los socialistas «caballeristas», y colaborando en el desarme de los trabajadores. Efectivamente, la CNT disolvió o ayudó a disolver todos los organismos revolucionarios que los proletarios levantaron tras su victoria del

19 de julio a cambio de su participación en el Estado a todos los niveles. Así pues, desde sus puestos en el Gobierno republicano y en la Generalitat, votó a favor de cuantas medidas sirvieron a la burguesía y sus aliados estalinistas para arrebatar a los trabajadores sus conquistas: los decretos de disolución de todos los comités revolucionarios que surgieron el 19 de julio como emanación de las aspiraciones revolucionarias del proletariado (comités de milicianos, comités de gestión locales, etc.), el restablecimiento de la censura en la prensa, llevado hasta prohibir las críticas al régimen estalinista de la URSS; los decretos de desarme de los obreros en la retaguardia, el decreto que disolvía las patrullas de control y las milicias de la retaguardia; el reforzamiento de las fuerzas represivas en manos del gobierno como la policía, la guardia de asalto, la guardia nacional, los carabineros; para terminar disolviendo las milicias del frente en un ejército regular cuya dirección escapaba ya a la clase obrera. Consecuente con su política de colaboración de clases, tenía que parar la reacción de los proletarios con la política de hechos consumados, decidiendo la alta jerarquía sin consulta a la base en ningún momento, apartando a quienes se mostraban contrarios a esos métodos, silenciando en su prensa toda crítica de cualquier aspecto de esa política y toda información de las provocaciones policiales y estalinistas que alertasen a los trabajadores. Bajo un gobierno con participación anarquista, la policía y la GPU asesinaron a Berneri, Martínez y tantos otros, y centenares de militantes libertarios dieron con sus huesos en la cárcel. Una vez preparado el terreno, el golpe de gracia de la contrarrevolución no se hizo esperar, y cuando los trabajadores le hicieron frente en las barricadas de mayo del 37, la burocracia cenetista llamó al cese de la lucha y llegó hasta denunciar como provocadores a los militantes irreductibles (como la Agrupación de los Amigos de Durruti), lo que significaba entregarlos a la policía. Después de este último servicio, la burguesía y los estalinistas ya no tuvieron necesidad de la CNT para acabar con las colectividades, masacrar al POUM, y aplastar los focos postreros de resistencia obrera, preparando así la victoria de Franco.

El anarcosindicalismo en la nueva época democrática del capitalismo español no tiene ideales a realizar pero sí algo que vender. En principio, la CNT podía ser un contrapeso sindical a CCOO, presentable perfectamente por televisión o por Cambio 16; de ahí la inclinación a la UGT y la USO de los comienzos, cuando la tendencia puramente sindicalista, en la cual se hallaban viejos colaboradores del vertical, colocó a sus hombres -Edo, Gómez Casas- al frente de la organización. Pero para mostrar todas las apariencias de una organización implantada tuvo que abrirse a los estudiantes, que crearon los sindicatos de la enseñanza y oficios varios, e introdujeron los primeros modernismos. La cre-

ciente capacidad de convocatoria desplegó un poder de seducción hacia todos los burócratas errantes, hacia los grupúsculos obreristas aislados formados en las últimas luchas, hacia los izquierdistas defraudados; la CNT se convirtió en el vertedero de todos esos escombros. El caos funcional favorecía la independencia de las federaciones locales entre sí y aun entre los sindicatos de una misma localidad, y daba una gran libertad de acción *dentro de la solidaridad con la misma mentira*. Y mientras unos alegremente acariciaban la idea de crear una CNT modernista valiéndose de la confusión reinante y del descontrol del aparato, otros recomponían un servicio policial interno, irónicamente llamado «Fai» para poner la cosa en su sitio, es decir, cuarenta años atrás, a la vez que la idea de un sindicato reformista quedaba en minoría. La coexistencia pacífica entre las tendencias «históricas» y las modernistas duraría mientras las acciones de ambas siendo de corto alcance no se enfrentasen, y el «federalismo» -que así es como llamaban a la organización imperante- las aislase unas de otras. Se estaba colmando un vacío del espectáculo: el de la seudocontestación apolítica. La unidad que cimentaba la organización podía conseguirse a nivel ideológico sumario. Cada fracción reivindicaba su parte de ideología, sus mitos indiscutibles, y procuraba suavizar las tensiones internas y las contradicciones que refluían imposibles de ocultar. Funcionaban de alguna manera *asociadas*, defendiendo con igual fe la organización; pues si bien una organización revolucionaria debe poner deliberadamente en juego su existencia ante cada cuestión crucial para el movimiento obrero, una organización burocrática debe defender ante todo su existencia como tal. Pero la tregua imperante terminó cuando los choques interiores de intereses se convirtieron en una lucha por el control de los comités, por el poder, al adquirir fuerza suficiente conforme se tejían sólidamente los hilos burocráticos de la organización. Los viejos burócratas supervivientes resucitaban sus viejas posiciones como herederos que defienden la memoria de sus antepasados para hacer valer sus derechos a la herencia; para estos mártires de la tradición no había más tarea que reconstruir una CNT tradicional, que en la actualidad significaba una central sindical sin diferencia fundamental con las otras, y en eso confluían con las tendencias sindicalistas que se esforzaban en expresar la opinión del cenetista medio y afectaban ser sus fieles instrumentos: «La CNT es escenario de una lucha aún no resuelta entre quienes recogen la tradición, tratando de adaptarla, y los que quieren hacer borrón y cuenta nueva» dirá uno de ellos (Saida, 7-2-78). En Madrid, donde los modernistas tenían más fuerza -poseían prensa propia, en la que se ejercitaban los píndaros del asambleísmo sindical (*Bicicleta*) y los anarcojurisprudentes (*Punto y Aparte*)-, y las primeras elecciones internas les habían favorecido, la

lucha estalló primero, sorda en sus inicios, a gritos después. Cada tendencia se fortificó en los sindicatos que controlaba y comenzó a relegar en ellos a sus opositores. De las murmuraciones pasaron a las amenazas, y de ahí a las violencias y expulsiones. En un manifiesto de los modernistas madrileños que circuló el verano del 78 (*A todos los trabajadores, a todos los anarquistas*) se precisaba que «no hay solamente dos tendencias enfrentadas, hay varias tendencias que tienen como punto de convergencia el interés de que CNT se convierta en una organización reformista y burocrática, tendencias que manipulan la información constantemente y que aprovechan que sectores de la organización tratan de permanecer al margen (...) las diversas tendencias que en el interior de CNT, tratan de controlar el aparato y que van desde los sindicalistas puros, los cincopuntistas que no han dejado de hacer guiños al gobierno, "Solidaridad" que trata de recuperar a otras corrientes que hoy se manifiestan con fuerza en CNT, pasando por los "faistas" y los "anarcoestalinistas"...»

Las tendencias sindicalistas deseaban una central sindical de masas amorfas, dominada por una burocracia estable y segura que se repartiera más o menos democráticamente los cargos y puestos responsables, y controlase las modalidades de pensamiento y discusión de la ideología, abasteciendo interpretaciones autorizadas, diligentemente creadas por especialistas de confianza. Como sindicalistas, eran enemigos de toda forma de expresión directa de los trabajadores, y en primer lugar de las asambleas. Y por reacción enemigos de las innovaciones heterodoxas, sobretodo de los tópicos modernistas: el feminismo, el ecologismo, etc.; en consecuencia las consideraban ajenas a la CNT, y a sus portadores intrusos cuyo poder en la organización les exasperaba. La vieja cornucopia Peiró llegó a definirlos como un «aluvión de individuos que durante las horas difíciles habían brillado por su ausencia, y que tránsfugas del maoismo, guevarismo, castrismo, anarcoleninismo, marxismoleninismo, folklorismo anarquista y otras hierbas que ni Dios sabe dónde plantan sus raices, haciendo irrupción en la CNT con la desmedida pretensión de imponer sus exóticas concepciones revolucionarias... un puñado de insensatos que tras haberse adueñado del templo, lo han convertido en un campo de Agramante».

Los modernistas representan en la vieja religión cenetista una suerte de protestantismo. Más cerca de las luchas obreras presentes, eran partidarios de un sindicalismo de apoyo a las asambleas, frente a sus opositores que más cerca de las maniobras sindicales del momento, eran partidarios de un asambleísmo de apoyo a los sindicatos. Pero ninguna tendencia era más reaccionaria que la otra. Los modernistas aplaudían todas las mistificaciones retrógradas por poco que fuesen revestidas de un ropaje novedoso y seudocontestatario, como por

ejemplo el nacionalismo. No se trataba de poner en causa la mentira sino de la manera de mentir. La inclinación de la balanza en esa lucha de camarillas obedecería en todo caso a quien supiera sacar más partido de la masa de afiliados indiferentes. Y con el fin del movimiento de asambleas, los modernistas habían terminado como tendencia burocrática ascendente. Al ganar la mano en las fábricas los sindicatos a las asambleas, se decidía indirectamente la línea que finalmente dominaría en la CNT. En efecto, los cenetistas entraban en las comisiones negociadoras sindicales con mayor facilidad, desde luego, que cuando entraron en el gobierno republicano, pese a las protestas fariseas de algunos disconformes: «CNT no puede hablar de la asamblea como órgano decisorio cuando por otra parte está apoyando comités intersindicales con las burocracias reformistas y por qué no verticalistas, salidas de las elecciones sindicales» (Solidaridad Obrera, Mayo 78). El centro de gravedad de la CNT se desplazó a Barcelona, donde con pragmatismo administrativo se impuso por encima de las tendencias una solidaridad de aparato que guardase de la publicidad las disensiones. La posible escisión quedaba soslayada en el alejamiento *sine die* de la celebración del congreso nacional. De todos modos la actitud sindical a seguir no podía ser otra que la que llevaban las demás centrales contra la autonomía de los trabajadores, encaminada a mantener el protagonismo de los sindicatos. En el dictamen sobre estrategia sindical elaborado en la 1ª sesión del pleno nacional de regionales queda fijado que «debemos potenciar la asamblea de trabajadores en los centros de producción y en los ramos, siempre que de ellas no surjan organismos cuyas actividades sean las que les deben corresponder a los sindicatos... (...) en caso de conflicto en la empresa, en asamblea de centro y a mano alzada se elegirá un comité de huelga, al que se incorporará un miembro por cada sindicato presente en la factoría, el sindicato que lo desee. A partir de ese momento, será el comité de huelga al que corresponderán todas las tareas técnicas de preparación y extensión del conflicto en colaboración estrecha con las centrales sindicales».

De modo general el anarcosindicalismo de la CNT se reduce a un sindicalismo de burócratas disfrazado con frases ideales. No altera la cosa en sí pero idealiza su expresión. Es precisamente su fraseología hueca lo que le lleva a ignorar los límites reales de su sindicalismo y a codiciar pretensiones fantásticas. ¿Cómo el cenetista va a poder ver en sus sindicatos, vulgares sindicatos? El idealismo, la ideología le obstaculiza la visión. Pero este idealismo vacío, sentimental y liviano tras el que se esconde un mezquino patriotismo de partido, alcanzó el momento en que necesariamente tenía que traicionar su secreto. Ahora bien al modo «libertario». Con un pudor casi cristiano. Niega la burocracia al mismo

tiempo que la constituye. Y antes de asumir la práctica burocrática la enmascara de frases ideales. El burócrata cenetista es ideólogo antes que burócrata. Tiene miedo de explicarse de las cosas demasiado perversas que suceden en los aparatos; los trapos sucios se quedan en casa. Se cansa de que le hablen de asambleas porque ponen en cuestión sus castillos de naipes; Sebas, el prototipo más acabado de filisteo libertario, dirá ingenuamente: «Si nos cuestionamos el que los sindicatos sirvan para la negociación, debemos cuestionar la razón de ser de las secciones sindicales y los otros órganos sindicales. La asamblea cubre el espacio de la unidad de acción, pero hay que defender la estructura del sindicato como organización de lucha» («CNT» 17 agosto 78). Teme hablar del interés privado de la CNT y habla del peligro del asambleísmo porque efectivamente en él peligra: «Si los sindicatos no sirven, habría que buscar otra forma de organización que podría ser el asambleísmo, pero esto me parece muy peligroso» (ibid.), dirá el bonzo Marcos. Reparemos en el cinismo franco y abierto, clásico, con el que las burocracias socialdemócratas y estalinistas edificaron sus aparatos y combaten las asambleas, y comparémoslo con el comportamiento del burócrata cenetista que se pone hipócritamente triste con «el reformismo» e intenta hacer creer que el sindicato cambia de naturaleza cuando su personal muda de piel, por el método sencillo de negar la contradicción con una afirmación contradictoria: «No existe ninguna contradicción entre el fomento de secciones sindicales y el fomento del asambleísmo. No sólo no hay ninguna contradicción sino que ambos conceptos son complementarios. Las secciones sindicales cenetistas deben ser un instrumento básico para promover asambleas generales unitarias y decisorias» («CNT», 16 julio 78). La burocracia clásica habla en prosa y la cenetista en verso. Si el filisteo libertario quiere labrarse un futuro prestigioso en la sociedad del espectáculo tiene que justificarse con una ideología que dignifique sus aspiraciones. Los burócratas clásicos combaten las aspiraciones revolucionarias de los trabajadores porque ese es su trabajo en esta sociedad de clases y asi lo admiten. Pero el burócrata cenetista necesita una interpretación espiritual de esa función. Su sindicalismo nada tiene que ver con el sindicalismo profano de los estalinistas y socialdemócratas. Sin embargo, lo que hace la CNT no es más que lo que hacen sin frases CCOO, CSUT, USO o UGT. Nunca le pasará por la mente que no hay otro tipo de sindicalismo que el que hay ¿son culpables CCOO o UGT por no embellecer literariamente su práctica? Los cenetistas dejan la realidad tal como está y alteran simplemente su expresión. Y como buenos burócratas no critican una práctica reaccionaria, el sindicalismo; critican la falta de ideología de esa práctica, censurando a los burócratas de las otras centrales por ser como son, por expresar su propio ser sin cubrirlo.

La CNT ha llegado a la escena de la lucha de clases *post festum*. Sobre su mísera realidad no puede acrecentar más que sus ilusiones y su verborrea. Su misma ideología admite difícilmente nuevos desarrollos, es demasiado conservadora del pasado. Y tampoco le es dado progresar burocráticamente puesto que el desarrollo de la burocracia obrera está casi concluido en España. Así la CNT conocerá su decadencia sin haber llegado nunca a ver sus días de esplendor.

Si hubiese hecho falta una prueba del nueve del sindicalismo de pacotilla de la CNT, ésta hubiera sido proporcionada por la huelga de las gasolineras de la provincia de Barcelona, en septiembre. Ahí dio una justa medida de sí misma, perdiendo estrepitosamente en un juego protegido sólo con faroles. Ese ha solido ser el fin de los fanfarrones que de ordinario vienen a fracasar donde creyeron que habían de encontrar el triunfo.

Como los recuperadores no conciben los conflictos sino espectacularmente, la huelga fue anunciada a los cuatro vientos como si quisiesen convercerse de que bastaría tocar la trompeta para derrumbar las murallas de Jericó. Se esperaba que la huelga lanzase a la CNT como sindical responsable y negociadora, a la vez que defendiese su espacio en el sector, que había sido ocupado por CCOO y UGT al firmar un convenio nacional que caducaba el provincial firmado por CNT. Pero la huelga no era sólo una cuestión de prestigio sindical. Era una cuestión de supervivencia. La CNT quería hacer olvidar su dudosa actuación en la pasada huelga de transportes y distraer la atención de sus militantes de los enfrentamientos internos que la desgarraban. Siendo las consecuencias de la huelga bastante importantes, era de prever la militarización del servicio. No sólo lo recordaban pasadas huelgas como las de Renfe, Correos y Metro de Madrid, EMT, o la de los basureros de Cádiz, o la huelga de los Transportes Urbanos de Huelva que tenía lugar en esos momentos, sino ya el propio anuncio del Gobierno Civil. Para rebasar ese obstáculo en tiempos anteriores de la lucha de clases, los obreros recurrían a la más eficaz práctica del *sabotaje* y sus variantes. Pero para el sindicalismo palabrero de la CNT que quería una huelga simpática a la opinión pública, no había lugar más que para las fanfarronadas; y mientras decía que respondería «a nivel nacional con todos los medios a su alcance», no ponía siquiera sólo en Barcelona a su alcance ningún medio. La huelga estuvo perdida antes de empezar. Podían decir con un optimismo de fachada el primer día que «la huelga es un éxito total», mientras que los empresarios gracias a la policía y a Campsa garantizaban el perfecto funcionamiento del suministro de combustible. A fuerza de ser señalada como un peligro por la prensa, de oír a sus barítonos emitiendo grandes frases para deslumbrar, la CNT había perdido toda la noción de las cosas, cegándose con sus cohetes de feria. «Lo realmente peligroso, volátil, inflamable y

preñado de riesgos es más bien la CNT; que eviten por favor jugar con ella» decía el editorial de Solidaridad Obrera (7-9-78). No obstante, las amenazas de estos sindicalistas de pega sólo eran intentos de intimidar al adversario, y cuando se vieron metidos en el atolladero tanto como para verse obligados a ejecutar sus amenazas, lo hicieron de modo equívoco, evitando sobretodo los medios que llevaban al fin propuesto y buscando pretextos de derrota. Tan pronto como había que romper el juego, la estrepitosa obertura que anunció la lucha se perdió en un pusilánime refunfuñar, se les dejó de tomar en serio y la huelga se derrumbó lamentablemente, como un globo pinchado por una aguja. A una vulgar detención de unas horas, se le llamó «intento de desmantelamiento de la central», y siguiendo con la misma ridícula demagogia llamaban a «las autoridades» a que presionasen a la patronal o a las centrales grandes a que «se replanteen el caso» ante una posible «radicalización» que ellos mismos ni creían ni querían. Y esa huelga que un increíble cretino desde las páginas de la «Soli» atribuía «unas posibilidades extraordinarias con respecto a la crítica del consumo-despilfarro de energía, del automóvil y de la mercantil sociedad... idónea para arremeter contra todos: capital, Estado, aparatos represivos, organizaciones reformistas... y contra todo: capitalismo, autoridad, represión, consumo...» (20-9-78) no buscaba más medios de salir airosa que «una actuación pacífica de los trabajadores» o una denuncia de la Administración a la OIT. Comprendiéndolo todo espectacularmente, a base de carteles y comunicados a la prensa, se dirigían a un proletariado espectador pidiéndole una solidaridad abstracta. Y menos al proletariado que a su representación alienada, los partidos y sindicatos. Mal instruidos sobre la técnica de una huelga de servicios públicos, pretendían desordenar la circulación y seguir en la legalidad. Y en lugar de actuar rápidamente se contentaban con la minivictoria del primer día. Los empresarios comprendieron que si la huelga no triunfó durante los primeros días, su fuerza iría decreciendo, y si los huelguistas ocultaban tan mal sus deseos de negociar, era porque no tenían confianza en su éxito. Por lo tanto podían negarse a negociar cómodamente, mientras la CNT se aferraba a ese recurso que es el expediente normal de los débiles: lamentarse. A los veinte días, pese a las cifras imaginarias dadas por el comité de huelga, la huelga no era más que un desorden de vencidos.

Felizmente no han decepcionado a nadie porque nadie tenía ilusiones salvo ellos. El proletariado asiste con la mayor indiferencia (sólo los estudiantes y los periodistas se apasionan en esto) a la descomposición asintótica del montaje cenetista. Ya no hay lugar en el mundo para la ideología revolucionarista, por muy descompuesta que sea. Los proletarios no tienen necesidad de educadores ni de apoyos sindicalistas. Estos pretendidos representantes del proletariado no

han representado más que sus derrotas. Su función es organizar *el espectáculo de la lucha de clases*, a fin de disimular el aspecto verdadero de la misma, que donde se halla, como en las huelgas asamblearias, está también contra ellos.

3. SINDICATOS Y CONTRARREVOLUCIÓN.

> *«Todas las veces en que uno se encuentra o empobrecido por su victoria o debilitado por sus conquistas, ha rebasado su objetivo o no lo ha alcanzado.»*
>
> Maquiavelo, Historias Florentinas.

En todas las épocas, los más moderados han sido siempre los menos realistas. Incluso desde el punto de vista del realismo dominante, es decir, de la conciencia sumisa a la realidad dominante, lo que de otro modo debiera expresarse en prioridad llega para los dirigentes como sorpresa: «Las centrales sindicales están en estos momentos preocupadas por sus índices de afiliación que prácticamente se encuentran en el punto cero. En el congreso de CCOO se habló incluso de que la afiliación a ese sindicato descendía». En los congresos de UGT y CCOO se reconocía con asombro que más de un tercio de afiliados no pagaba las cuotas y oficiosamente se afirmaba que sólo una minoría las pagaba regularmente (Cambio 16, 23-7-78). Para la clase dominante vale más que toda oposición quede canalizada en los partidos y sindicatos, pero el mal consiste en que estos no pueden ejercer su función sin mostrar lo que son. «Es como si los sindicatos fuesen una cosa y los trabajadores otra» decía un estalinista de base a Cambio 16 (9-7-78) comentando el abandono de CCOO de sus tintes asamblearios. La burocracia político-sindical necesitaba movilizar tanta energía colectiva para mantener la correlación de fuerzas contra los obreros en su sitio, que cuando se mostraba cruelmente la importancia real de la desproporción entre los esfuerzos realizados y los resultados obtenidos, actuaba como una sorpresa desmoralizadora sobre los burócratas de base y como un factor de descrédito ante la patronal. Esta desagradable proporción no podía ser atenuada por una amplificación artificial de la mitología de los resultados esperados llevada a proporciones que correspondiesen a la suma de esfuerzos desplegados. Es más, esta deformación de la realidad, observada desde donde se observase, tenía un aspecto irreal imposible de esconder, y el pesimismo de sus autores llamando a la austeridad y a la paciencia lo aumentaba en lugar de reducirlo. La patronal terminaba comprendiendo: «En los momentos actuales los empresarios españoles tenemos la sensación generalizada de no disponer de organizaciones obreras suficientemente sedimentadas y con capacidad de compromiso y diálogo para abordar la creación de un nuevo

marco de relaciones laborales» (Vicente Castellano, dirigente de la CEOE, El País, 20-6-78). Los obreros no estaban dormidos. No se podían cambiar fácilmente las costumbres adquiridas durante los dos años precedentes. Y lo que es peor, no se puede crear en ellos un estado de ebriedad y aturdimiento excitándoles con peligros imaginarios mientras se preparan nuevos condicionamientos de esclavitud social. Se conoce ya, aunque se subestime, la corrupción de sindicatos y partidos, la influencia que sobre ellos tiene la burguesía, el espíritu reaccionario de sus jefes, la mentalidad y los intereses de la burocracia sindical y política, contrapuestos en todos a los obreros. Si los obreros no desarrollaban una nueva ofensiva era menos debido a la habilidad de los sindicatos que a las propias deficiencias suyas; la importancia de los sindicatos era muy relativa, si figuraban algo era debido a que el poder dominante tenía todo el interés en presentarlos como protagonistas «con capacidad de compromiso», o sea dispuestos a comprometerse, y el espíritu general de indiferencia les permitía figurar, sin que eso fuese una garantía segura de su prestigio. Si el mayor logro de los sindicatos, el detener el movimiento de huelgas, se observase más de cerca, se vería su valor real. La afiliación descendía rápidamente. CCOO, por ejemplo, hizo llamamientos para que los obreros no abandonasen la central. Las horas perdidas por absentismo alcanzaban un número mayor de veinte veces las horas perdidas por huelgas. «La disciplina laboral» daba paso a la insubordinación y al sabotaje. Las huelgas antisindicales continuaron.

Es más fácil lograr el orden en las fábricas que guardarlo. Porque una cosa depende de la fuerza o debilidad de los obreros en ese instante, y la otra necesita de un gran poder o influencia de los sindicatos, poder que no tienen puesto que si bien los obreros habían sido derrotados, no estaban sometidos. En muchas fábricas se habían defendido de las elecciones sindicales, eligiendo en asambleas a sus propios delegados revocables. Los huelguistas de Bimbo (Madrid) llegaron hasta hacerlos reconocer como «consejo obrero» por la patronal. Por ello, las primeras huelgas después de las elecciones seguían siendo en gran parte asamblearias y radicales: la del metal de Málaga, la de la construcción de Badajoz, la de los pescadores de Cádiz y Algeciras, la de la cuenca minera del Bierzo, donde los sindicatos no pudieron convencer a los mineros de esperar al convenio, la de Ascón en Vigo... A unas la falta de reacción agresiva ante las maniobras antihuelga de los sindicatos acarreaba el fracaso: en Barcelona, la huelga del transporte de Mercancías es rota por el acuerdo unilateral de CCOO, UGT y SU con la patronal a pesar de que la asamblea decidió continuar; idénticamente la de Artes Gráficas que por sufrir «un proceso de radicalización», según un comunicado de CCOO, se vería vendida y entregada en pleno auge. Y en otras el fracaso acarreaba una reac-

ción agresiva: al desconvocar la huelga del metal en Guipúzcoa, los trabajadores metalúrgicos organizaron una manifestación en Eibar como protesta asaltando y destrozando los locales de CCOO, UGT y del PSOE. Cientos de afiliados rompieron sus carnets y al día siguiente los hechos se repitieron en San Sebastián.

Frente a las asambleas que por su dinámica tienden a desencadenar la lucha de clases, los sindicatos por su naturaleza tienden a que la lucha de clases no se desencadene nunca. Su valor se mide por su capacidad de contraer pactos con los empresarios y de disciplinar a los trabajadores. Su tarea, despojada de todo idealismo, consiste en vender la fuerza de trabajo en tanto que mercancía, a su precio de venta del momento, fijado siempre con relación al coste de supervivencia, más o menos ancho según la presión de los patronos. Actúan basándose en las reglas de explotación capitalista, siguiendo las oscilaciones del mercado. Su papel no es otro que consolidar la ley del trabajo asalariado en el régimen capitalista y asegurar un mercado de salarios estable. Son un instrumento del orden capitalista y su porvenir está ligado a este orden. Por eso combaten todo lo que pueda ponerlo en peligro.

Los acuerdos que reposan en el estado de tranquilidad de los trabajadores no pueden darse mucho tiempo por seguros, pues no hay clase más variable y predispuesta a agitarse, y una vez en acción lo muy cierto es dudoso, cuanto más lo que está en duda. ¡Qué esfuerzo espera a quien los hace! El mes de mayo la paz sindical se fue complicando seriamente a causa del estrecho marco de movimientos que daba el pacto social al clero sindicalista. A mediados de mes había 800.000 huelguistas. Chaves, un funcionario de UGT, declaraba: «Las centrales nos empezamos a sentir impotentes ante la falta de concreción de las contrapartidas de los pactos de la Moncloa, y ante la imposibilidad de ofrecer en las fábricas una ley de negociación colectiva que se ajuste a la realidad y que sirva para canalizar y facilitar un diálogo fluido. Los empresarios y el Gobierno, en vez de facilitar esos cauces de diálogo, los están dificultando, por lo que las centrales no pueden seguir pidiendo una moderación justificada» (La Vanguardia, 28-5-78). De cómo cumplieron su cometido arriesgándose contra los obreros, deja constancia el agradecimiento posterior de su labor por el vicepresidente Abril: «Los sindicatos se jugaron la cara en aquellas negociaciones y hay que reconocerles el mérito» (El País, 14-9-78).

A todas las huelgas, CCOO y UGT a poco que la voluntad de seguirlas se afirmase en las asambleas, las desconvocaban y hacían llamamientos a la vuelta al trabajo mientras negociaban secretamente con la patronal, a veces llegando a poner en evidencia a sus propios representantes en los comités de huelga. Los comités de huelga con representación sindical proporcionada eran la baza

de los sindicatos menores, el único modo que contaban para ejercitarse. Normalmente se asociaban a UGT y CCOO en las firmas capituladoras de convenios y en la liquidación de las huelgas, sobretodo si tenían escasa implantación en el sector afectado, dándose por satisfechos por permitírseles figurar, pero si se consideraban con más derechos de representación que los ofrecidos, o si conseguían influir en los comités en detrimento de las centrales mayores, eran dejados de lado. Entonces, lejos de intentar prolongar las huelgas, acababan elegantemente, pronunciando frases de indignación estudiada contra los sindicatos mayores y adoptando poses de resignación. No se apercibían que la política de frases y fotogenia había sido liquidada por la época y que mientras los obreros rompían sus carnets *para no volver a afiliarse*, ellos se quedaban como lo que eran, unos sindicatos de segunda fila. Un típico ejemplo de su actuación lo fue la huelga del transporte de mercancías de Barcelona. Tras la firma del convenio que vendió la huelga, CNT y CSUT protestaron porque no se contó con ellos en la firma siendo que «tenían representación en el comité de huelga», para finalizar adhiriéndose a la posición liquidadora con pretextos fútiles: «No hay fuerzas suficientes para continuar», «para evitar la división entre los trabajadores que habían luchado juntos días atrás». Habiendo participado en los tinglados intersindicales, en el alejamiento de la decisión de las asambleas, los sindicatos menores no participaban en el reconocimiento general de la patronal; su destino era colaborar en la derrota de los trabajadores y ser derrotados con ellos. Con el cierre de la entrada a las negociaciones a las centrales que no alcanzasen un 10% de afiliados en el sector, según la ley sindical, quedarán *de jure* lo que ya eran de hecho: desplazados y relegados.

Los sindicatos buscaban un tipo de conflictividad domesticada. Preparaban el terreno con una falta de información y de agitación adecuadas, a la vez que formaban una mesa sindical que podía contar con la participación de las centrales pequeñas, aunque invariablemente se aceptaban las propuestas de UGT y CCOO. Las centrales menores facilitaban el avance de las grandes cubriéndoles el flanco. Si la patronal no accedía a negociar, todas las reivindicaciones se abandonaban salvo la de los salarios. En una asamblea de delegados sindicales celebrada en horas de trabajo y en la que se prohibía la entrada a los trabajadores -a veces, como en el ramo de construcción de Barcelona, hasta a los delegados de obra- se decidía una jornada, o unas horas de paro. Evidentemente no se conseguía nada y los trabajadores renunciaban a seguir cualquier acción de los sindicatos, con lo que estos firmaban el convenio con las ofertas patronales iniciales. La política de los sindicatos, que bajo la presión de los trabajadores habían tenido que acceder a la continuidad de los comités de

huelga, procuraba su eliminación donde tenían poder, como ya hicieron con el poder de las asambleas. La apropiación burocrática de la decisión necesita el control absoluto de la maniobra. Para que a los obreros les faltase la posibilidad de tomar disposiciones y mucho menos de imponerlas, UGT y CCOO tenían que suprimir la posibilidad de que los sindicatos menores sufriesen la tentación de apelar a las asambleas para hacer valer sus pretensiones frente a ellos, y hacerse los intérpretes de la voluntad de los obreros, con lo que reabrirían una brecha por las que las asambleas terminarían imponiéndose a unos y a otros.

No obstante, las huelgas que escapaban al modelo sindical siguieron produciéndose. En mayo, la huelga de los estibadores canarios, la de la hostelería de la Costa del Sol, la de Riotinto Patiño (Huelva), la de los panaderos de Álava... En Cádiz era necesaria la militarización del servicio de basuras para poner fin a la huelga de recogedores; los mineros de Utrillas (Teruel) y los albañiles murcianos se enfrentaban a los sindicatos. Los mineros de Minas de Figaredo amenazaban con quemar ropas y coches de los miembros de UGT si entraban a efectuar los trabajos de conservación, mientras la asamblea rechazaba los acuerdos del comité de huelga, compuesto por afiliados a UGT y CCOO, de volver a la mina, de acuerdo con el ministerio de trabajo. Los impulsos eran lo bastante fuertes como para que los sindicatos se decidieran a neutralizarlos con jornadas de acción, como la del día 18 en Cataluña, cuando pararon casi un millón de trabajadores del textil, metal, construcción y hostelería, y se concentraron en Barcelona 300.000 obreros. Sin embargo los sindicatos no aprovecharon la ocasión en su escaramuza con la patronal por la cuestión de los anteproyectos de la ley de Acción Sindical. En el de la UGT se proscribían las asambleas, en el de los empresarios, que no querían que la victoria sobre los obreros se efectuase a su costa, se anulaba la acción y la influencia de las secciones sindicales. Los sindicatos llamaron los días 22 y 23 a jornadas de encierro de los delegados de empresa, excluyendo a los trabajadores de ellas; el fracaso estrepitoso precedió la aprobación del texto de la patronal. Habían preferido perder ante ella a ser desbordados por los trabajadores. De aquella ya saldría una nueva ocasión de cobrar los servicios prestados, de los otros había que guardarse siempre. En los movimientos tumultuosos de huelguistas nadie es jefe, y allí, una vez la autoridad de los dirigentes despreciada, no hay nada capaz de restablecerla.

En junio y julio las grandes huelgas continúan hasta culminar con la huelga general del País Vasco, donde el Gobierno vivió «sus horas más difíciles desde junio del 77» en palabras de Martín Villa: la de los panaderos de Navarra, madera y corcho de Málaga, los transportes urbanos de Gijón, los obreros del campo de Cádiz, los asistentes sociales, el metal de Asturias y Santander,

Firestone (Torrelavega y País Vasco), el metal de Sevilla donde las barricadas y enfrentamientos de los metalúrgicos con la policía obligaron a los estados mayores de la esclavitud asalariada a enviar a sus jefes, Camacho y Redondo para forzar el pacto con la Federación de Empresarios del Metal que le puso fin... Las huelgas más largas del año, y de los últimos años, Minas de Figaredo y Ascón, vienen a demostrar por las movilizaciones repetidas contra los sindicatos que una contrahuelga fallida puede resultar tan desastrosa para la burocracia como una huelga fracasada para el proletariado.

Por regla general, dado el carácter burocrático de la representación obrera consolidado en 1978, y por lo tanto la ausencia de objetivos de clase, los obreros no se apoderan de la dirección de sus huelgas salvo si la espontaneidad es superior a la organización en ellas. Esto no remedia la confusión en torno a su orientación general, la conciencia de fines y medios es menos clara; el movimiento huelguista obedece a un determinismo económico casi directo; las vacilaciones, los retrasos, los tanteos consecuentes hacen surgir toda clase de obstáculos. Un adversario inferior, como la burocracia político-sindical, pero dotado de una clara conciencia política de la finalidad que persigue y sin escrúpulos en proveerse de medios que le sirvan, puede tener a raya, y ha tenido a raya la radicalización necesaria para que los obreros rebasen el aislamiento a que les somete la supervivencia. Es ya un axioma que la pérdida de la decisión es consiguiente a la de la combatividad. Los obreros en tal situación tienden a ser pusilánimes, no son capaces de abrazar grandes proyectos. Harto conocido es esto por la burocracia, la cual, prevaliéndose de su debilidad, no perdona un medio de acobardarlos y envilecerlos. Le interesa mantener el subdesarrollo en el medio obrero, su ignorancia, su embrutecimiento, sus temores, por la sencilla razón de que no lo puede dirigir ni manipular de otra manera. Todo lo que provocase un enriquecimiento de las relaciones sociales -una huelga radical, por ejemplo- socava los cimientos sobre los que está construida la burocracia; por eso es la principal enemiga de las huelgas. Los obreros no pueden emprender nada sin oponerse enseguida a la burocracia. Si se limitan a condenar los hechos y no hacer sentir su fuerza en el pellejo de los burócratas, tomando ejemplo de los metalúrgicos de Eibar, si no muestran capacidad alguna para acciones decididas, las consecuencias para su autonomía, para su misma situación material inmediata, serán nefastas. Sólo la guerra contra la burocracia, y la autodirección de las luchas puede evitarlas.

Uno de los motivos de deficiencias de las luchas ha sido la pérdida del control absoluto de ese punto especial de contacto con el enemigo, que son las negociaciones, bien ocupado por los sindicatos.

La composición de las comisiones negociadoras ha reflejado el papel que han jugado los sindicatos en la disolución del movimiento de huelgas asamblearias. Si los obreros limitan su campo de acción y el ámbito de sus derechos, cediéndolos al comité de huelga, se impiden el asumir en cualquier momento y en todo su alcance las funciones directrices y ejecutivas. No hay ninguna razón que justifique que la comisión o el comité negociador hagan lo que una asamblea general puede hacer ella misma. De esa forma se puede llegar a situaciones aberrantes como la de los huelguistas del comercio del metal de Barcelona, que mientras interceptaban y hacían público un acuerdo secreto de las centrales y la patronal para la firma del convenio, hacían responsables a los sindicatos de la formación de piquetes. Aun un comité de huelga controlado por las asambleas como el de Ascón, con mayoría de componentes de USO, no sirvió más que para paralizar la acción en un círculo vicioso, dejando pasar todas las oportunidades, sin resolverse a llegar a las últimas consecuencias ni a desaparecer de escena, sin saber ni escoger ni aceptar, ni vivir ni morir, prolongando inútilmente las gestiones en pro de la negociación que la dirección de los astilleros alargaba a fin de conseguir que el poder de la asamblea se desvaneciese y no tuviese fuerza para imponer sus propios acuerdos, con lo que dejaría de existir de hecho y la dirección impondría los sindicatos de sus preferencias, UGT y CCOO, más plegados a sus exigencias.

Una comisión negociadora controlada por los sindicatos es un poder dentro de otro. Y «si en las asambleas existe dualidad de poderes, tal ambigüedad de no resolverse se vuelve tarde o temprano contra los proletarios» (*Miseria del sindicalismo**, folleto de Autonomía Proletaria). Sólo acabando con esa ambigüedad las asambleas pueden pasar a ser *armas ofensivas*, las que el proletariado necesita en las condiciones actuales para no caer en la perspectiva de la clase dominante y desarrollar la lucha de clases.

4. LA CUESTIÓN VASCA.

«Lo mismo que el pequeño comercio subsiste en el interior del gran capital, persisten los provincialismos, vestigios de antiguas ideas y costumbres de antaño.»
Pannekoek, Consejos Obreros.

El desarrollo económico y las crisis que van con él, incrementando las distancias entre la pequeña y la gran burguesía, han puesto en peligro la base so-

* Reeditado por la editorial ***Klinamen***, Madrid 2003.

cial local del poder, sometido a movimientos centrífugos a través de los cuales tratan las clases medias de conservar sus posiciones. La política gubernamental de *preautonomías* es un intento de restaurar la comunicación entre el centro político de la burguesía y su periferia económica antes de que la protesta de la mesocracia, insatisfecha políticamente y agobiada por la crisis, se radicalice y se superponga a la lucha de clases, y adopte las ideologías regionalistas que el sentimentalismo de los intelectuales subempleados de comarca no dejan de fabricar para su uso. Las clases medias se encuentran atenazadas entre sus intereses y las condiciones que el gran capital les impone. Quieren participar en el juego económico pero en él son las más débiles, se oponen a la burguesía pero se oponen aún más a la lucha de clases porque son sus primeras víctimas. Por un lado aspiran a ocupar puestos más elevados en el seno de la clase dominante, por el otro se quejan de las miserias que produce el sistema. Quieren el capitalismo sin sus efectos. Y si son exasperadas pueden llegar a querer la revolución sin sus consecuencias. No siendo ya una base social lo bastante fuerte como para sostener un gobierno por encima de los antagonismos sociales, son relegadas en su terruño. Y si la oposición política oficial no consigue recuperar sus tribulaciones, ofreciendo puestos destacados a sus representantes e incluyendo en sus programas sus pamplinas, pueden generar formaciones políticas regionales que defiendan a nivel local sus intereses, recubiertos con una ideología fabricada con distingos puramente exteriores, como la lengua regional, la geografía, el folklore... El sentimiento regionalista corresponde a la nueva manera de ver la situación de esas clases: la región está por encima de individuos y clases, y los intereses de la región son los intereses económicos de las clases medias regionalistas: exenciones fiscales, descentralización administrativa, créditos, inversiones; pero como en toda ideología, estos deben ser disimulados bajo las apariencias de un beneficio general. Pueden venir en ayuda de sus argumentos viejas tradiciones que resultaron de condiciones sociales antiguas. Una historia coloreada y mentirosa puede transformar la estricta verdad en una imagen rutilante y parcial de la vida de la región, propia a despertar entusiasmos juveniles. Sin embargo no hay que reducir el regionalismo, o su versión extrema, el nacionalismo, a una doctrina artificial que tratan de imponer las clases medias. Fluye de las necesidades de éstas, y de su realidad local, así como del modo en que se han formulado a través de la historia esas necesidades.

Un clásico de la revolución proletaria escribía en la *Nueva Gaceta Renana*: «Todos los países de Europa sin excepción poseen en uno de sus extremos, uno o varios fragmentos de pueblo, supervivencia de una vieja población local,

reprimida y sojuzgada por la nación que devino más tarde el vehículo del progreso histórico. Estos restos de una nacionalidad despiadadamente pisoteada por el desarrollo histórico -estos *desechos de pueblo* según la expresión de Hegel- devienen cada vez los vehículos fanáticos de la contrarrevolución, y lo siguen siendo hasta que son eliminados o desnacionalizados. Por lo demás toda su existencia no es, en general, más que una protesta contra una gran revolución histórica. Así en Escocia, los gaélicos fueron los sostenes de los Estuardo de 1640 a 1745. Así los bretones fueron los sostenes de los Borbones de 1792 a 1800. Así en España, los vascos fueron los partidarios de dos Carlos» (Engels, *La Revolución Magiar*). Con la derrota del partido feudal, los carlistas, los vascos dejan de ser propiamente un anacrónico fragmento de pueblo para disolver sus particularismos en un Estado monárquico constitucional. Tras el fracaso de las insurrecciones carlistas, su clientela se desentiende del conflicto dinástico y poco a poco hará suya una nueva ideología clerical racista y pequeño-burguesa, representada políticamente por el PNV. El regionalismo es un programa vacío recogido por clases diversas y con diverso contenido. En Cataluña lo originan el proteccionismo de la burguesía industrial textil opuesta a la política librecambista de la administración central y su desencanto con los republicanos federales. En su nacimiento, es una de tantas reacciones periféricas contra el burocratismo central que constantemente sacuden a España a lo largo de toda su historia, en una época en que no se halla unificado el mercado interno, llevadas a cabo por las clases locales lesionadas por la política gubernamental. En un país débilmente industrializado, con clases medias numerosas, sometido a un tradicional centralismo político y burocrático, era inevitable que la tendencia regionalista se incrementara en el momento en que la pequeña burguesía se viera desarraigada violentamente por el desarrollo industrial. En el País Vasco la evolución del regionalismo fue lenta y no pudo impedir que el vascuence no superase el paso de ser un instrumento de comunicación de una comunidad rural a ser un vehículo de comunicación y cultura en una sociedad burguesa, siendo desplazado por el castellano a lo largo del proceso de industrialización. El catalanismo tuvo mucha mayor importancia porque tenía a la burguesía catalana tras de él y porque culturalmente impuso su idioma, que a diferencia del vasco, poseía literatura propia y era asimilado por la inmigración. Pero cuando la clase obrera emprende su lucha revolucionaria, el regionalismo flota en el aire. Porque *la clase sin patria* no conoce fronteras, porque su acción se extiende a todos los países y a todas las regiones donde existe la sociedad moderna; porque su emancipación del trabajo asalariado no es un problema local o nacional, sino social. La base material del regionalismo

desaparecería cuando, al ser amenazado por el proletariado, uniese sus fuerzas con las del Gobierno, demostrando no tener intereses políticos diferentes. 1918, año de la entrada de Cambó en el gobierno de Maura es la fecha en que el catalanismo burgués (La Lliga) identifica sus intereses con los del resto de la burguesía española para combatir el movimiento de huelgas revolucionarias de Barcelona. Más tarde, en la guerra civil revolucionaria cuando la pequeña burguesía reaccione contra los órganos de poder proletario y las colectividades, los nacionalistas vascos lograrán desarmar y dispersar en su territorio a los batallones obreros, entregando el frente norte a Franco, y los catalanistas pequeño-burgueses (Ezquerra, etc.) se aliarán con estalinistas en la derrota del proletariado de mayo del 37.

Con la victoria franquista, el regionalismo fue reducido a cenizas. El nuevo desarrollo industrial y las transformaciones sociales subsiguientes uniformaban la sociedad española como sociedad capitalista, eliminando los arcaísmos sociales sobre los que un regionalismo se hubiera podido edificar, pero sentaba las bases de un nuevo regionalismo más extremista, en los estratos pequeño-intelectuales empujados hacia abajo por la proletarización: maestros, profesores, estudiantes, ex-universitarios... El nuevo nacionalismo vasco tiene que ver mucho con la producción masiva, típica de la Universidad actual, de cuadros que hacen del tráfico cultural su principal recurso alimenticio, y con el sentimiento de total impotencia y frustración que provocó en ellos el franquismo. Los fundadores de ETA fueron estudiantes de la universidad jesuita de Deusto. La propaganda nacionalista pretendía dar razones a la clase media vasca para su futuro, prestaba poca atención a la cuestión social. En tanto que el gran capital perjudica al pequeño, los nacionalistas se oponían a él, hablaban de socialismo, pero «nacional» y no proletario. Sin embargo, las ideas sociales se transforman bajo la influencia de la lucha de clases. A partir del momento en que los obreros entran en liza, durante las grandes huelgas de los años sesenta que resonaron fuertemente en Euzkadi, los nacionalistas fueron forzados a intervenir, jugar a los jefes de esa fuerza revolucionaria, con la excusa de participar en la lucha, de hecho para desviar la acción en la dirección de sus propios fines. Eso exigía un cambio radical en la ideología y el programa nacionalista. No pudiendo introducir el nacionalismo en la clase obrera sino *desde fuera*, no era extraño que fabricasen un leninismo tercermundista en tanto que se consideraban «ocupados» por las fuerzas «españolistas» contra las que llevaban «una lucha de liberación nacional» y tomados como modelo, los capitalismos burocrático-nacionalistas de Estado: China, Cuba, Argelia. El mecanismo simple de esta ideología consistía en hacer creer a los obreros que no se batían por sí

mismos sino por Euzkadi. Si los obreros caían en su dependencia ideológica, tendrían que aceptar de grado sus ideas y sus fines. Pero la lucha armada implicaba una organización separada y distante de los lugares donde transcurría la lucha de clases, y su popularidad, puramente espectacular, sólo dependía de la satisfacción de los sentimientos populares de venganza y no de los inexistentes deseos nacionalistas de las masas. Las divergencias en torno al abandono de esa táctica, más o menos teñidas de justificaciones ideológicas obreristas, están en la base de los desgarramientos sucesivos de ETA, complicados con rivalidades lideristas: ETA berri, Células Rojas, ETA VI, ETA político-militar...

Sin una burguesía con intereses opuestos al resto de la burguesía española, una clase media vacilante, sin fuerza para lanzarse seriamente a la lucha en calidad de clase dirigente, los nacionalistas tenían que recurrir a los obreros, los únicos que no condenaban sus métodos. El anticentralismo nacionalista se identificaba forzadamente con el antiestatismo proletario que quedaba transformado en un nuevo estatismo, el vasco. En suma, la clase obrera combatía y sólo su combate podía decidir el porvenir de los nacionalistas, por consiguiente era necesario un partido dirigente, tomando de la ideología de la contrarrevolución bolchevique lo que exigía su programa: la ideología de una revolución burguesa instalando en el poder una nueva clase dirigente. Lo político tomaba supremacía sobre lo militar; así entraron en escena los partidos de KAS y el sindicato LAB, el *movimiento abertzale*, en una división combinada del trabajo, para éstos el activismo político y sindical, los etarras la violencia especializada.

Desde que la burguesía abandona el franquismo, inicia una nueva política descentralizadora, modificando algunos aspectos del ejercicio político del poder, tales las preautonomías y el renacimiento artificial del PNV y su sindicato STV. Con ello la burguesía daba su solución al «problema vasco» creando un regionalismo de conveniencia que frenase a los abertzales y arrancase de sus manos la exclusividad de la reivindicación anticentralista, y sustrayese con su moderación a las clases medias susceptibles de ser atraídas por ellos. Los abertzales, a quienes se les robaba la representación del «pueblo vasco», llevaron la lucha a la calle para desbordar el pacto preautonómico del Gobierno y los partidos oficiales, que les marginaba y les sacrificaba a la alta política. Esta situación llegó a su punto álgido en la contra-manifestación de San Sebastián (Septiembre 77) donde fueron apaleados varios diputados del PNV y del PSOE. Pero las consignas antipartidos de esa contra-manifestación rebasaban la perspectiva abertzale y dejaban entrever quién era quien realmente apaleaba a los diputados: el proletariado radical que confundido entre los abertzales los desbordaba

a su vez. Los abertzales condenaron o guardaron un silencio prudente pero no menos expresivo ante los hechos. Jamás habían sido un partido único, sino un abanico de pequeños partidos que ahora se dislocaba debido a la oposición en su seno de la poesía y la prosa, lo resabiado y lo rústico, la política moderada de concesiones negociadas y la intransigencia antiparlamentaria; EIA abandona KAS, HASI tiene una escisión hacia EIA. No obstante la oposición derecha-izquierda abertzale era falsa. Se trataba más bien de dos modalidades diferentes de oportunismo superpuestas a un mar de fondo entre las dos ramas de ETA; el independentismo era un reclamo publicitario, un medio de ganar público, pues el KAS había renunciado a la exigencia de un gobierno provisional vasco, pedía la legalización y aceptaba en principio un estatuto de autonomía. Las dos partes estaban de acuerdo en llevar una política electoral de atracción de las clases medias, buscando alianzas con reaccionarios en tanto que propietarios de una determinada cantidad negociable de electorado. EIA se ofrecía al PNV y ESEI, el KAS formaba una coalición con conservadores defraudados por las pasadas elecciones, ANV y ESB, e independientes moderados (Mesa de Alsasua, y después Herri Batasuna). Ambos no deseaban la disolución de los cuerpos represivos sino su sustitución por una policía autóctona. Las opciones se dividen respecto a la manipulación del movimiento obrero. Mientras EIA preconizaba la domesticación del proletariado en sindicatos dóciles como STV, el KAS procuraba canalizar la fuerza de las asambleas en sindicatos activistas como LAB; unos frenaban y combatían la autoorganización de los trabajadores, los otros intentaban ponerse a la cabeza de los movimientos espontáneos que estremecían a las buenas conciencias vascas, capitalizando la herencia de dos filos de las acciones de ETA Militar. En definitiva, los dos mostraban sus tendencias reaccionarias cuando intentaban conciliar los intereses de las clases medias -que mayormente seguían al PNV- con los del proletariado, hablando de la ambigüedad «pueblo trabajador» o presentándose como «vanguardia del pueblo»; cuando intentaban sacrificar a sus mezquinas limitaciones provinciales la lucha de clases, disimular el proyecto revolucionario de la abolición de la sociedad de clases bajo un lema estatista, colocar la intervención consciente del proletariado en la historia bajo un palio nostálgico de la prehistoria campesina.

Los acontecimientos de Pamplona, San Sebastián y Rentería dieron pruebas de que los abertzales encabezaban un movimiento sin cabeza: «Por primera vez vemos policías corriendo delante de los manifestantes (...) a los abertzales se van añadiendo, sobretodo en Vizcaya, gentes inclasificables sociológicamente, jóvenes en busca de emociones fuertes. Al senador Bandrés... le hicieron frente extraños personajes añadidos al independentismo. Algunos

gritan en castellano cosas como "*Euskadi unido no quiere partidos*", "*Arriba, abajo, partidos al carajo*"» (Interviú, 114, 20/26-7-78). Lo que el inmundo reportero calificaba en un honor involuntario a la verdad, de gente inclasificable sociológicamente, era el proletariado en acción, que en su asociación accidental a la reivindicación nacionalista, se identificaba en el enemigo espectacular de la burguesía antes de descubrirse como enemigo del espectáculo. De ello sólo le separa la ausencia de un *lenguaje propio* con el que pueda nombrar a sus aliados y a sus enemigos. Y nombrando a los partidos como adversarios ya posee una parte de su léxico. La marcha de las luchas no transcurría sin que las intervenciones de los obreros diesen a las reivindicaciones abertzales un sentido que no tenían. Así, empujaban sus consignas de fachada independentistas hasta sus consecuencias extremas que invertían el sentido reaccionario de esas fórmulas, su sentido llevado al extremo hasta cambiarse en su contrario. De todos modos, el patriotismo vasco *en manos obreras* no podía ser más que un ideal imaginario en una época en que debería realizarse su contrario, *el internacionalismo proletario*. Los abertzales, igual que los cuclillos que ponen su huevo en nido ajeno, quieren dar a la lucha de clases un elemento extraño a ella, un contenido falso, disolviendo su revuelta amorfa en los antagonismos sociales que enfrentan a la burguesía y el proletariado. Pasando de querer ganarse el proletariado a su causa a querer dirigir sus propias luchas, han conseguido, ante los ojos de los filisteos cultivados y la llamada opinión pública, disfrazar el nacionalismo de lucha de clases y hacer pasar por momentos la lucha de clases bajo colores nacionalistas. Sin embargo, la ironía de la historia ha hecho que esa confusión coexistiendo con las formas más radicales de lucha, las asambleas de fábrica, de zona, de barrio, sirva para reforzar la concepción opuesta a sus objetivos. Independencia quiere decir en lenguaje obrero autonomía proletaria y revolución social.

Tres días después de los primeros enfrentamientos en Pamplona, el 8 de julio, en respuesta a una provocación policial, una revista de gente de orden describía así la situación de San Sebastián: «Aislada prácticamente de España, con el ferrocarril volado por una carga de goma-2... barricadas ardiendo en todas las calles; la carretera nacional Madrid-Irún y las autopistas Bilbao-Behovia asimismo cortadas; los comercios y bares cerrados, sin taxis ni autobuses, tomada por las fuerzas de Orden Público que se enfrentaban esporádicamente a los numerosos grupos de manifestantes, completaban el desolador aspecto de Donosti. La huelga general paralizaba a la ciudad, a la provincia entera, al igual que en Vizcaya y Álava...» (Cambio 16, núm. 346, 23-7-78). Los partidos, que se habían abstenido de llamar a la huelga, envían una delegación a Martín

Villa, para acabar con la situación que la prensa, de ordinario mentirosa, no podía sino llamar «casi revolucionaria». Las acciones no se hicieron esperar: «En Donosti un militante de EIA... estuvo a punto de ser linchado cuando una multitud de enfervorizados manifestantes le increpó llamándole policía». Consultado por Cambio 16, uno de ellos señalaría que «es lo mismo ser de EIA que ser policía español» (ibid.) La crisis del Gobierno fue salvada por el apoyo del PCE que defendió con él a la policía y al ministro del Interior. Esta nueva huelga general señala indiscutiblemente un nuevo impulso de la revolución después de un período de descanso. El humo de las ilusiones democráticas y autonómicas se ha disipado y los antagonismos de clase se han manifestado acusadamente. Han vuelto ampliamente las luchas generalizadas, tomando caracteres firmes y agresivos, acorralando a la policía, levantando formas organizativas de clase: «Tras las asambleas de fábrica, la asamblea de pueblo de la mañana recoge la realidad que hay en las empresas y en el conjunto del pueblo, debate el contenido a dar a la lucha y las acciones que se realizaron durante el día; por la tarde otra asamblea hace el balance y da las orientaciones para el día siguiente...», así funcionaba la Asamblea de Rentería (Egin, 28-9-78). El perdedor es la colaboración de clases, el único cimiento sólido del orden social capitalista para cuya defensa los partidos están dispuestos a sancionar todas las medidas represivas por violentas y repugnantes que sean (cf. la votación rápida y unánime de la ley Anti-terrorismo y de la Nueva ley de Policía).

La esencia de la llamada cuestión vasca no es pues la cuestión del estatuto de los vascos dentro o fuera del Estado español, sino la cuestión del estatuto de la sociedad planteado de forma revolucionaria por los obreros del País Vasco. Cuando el proletariado emerge en las asambleas, delimita en actos su terreno y sus intereses de clase. Allí conoce su posición por el modo con que la combaten todos sus enemigos. Allí su acción obliga a los abertzales a contorsiones y equilibrios en el aire, tratando vanamente de ajustar su ideología socialpatriótica a la lucha de clases. Por ese camino pueden llegar hasta adoptar formas asamblearias de lucha, pero contaminándolas con las clases medias (como por ejemplo las asambleas de pueblo). Pero esa coexistencia interclasista se ve reducida a nada desde que el proletariado predomina en ellas, e impone sus decisiones. El proletariado no debilita sus posiciones reforzando las de los abertzales; son los abertzales quienes se mantienen a costa de no imponerse al proletariado. Incapaces de comprender el proceso objetivo de la historia que les contradice, se limiten a ocultarlo amontonando frases patrióticas e inventando «intereses vascos». Estos intereses a los que el desarrollo social no otorga garantía alguna, son o intereses retrógrados o intereses imaginarios. La revolución vasca per-

tenece al terreno de la revolución española y ésta a la europea. Los conceptos «nación», «pueblo», son categorías arcaicas, con las que la burguesía se representaba a sí misma como defensora de intereses generales contra el feudalismo. No hay pueblo ni nación, sólo existe una única sociedad de clases en el mundo. Dentro de ella el proletariado lucha contra la burguesía o la burocracia de Estado por abolirla. La esencia del combate es en todas partes la misma. El trabajador no tiene nacionalidad, para él la nación no existe. Ante él sólo está la humanidad entera, la comunidad internacional de producción de vida. No va a reemplazar el reino de los grandes capitalistas y burócratas por el de altos funcionarios de un minicapitalismo de estado. Su objetivo es la abolición del capitalismo y el Estado, en Euzkadi y en todas partes.

5. DE LOS MALES DE LA ECONOMÍA Y DE SUS REMEDIOS.

«La política, que tanto había ayudado a la economía al ofrecerle los datos básicos para construir el futuro de 1978 en los acuerdos de la Moncloa de octubre del año pasado, extiende sobre el año que tenemos delante la espesa niebla de sus indecisiones. Un horizonte cerrado -económica y políticamente- parece negar a empresarios, trabajadores, ahorradores y ciudadanos los datos fundamentales que precisan para tomar sus decisiones de cara al tiempo que viene. La economía española se ha reducido así a su más puro y escueto presente.»

El País, 17-12-78.

«D*esde lejos y antes de las ocasiones mal se puede ordenar lo que conviene, ni tomar parecer cierto en cosas tan inciertas y varias como se ofrecen en una guerra.»*

Francisco de Moncada, Expedición de los
Catalanes y Aragoneses contra turcos y griegos.

No es nada fácil distinguir la actual crisis económica de las precedentes, porque sus causas *más verdaderas* subyacen en la penumbra de los motivos aparentes. Se produce una crisis de mercado cuando la oferta sobrepasa la demanda; una parte de la producción no se vende y el capital disminuye su tasa de acumulación, o incluso no acumula. Los efectos suelen darse como causas y a la preocupación del poder se le añade la oscuridad de su mal. Hoy se habla de superproducción, de impuestos, del peso de la burocracia improductiva, de los presupuestos estatales, de la crisis monetaria... de la misma parte que se ha cobrado la clase que domina en los países productores de petróleo, que

ha agravado la crisis sin provocarla. ¿Se esconderá tras este horror sin fin un final horroroso?

El sistema donde reinan las condiciones modernas de producción tiende a producir no sólo un número creciente de mercancías, sino un montante creciente de necesidad de consumirlas. Pero el ritmo de consumo ha llegado a quedarse detrás del ritmo de producción. No porque no pueda sufrir una mayor aceleración, sino porque el sistema ha fallado en producir nuevamente «un sujeto para el objeto», ha fallado en llevar la reificación al grado requerido para que el ritmo del consumo siga la marcha del de la producción. No ha hecho progresar lo bastante el proceso de automatización de los individuos e inversamente, ha fracasado en la producción de mercancías lo suficiente atractivas. Este fallo se traduce en una baja tendencial del consumo, en una negativa creciente a consumir, que por lo pronto, se ha ido transmitiendo por todas las arterias de la economía a todas las ramas y a todos los lugares encadenando efectos; aquí es el dolar que baja, allá los gastos presupuestarios que suben, mercados que se «saturan», exportaciones que se restringen. El sistema se resquebraja porque han aparecido *conductas más seductoras* en otra parte, fuera de la esfera del consumo, en la clandestinidad de la vida real, que lo socavan y subvierten. La crisis económica es una crisis de la economía, un momento en que la mentira se desvanece porque los que sacaban provecho en hacerla creíble no pueden hacerlo ya, y los que por su mal creían en ella van dejando de hacerlo.

Cuando la necesidad de impulsar la economía choca con la necesidad de asegurar la rentabilidad del capital, entonces aparece la inflación con desempleo creciente. Se llega al estancamiento económico inflacionario con desempleo creciente a fuerza de intentar obtener incrementos de beneficio en condiciones desfavorables para la producción de plusvalía. La inflación indica la existencia de una rentabilidad insuficiente para las necesidades de acumulación del capital. La inflación es beneficiosa para el capital si permite aumentar los beneficios a costa de los salarios, o cuando corrige una baja productividad, pero en condiciones de estancamiento puede arribar a detener y conducir a la quiebra ramas importantes de la producción. La inflación no es más que un fenómeno que se produce por los intentos de mantener intocados los beneficios cuando los costes aumentan. El control de precios, los topes salariales, las restricciones del crédito, son medidas temporales para reducirla. Son curas de urgencia que dejan al enfermo esperando la mano del cirujano, atenuando los efectos pero no suprimiendo la enfermedad. Pueden enderezar mal que bien el equilibrio interno del capitalismo, no sin sacrificar un número determinado

de industrias, pero no relanzan el ritmo de la economía. Miden el grado de aceptación de ésta por los trabajadores, que por otra parte depende del control que ejerce sobre ellos la burocracia política y sindical. Y cuando la política descubre que depende de la economía, la economía pasa a depender de la política. Ese es el punto crítico de la economía. Hasta entonces las crisis económicas eran simplemente mecanismos reguladores de la economía, meros momentos de su devenir; ahora son *crisis de la economía*, momentos en los cuales la economía se niega y es negada. Ninguna sutileza del poder puede echar atrás esta negación. Son tiempos de incredulidad general. Si se nos recordara que el lamentable Camacho proclamó que su partido había superado a Maquiavelo, responderíamos que este necio rufián tuvo que haber tenido en cuenta de que «La naturaleza de los pueblos es cambiante, y es cómodo persuadirles de algo, pero difícil guardarles en esa persuasión. También es necesario darles tan buen orden que cuando no crean ya, se les haga creer por la fuerza» (*El Príncipe*).

El que en España, como en todos lados, la oposición haya aceptado cumplidamente las medidas tendentes a provocar el paro y a rebajar el poder adquisitivo de los salarios no es de extrañar puesto que la oposición no propugna más que lo que el capitalismo hace, y no pudiendo llevar a cabo más reformas que las que el mismo Estado incluye en sus planes, sostiene sin rubores el statu quo porque es así como mejor se sostiene a sí misma. Los estalinistas han pregonado entre los trabajadores la resignación al gobierno de la UCD, como la mejor de las políticas posibles. Un soniquete muy repetido de F. González era: «Este Gobierno ha sido a veces tan débil que hemos tenido que echarle una mano por el bien de la democracia». Esto era sólo la mitad de la verdad; los partidos y sindicatos habían sido tan débiles, que el Gobierno había tenido que reconocerlos como únicos interlocutores, policía mediando, por el bien de la sociedad capitalista. El Gobierno además ha empleado la máxima que ordena enseñar a una oposición timorata y deseosa de poder toda clase de abismos, puesto que es el mejor medio de obligarla a tirarse en el primer camino que se les abra. La imaginación de sus intereses particulares la ha conducido a esa práctica política de sostener siempre el poder establecido contra los trabajadores, considerándose muy hábiles porque siempre han sido mezquinos.

Hasta hoy, el capitalismo ha conseguido su estabilidad, pese a las condiciones desfavorables para ello, fundamentalmente, con una depreciación de los salarios pactada con la oposición. La eficacia del pacto dura el tiempo que los porcentajes de aumento salarial permanecen por debajo de la tasa de inflación; caso contrario los aumentos empiezan a ser reales y entonces es necesario un nuevo pacto que vuelva a fijar unos porcentajes más bajos. Cuando el pacto de la

Moncloa se había vuelto inservible en ocho meses, la patronal presionó por una segunda devaluación salarial pactada y en ese sentido se fueron entrevistando sus líderes con los jerarcas sindicales y políticos. El Gobierno daba la señal por boca de Abril: «Si las fuerzas sociales y políticas, consideran oportuno un acuerdo y concretamos los cimientos del mismo, el Gobierno apoyará su conclusión y realización ya que considera que este es el camino más adecuado para enfrentarse a la crisis... somos conscientes del coste inicial de la operación que se inició el otoño pasado, que fue asumida por los partidos políticos firmantes de los pactos de la Moncloa. El éxito de este programa debe ser atribuido a todas las fuerzas políticas y sociales del país y sobre estos cimientos debemos construir la nueva estrategia económica para el año próximo» (declaraciones del 13-9-78). Tanta buena disposición no iba a ser defraudada por los sindicatos; la alta burocracia multiplicaba sus declaraciones en favor del acuerdo con la patronal y en contra de cualquier tentación de otoño caliente. El majadero Camacho, con esa cara que da la reacción a sus elegidos, bautizaba la concordia de «otoño negociado». Ferrer Salat, durante las «jornadas de reflexión» (26-9-78) que debían servir de punto de partida del acuerdo, confesaba que «los empresarios y los sindicatos estamos de acuerdo en todas las cuestiones claves». Pero cuando las relaciones entre los sindicatos y la patronal eran mejores que nunca, las posibilidades de acuerdo efectivo nunca fueron peores. En efecto, «los sindicatos son aún débiles, tienen millón y medio de afiliados sobre ocho millones de asalariados... no pueden por tanto proponer un pacto social a sus bases porque se quedan sin gente» (Cambio 16, 1-10-78). Los sindicatos reconocían los argumentos patronales y hacían suyos los problemas de la baja productividad y el absentismo, del sabotaje y la indisciplina en las fábricas, pero para aceptar la flexibilización de plantillas, es decir el despido libre, y el tope del 13% de subida salarial tenían que poder disponer de fuerza suficiente; un mayor poder de intervención en las fábricas con el reconocimiento y dotación de atribuciones de la sección sindical aparte de una cesión de locales del «patrimonio sindical» franquista, y una ayuda financiera para compensar la huelga de cotizaciones de los afiliados. En octubre del 78, según propias confesiones, sólo un tercio de ellos las pagaba. Los empresarios consideraron sus propuestas desmesuradas y rechazaron un pacto que las incluyera. Los obreros mientras tanto salían en masa de las centrales. Sindicatos enteros dejaban de existir: si victorias son las que da la multitud, UGT y CCOO de Cataluña admitían a Cambio 16: «Estamos dando un enorme bajón hasta en los puntos más fuertes que teníamos como el Bajo Llobregat» (15-10-78). Sindicales con más teatromanía se veían afectadas igualmente; a finales de año, de 80.000 apuntados de la CNT de Cataluña, cotizaban menos de 20.000. Y los

mítines, que en sus días buenos reunieron a más de doscientas mil personas, ya no podían congregar a más de cuatro mil. Sobre la entrega a la causa de los sindicatos deja constancia la declaración patética de un abogado laboralista a Cambio 16 (26-11-78): «Muchos trabajadores se afilian al sindicato cuando tienen algún problema en su empresa, porque por la simple cuota mensual saben que pueden obtener una indemnización de cientos de miles de pesetas. Obtenida ésta, bastantes afiliados se borran... Son muchos los casos de trabajadores con carnets de más de un sindicato, que recorren los despachos a ver cual le consigue una indemnización más alta. El otro día -relata- un obrero decía: Ahora estoy en UGT porque el juicio anterior lo perdió un abogado de CCOO». Sin embargo, si a los sindicatos les cuesta tanto arrastrar «a las masas» no es porque los trabajadores sean alérgicos a la acción -han demostrado sobradamente lo contrario- sino porque los sindicatos y partidos encarnan lo que los trabajadores no quieren. Estos saben darse cuenta de la miseria aunque no siempre sepan *nombrarla*. Pueden engañarse con las cosas en general, pero se engañan muy poco con las personas. El año 1976 fue el de mayores oleadas de huelgas de los tiempos modernos, pero dos años después nos encontramos con que España encabeza la lista de países europeos con mayores pérdidas por huelgas. Es además el país con mayor número de luchas antisindicales. Al contrario que en Inglaterra, donde las huelgas duras de 1970-74 produjeron un paradójico aumento de la sindicación, propiciando una corriente reformista en la base de los sindicatos, en España ha fracasado incluso la ilusión de un reformismo antisindicalista como lo demuestra la evaporación grupuscular pseudoasamblearia.

Los empresarios despreciaban a los sindicalistas que por tanto les adulaban, y no hay nada más peligroso que la adulación en las coyunturas en que el adulado pueda tener miedo. Las ganas que tiene de no aceptarla le hacen creer en todo lo que le impide remediarlo. La patronal pues prefirió un decreto del Gobierno, dándolo por más seguro y ventajoso, a un acuerdo con los sindicatos. El Gobierno era hasta entonces el principal beneficiario de la política de la que la oposición corría con los riesgos y procurando tranquilizar a las clases conservadoras de las que él mismo dependía, calculó erróneamente al valorar la inclinación a la servidumbre de los sindicatos por encima de la disposición a agitarse de los proletarios. Las centrales, como todas las policías, tendían a mostrarse indispensables amplificando los peligros a combatir y llamando irresponsables al gobierno y la patronal: «Les preocupa (a CCOO) la actitud cerrada de los empresarios que puede generar, en la convergencia negociadora de los convenios un enero caliente... Tal actitud (según UGT) de los empresarios supone volver a situaciones de hace dos años» (El País, 17-12-78). Las centrales hubieran que-

rido un segundo pacto de la Moncloa, ya que éste les daría, adquiriendo fuerza de ley, el peso que no llegaban a tener en las fábricas y les aliviaría de sus gastos. Quieren practicar su actividad con la tranquilidad de quien ejerce un oficio. Como su destino es servir al poder, en sus cálculos no entra más que la legalidad del orden. De ahí su apego a las instituciones dominantes y su pactismo irrefrenable con ellas. Pero por eso su política dura lo que el Gobierno quiere que dure. El Gobierno se permitía el lujo electoral de enfrentarse con los sindicatos, y a las fundadas quejas de sus adláteres comentar que «las centrales tienen que cumplir su papel y protestar un poquito». Estas ligerezas, tan propias de los gobiernos que creen que han cedido demasiado a la oposición, iban a causar el que los sindicatos dejasen pasar huelgas pues era bien cierto que «las bases están inquietas y muy decididas y, (...) aunque quisiéramos no podríamos poner frenos», como decía el secretario de la UGT de Madrid, Prieto. Los sindicatos no dirigían, figuraban. Ante la masiva renovación de convenios de primeros de año, sin controlar realmente nada, iban a montar un espectáculo de control con ayuda de los bastiones que dominaban, de un movimiento que iba a suceder con o sin ellos. Sin hacer nada por animarlas, no tenían más alternativa que figurar delante, apelando «a la responsabilidad de los empresarios» (Sartorius) en un último intento de impedir el movimiento huelguista. Ya no les quedaba sino dar garantías de orden: «No se va a desbordar nada», (CCOO) «Va a ser un enero de cierta conflictividad lógica y asumible por la coyuntura social actual» (Redondo, La Vanguardia, 27-12-78), se dominará la situación, que no supondrá la movilización de los trabajadores, se tendrá en cuenta las elecciones. La desgracia actual de los sindicatos es que no toman credibilidad más que cuando hacen sentir la fuerza de los trabajadores y siempre les interesa hacerla menos sentir que creer. Habiendo pasado la jornada de paro de Madrid del 11 de enero, Camacho ya buscaba serenarse: «A pesar de haber participado en los paros casi medio millón de obreros, ha sido la huelga más pacífica y controlada que se ha hecho hasta ahora». La táctica de los sindicatos no era complicada. Para ellos se trataba de desencadenar cuanto antes las huelgas que eran inevitables para tener liquidado el movimiento antes de comenzar la campaña electoral de los partidos. Dada la situación de indiferentismo, cansancio y miedo al desempleo que predominaba en una buena parte de los obreros, podían oponer a los más activos, una táctica de huelgas cortas, de uno a tres días, domésticas, encaminada a revalorizarse frente a la patronal. Pero cuando los trabajadores se sentían con bastante fuerza para afrontar una huelga indefinida, los sindicatos no la podían evitar; en el País Vasco era lo corriente, pero también sucedía en otras partes: en Madrid (hostelería, Chrysler, butaneros, seguros), Málaga y

Tenerife (hostelería), La Coruña (metal), Cáceres (Induyco)... Tampoco podían evitar que no secundasen sus jornadas y pidiesen mayores subidas salariales que las de ellos, como por ejemplo en Altos Hornos de Vizcaya, o que pusiesen en duda su representatividad como en las residencias sanitarias, o que el espectro de las asambleas les asediase de nuevo y les ganase partidas como en el metal de Navarra o en Fasa-Renault (Valladolid): «El primer round se ha cerrado con la victoria de los asamblearios sobre los partidarios de la representación en centrales sindicales organizadas (...) los asamblearios se han unido en torno al objetivo común de desplazar a los comités de empresa e instaurar nuevamente los consejos de factoría y fábrica...» se podía leer en *El País* (11-2-79) a propósito de esta última.

Los «llamamientos a la sensatez» de Comisiones, invitando a los obreros a no convocar huelgas largas y a hacer todo lo posible por negociar y soslayarlas, daban la impresión de una escena en la que la burocracia sindical daba todos los acomodamientos de la prudencia a una patronal que respondía con la inconsciencia de su obcecación. Como si unos no pudiesen ofrecer más y los otros quisiesen dar menos. Mas no conviene olvidar esa verdad central de la política sindical: el poder de los burócratas no depende tanto de los afiliados como de sus relaciones con la patronal; de este modo cuando la necesidad de darle confianza les acucie y el clamor de las fábricas les amenace su claudicación es cierta. La huelga de la hostelería de Madrid o la de la Renault, lo estaban confirmando por enésima vez.

6. HACIA UNA NUEVA REVOLUCIÓN.

«No se trata de lo que este o aquel proletario, o incluso el proletariado en su conjunto, puede representarse de vez en cuando como meta. Se trata de lo que el proletariado es y de lo que está obligado históricamente a hacer con arreglo a ese ser suyo. Su meta y acción histórica se hallan clara e irrevocablemente predeterminadas por su propia situación de vida y por toda la sociedad burguesa actual.»

Marx, La Sagrada Familia.

Poco tiempo ha bastado para que no puedan tenerse en pie las viejas fórmulas políticas y sindicales, así como tampoco, después de la fase de grandes luchas que hemos pasado, los obreros puedan quedarse como si nada hubiera sucedido. Muchos luchadores proletarios, por tradición, por rutina, por inaptitud en distinguir la palabra de la cosa, por una desoladora falta de sentido de lo real, han permanecido bajo las viejas concepciones de lucha. No han olvida-

do nada ni nada aprendido. Lo terrible es que en estas condiciones no pueden hacer nada sino por el pasado, lo que les lleva a combatir toda *nueva* expresión de la lucha de clases que surge de situaciones nuevas. Para salir del marasmo en el que el movimiento revolucionario se encuentra, para extraer todas las fuerzas que contiene, para comprender la hora presente y para cumplir su tarea es necesario, después de las pasadas experiencias, proceder a una reelaboración y precisión de las ideas revolucionarias, teniendo por sospechoso todo lo que sea aceptado por el orden dominante. *La revolución queda por reinventar*, reformular sus fines y principios, su proyecto. Esto plantea un conjunto de problemas que deberán ser dominados en la teoría y en la práctica en los próximos años. Si existe una inclinación al escepticismo cuando se oye hablar de revolución, es a causa de que no existe un movimiento revolucionario organizado que concentre en él las posibilidades de una transformación decisiva de la sociedad. Pero se puede ser más escéptico respecto a *todo lo demás* ya que se trata de lo existente y de las diversas formas de su aceptación. Pese a las demostraciones revolucionarias de estos tres últimos años, frente a la acumulación de signos precursores, los trabajadores retroceden ante la inmensidad de las tareas a realizar, deslizándose por la pendiente del menor esfuerzo que es también la de la menor clarividencia, y que da la ilusión de diferir los conflictos graves cuando, realmente, aleja el momento de la victoria. A menudo ha pasado como el soldado que pelea en la trinchera que no ve más que una ínfima parte del campo de batalla y no puede, cualesquiera que sean sus capacidades, darse cuenta de la batalla que se está librando. A menudo también, se aplaza la lucha para volver después con más fuerza, cuando lo importante es vencer y las más de las veces una acción que se retrasa es un combate que se pierde, puesto que al querer ganar demasiado tiempo no se gana ninguno; hay que volver sobre los momentos en los que se quiso saltar y entonces ya es tarde.

Lo que se llama *radicalización* del proletariado es un proceso molecular de conciencia colectiva, elástico y sensible, sobretodo en sus comienzos, a los resultados prácticos inmediatos, y reversible por las derrotas. Bajo la influencia de la derrota los obreros se vuelven cautelosos, desconfiados, espectantes. La crisis social puede acelerar la explosión revolucionaria, pero si cae sobre el proletariado después de una fuerte derrota, la crisis solamente agrava el proceso de descomposición de las organizaciones basadas en él. Necesita tiempo para curar sus decepciones tras caer en un período más o menos largo de indiferencia política, en donde la burocracia político-sindical navega sin oposición y sin rumbo, deshaciéndose lentamente, fuerte en la medida en que nadie lo es. El *sindicalismo* de hoy corresponde a un estado determinado de la guerra

social entre la burguesía y el proletariado: aquél en el que al crear el proletariado la base de su autonomía y su acción independiente pone en peligro dicha sociedad. La burguesía utiliza a los sindicatos para pacificar y *desorganizar* a los obreros, y después de haber vencido, para movilizarlos tras su política. Este sindicalismo se ha desarrollado entre dos condiciones: una crisis social fuerte y una debilidad del proletariado en el conocimiento generalizado de sus propios objetivos históricos, de las condiciones reales de su lucha -de su teoría- y por consiguiente de los enemigos a combatir y de los medios a utilizar para alcanzarlos. El triunfo del sindicalismo fue la consecuencia directa de la aparición e instalación momentánea de un fuerte estado de ánimo reformista en las asambleas obreras. Desde el primer movimiento de huelgas hubo una tendencia radical ascendente que culminó en Vitoria y no cesó de manifestarse después. El poder de las asambleas fue muy real y bastante amenazador. Sólo necesitaba coordinarse y sacar las conclusiones necesarias. Ese presente de asambleas era la base de su porvenir. Allí la conciencia de clase estaba en casa, sólo allí podía darse el conocimiento de todos los aspectos de la lucha, sus consecuencias, el rebasamiento de las mismas, descubrir las líneas de fuerza de los acontecimientos, sus tendencias, las posibilidades que encierra, lo que el proletariado mismo puede y debe hacer, no a impulso de su voluntad y de sus aspiraciones del momento sino empujado por la necesidad histórica; concebir la acción que ha de constituir el puente entro lo real y lo posible; en definitiva, sólo allí se podía *realizar la teoría*. El proletariado retrocedió y quedó en el vacío. La ruptura de su empuje revolucionario fue el factor más importante que favoreció el crecimiento del sindicalismo a lo largo de 1977. A finales de este año la marcha se había parado y se asistía a la primera demostración importante del sindicalismo: la toma de las fábricas, las elecciones sindicales. Es verdad que desde entonces el proletariado ganó batallas defensivas. Pero fue sacado de la línea de fuego que era lo que sus enemigos deseaban. Para volver a emprender otra vez el camino debe antes que nada, comprender todo lo que ha pasado. Jamás se podrá pensar en su radicalización revolucionaria si antes no ha asimilado su propia derrota.

La burguesía ha dispersado al proletariado con la fuerza de choque de los sindicatos y partidos. La inercia ejerce un peso irresistible en provecho de lo existente y es la inercia quien permite mantener al proletariado en estado de dispersión. Para probarlo, baste esa falta de entusiasmo que ha obligado al régimen actual a la explotación de la noción de peligro nacional para mantener una tensión suficiente en política interior. Incapaz de normalizar el País Vasco a su favor, ha preferido la guerrilla nacionalista para tener un sonajero

patriótico con que arrastrar tras de su política a todas las fuerzas sociales reaccionarias «contra el terrorismo», en uno de sus frecuentes momentos de crisis. Especula con el miedo atroz de la burguesía y de los partidos a perder su status. Un simple caso de insubordinación en el ejército que de costumbre sería silenciado para no molestar a los militares, sirve para montar una trama cosida de hilo blanco de un golpe de estado. Nueve de cada diez militantes se han vuelto patriotas dispuestos a aniquilar, a volcar toda su histeria, contra quien «desestabilice» la situación. Rindiendo culto al miedo, los partidos y sindicatos aplauden a los militares como vencedores de batallas que no han ganado, por la sencilla razón de que no han existido, héroes de victorias imaginarias, patriotas de fantasía que no se han movido de su sitio. Estas campañas son parte de los preparativos de guerra contra cualquier amenaza revolucionaria, ya precalificada de «intento de desestabilización». Es tanta la capacidad destructiva que puede mover el proletariado, que aun después de vencido es mirado como si hubiera sido vencedor. Si no puede alcanzar a sus enemigos en la rapidez de la maniobra, les aventaja en número y eso puede terminar por hacerle triunfar. El Poder persigue un rearme moral del fanatismo mientras moderniza las leyes de excepción de la servidumbre social. Un discípulo español de Maquiavelo definió bien el principio: «Los príncipes para juntar un ejército siempre se valen de causas falsas, por donde no se entienda lo que pretenden y puedan tomar al enemigo desproveído» (Arias Montano, *Aforismos*). En el siglo XX, la sociedad es la sociedad de esas causas falsas, elevadas del nivel de pretexto principesco al de relación social. Al proletariado le queda, al calor de las revueltas cotidianas contra todos los poderes, la tarea de encontrar su *verdadera causa*.

Trabajadores por la autonomía proletaria
y la revolución social, Febrero 1979.

«Nuestra misión es categórica. Tenemos en nuestro favor un cúmulo de razones históricas, sociales y económicas que hablan por sí solas y que son suficientes para acreditar nuestra arremetida contra todos los obstáculos que impiden el avance del proletariado... Nos mantendremos en pie de guerra mientras la revolución no haya llegado a cristalizar... Nosotros vamos de cara a la revolución y en contra de todos los enemigos de la revolución. Y como objetivo inmediato patrocinamos la entrada del proletariado en la escena española, con todas las consecuencias que requiere la presente situación.»

El Amigo del Pueblo, nº1, Mayo 37, portavoz de Los Amigos de Durruti.

LO QUE HAY QUE SABER DE LOS INCONTROLADOS

Después de cuarenta años de contrarrevolución triunfante, el mismo miedo encuentra las mismas palabras: durante la guerra civil la coalición gubernamental (burgueses, republicanos, socialistas, estalinistas y cenetistas) que destruyó la revolución para perder la guerra, llamaba *incontrolados* a los proletarios que, combatiendo a todos sus enemigos del exterior y del interior, no obedecieron a nadie más que a sí mismos, hasta el fin. Y aún hoy, cuando la revolución vuelve a ser actual, la misma *acusación* es lanzada por todos los sostenedores del viejo mundo a aquellos cuyos excesos comprometen inoportunamente la reorganización pacífica de su explotación.

Los que insultan así a los proletarios revolucionarios, muestran más bien, por el simple hecho de tener aún la ocasión y los medios, lo que le queda de *moderación* al proletariado. Éste no tiene ciertamente por qué *defenderse* de tal acusación, pero sí reconocer en ella la verdad de sus enemigos, que es también la suya, la verdad de una *guerra social* en la que él desencadena su negación cada vez más incontrolable, y que no terminará más que con la destrucción de todo control exterior, la abolición de «todo lo que existe independientemente de los individuos»: el comunismo.

En cuanto a nosotros, *unos incontrolados de más*, no nos presentamos delante del movimiento actual diciéndole: «He aquí la verdad, ¡arrodíllate!», como todos los autoritarismos ideológicos a la búsqueda de una realidad que manipular; sólo queremos mostrarle *cómo* lucha ya, y *por qué* debe adquirir la plena conciencia de este combate.

Haciendo tal cosa, no nos rebajamos en disimular nuestro proyecto que no es otro que el de todos los incontrolados, del cual deben poseer la conciencia para poseerlo realmente: la organización de «la comunidad de los proletarios revolucionarios que pongan bajo su control todas sus propias condiciones de existencia», no bajo la forma de ningún «control obrero» por el cual los más modernos servidores del Estado sueñan en interesar a los trabajadores en la producción de su miseria, sino por la realización *insurreccional* del comunismo, la abolición de la mercancía, del trabajo asalariado y del Estado.

A los internacionales de la región española.
A todo el proletariado.

La campaña de España de la revolución europea.

1. PROLETARIOS, AÚN UN ESFUERZO MÁS SI QUERÉIS DEJAR DE SERLO.

«Cuando una clase que concentra en ella los intereses revolucionarios de la sociedad, se subleva, encuentra inmediatamente en su propia situación el contenido y la materia de su actividad revolucionaria: aplastar a sus enemigos; tomar las medidas que se imponen por las necesidades de su lucha; y son las consecuencias de sus propios actos las que la empujan más lejos. Ella no se entrega a ninguna investigación teórica sobre su propia tarea».

Marx, Las luchas de clases en Francia.

Compañeros,

Una extraña locura recorre desde hace algún tiempo España, que hace enfermar al conjunto de nuestra clase política, menos a la que piensa quedarse que a la que espera entrar en ese mercado de la ilusión en trance de revisiones que es la política española.

Las promesas del Gobierno sobre una futura posibilidad de «democracia» han tocado como música dulce las fibras del corazón, de todo arrivista, trepador, demagogo, político arruinado o burócrata desahuciado que existe en el país. «A un panal de rica miel, dos mil moscas acudieron». Todos ellos han visto próximos, el empleo, el sueldo, la parcela del poder; sus fotos, sus programas, sus opiniones en la prensa, sus esperanzas a punto de realizarse. ¡Cuántos partidos ha inventado ya tal locura y cuántos cónclaves! Desde la guerra civil no se habían vuelto a ver tantas bajezas y «arreglos» juntos en tan poco espacio

de tiempo. Precisamente las burocracias llegan a ser más contrarrevolucionarias en los momentos revolucionarios.

La farsa de la «democracia» montada por la prensa con el permiso del régimen ha tenido un solo fin: conseguir la sumisión de los trabajadores y su colaboración con el Gobierno frente a la crisis económica que sacude España de una manera completa. Sonando «la democracia» moneda falsa, el proletariado comprendía que se le pedía que pagara de su bolsillo. Ante la ridícula promesa de ser representado en el futuro por una burocracia sindical y política que organizaría mejor su explotación, el proletariado ha actuado por su propia cuenta, como estaba habituado a hacerlo. Cuando el Régimen maniobraba con su mal menor, sólo podía ser para evitarse el *mal mayor*, la revolución social, que como una amante fiel, nunca lo había abandonado.

En tres meses las luchas obreras, comenzadas en el momento de la revisión de los convenios colectivos contra las alzas de precios y el bloqueo de salarios, se han extendido tanto por todo el país que lo que viene a ser puesto en cuestión hoy en España, no es el *precio* del trabajo, sino el mismo trabajo asalariado, no la capacidad de pagar de los patronos, sino su existencia como clase explotadora. Así pues, aunque los trabajadores creen aún *reivindicar* y querer negociar, lo que hacen ya en las fábricas y en las calles, la libertad que *toman* de reunirse y organizarse, hace pesar sobre la organización existente de la explotación, una amenaza que ésta no puede *negociar* ciertamente; pues se sabe bien en Madrid, como en París, Moscú o Pekín y en cualquier otra capital del mundo capitalista, que cuando los trabajadores emprenden, contra todas las separaciones organizadas burocráticamente, la tarea de agruparse libremente y sin intermediarios para discutir sus problemas reales, *entonces el Estado comienza a disolverse*. Todos los riesgos y todas las posibilidades de la situación creada por esta masiva intervención autónoma del proletariado en la moderna «guerra de sucesión» abierta tras la muerte de Franco, se pueden resumir en esta enseñanza general de las luchas históricas: en los momentos revolucionarios, es frecuente que la subversión aparezca ya bastante potente como para convencer al Estado de la necesidad de aplastarla, mientras que ella no lo es aún bastante para prevenir tal aplastamiento. Barriendo todas las complicaciones políticas, es la audacia de la ofensiva proletaria la que está a punto de hacer avanzar la crisis social hacia su simplificación radical, y de crear la situación donde toda marcha atrás será imposible.

El post-franquismo pacífico planificado por *todos* los dirigentes políticos murió antes de Franco, muerto por la crisis mundial de la economía y el retorno de la revolución social: para comprar la paz social, lo que empezaba a

ser *demasiado caro* para el capitalismo español era ya *demasiado poco* para los trabajadores. La integración a Europa, programa lírico del relevo neofranquista, que estaba ya realizada muy prosaicamente por la múltiple dependencia (comercio, turismo, inversiones, emigración) del «milagro» español respecto de la economía europea, es ahora la integración a la Europa capitalista *que se desintegra* atravesada de parte a parte por las luchas proletarias y en la que España juega el papel de «eslabón más débil» *al que le falta la cadena*. El milagro se ha ido, y quedan sólo los visionarios. Y todos los que desde hace quince años tenían como única política, manejar el pasado para preparar su futuro de hombres de Estado, mientras que su gestión económica consistía en hipotecar el futuro para asegurar el presente, ven ahora este pasado de podredumbre y este futuro de polución y de crisis encontrarse en el mismo presente de su negación revolucionaria. De suerte que se puede decir de estos franquistas en vías de modernización, que se les ha quedado su porvenir *detrás*. Para ellos ya, «cualquier tiempo pasado fue mejor».

La confianza que el proletariado toma en sus propias fuerzas, la burguesía y su régimen la pierden en un mismo movimiento, acumulando las semi-medidas sin convencerse mas que a medias. Cuando se ve escaparse la realidad del poder, es jugar un juego peligroso el querer retener las apariencias; el aspecto exterior de vigor puede algunas veces sostener un cuerpo débil, pero lo más frecuente es que termina por debilitarlo del todo. Siguiendo las palabras de un antiguo político de la Restauración, los desgraciados y tardíos renovadores del franquismo ignoran adónde van, pero comienzan a saber que, allí donde vayan, se perderán.

Ante tal incertidumbre, el Régimen tiene que temer todo de la *debilidad* de la oposición y no al contrario. La oposición semi-legal era tolerada esencialmente porque se había comprometido a tolerar lo esencial del orden existente, pero este tratado librado a cuenta de la pasividad de los trabajadores y cobrado en las antecámaras del poder, ha sido violentamente denunciado por la entrada en acción del proletariado. Carrillo podía, en una de sus innumerables demandas de empleo de estos últimos años, decir claramente del aparato de Estado actual que «con algunos retoques podría casi convenir a un Estado democrático burgués»; los estalinistas y el resto de la oposición deben de ahora en adelante intentar salvarse *en tanto que oposición*, responsable y legalizable, y servir al orden sin contrapartida, ministerial u otra, aunque intentando proteger de la bancarrota sus títulos de propiedad ideológicos de representantes de la clase obrera, en el momento en que ésta ataca, no sólo al *gobierno* actual, sino a la *sociedad* existente. Cuando Fraga declara en Vitoria después de los enfrentamientos sangrientos del 3 de marzo que «todos son culpables»,

además de confesar su propia culpabilidad, recuerda a la oposición que en la división del trabajo represivo debe saber organizar el *desarme del proletariado* para que él pueda detener la violencia de la policía y emprender el desarme de la extrema derecha.

Si el desarrollo de la revolución portuguesa ha enseñado algo a los neofranquistas, es que en una situación donde el aparato del Estado se ha debilitado considerablemente por su «renovación», la garantía de los estalinistas y demás oposición no es suficiente para asegurar las condiciones de paz social necesarias a la reestructuración de la dominación capitalista. La pesadilla portuguesa que asedia los sueños de todos los dirigentes, ha venido a aniquilar de un golpe 25 años de esfuerzos de los estalinistas para convencer a la burguesía de que España no podía ser gobernada sin ellos, mostrando como Portugal devenía ingobernable *incluso con ellos*. Pues mientras que en Portugal los burócratas se han desacreditado sosteniendo *todas* las metamorfosis sucesivas del grotesco poder militar, aquí en cambio, no es accediendo al poder del modo que han sido usados, sino no accediendo: las enormes concesiones acumuladas para hacerse aceptar por la burguesía sólo han servido para hacerse *rechazar* por los trabajadores cada vez más masivamente. Esperaban todo de una burguesía «*civilizada*» hipotética, y se han encontrado con un proletariado *salvaje* que les empuja a desesperar de todo.

Los años 1975 y 1976, han sido los años en que, en España, la política ha demostrado ser *un comercio a gran escala*. La organización a lo loco de un espectáculo político «democrático», con la proliferación de partidos fantasma sin ninguna existencia real, sino puramente periodística, responde a la necesidad que tiene el régimen de fuerzas intermediarias para equilibrar su comercio con los estalinistas del partido llamado comunista, evitando una polarización peligrosa que pudiera partir en dos la futura democracia y arruinar el negocio para todos, mostrando demasiado a las claras que los dos collares son del mismo perro. Pero esta ola de pornografía política no ha conseguido, a pesar de todas las facilidades dadas, poner en pie a un partido socialista y a un partido demócrata-cristiano, hasta hace dos años prácticamente inexistentes, porque aunque hubiera muchas ofertas de empleo en tales aparatos políticos semi-vacíos, los burócratas que han acudido no se han puesto de acuerdo en la distribución de las jerarquías y escalafones.

Se ha podido observar cuánta falta de existencias sufrían los burócratas para sostener la puesta en circulación inflacionista de sus palabras de papel. Obligados a sostener las ilusiones que el proletariado perdía, no han podido impedir la realidad de su autonomía naciente, ni siquiera disimularla.

¡Nunca las siglas políticas en su conjunto parecieron tan banales! ¡Nunca todas las pretensiones de dirigir tan irrisorias! ¡Todos estos burócratas impotentes eran tan semejantes que quien haya leído una de sus hueras proclamas, las ha leído todas!

En esta oposición a la busca de una posición, los estalinistas del PCE son los más fuertes en tanto que formulan el oportunismo de la manera más coherente. Ellos también han visto claro en Portugal como podían perder su fuerza al mismo tiempo que los que la querían emplear. Así pues deben hacer todo lo que sea para hacer aceptar a los trabajadores, el franquismo *tal como es*: así resulta que ven policías y guardias civiles «demócratas» y militares «demócratas», con el fin de hacerse aceptar por un ejército y una policía -felicitada ésta en las primeras manifestaciones «por la amnistía y la libertad» y ensalzado constantemente aquél como defensor de la nación- y justificar a éstos cara a las masas, justificarse a sí mismos por tal actitud y finalmente evitar el planteamiento de la cuestión del *rearme* del proletariado. No teniendo un MFA que los invite al poder, los estalinistas han inventado uno con los cuatro fantoches de la UMD. Pero si la UMD es sólo una caricatura, es porque ellos no quieren un 25 de Abril, ni menos aún su continuación.

La oposición teme tanto la debilidad del poder como éste teme la de la oposición, aunque ensayen reforzarse, mutuamente hablando cada uno de la fuerza eventual del otro, es decir de lo que cada uno no puede controlar en su propio lado, unos la extrema derecha y otros la extrema izquierda, y denunciando el peligro que representa. Pero esta versión española de los extremismos opuestos, de la que tanto se ha usado en Italia, está evidentemente dirigida contra el único peligro real, el proletariado, y manifiesta ya claramente el acuerdo concluido en la perspectiva de su represión.

La burguesía española ha descubierto la «democracia» con su crisis económica, porque se trata de hacer soportar *democráticamente* los efectos de ella a los trabajadores, asociando a sus pretendidos representantes a su gestión. Si durante mucho tiempo la burguesía reculaba ante el hecho de pagar con la «democracia» su entrada en el Mercado Común, ahora le es necesario obtener la ayuda de Europa para pagar el precio de la democracia aquí. Esta burguesía modernizada aprisa y de cualquier manera debe en su ingenuidad de nuevo rico, para creer que puede ser salvada por lo que se hunde por todas partes, suponer que en su desarrollo no ha modernizado también *su negación*: más bien al contrario, se confirma que el proletariado sabe ya rechazar lo que la burguesía aún no sabe más que prometerle. Todos los comercios sobre el reparto político-sindical de esta futura democracia no eran más que polvare-

das: habrá bastado que el proletariado *se muestre* para disiparlas al viento. Si es verdad que nada anima mejor un movimiento que el ridículo de aquellos contra los que éste se hace, entonces todos los actores de la actual farsa política habrán contribuido concienzudamente a la revolución española, antes de ser definitivamente tirados a la basura.

Compañeros,

El franquismo cerró un desarrollo capitalista liberal imposible y un desarrollo revolucionario real, pero a la vez abrió las perspectivas de desarrollo de un capitalismo concentrado y planificado creando las condiciones para ello, la primera de las cuales fue la sumisión total del proletariado en un momento en que ésta no podía ser más que total. La guerra civil fue la continuación de la política de las clases fundamentales de la sociedad española, la burguesía y el proletariado, *por otros medios*. Para el proletariado se trataba de la revolución o nada, y para la burguesía, puesta en peligro de muerte, no podía tratarse más que de la contrarrevolución o nada. Habiendo fracasado la democracia burguesa liberal al producir una crisis económica imposible de remontar y un proletariado revolucionario, la única forma posible de dominio social de la burguesía era entonces, *la dictadura burguesa contrarrevolucionaria*. El franquismo fue pues la prolongación de la democracia republicana. La victoria de la contrarrevolución franquista no significó otra cosa que el paso de la forma liberal y anárquica del capitalismo a la forma planificada y organizada del capitalismo de los monopolios y la intervención estatal, la manera como la burguesía a través de los medios estáticos aseguraba su desarrollo.

Los monopolios no crearon el franquismo, sino que éste superó con su intervención la debilidad de la burguesía para crearlos. Así pues el franquismo, desde un principio, desarrollando las fuerzas productivas e incrementado el proceso de acumulación de capital, revistió un significado progresista en el sentido económico; la dominación de la burguesía industrial y financiera fue siempre su contenido social.

El capitalismo español en su fase de reconstrucción de posguerra fue empujado a la autarquía, al ser excluido por el capitalismo mundial, por razones de competencia y de propaganda, en un momento en que el mundo capitalista salía de una guerra y huía de una posible revolución. Así, sitiado, necesitaba a su vez un estado de sitio para imponer a los proletarios, además de su derrota, el hambre que se deducía como consecuencia del aislamiento. La lentitud de la acumulación, con la ideología del orden y la adopción del antiguo conservadurismo agrario y clerical, que eran las lógicas contrapartidas de ella, podían disimular el carácter de clase del franquismo, pero a partir de

los años sesenta, con el desarrollo capitalista moderno bien visible, tal carácter deviene evidente.

Después de haber vencido *militarmente* a su oposición burguesa y estalinista (que por su cuenta había liquidado ya la revolución en su propio campo), durante la guerra civil, después *diplomáticamente* haciéndose reconocer internacionalmente, el franquismo la venció por tercera vez, *económicamente*, realizando su programa de reformas sociales (seguro de paro, enfermedad y accidentes, viviendas protegidas, prohibición del despido libre, jurados mixtos de empresa, convenios colectivos, etc.) y de modernización capitalista.

Para mantener la ficción ideológica de la actualidad de una revolución «democrático burguesa» que les había servido contra el proletariado en 1936, la astucia de la historia ha obligado a los burócratas socialdemócratas y estalinistas a ser campeones del capitalismo liberal cara al franquismo, mientras que éste hacía lo que ellos hubieran hecho y organizaba un capitalismo burocrático aunque sin cesar de invocar los valores arcaicos y las instituciones tradicionales. Proponiendo a la burguesía un programa liberal inaplicable, la oposición le daba sólo promesas, mientras que el franquismo le daba hechos. Y las promesas estaban siempre más atrás que estos hechos. La oposición preconizando un capitalismo liberal arcaico, una vuelta atrás, era históricamente reaccionaria con relación al franquismo. La historia del franquismo es la historia errante y desesperada de una oposición que buscaba ser reconocida por la burguesía. Se comprende por qué su diálogo con ella era un diálogo imposible.

El franquismo, además, no fue nunca un sistema político monocolor, un partido único, sino una *coalición de partidos burgueses*, que estando suprimidas las apariencias democráticas, existían como camarillas, cenáculos o instituciones religiosas, y tal coalición representaba los intereses de la burguesía toda entera. El partido que representaba los intereses inmediatos de clase fue dominante en tanto subsistieron tales intereses: así en pleno avance nazi, fue predominante el partido pro-alemán (la falange) como después al cambiar la escena internacional, lo fue el partido pro-americano, *la democracia cristiana* (la ANCP) con la cual el franquismo cosechó sus mejores éxitos diplomáticos y elaboró su «constitución política». Y cuando los demócratas-cristianos exigían cambios políticos, tomó la iniciativa el *Opus Dei* que protagonizó los cambios económicos más espectaculares.

Así el franquismo no fue la aberración histórica de la que lamentaba su arcaísmo, virtuosamente, la izquierda europea, un islote de irracionalidad en un mundo racional; más bien fue la expresión acabada del *status quo* existente en Europa desde 1945, su cara fea porque verdadera, la cara escondida de la racio-

nalidad espectacular mercante que se construyó sobre el aplastamiento del antiguo movimiento obrero revolucionario, acabado en España con la guerra civil. Todas las clases propietarias del mundo podían identificarse con la longevidad del franquismo, ver ahí la perennidad de su victoria, como pueden reconocer ahora en su muerte *sin herederos*, aunque con tantos pretendientes, el mejor signo de que una nueva época de la guerra social se ha abierto, en la que lo que les sirvió para vencer no puede servirles ya para sobrevivir. Lo único *real* de un rey como Juan Carlos, es la tentativa de cubrir el cambio necesario con la decoración de una continuidad histórica. Pero una imagen sólo sirve si las apariencias se respetan. La verdadera continuidad histórica, es el proletariado el que la reanuda al encontrarse con su pasión revolucionaria, y sus grandes recuerdos históricos.

Compañeros,

Así como el movimiento actual no es una simple peripecia política local, las perspectivas revolucionarias que son ahora las del proletariado español, no se limitan a España. En la Europa en que todo el ruido de las revelaciones de mil escándalos de detalle no pueden cubrir el escándalo central y cada vez más evidente que constituye la supervivencia de la sociedad de clases, estas perspectivas son las de la nueva Internacional que el proletariado de todos los países comienza a construir comunicándose a través de sus actos su experiencia, lo que *descubre* en el nuevo terreno de la lucha de clases que el capitalismo ha dispuesto, y en el cual debe aprenderlo todo y reinventar sus métodos.

Desde que la huelga general salvaje de mayo de 1968 en Francia ha proclamado cara al mundo que a través de sus luchas modernas contra las burocracias que gestionan su alienación, el proletariado había perdido sus ilusiones pero no su ser, el ritmo de la revolución europea no cesa de acelerarse: de pronto cada país entra en escena sin que sin embargo los que le han precedido salgan de ella.

Portugal ha llegado a ser en dos años de impotentes recambios estáticos, un peligro a cada instante, Italia no ha cesado nunca de serlo desde 1969: aquí el «compromiso histórico» realizado *en caliente* ha fracasado lamentablemente, allí sólo escapa a la licuación general no realizándose, al menos oficialmente. En Grecia la polución roe la Acrópolis, mientras que las huelgas salvajes del proletariado socavan la «nueva democracia» de Caramanlis. En Polonia, los amotinamientos obreros del invierno de 1970-1971 anunciaron la revolución proletaria antiburocrática que avanzará desde ahora bajo sus propios colores y ya no detrás de una oposición reformista-burocrática a la Dubcek. Y en Francia la calma precaria es la del centro del ciclón: una tregua en la que arriba todo baja, antes de que abajo todos se levanten. La clase obrera española es la

más experimentada de Europa en la acción directa de la lucha de clases, en la práctica de la autonomía y de *sus enemigos* y cuando entra en el concierto revolucionario, puede considerar el *dar el tono*: para ella no se trata de integrarse a Europa, sino de enseñarle *allí donde quiere ir*.

El proletariado español, que ha realizado la tentativa revolucionaria *más profunda* del siglo, ha tenido que combatir más que ningún otro a sus enemigos burocráticos modernos, sus representantes autonomizados, de los estalinistas al anarquismo de Estado. Así, cuando el programa de toda «la izquierda» es el olvido del pasado *para continuarlo*, el de los revolucionarios no puede ser más que la vuelta a tomar su tarea allí donde la dejaron, *acabar* al fin el pasado para poderlo olvidar. Resumiendo las enseñanzas de la derrota proletaria de mayo de 1937 en Barcelona, Andreu Nin escribía poco antes de ser asesinado por los estalinistas: «La conducta del PCE y de su filial en Cataluña el PSUC, durante las jornadas de Mayo, prueba que estos partidos no representan una simple tendencia reformista del movimiento obrero, sino que constituyen, la vanguardia y el instrumento de la contrarrevolución burguesa» (Manifiesto del Comité Central del POUM). Cuando el proletariado reemprende la ofensiva, vuelve a encontrar a los estalinistas en su puesto de mira: hay que acabar la batalla de Barcelona, en Barcelona y en todas partes.

Al apoyo de su proyecto de «reconciliación nacional», los que en el pasado han enterrado la revolución bajo la guerra civil, afirman frecuentemente que los españoles no quieren otra guerra civil: así pues, esta vez habrá que hacer vencer la revolución llevando la guerra social sin frentes ni retaguardias contra todas las formas de la explotación. Triunfar allí donde han fracasado las masas en 1939: armar la autogestión, y autogestionar la lucha armada.

Para nombrar en su falso lenguaje la subversión proletaria, el espectáculo conduce al pasado el presente amenazador y pretende descubrir el anarquismo repentinamente resucitado detrás del desarrollo de la autonomía obrera, y creyendo sin duda lo que leen en los periódicos, las momias de las diversas CNT salen de sus frigoríficos respectivos para quejarse de que el ministro Martín Villa cara a la renovación «democrática» de la CNS consulte a la USO, a la UGT y a las CCOO del PCE, y no a ellas. Pero las ilusiones sobre el sindicalismo «embrión de la sociedad futura», que no habían sobrevivido en España más que con el atraso capitalista, murieron en el 36 con la integración acelerada de la burocracia cenetista en el aparato del Estado republicano. Ya no es necesario que el cadáver del anarquismo levante polvo.

Más museográficos aún, toda clase de ridículos regionalismos inventados en su totalidad por intelectuales lugareños que encontraban en los restos de

antiguas culturas agrarias, un medio de compensar su incultura y de hacerse valer frente a las burguesías locales, creían que había llegado su hora porque acababa de sonar la de la destrucción del Estado. Pero la cuestión de la autonomía es demasiado importante para ser dejada en manos de autonomistas: la reapropiación antiestática de la vida social por sus propios productores no extrae su poesía del pasado, sino del porvenir. Así pues, no va a ir a buscar sus razones en la ancestral miseria del Estado Central en España, sino que debe encontrarlas en la nueva riqueza proletaria, en la revolución de los Consejos Obreros que creando en sus actos *su propio lenguaje*, disolverá todos los nacionalismos. ¡Dejemos a los muertos enterrar a sus muertos!

Compañeros,

La cuestión social no puede ya ser maquillada en «cuestión vasca» o en «cuestión democrática» cuando el proletariado la coloca en su simple verdad, comenzando a resolverla. Cuando el poder quería que terminase el *mal ejemplo* vasco, ha visto como todos los trabajadores de España *devenían vascos*, como antes fueron asturianos. Pues no son los vascos los que se quieren separar de España, sino los trabajadores los que quieren separarse de la explotación capitalista; no es el pueblo español quien quiere acabar con la dictadura, sino el proletariado que a través de sus luchas comienza a organizar su propia dictadura. ¡Mirad en el 36 las colectividades, las milicias obreras, las patrullas de control! ¡eso era la dictadura del proletariado!

Cuando los trabajadores por sus acciones autónomas comienzan a *desorganizar la supervivencia*, el reino de la mercancía y del trabajo asalariado, se imponen de golpe la inmensidad de su tarea: *organizar la vida*, la comunicación directa *activa*, donde se acaba la especialización, la jerarquía y la separación. Las medidas prácticas que deben tomar desde que empiezan a querer comunicarse sin intermediarios en los primeros momentos de su lucha, contienen ya la necesidad de transformar todas las condiciones existentes, porque para reconocerse y formularse su proyecto no pueden *hacer menos que eso*: si las formas de organización que van a darse irán ciertamente más allá de las tentativas proletarias del pasado, no lo es por algún deseo de extremismo, reservado a las anticipaciones retrasadas de todo el izquierdismo, sino más bien porque las tareas prácticas inmediatas que les prescribe la situación actual *no pueden ser cumplidas más que así*.

En el momento en que la revolución aparece como *posible*, está de hecho *presente* desde hace años en el corazón de la sociedad. En España la autonomía obrera tiene ya historia, sin embargo le toca adquirir una memoria y un lenguaje para saber lo que ha hecho y lo que queda por hacer.

Desde el final de los años cincuenta, mientras que la oposición estalino-burguesa buscaba vanamente ser reconocida por la burguesía, los trabajadores se lanzaron solos, sin jefes y sin programas, en la acción directa, creando sus propios comités de huelga para defender sus reivindicaciones frente a los patronos. De «huelga nacional política» en «huelga general pacífica», todas las tentativas de los estalinistas por utilizar el movimiento obrero como masa de maniobra en sus mercaderías políticas con la burguesía fracasaron tristemente: la recuperación llegaba siempre *después y demasiado tarde* con sus consignas democráticas. A partir de 1963 buscando controlar *desde el interior* el movimiento espontáneo, los estalinistas y sus aliados del momento han ilustrado otra vez más, la vieja contradicción de la burocracia manipuladora que no puede acertar su operación sin matar al paciente: cuando pudieron finalmente echar mano a las Comisiones Obreras, creando comisiones fantasma y coordinadoras para coordinar esas inexistentes comisiones, consiguieron ciertamente el aparato, pero éste estaba *vacío*. Desde entonces no les quedaba otra cosa que reciclar esta burocracia en paro forzoso, en la CNS, con la perspectiva de estar bien colocado para gestionar el «sindicalismo democrático» del post-franquismo: una CNS «con rostro humano». No habiendo logrado sindicalizar desde dentro a los trabajadores, se trata para los burócratas de sindicalizarlos *a traición*, a partir del aparato sindical estático y eso desde luego con la ayuda del Régimen, cuya suerte está suspendida del éxito de una tal operación.

El franquismo, nunca usó una demagogia política «de masas», gobernó prosaicamente con el palo y no con el engaño. De siempre fue una «élite selecta» jesuítica, creada en las disimuladas trastiendas del capital y apoyada en un aparato burocrático-administrativo inmutable desde la guerra civil, y que habituado a la ejecución de los innumerables pequeños trabajos sucios en la más completa impunidad, concentraba en él lo más podrido y parasitario del país. El franquismo no quiso ser nunca un partido de masas, más bien buscó la despolitización de ellas. Pero alcanzado el punto de descenso de la seguridad de su economía, y siendo la crisis social incurable, sus élites empezaron a tomarse en serio la *ilusión política* como medio de asegurar su supervivencia. Carrero subió al cielo y los políticos de la despolitización, el *Opus Dei*, fueron enterrados. Los mejores franquistas, más o menos separados del franquismo, retornaron progresivamente a él. Fue el «espíritu del 12 de febrero». Las clases medias, los intelectuales, los curas, la prensa «progre» antaño franquistas, quedaron a la expectativa.

La fracción más grotesca y de peor aspecto del franquismo, la extrema derecha, amarrada al aparato gubernamental -sobre todo en la administración, el ejérci-

to y la policía- desde la guerra civil, se dio cuenta de que la modernización del franquismo pasaría tarde o temprano por su liquidación. Los servicios secretos del Estado italiano le había dado ya un ejemplo de cómo ganarse un plazo; así pues al día siguiente del atentado de la calle del Correo, su prensa clamaba por la mano dura y el fin de la tolerancia. Con la continua provocación policial al proletariado vasco y especulando con la enfermedad mortal de Franco, pudo hacer fracasar todo el montaje del diálogo incipiente del franquismo con su oposición y conseguir a última hora la ley antiterrorista como si creyeran tener un nuevo «alzamiento» a mano. Tal política, como era de esperar, no resolvió un solo problema a la burguesía y condenó a la impotencia al franquismo, paralizado en la antesala del lecho mortuorio de Franco. Su muerte les dejó, como muy bien dijo el presidente del Gobierno, huérfanos.

Las enseñanzas del otro dictador español, Primo de Rivera, que no dudó en comprar a los socialistas para aplastar mejor al movimiento obrero, han tardado en ser aplicadas. Al existir una gran crisis económica, la colaboración de clases requerida para sobrellevarla es inseparable de una liberalización de la política oficial monopolizada por el franquismo. La burocracia ilegal deviene tan necesaria para el capital como la franquista, necesitando de las dos para garantizar el orden burgués. Así las dos se han visto obligadas a entenderse: el franquismo se vuelve democrático y la oposición franquista. Aun si el franquismo tuvo miedo de apoyarse sobre «la izquierda» al haber la posibilidad de que con el cambio aparente viniera la subversión real, debe ahora hacer todo lo que sea por apoyar a «la izquierda» porque de todas maneras, la subversión la tiene ya, de tal modo que se ve forzado a dar a la burocracia sindical y política los medios de cuadricular todo el terreno social, para poder aislar a los trabajadores revolucionarios como «provocadores». Le es necesario dar argumentos a los llamamientos a la calma de la oposición, dándole *resultados* que la vuelvan más creíble cara a la gran masa de trabajadores, condición para pasar a la represión de los sectores más avanzados, abandonados así a la policía. Es esta carrera de velocidad entre, por un lado la burocracia en formación acelerada y por otro la toma en cuenta por los trabajadores de la unificación de sus luchas, mediante asambleas generales organizando sus relaciones autónomamente, la que va a decidir sobre qué línea de defensa del poder tendrá lugar la inevitable batalla a la cual conduce todo el *processus* anterior. Si el proletariado barre demasiado rápidamente el cordón sanitario de las organizaciones burocráticas, no tendrá frente a él otra cosa que la *última ratio* del Estado: sus fuerzas del orden policiales y militares.

Ya el poder ha querido dar un ejemplo en Elda, Tarragona, Barcelona, Sabadell, Pamplona, Vitoria y Basauri principalmente, porque el cariz *peligro-*

samente autónomo que iba tomando la organización de las huelgas amenazaba extenderse como una mancha de aceite por toda la península. Pero estos primeros ensayos de la contrarrevolución armada no han bastado. Habrá otros. Toda la oposición intenta asustar a los proletarios mostrándoles hasta qué punto están estos desarmados frente a la represión, pero su violencia con las manos vacías, enseña que ya tienen el coraje, y que pronto no les faltará tener nada más que las armas. Cuando las nuevas columnas de la revolución española hagan resonar su antigua consigna de ¡«milicianos sí, soldados jamás»!, entonces se jugará todo otra vez a doble o nada ante el proletariado de Europa.

2. LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SERÁ LA OBRA DE ELLOS MISMOS O NO SERÁ.

«... *nosotros los perturbadores, los que nos levantamos todos los días a trabajar de buena hora, un día, también de buena hora, en vez de ir a la fábrica, iremos con los que trabajan a coger lo que nos pertenece, pese a quien pese, y caiga quien caiga*».
Durruti, carta desde el penal de Puerto Cabras, 13-IV-32.

Compañeros,

Durante estos dos últimos meses habéis hecho bailar a todo el mundo al son de vuestra música. Sabiendo lo que no queréis, estáis empezando a saber lo que queréis. Las *asambleas de huelguistas* y los *piquetes de huelga* os han ayudado en ello; habéis aprendido a hablaros sin intermediarios y a hacer valer vuestras palabras, y eso no os lo perdonarán jamás vuestros enemigos: ya habéis visto cómo el gobierno y los burócratas políticos difamaban a los piquetes e intentaban aislar las asambleas unas de otras y reducir su número y su alcance.

Las asambleas y los piquetes han sido la expresión del momento actual de vuestra *autonomía* y las manifestaciones en las que desbordabais todo cauce preparado contra vosotros, han sido el primer *hecho de guerra* de la lucha de clases que sacude a la vieja sociedad capitalista española que se hunde, donde habéis dejado atrás a todos los que se pretendían vuestros «dirigentes».

Habéis oído silbar las balas de la policía, habéis escuchado las mentiras de la prensa y las promesas huecas de patronos y gobernantes, habéis visto a los barcos polacos boicotear por enésima vez las huelgas de los mineros asturianos, habéis visto a Camacho condenar a los obreros del metro de Madrid por haber cometido el «delito» de llevar su huelga ellos mismos, a Sartorius escupir sobre los obreros de Vitoria graznando sobre su «postura infantil», y a Felipe

González hablar de la necesidad de sustituir a la policía en la tarea de terminar las manifestaciones, a las Comisiones Obreras liquidar la huelga de la Standart en Madrid cuando los obreros reunidos en asamblea la querían continuar, castrar la manifestación de 20.000 personas en Sabadell volviéndola una mera procesión inofensiva, amenazar a los obreros que defendían posiciones de base antiburocráticas en las asambleas de la construcción en Barcelona, cómo los servicios de orden de los partidos atacaban a los obreros que en las manifestaciones no aceptaban ser encuadrados por ellos, cómo la huelga del calzado de Elche y Elda fue boicoteada por una «coordinadora» que se había elegido a sí misma, cómo los estalinistas del PCE renunciaban a convocar una huelga nacional porque por primera vez en su vida se arriesgaban a ser seguidos, cómo muchas figuras del PSOE en Euzkadi son abogados de empresa, cómo la huelga del textil de Barcelona era recuperada y anestesiada desde la CNS, cómo la policía era disculpada por los partidos que se negaban a gritar «policía asesina» en las manifestaciones... Los ejemplos de canalladas en estas jornadas harían una lista sin fin. Todas ellas obedecen a una sola táctica:

La prometida «democracia», es decir, la fusión de las organizaciones político-sindicales de oposición con el franquismo, debe venir cuando el «orden», es decir la sumisión del trabajador al sistema de explotación imperante, sea suficientemente garantizado en las fábricas y en la calle. El ascenso de la oposición dentro del aparato franquista tiene un precio: asegurar el «control» del proletariado y la aceptación del franquismo renovado. A la oposición, para conseguir ese ascenso con rapidez, le interesa el ruido pero no las nueces, pues para ella como para el franquismo es indispensable que no sea puesto en causa ni la más mínima parte de los cimientos del sistema, tal es la naturaleza de su pacto.

Compañeros,

Vuestros enemigos quieren a todo precio volveros mudos y sordos entre vosotros, controlar vuestras luchas en su provecho, buscan someteros porque viven de vuestra sumisión, bien por explotaros, bien por representaros. Y vosotros tendréis que conocerlos a todos, no para rechazarlos o convencerlos, sino para aniquilarlos. Si sois capaces de crear unas *condiciones mínimas* de democracia directa en vuestras asambleas podéis hacer los propósitos de vuestros enemigos imposibles, porque se delatarán a sí mismos en el momento de ser enunciados.

Podemos recordar como ejemplos algunas verdades de siempre en los combates obreros más radicales; pero el éxito sólo lo garantizará la *pasión* de los obreros en su autonomía:

- La asamblea de todos los obreros en lucha es el único órgano soberano y decisorio, donde se eligen si es necesario delegados, revocables en todo mo-

mento. El auténtico representante de la clase trabajadora es la clase misma. La asamblea deberá aprender a destruir todo lo que amenace su existencia autónoma: abusos de cargo, propagación de informaciones falsas, o intencionadamente parciales, acaparación de cargos, golpes de teatro con uso de oradores «expertos» y mártires, liderismos, discusiones y propuestas falaces y largas, etc., tendentes a usar la democracia obrera en el interés particular de partidos políticos y en último extremo para eliminarla.

- Los obreros deben tener la virtud de la falta de paciencia con las comisiones de delegados. Así harán bien en disolver toda comisión cuyas gestiones se prolonguen más allá del tiempo asignado por la asamblea para su realización, y con mayor razón las disolverán si las gestiones se han realizado, pues entonces ya no hay motivo para mantenerlas. Pero lo que es imprescindible es que sepan disolver a la fuerza a todo representante, comisión o coordinadora organizados al margen de sus asambleas, o sin credenciales directas de su elección, o cuya actitud despierte sospechas.

- Toda comisión de delegados, no debe tener más de un tercio de miembros afiliados o simpatizantes a una organización cualquiera y en ella deben ser mayoría los obreros jóvenes, así como debe evitar al máximo tener obreros reelegidos, pues es bien sabido que todo el que lleva frecuentemente responsabilidades de otros, termina por coger gusto a la cosa y acaba queriendo ser «dirigente». Así pues reelegir a una persona es hacerse un enemigo.

- Toda medida tendente a concentrar decisiones para todos en manos de unas pocas personas, o que refuerce el papel dirigente de unos y la pasividad de los más, o que favorezca a organizaciones estatales como la CNS, los ayuntamientos, debe ser saboteada.

- Todo el que diga que los policías también son obreros debe ser tratado como un policía, todo servicio de orden fuera de la furia obrera desatada, debe ser tratado de provocador y policíaco, todo intento de terminar una huelga fuera de las asambleas de huelguistas, refrendadas por las asambleas de fábrica, debe ser considerado como traición y esquirolaje.

Sólo la construcción práctica de la comunicación directa dentro de las fábricas y entre ellas, mostrará en su elemento las necesidades inmediatas de la existencia revolucionaria de las asambleas obreras ocupando el espacio social, es decir, de los Consejos Obreros y desvelará el proyecto total de la democracia realizada que está contenido en ella. Lo que decide cada vez es la capacidad de las asambleas de trabajadores en organizar la autodefensa de su diálogo contra todas las infiltraciones, manipulaciones, falsificaciones, es decir en primer lugar contra los estalinistas, pero también contra todos los socialdemócratas,

sindicaleros e izquierdistas, dado que cada cual por su lado, intentaran salvar todas las condiciones de existencia de la sumisión a una dirección exterior a ellas.

La definición necesaria y suficiente del Consejo moderno -para diferenciarlo de sus débiles tentativas primitivas aplastadas siempre antes de haber podido seguir la lógica de su propio poder, y haberle conocido por ello-, es la realización de sus tareas mínimas; las cuales no son nada más que el arreglo práctico y definitivo de todos los problemas que la sociedad de clases es actualmente incapaz de resolver. La mayor fuerza productiva es la clase revolucionaria. El mayor desarrollo de las fuerzas productivas actualmente posible, simplemente es el uso que puede hacer de ellas la clase de la conciencia histórica, en la producción de la historia como campo de desarrollo humano, dándose los medios prácticos de esta conciencia: los futuros consejos revolucionarios en los que la totalidad de los proletarios tendrá que decidir de todo.

Compañeros,

No tenéis que buscar ninguna garantía de vuestro poder fuera de vosotros. Mirad lo que habéis hecho: ese es vuestro poder. Incompatible con la existencia de cualquier otro. Pero no os quedéis en una posición recién conquistada. No hay victorias parciales que no sean en poco tiempo derrotas. Destruid a vuestros enemigos. Que vuestra rabia vengadora se convierta en rabia de vivir. La libertad es el mal que cura todos los males. La emancipación social del trabajador asalariado es la emancipación de la sociedad del trabajo asalariado. Y recordad estas sentencias del proletariado moderno:

La humanidad no será feliz hasta que el último burócrata no haya sido colgado de las tripas del último capitalista.

Los que hacen las revoluciones a medias no hacen más que cavarse una tumba: no tenemos nada que perder si no son nuestras cadenas, ¡y todo un mundo que ganar!

¡VIVAN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE TRABAJADORES!
¡VIVAN LOS PIQUETES DE HUELGA!
¡ABAJO LOS SINDICATOS! ¡ABAJO LA SOCIEDAD DE CLASES!
¡VIVA EL PODER ABSOLUTO DE LOS CONSEJOS OBREROS!

Los incontrolados, Marzo 1976.

Manuscrito encontrado en Vitoria (1977)

CÓMO EL FRANQUISMO DEVIENE DEMOCRÁTICO.

«Cuando basta la legalidad para salvar la sociedad,
la legalidad; cuando no basta, la dictadura.»
Donoso Cortés, Discurso del 4-I-1849.

Compañeros,

La historia moderna ha trastocado a la burguesía española los términos de la alternativa que le formulaba hace más de un siglo Donoso Cortés: cuando la dictadura no basta ya para salvar su dominio sobre la sociedad, la democracia entonces. Hay que resucitar la democracia para que, llegado el momento en que la dictadura se pierda, la revolución no se encuentre.

Con la constante profundización de la crisis social y el avance salvaje de su solución proletaria, el centro de gravedad de la realidad se desplazó tan lejos de lo que pretendía representarla, que en la esfera del poder todo se ha visto como desequilibrado, y cada escalón de la representación jerárquica en vilo. Los actuales detentores del poder estatal, para negociar su acuerdo con los burócratas de la oposición, han debido contradecirse con su propia legalidad, recuerdo de los tiempos en que podían permitirse el desprecio de las apariencias, que hoy deben organizar a toda velocidad. Los franquistas, que tanto tiempo han humillado con su triunfo al proletariado, han tenido que humillarse ahora para que el proletariado no triunfe y los burócratas de la oposición que han corrido a depositar la fianza de la nueva legitimidad democrática del poder, han tenido también que correr tras su propia legitimidad, dar la cara, lisonjear a los trabajadores y rebajarse ante ellos para ser, si no aceptados, al menos no rechazados. Durante este último año de carreras por la estabilización democrática del capitalismo español, el partido del orden -franquistas y oposición- pudo parecer tan incoherente como el propio orden, fundado entonces sobre una mezcla cómica de legalidad irreal y de realidades ilegales. Pero sin embargo, se ha mostrado profundamente unido en la práctica, por la división del trabajo

represivo -unos desde fuera y otros desde dentro de la clase obrera- contra la autonomía en marcha.

Si contemplamos, sin ilusionarnos, la verdad del pasado reciente, comprenderemos rápido el futuro inmediato que se avecina. Cara a la oleada de huelgas del invierno del 76, las múltiples fracciones de un régimen en desagregación y de una oposición en aglomeración se han visto obligadas a salvar, juntas y sin perder tiempo, la realidad del orden capitalista cuyas futuras apariencias políticas se disputaban. Cuando el pasado contrarrevolucionario se deshace en todas partes, allí donde se dio su unidad, encima de los cadáveres de los revolucionarios de 1936, es donde muestra mejor en su devenir putrefacto la verdad de su ser: su unidad real se descompone en sus elementos primitivos, quienes uno por uno conocen un último sobresalto de falsa juventud, su división aparente se disuelve por la unificación a la que la revolución obliga a sus enemigos. Cuando el franquismo deviene democrático, todo lo que sucedió ante el proletariado (sindicalismo, anarquismo, estalinismo, franquismo) debe serle opuesto ahora simultáneamente. La demasiado evidente irrealidad de esta democracia política que nos cuelan, nacida senil, cuando se trata de lanzar al mercado las diversas variantes de programas gubernamentales, entre los que el ciudadano será llamado a escoger, consiste en que el margen de maniobra social de los dirigentes, o pretendidos tales, es tan reducido que si presentan ligeros matices plausibles de seudoelección, enormes dificultades les llueven. De tal forma que lo que franquistas y oposición quieren hacer pasar por una grandiosa renovación histórica, aparece sin poder disimularse como una sórdida acumulación de regateos, apaños, golpes bajos y maniobras efectuadas febrilmente en una atmósfera de demagogia y decrepitud.

Lo que hace diez años hubiera sido una prueba de fuerza de parte de la burguesía española, mostrándose capaz de liquidar su pasado terrorista para dominar sin estado de excepción, manifiesta hoy su debilidad y sus temores en el momento en que debe preparar su porvenir represivo. «El gran abrazo de toda la familia española», como decía Franco, y «la reconciliación nacional», como decía Carrillo, se juntan en su común verdad contrarrevolucionaria; y como tras tales abrazos suelen haber celestinas, una de ellas Tierno Galván, bordará el sentido de la efusión: «El Gobierno ha presentado un proyecto inteligente. Un pacto político con la oposición podría disminuir las protestas sociales y económicas que se arriesgan a transformarse en revuelta contra la forma institucional del Estado», terminando con una llamada a un «frente único de todos los partidos democráticos» y del régimen para salvarla (declaraciones del 12 de agosto del 76).

No será la primera vez ni la última que el poder dominante busque su salvación en la organización de elecciones para darse el tiempo de salir de «una de las más grandes crisis económicas, sociales y políticas del siglo XX». Si bien es verdad que «las crisis no se resuelven sino por saltos espectaculares en adelante», este gran salto en adelante del espectáculo no podría ser asegurado con la celebración de elecciones, sino llegando en profundidad a una falsificación general de las relaciones sociales. Aparte del subdesarrollo de las técnicas de la mentira en la información y la cultura, que será pronto remediado -basta ver la gran creación de empleos en el sector- faltan las propias raíces de la falsificación social, dada la poca presencia de representación obrera. La formación de sindicatos ha fracasado, y no por falta de disposición del gobierno y la patronal, sino por la negativa de los trabajadores para sindicarse. A principios de este año la suma total de afiliados al sindicalismo, dejado atrás por la ofensiva proletaria, CCOO, UGT, CNT, USO, STV, era inferior a 200.000, de los que hay que descontar una buena parte de estudiantes y cuadros. ¡Qué ridícula situación en la que lo arruinado -la CNS- se abandona porque no sirve, y lo que podía servir -los sindicatos de la oposición- no resulta porque no se sostiene!

Así pues, compañeros, una forma de la contrarrevolución termina de envejecer y cuando intenta rejuvenecerse por una tardía renovación democrática, como hubiera dicho hoy el viejo Hegel, el abigarramiento político no puede hacer otra cosa que repintar gris sobre gris la grisalla crepuscular de este reino de las sombras.

Compañeros,

Cuando la situación a la muerte de Franco gritó «¡hagan juego!» a los capitalistas, los trabajadores respondieron con sus huelgas en «¡no va más!». Los neofranquistas intronizados por Juan Carlos, que habían creído aún tener tiempo para acordar a su hora y bajo sus condiciones un lugar bajo el sol de la democracia a los burócratas de la oposición, tuvieron que aceptar desde el principio la ayuda que la oposición no podía sino ofrecerles, ayuda que efectivamente le proporcionó y que fue causa determinante en la liquidación del movimiento huelguístico más importante desde la guerra civil.

Desde la entrada en funciones del primer gobierno de la monarquía, unos 100.000 trabajadores estaban en huelga principalmente en Madrid, Cataluña y el País Vasco. El movimiento se extiende a la vez que se radicaliza, poniendo en peligro, con la práctica de asambleas y la formación de piquetes de extensión de la lucha, el legalismo de los burócratas sindicalistas, y desbordando a todas las organizaciones; en enero la huelga está presente en muchos puntos de España, pero será en Madrid donde la autonomía obrera libre su primera gran

batalla en la que actuarán 320.000 huelguistas de la construcción, del metal y de servicios públicos principalmente. El ministro de Relaciones Sindicales pedirá una tregua a la que responde un acuerdo USO-CCOO-UGT diciendo que «no se trata de frenar ni de radicalizar las huelgas sino de encontrar una salida negociable». Los estalinistas, que sin poder controlar las huelgas pueden al menos bloquearlas, serán sus principales liquidadores. Serán los primeros en aceptar las promesas de los patronos, los patronos los primeros en no cumplirlas, y ellos en aceptar su incumplimiento. El mismísimo Ariza, despedido de Perkins, pedirá a sus compañeros que «no alteren la normalidad del trabajo» ilustrando caricaturalmente la impotencia de las Comisiones Obreras en la utilización de las huelgas como fuerza de apoyo a la política estalinista y su conciencia de tal impotencia. Al conseguir hundir la huelga más importante -Standard Eléctrica- con falsas informaciones, votaciones trucadas, acuerdos no votados, delegaciones no representativas, y todo lo que su larga práctica de la maniobra les ha enseñado en el arte de la mentira, lograban romper el frente huelguístico y desmoralizarlo: primero las grandes empresas del metal, luego las pequeñas, luego todas las empresas en huelga. El gobierno militarizaría Correos, la Renfe y el Metro, y los despidos, sanciones, detenciones y amenazas harían el resto. Según el principio de «un repliegue ordenado para acumular fuerzas posteriormente» apoyado con las artimañas que se sabe, una a una caerían todas las huelgas: en el Bajo Llobregat, en Málaga, en Valencia, en Vigo, en Asturias, en Sevilla, en Valladolid, en Barcelona, en Tarragona, en Elda, en Alicante... Las huelgas que resistieron como Laforsa en el Bajo Llobregat, las tres factorías de Michelín, Roca de Gavá, Vers, Hutchinson y Terpel en Madrid, etc. quedaron aisladas y condenadas a perder por desgaste. Y en Vitoria, donde el movimiento de las asambleas de huelguistas había llegado ya al punto más allá del cual todo es revolución, donde toda recuperación se desarma y donde sólo las balas lo pueden detener, las armas de la policía dijeron la última palabra de la democracia, y las lamentaciones moralizantes de la oposición dieron el tono. Las barbas en remojo de todos los mantenedores del orden burgués se habían salvado de ser afeitadas.

La batalla que comenzó en Madrid y terminó en Vitoria es el primer choque del proletariado contra la oposición, en adelante adosada al franquismo: el reparto de las tareas represivas se estableció, y la policía hizo lo que las mentiras y maniobras de los burócratas no pudieron hacer. Camacho, hablando de la manía de las huelgas recuerda oportunamente a Jesús Hernández hablando de la «manía de la colectivización y de las incautaciones». La vuelta al trabajo en Madrid y en el resto de España fue una victoria muy costosa al quedar el

dique sindical de la oposición zapado y resquebrajado. Los estalinistas tendrán, en consecuencia, que abandonar su proyecto de adquirir la CNS «con los ascensores en marcha», intermediario inútil para todos, dejado sólo con su inoperancia. Y debiendo correr por la base tras la recuperación de las asambleas, renunciarán a tomar desde arriba el monopolio de la representación obrera, teniendo que acompañar a la UGT y a la USO cuya eficacia liquidadora fue bastante menor, en la negociación con el gobierno y los patronos. Y aunque recuperaron el sindicalismo paralelo, de los comités formados en cada empresa y de las comisiones negociadoras montadas fuera de las asambleas y desde lo alto, de nada les sirvió, pues este sindicalismo paralelo, al estar obligado a pasar por las asambleas, no se sostenía por mucho tiempo cuando éstas cesaban, y cuando se multiplicaban, su mentira debía triunfar en todas si no quería perder en una todo lo que ganó en las demás. Pues las asambleas de huelguistas, por muy imperfecto que sea su control de la lucha, contienen el proyecto de una autonomía total de la decisión y de la ejecución que tiene que organizar la desaparición de toda representación exterior. En conclusión, el triste papel que jugará la oposición político-sindical a lo largo del actual período histórico, será el de sostener como sea al gobierno, incluso en detrimento de sí misma, sin jamás poder garantizar su tranquilidad.

Compañeros,

La entrada en acción es a la guerra lo que el pago al contado es al comercio. La batalla de Vitoria del 3 de marzo fue ese momento de la verdad donde todos los protagonistas de la guerra social tuvieron que parecer efectivamente lo que eran. Los trabajadores, sin jefes, se lanzaron valientemente a la lucha mientras que, ante esta innombrable autonomía, tanto patronos como burócratas enterrábanse en el inmovilismo: unos esperando, aunque sin creerlo, que aquélla reconociese la mediación del sindicato vertical, cuyos «enlaces» eran obligados a dimitir por los trabajadores, los otros sin esperar ya que pudiera servirles el reconocimiento de la mediación de su sindicalismo y limitándose a impedir que su bastión, la factoría Michelín, se sumase a la huelga. En dos meses de organización autónoma de la lucha (entre asambleas cotidianas fábrica por fábrica y asambleas comunes dos veces por semana, sin estar éstas habilitadas para tomar decisiones que no hubiesen sido antes aprobadas en asambleas de fábrica), los trabajadores de Vitoria reunieron las condiciones prácticas de su conciencia ofensiva posible; al adoptar por principios fundamentales sin discusión posible «*todo el poder de la clase obrera para la asamblea*» y «*todo dentro de la asamblea, nada fuera de ella*» tomaron la iniciativa que puede conducir a todo, es decir, a la revolución, que no debe dejar nada exterior a ella. Pero

los obreros, mientras, no llegaron a reconocer hasta ese punto el alcance de su desafío a toda la sociedad existente, y se disimularon a sí mismos el sentido total de su autoorganización, viendo en ello solamente un mejor método de defensa. Sin embargo, lo que aún ignoraban, el Estado debía saberlo ya, y la burocracia sindical que buscaba constituirse aún mejor. En el movimiento que arrastra a los trabajadores de una empresa, para desmentir a los que hablan en su nombre y prevenirse contra las maniobras hasta imponer el control directo de su asamblea general, estos se apropian de una necesidad nueva, la necesidad de comunicación, y entonces, lo que al principio parecía el medio se convierte en el fin: la comunicación directa supera a la lucha defensiva contra las representaciones, aboliendo las condiciones de separación que vuelven necesaria la representación. Por eso los representantes sindicales podían decir que se identificaban con los fines perseguidos pero en absoluto con los medios empleados: en efecto, las necesidades de la lucha conducían irresistiblemente a los trabajadores al olvido de *reivindicar*, para así tomar lo que necesitasen. Este proceso tenía que ser interrumpido donde estuviese más avanzado: Vitoria había llegado a ser demasiado ejemplar respecto de lo que puede hacer el proletariado sin partidos y sin sindicatos, en el momento en que la promesa de concederlos se consideraba como la respuesta a todas sus necesidades. El 3 de marzo la huelga era general en la ciudad, y las manifestaciones en el centro de la ciudad asistían a la construcción de las primeras barricadas y a los primeros enfrentamientos violentos donde la policía usa las armas. Las ilusiones pacifistas de los comienzos se disiparon. La policía se replegó esperando refuerzos. Provisionalmente dueños de la calle, los trabajadores se contentaron con reforzar el sistema de barricadas, y lo que es peor, llegaron tan lejos en su ingenuidad que se presentaron, como si nada pasara, en la asamblea prevista en la iglesia de San Francisco. Para quien no guste de santificar ideológicamente lo que todavía era la *debilidad* de la organización autónoma, denunciando a destiempo a la policía, que como era muy de prever hizo su trabajo, hay que decir que sobre todo fue la inconsciencia de los trabajadores la que les libró *en las peores condiciones* a la capacidad de tiro de sus enemigos: reunidos en la iglesia para escuchar otra vez los apaciguamientos legalistas de los cantamañanas que aseguraban que la policía no entrará «porque las autoridades no lo permitirán», al tiempo que la encerrona se cernía sobre ellos, a pesar de las valientes tentativas de diversión de los que se quedaron fuera. La policía pudo recoger de este modo la iniciativa que los trabajadores le habían cedido. Escogiendo la vía de la decisión por las armas, el Estado corría el *riesgo* de poner fin a la primera forma espontánea de la ofensiva proletaria y apostaba, imponiéndole a tiros la conciencia de lo

que estaba en juego, a que no sabría organizar rápidamente sus propias armas y su respuesta. El franquismo corrió tal riesgo porque lo calculó junto con la oposición: las burocracias sindicales y políticas dejaron que la represión llegase y pasase, sin llamar a la huelga nacional general, puesto que por primera vez en su vida se arriesgaban a ser escuchadas y seguidas, si no precedidas (como fue el caso de varias huelgas generales locales como la de Pamplona). En la misma Vitoria, la violencia desesperada de después del tiroteo daba cuenta de que la determinación de los trabajadores, aunque inorganizada y sin medios, no había sido aniquilada. Pero la rabia de las acciones destructoras únicamente expresa, y bien claro, la rabia de no haberlas hecho antes y con más eficacia. La única superación posible de la lucha consistía en que el motín se transformase en insurrección, lo que significaba llamar a la revolución en toda España (el Estado fue perfectamente consciente de ello y se apresuró a cortar las comunicaciones telefónicas de Vitoria con el exterior). Los proletarios de Vitoria no habían llegado tan lejos en ese terreno: la propia comunicación *entre ellos mismos*, cuya autodefensa no imaginaron, se encontró completamente desorganizada por la represión. Fue necesario que la pólvora hablase para que las asambleas callasen: el silencio reina en Vitoria. La Comisión de trabajadores de la factoría de Forjas Alavesas que lanzó la huelga el 9 de enero escribió en su análisis de la lucha: «No hay mejor forma de resolver el conflicto que desarmar a una de las partes. Hemos vuelto al trabajo sin conseguir todas nuestras aspiraciones. Primero porque nos obligan las metralletas. Y segundo, nos han desarmado, entendiendo como arma fundamental la *asamblea*» (*Valoración de la huelga de Forjas Alavesas*). Como cada vez que toma la iniciativa del ataque frontal, el Estado obligó a los trabajadores a transformar el propio método de guerra de ellos en el suyo. Y para *dominar* este método antes de ser dominados -como en la guerra civil- con el fin de utilizarlo sin reproducirlo en nada, como deben hacer con todo lo que se apropian en este mundo, harán falta todavía para la clase obrera otros muchos Vitoria.

Compañeros,

El primer gobierno de la monarquía murió en Vitoria. Su nacimiento no fue debido al común acuerdo de los pretendientes a la herencia de Franco, sino a la negociación del entonces presidente Arias con los arribistas más hábiles y veloces del momento. Los franquistas no incluidos, disconformes con el partido del Gobierno, escogieron cada uno su propio partido, atrincherándose en las parcelas del poder que habían podido amasar en las instituciones estatales tras el reparto ocurrido tras la muerte de Franco, y si bien no podían dirigirle desde allí, podían al menos detenerle. Para transformar las instituciones fran-

quistas sin convulsiones, modernizar el Estado con éxito y levantar la economía, el Gobierno tenía que reorganizar al franquismo como partido gubernamental, componiendo sus fragmentos renovables y ganar la colaboración de la oposición cediéndole una parte de responsabilidad en ello, sin amenazar los intereses de las fuerzas presentes en el aparato estatal. Había que ganar nuevos amigos fuera y evitar que se volvieran enemigos los de dentro.

El hombre aparentemente fuerte del momento, Fraga, hizo lo que hacen los enanos ante las grandes ocasiones: tropezar y despeñarse. Se fabricó, por vía de nombramientos desde sus ministerios, un simulacro de partido personal y quiso imponer sus condiciones a todo el mundo negociando por separado. Pero para imponerse le faltaba fuerza para ganar tiempo y astucia para utilizarlo. El movimiento de huelgas había llegado mientras tanto al punto de poder adelantar de un día a otro toda su realidad subversiva: a finales de marzo del 76 el órgano oficial de la democracia oficiosa, *Cambio 16*, escribía: «después de Vitoria todo es posible», y hacía votos por un nuevo gobierno que supiera ponerse de acuerdo con la oposición para «obtener a cambio una tregua en las calles y en las fábricas». Fraga, al detener a Camacho y a algunos otros, buscaba para su desgracia excusas en vez de remedios, reprochando a la oposición el no haber conseguido detener la realidad, como si ésta no hubiese tenido que *seguirla* para no perder la posibilidad de controlarla.

Al pretender comprar la oposición a crédito, no le proporcionó ningún medio de actuación eficaz, porque sabía él que de todas formas ésta debía de trabajar de balde cuando todo vacilaba ante el movimiento de huelgas. Así quedó en su centro sólo, entre los franquistas unidos contra él para salvar su Estado y la oposición aglutinada en la Coordinación Democrática para negociar esa salvación con quien quisiera escucharla, y ocupar los «vacíos de poder» que la inminente caída del Gobierno pudiera dejar. La desmovilización del movimiento de solidaridad con Vitoria y del 1º de Mayo, fue el último trabajo sin cobrar de la oposición, que proporcionó unas semanas más de vida al Gobierno de Arias y la estocada final al movimiento de huelgas, quien perdió la última oportunidad de unificarse y reemprender el ataque. El fracaso inaugural de Fraga y el equipo de Arias, marca el fin de las ilusiones autoritarias del franquismo. En adelante éste tendrá que tomar en serio la democracia. Como lo declarará más tarde el nuevo presidente del Gobierno, Suárez: «De una parte hay una oposición muy activa, muy inteligente, pero que no tiene la experiencia del poder, de otra hay gobernantes que no tienen la menor idea de lo que es la vida de los partidos. Se trata de hacerles trabajar juntos, todo se centra en eso.» (*Cambio 16*, 6-12 de septiembre del 76).

A causa de la violencia obrera incontrolada, la democracia perdió su primera batalla antes de existir, tendría en lo sucesivo que reconstituir fuerzas en su retaguardia, sacrificando todas las posiciones peligrosas y vulnerables que le legó el sistema de defensa anterior. Toda batalla perdida es un factor de debilitamiento y desagregación: la necesidad más urgente es concentrarse para hallar en tal concentración un orden, nuevos bríos y confianza. Esta concentración sólo puede realizarse alrededor de las fuerzas menos afectadas por el combate; no podría tratarse pues sino de las organizaciones democráticas de la oposición que el capitalismo español aprendió a considerar de algún modo como su reserva estratégica. Pero como lo ha demostrado Clausewitz, «Tanto las reservas tácticas son recomendables, tanto la idea de guardar como reserva estratégica fuerzas que ya están preparadas es contraria al sentido común. La razón está en que las batallas deciden el cariz de la guerra y que el empleo de reservas tácticas precede a la decisión, mientras que el de reservas estratégicas la sigue». Y de hecho, esta última carta que el capitalismo quiso guardar en la manga, tuvo que ser jugada desde el comienzo de la partida: entre los trabajadores y el Estado (es decir, sus fuerzas del orden, militares y policiales) sólo existía el cordón frágil y suelto de las burocracias político-sindicales para soportar el primer choque de la ofensiva obrera. Así pues, en realidad, éstas han constituido más bien avanzadillas, expuestas en terreno abierto, y las fuerzas represivas del Estado, su reserva táctica cuyo empleo debía decidir el resultado de la batalla. Los asesinatos de la policía a lo largo de la «semana sangrienta» fueron realizados en el momento en que la burocracia, muy usada por dos meses de maniobras y mentiras, iba a ser barrida. Había que asustar a los trabajadores para llevarles a las razones moderadoras de la oposición. El 13 de marzo del 76, el semanario *Triunfo*, órgano del estalinismo amplio, publicaba: «Es indudable que la clase trabajadora debe recoger también sus enseñanzas de estos sucesos. La primera de ellas es que el recurso a la violencia, además de ser éticamente condenable, lo es políticamente, pues le está haciendo el juego a la reacción... Todos los que tengan en sus manos la posibilidad de influir en una clase obrera que está privada de partido, privada de sindicatos y desatendida continuamente en sus reclamaciones, debe hacerlo en el sentido de recomendar calma y sosiego. Si las huelgas, las manifestaciones o las reuniones se convierten en motines, la clase trabajadora tiene todas las de perder». El recurso a la intimidación fue uno de los argumentos más usados por los burócratas para terminar con las huelgas en la semana siguiente. Los patronos fueron quienes más provecho inmediato sacaron de la victoria de los sindicatos seudo-clandestinos sobre los huelguistas. Primero, mantenien-

do los despidos y sanciones, luego, introduciendo una legislación específica contra los piquetes de huelga, y después, logrando la suspensión del artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales, que les concede el despido libre. Los sindicatos dejaron pasar las tres cosas. Finalmente, los patronos abandonan la CNS dotándose de sindicatos propios dispuestos a un mañana dialogador con los sindicatos obreros, cuyas capacidades de control, de división y de falsificación deben desarrollarse al máximo y pronto para hacer frente al próximo e inevitable movimiento de masas. Se necesitan dirigentes «que sean tan capaces de convocar al paro como de ordenar la vuelta al trabajo» (Rivera Rovira - Presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona); y hay recomendaciones especiales: si el patrono catalán Duran Farrell fuera obrero, según él, «sería de Comisiones Obreras». Por su parte los sindicatos, no van a tener dificultad en convencer de sus buenas intenciones a los capitalistas, aunque tengan mucha en hacer que los trabajadores las hagan suyas: por 25.000 ptas. de cuota de inscripción, jefes de personal y gerentes de más de cien empresas del país pudieron ver y oír en directo a los dirigentes de las «ilegales» CCOO, USO y UGT... Todos ellos insistieron en el diálogo: «los trabajadores no hacemos las huelgas por placer», «los trabajadores no queremos hundir a las empresas», «la lucha de clases no excluye el diálogo sino que lo presupone»... Nadie quería espantar a los empresarios, y por ello uno de los empresarios presentes exclamó: «¡Que pena que los trabajadores que están en la empresa no piensen lo mismo que los que están en esta sala!» (*Cambio 16* - 24 a 30 de mayo del 76). Pero no basta con querer servir, hay que poder ser útil, hay que estrechar lazos para evitar sorpresas como Vitoria, la aparición de formaciones revolucionarias «desconocidas» y el desbordamiento de las burocracias sindicales. En las grandes capitales se crearán coordinadoras de sindicatos (como la COS en Madrid) dispuestas a ocupar el hueco que la CNS nunca llenó, y los estalinistas renunciarán a transformar la CNS en una Intersindical a la portuguesa; los grupúsculos de todo pelaje entrarán en masa en las diversas centrales sindicales.

El Gobierno plegó y la oposición se replegó para después preparar juntos el contraataque. El segundo equipo neofranquista, entrará con el programa de organizar esta misma progresión democrática en el terreno social puesto peligrosamente al descubierto por el movimiento de las asambleas que lo revolvió de arriba abajo, aunque sólo lo haya ocupado parcialmente, y al que se trata de reconquistar con nuevos medios y nuevos aliados. «Los trabajadores han tomado la empresa como campo de operaciones» (J. Garrigues Waiker), y de esta concentración exclusiva en su terreno directo de unificación es de donde tendrá que *distraerles*.

Compañeros,

En España, podemos decir que se plantean concentrados en el tiempo todos los dilemas actuales de las clases propietarias del mundo, que al no poder salvar la economía, ni ser salvados por ella, discuten acerca de la manera de administrar su fracaso y de ser posible hacerlo rentable para fortalecer el Estado, disfrazándolo de «crisis energética» o de «crisis económica». Frente a la crisis de la economía, se trata aquí como en todas partes de persuadir a los trabajadores por intermedio de los sindicatos y de los partidos, de que la economía es la alienación natural que conviene administrar lo mejor posible, y no la alienación histórica que hay que superar lo más pronto posible; pero como el desarrollo de la crisis del fenómeno económico en su conjunto se ve acelerado en España por una crisis económica particular, y sus efectos multiplicados por la ausencia de control sindical, las dificultades en obtener la adhesión de las masas a la austeridad dramatizada están considerablemente aumentadas, y los plazos para instalar «el desarrollo de tipo nuevo», en cuya búsqueda todos los poderes modernos parten en campaña, aún más acortados. Ante todo, la economía española necesita un nuevo «plan de estabilización»: podrá tener préstamos del capitalismo internacional, pero sobre todo, debe buscar las condiciones de rentabilidad cara a los trabajadores, por cuanto cada huelga, a poco que se prolongue, se convierte en asunto de Estado, obligándole a intervenir sin reparar medios disuasorios y planteando al mismo tiempo la cuestión de la autodefensa. La oposición propone como remedio la democracia política, es decir, que le dejen sitio en el Gobierno no sólo para respetar la economía, como ha venido haciendo hasta hoy, sino para salvarla logrando un pacto social; por consiguiente, está dispuesta a dejar de no atacar la economía si se le deja defenderla. Pero tal sofisma no puede engañar al gobierno, que ve a la oposición hacer todo lo que puede contra la movilización y radicalización de los trabajadores, y que sabe que si no hace más es porque no puede. Así el segundo gobierno de la Monarquía deja a la oposición ilusionarse con la promesa de alguna migaja electoral, mientras se consagra a la adaptación controlada de las instituciones. Y no es por una pretendida traición de la oposición por lo que el neofranquismo se ha estabilizado. Primero, porque la oposición no estaba en disposición de impedirlo, después, porque no quería otra cosa que lo que finalmente se le va a conceder, aunque hubiera deseado poder darse las apariencias de haberlo conseguido tras gran lucha, e incluso de esto ha tenido que perder la esperanza: habló de república, luego de un rey más demócrata, luego de un gobierno constituyente de unión nacional, luego de algún ministerio y hoy de que simplemente se le deje presentar a elecciones.

Hay que ver que con la acción del gobierno Suárez y la pasividad de la oposición, el régimen ha efectuado su retirada en orden con el mínimo de pérdidas. Y al conseguir, de este modo, guardar el control de la situación política, ha preservado sus posibilidades de volverlo a tomar en todo el terreno social. Combinando hábilmente la tolerancia respecto a los detalles y la represión sobre lo esencial, el poder ha mantenido el contacto con el proletariado que le apresuraba, evitando así que sus movimientos se acelerasen y se volviesen pronto en una precipitación desordenada que le hubiera obligado, a causa de la desagregación interna consecuente, a sacrificios bastante importantes. Contrasta la firmeza inesperada del Gobierno Suárez - Gutiérrez Mellado con la cobardía confusa de la oposición, cuya prudencia era el punto más excelente de su coraje y la oscuridad de los regateos lo más claro de su prudencia. Al volverse la política asunto de cálculo, bastó al Gobierno negociar separadamente con sus principales componentes para deshinchar el *bluff* de su «coordinación democrática»: cada uno temió entonces perder si quedaba asociado a los otros, o al menos sacar una menor ventaja, y la rivalidad que resultó de esta disparidad inevitablemente les dividió. Pero incluso sin esto, Coordinación Democrática tenía que dejar de existir de hecho, desde el momento en que el Gobierno la reconociera con los estalinistas inclusive, y tal reconocimiento quedó sancionado con la apertura de diálogo de Suárez. El desenganche de los partidos inútiles -los maoístas y los pequeños grupos accidentales, como el de Trevijano y los Carlistas- no será un precio que se pague sino un lastre que se tire. La oposición remodelada acudirá más presentable con su nueva «comisión negociadora» a preparar junto con el Gobierno la liquidación de las huelgas de otoño, disipando sus últimos sueños de gloria y recordando con nostalgia ¡cuán bello era ser demócrata bajo Franco!

Compañeros,

El proletariado revolucionario existe, y la larga serie de ejemplares huelgas del otoño, en el País Vasco, en Barcelona, en Sabadell, en Tenerife, en Valencia, en Madrid, en León, en Gavá, etc., lo demuestra. El proletariado, que ni reposa ni deja a nadie reposar, ha hecho cambiar de táctica al gobierno, quien hoy debe ocuparse menos de sí mismo y más de la oposición, a fin de que aunque su posición no se refuerce, la de la oposición no decaiga, para no dejar libre a la revolución el terreno social. Podíamos preguntarnos si el Gobierno, ante la violencia en las calles y las fábricas, ha tenido una visión pesimista de su futuro o la impresión de un caos preinsurreccional difuso, o si simplemente ha olido a quemado. Lo cierto es que sea una cosa, sea otra, o sean todas, ha actuado con rapidez, dando el «sí» a los sindicatos y partidos, organizando su propio

partido y fijando la fecha de las elecciones. Las provocaciones de la extrema derecha han dado la coartada que justifica que lo que antes era un acuerdo tácito sea hoy un acuerdo público: los últimos sangrientos sucesos de febrero han servido a la oposición para proclamar abiertamente su apoyo al Gobierno y pedirle ocultamente que no la abandone ante la avalancha de huelgas antisindicalistas que no tardarán en venir.

En definitiva, el franquismo devenido plenamente democrático y la oposición plenamente franquista cerrarán con su democracia la puerta a la revolución. Al proletariado le tocará abrirla.

LA REVOLUCIÓN NO SACA SU POESÍA DEL PASADO.

«Sabíamos por adelantado que los Comités responsables de la CNT no podían hacer otra cosa que poner obstáculos al avance del proletariado. Somos los Amigos de Durruti y tenemos suficiente autoridad para desautorizar a esos individuos que han traicionado a la clase obrera por incapacidad y cobardía. Cuando ya no teníamos enemigos delante, entregaron de nuevo el poder a Companys, el Orden público al gobierno reaccionario de Valencia y la Consejería de Defensa al general Pozas. La traición es formidable».

Manifiesto de los «Amigos de Durruti» del 8 de mayo de 1937.

Compañeros,

La clase obrera que va a reemprender su lucha no tiene nada de la misma clase obrera que impetuosamente se lanzó a la huelga el año pasado, para saber a qué atenerse, tras los tiroteos de la policía y las maniobras de los burócratas, respecto a la significación de las concesiones obtenidas. La mayor conquista del movimiento de las asambleas es el movimiento mismo, la libertad que los trabajadores han tomado, comenzando a reunirse y organizarse sin intermediarios, la única que no podía ni ser acordada por el régimen ni reivindicada por sus dirigentes, asedia hoy a la vieja sociedad española en tanto que su disolución en actos: es la auténtica democracia realizada, la libertad vivida en el diálogo antijerárquico, allí donde la revolución se encuentra como en su casa, y donde todos sus enemigos se sienten forasteros, ya no disfrazados sino denunciados por su jerga ideológica. Aquí todos los problemas prácticos se plantean en su elemento tal como pueden ser resueltos. En la organización de piquetes de huelga se trata de que la autonomía se arme en la disolución tras la lucha de los comités elegidos en asamblea, a quienes los manipuladores quieren instituir como representaciones manejables, se trata de que la autono-

mía no abastezca nuevas armas a sus enemigos. Pero lo más amenazante para los burócratas no son tales iniciativas, sino el hecho de que los trabajadores, desde que se reúnen para adueñarse de su movimiento, se ven empujados de modo natural a concebirlas y practicarlas; y después, por la experiencia y la verificación práctica, a corregirlas y superarlas.

No hay otra cosa que los burócratas socaven más, nada que tengan más empeño en destruir, que no combatan con más encarnizamiento, que la comunicación directa. Pues saben que aunque tuviesen homologados mil veces sus títulos de representantes por el régimen, no poseerán nada de forma estable mientras exista la libertad del diálogo ejecutorio por la cual los trabajadores devienen ellos mismos dialécticos.

Frecuentemente en la historia, el movimiento de masas, al mismo tiempo que inaugura una nueva época, se reconoce en los hombres que lo han representado, o pasan por haberlo hecho, en una época hoy caduca. Esto es válido generalmente para la imagen que una revolución naciente se hace de sí misma y de sus objetivos, su lenguaje, las referencias al pasado, la genealogía imaginaria por la que cree garantizar su verdad. La contrarrevolución franquista, al prohibir junto el acceso al pasado revolucionario su reapropiación crítica, ha sido la mejor aliada de las burocracias que secuestraban por propia cuenta la memoria de ello en las versiones autorizadas de sus mitógrafos. De este modo, la falsificación antifascista, principalmente administrada por los estalinistas, ha dominado por completo la escena durante mucho tiempo: más vale morir de pie que vivir de rodillas, y más aún sobrevivir en Praga o en Moscú para efectuar la trata de cadáveres y capitalizar los mártires. En lo sucesivo, la luminotecnia de los falsos recuerdos reconstituidos debe rescatar de las sombras otras ruinas más aptas sin duda para suscitar la admiración: el anarquismo, desenterrado en todos lados como tranquilizadora explicación antihistórica de la contestación *moderna* del Estado, reducida así al eterno retorno de una revuelta sin medios, desde luego lo es en España con mayores razones aparentes que en otras partes, porque efectivamente fue una realidad masiva, forma ideológica local de la alienación general del antiguo movimiento obrero, que en otros lugares se reclamó esencialmente del marxismo. La revolución saca su poesía de su devenir, donde tiene que saber reinventar sus razones e imponerlas: sus partidarios no tienen que defender nada del ilusorio y aburrido paraíso de recuerdos petrificados. Puesto que éstos están *presentes*, sin necesidad de ninguna justificación, son los partidarios de tal olvido de referencias obsesivas que refresca la memoria histórica. Los que comienzan de nuevo a hacer la historia no tienen por qué aprenderla, y por otra parte ¿de quién la

podrían aprender? Podrán conocer el resultado de la misma que es su verdad en el movimiento de su lucha y en lo que se le opone, donde todo lo que era verdad se vuelve verificable y tangible, para que la revolución pueda separarse serenamente de su pasado.

Para la crítica revolucionaria no se trata de dar rienda suelta a una nueva versión del pasado, sino de demostrar cómo el movimiento real se desprende de su pasado; no sólo de explicar lo que condujo a la situación revolucionaria actual, sino de adelantar lo que en la situación actual explica el proceso anterior dándole su sentido revolucionario. Tal crítica tiene que tratar como enemigo todo lo que valorice positivamente «la obra constructora» de los revolucionarios anarquistas de 1936, porque éstos no pueden ser considerados como constructores más que en la medida de su fracaso, de su impotencia en destruir los criterios que hoy permiten apreciar sobre el terreno de la racionalidad económica sus realizaciones, y probar la autogestión contabilizando el número de kilos de naranjas o de arroz producidos por las colectividades. Los «fantasmas de 1937» vuelven a asediar la democracia cuarenta años después. Pero lo que es la pesadilla de los dirigentes no sabría ser el sueño de los revolucionarios: si se sueña es que se duerme. Los proletarios de hoy tendrán que ser *mucho peores* que los insurrectos de mayo del 37, que si bien sabían actuar sin sus jefes no supieron actuar contra ellos. La subversión moderna no puede comenzar consigo misma antes de haber liquidado completamente toda superstición relativa al pasado.

Compañeros,

Dentro de la economía española en crisis, el único sector cuya expansión, aunque muy caótica, acarrea una importante creación de empleos es el de la representación política y sindical. Y en este frenesí de cursos de formación acelerada, que encaminan los nuevos reclutamientos menos a ser preparados como representantes de los trabajadores que como representantes -en el sentido de viajantes de comercio- de la democracia y el sindicalismo cara a ellos, hay que hacer un lugar aparte a la resucitada CNT, a causa de su miseria presente y de la pasada grandeza de la que se pretende heredera. Sin hablar del argumento genético estilo Santillán («En España hay una tendencia casi racial hacia el anarquismo»), la importancia del anarquismo en el antiguo movimiento obrero español ha sido, sea atribuida abusivamente al azar de la anécdota (por ejemplo: por ser el bakuninista Fanelli el primer emisario de la Internacional en España), sea interpretado tendenciosamente por la sociología submarxista (la importancia del proletariado agrario y de los obreros industriales de reciente origen campesino). Al objeto de una comprensión más histórica, conviene no

olvidar que el movimiento revolucionario del proletariado es determinado en sus comienzos, en el cuadro socioeconómico de cada país, por lo que ha sido el modo de aparición formal de la burguesía: es a la vez la herencia con la cual los proletarios empiezan a batirse, herencia programática y organizacional, y el terreno en el cual se bate, y que condiciona su lucha; así pues, la importancia de la política en el movimiento obrero organizado de cada país es exactamente proporcional al grado de acabamiento dado por la burguesía local a su dominación política, a su apropiación del Estado. Luego nadie se extrañará de que en España el proletariado no se haya detenido en la política cuando la burguesía pasaba *por el lado* mediante el compromiso con la aristocracia terrateniente: la posición marxista, al identificar el proletariado a la burguesía desde el punto de vista de la toma revolucionaria del poder, no era en España sólo una ilusión estratégica general, sino un error táctico particular, que desconocía totalmente el sentido de las primeras batallas; incomprensión que debía agravarse además con las necesidades sórdidas de la polémica anti-bakuninista. Pero lo que unos no conocían los otros lo han ignorado solamente. Si la ideología científica basada en la concepción de un esquema lineal universalmente aplicable debía alcanzar su verdad burocrática con la estalinista «teoría de las etapas», la ideología de la libertad debía por su lado revelar plenamente su *autoritarismo* oculto, cuando todas las cuestiones que había inhibido se vieron formuladas en la práctica por la revolución. La justicia histórica destinó, de este modo, la cuestión de la mediación organizacional, que siempre fue la manzana podrida en el anarquismo, a representar la descomposición negativa de éste, proceso de putrefacción que desembocó el 6 de noviembre de 1936 en la perentoria afirmación de *Solidaridad Obrera*: «El proletariado de la CNT colabora desde ayer en el gobierno de España»; la inmediatez revolucionaria que garantizaba y prometía intemporalmente el anarquismo, encontraba su realización imprevista en esta repentina metamorfosis gubernamental del proletariado. Pero si ya la historia, con lo que intentaron las masas anarquistas a pesar de sus jefes, criticó el peor lado del anarquismo, hoy tiene que criticar su mejor lado, esa misma acción de las masas que al aplicar el programa anarquista (tal como era en su formulación postrera del Congreso de Zaragoza, supremo estadio de la coherencia separada de la ideología), alcanzó sus límites y verificó sus insuficiencias. La experiencia de las colectivizaciones sólo pudo llevar lo bastante lejos su proyecto antieconómico en la agricultura, y en base a la penuria y a la limitación local, como «comunismo libertario en un sólo pueblo», pretendiendo alejar junto a la moneda el mal económico; mientras que en las fábricas la colectivización se detuvo en la toma de posesión de la organización de la pro-

ducción por la burocracia sindical, quien encontró por tal «esfuerzo de guerra» la vía de su integración al Estado. Lo que el autogestionismo contemporáneo ve allí de precursor, de innovador, en el mismo plan que cualquier autogestión *titista*, es lo que no tiene ningún porvenir revolucionario, y ni siquiera demasiado porvenir contrarrevolucionario; y lo que se juzga utopías del pasado, de acuerdo con el inevitable lugar común del anarquismo nostálgico de una edad de oro -confundiendo el movimiento práctico con su ideología kropotkiniana-, es al contrario portador de una auténtica grandeza *negativa* cuyo sentido hay que saber ver: el anarquismo quería *suprimir* la economía. Pero no se puede suprimir la economía *sin realizarla*. La ilusión de una supresión de la economía que no fuera su realización, ya no la vemos hoy sostenida por un movimiento que combate las condiciones existentes, sino anunciadas solamente, en forma de sosa pedagogía moralizante, por el necio reformismo ecologista. Y la CNT resucita *al lado* del movimiento proletario como sindicato de *oficios varios* para la lumpen-burguesía en busca de certezas ideológicas, es el basurero histórico donde se tiran naturalmente los ecologistas y sus problemas de desperdicios. El anarquismo quería suprimir la economía sin suprimirla, realizar al proletariado como la «mayor fuerza productiva» *aún económica*. Y desde luego ninguna de estas dos posiciones unilaterales pudo coronar con éxito su empresa, puesto que cada uno tuvo que hacer en el momento de la verdad lo contrario de lo que quiso: en la colectivización anarquista, al ser combatido el intercambio formalmente con la abstracción monetaria, al mismo tiempo se generalizaba en todas partes como contenido concreto de la actividad, pues de esta manera la vida tendía en su conjunto a convertirse en un «problema económico», y en la dictadura terrorista de la ideología que postulaba la racionalidad suficiente de la economía, la identificación totalitaria del poder burocrático con el proletariado abandonó todo problema económico a la policía, llegando hasta el desprecio demencial de las primeras necesidades de la racionalidad económica. Hoy la revolución moderna, a través de las luchas en donde comienza a unificar su proyecto, nos muestra que la supresión y la realización de la economía son aspectos inseparables de una misma *superación de la economía*.

El movimiento de las asambleas se enfrenta hoy desde sus primeros pasos, a fin de superar su primera forma espontánea, con la tarea ante la que se detuvo la precedente tentativa revolucionaria: la necesidad de no contentarse con ocupar sino transformar enseguida el espacio social invadido, el terreno de la separación sobre el que renacen, como de modo natural, la jerarquía y la no comunicación. Si la revolución prosigue su tarea donde antes la dejó no es a causa de ninguna fatalidad mística, sino simplemente porque el límite que en-

contró al final como insuficiencia de su proyecto consciente, lo afrontan ahora desde el principio como obstáculo a la formulación y a la organización de este mismo proyecto: donde estaba antes su incapacidad, hoy está la potencia del enemigo, quien entre tanto ha convertido su territorio, por una especie de táctica de tierra quemada al revés, en algo casi imposible de ser reapropiado. Así pues, la famosa fórmula de Bakunin «el goce destructor es una pasión creadora» ya no es la expresión lírica de una verdad subjetiva, sino la formulación exacta de una necesidad objetiva: la instalación sobre las minas del decorado de la pasividad, de la única base de operaciones a partir de la cual el poder de las asambleas puede reconocerse y pasar a la ofensiva. Esta necesidad de construir el terreno de la autonomía es la que había comenzado a satisfacerse el 3 de marzo en Vitoria, con el vandalismo y las barricadas, y la que era expresada sumariamente en la interrupción de la circulación en la carretera nacional Irún-Madrid y en las principales vías de acceso a la ciudad: donde las mercancías dejan de circular los hombres comienzan a encontrarse unos a otros. En la guerra social, el proletariado no tiene sólo problemas de información con relación a las posiciones del enemigo sino también a las suyas propias. Todo lo que existe está hecho para impedirle resolverlos, luego hay que destruir todo lo que exista. El movimiento actual desprecia la política, pero tiene que aprender que para superarla no basta con prescindir de ella; puesto que mientras creía que podía ignorar al Estado no ha sido en cambio ignorado por éste. Ya casi no quedan ilusiones sobre el sindicalismo «democrático» que se le prepara, mas tendrá que tomar a su cargo totalmente sus relaciones autónomas para que los muros de las fábricas no sean las últimas murallas del viejo mundo. En las asambleas de barrio, cuya práctica se generaliza, la tendencia a extender el rechazo de la explotación a toda la vida cotidiana se afirma, y de ahí pasa a profundizarlo en una crítica del trabajo asalariado. Las asambleas desde luego son la presa de todos los estalinocristianos que pescan en las aguas sucias de la supervivencia sórdida (asociación de vecinos) con la consigna ridícula de «ayuntamientos democráticos»; pero también generalizan la pasión del diálogo y la experiencia de su autodefensa. Al mismo tiempo que la forma de la asamblea se adopta en todos los sitios en que responde a una necesidad real, es recuperada como caricatura sin contenido en todos los sitios donde es necesario aparentar la realidad: en los sucedáneos estudiantiles y progresistas, o en los distribuidos por el espectáculo político y cultural, unos tan aburridos, los otros tan aborregados. Estas sombrías «kermesses» en donde la cobardía y la sumisión celebran su redención imaginaria con su liturgia y sus intercesores, no son ni la expresión central ni siquiera el eco debilitado de la comunica-

ción real y libre. En contra del proyecto de diálogo ejecutorio que nace de las asambleas de trabajadores, aquí se satisfacen de una libertad de expresión que acepta la incapacidad de no hacer nada, y finalmente de no decir nada. Allí, en las asambleas de trabajadores, se quiere hablar sólo de lo que se hace, y si se llega a hablar de todo es porque debe de hacerse todo lo que es posible, aunque fuese sólo para continuar hablando, a fin de que no se restablezca el monopolio burocrático de la expresión. Contra la interferencia confusionista, el movimiento de las asambleas no tendrá que sacar la teoría más que de su práctica y prohibir el resto como ruido socialmente nocivo. Su primera victoria es el haber obligado a todos sus enemigos a tener que aceptar su existencia y fingir el sostén de sus condiciones. La carrera por la recuperación y su *melée* con mutuas zarandillas, agota a los enemigos de las asambleas sin que consiga ninguno de ellos capitalizar, como dicen, el oro de la autonomía: éste se convierte en carbón en cuanto intentan batir con él su moneda ideológica. En el movimiento de usura acelerado de las representaciones exteriores, la inflación roe todo lo que habla de autonomía sin serlo: miniburocracias ectoplásmicas nacen y mueren en el tiempo que dura una huelga, adquiriendo la existencia al precio de su inconsistencia y pagando con su desaparición. Se llega a ver hasta a los estalinistas de Comisiones Obreras echar un poco de consejismo en su sindicalismo, y bastante asambleísmo en sus maniobras. Durante un año de actividad, los estalinistas han compuesto una auténtica enciclopedia de la manipulación al uso del proletariado, que clama por una única conclusión práctica: los trabajadores revolucionarios no tienen que ser, paralizados por el formalismo democrático, los únicos en no intentar nada con el objeto de que ganen sus posiciones en la asamblea. Contra la ignominia demasiado a la vista de los estalinistas, sus rivales izquierdistas han podido obtener algunos efímeros éxitos en la medida en que la denunciaban, pero sólo el tiempo que se contentaron con esto; su influencia recaía en cuanto intentaban aprovecharla. Su oportunismo seguidista ha podido darles la impresión de volar de victoria en victoria, pero no basta gritar «¡todo el poder a las asambleas!» para ser un Lenin: reconocer la realidad en marcha no es suficiente, hace falta además conseguir ser reconocido por ella para pretender controlarla y dirigirla. Las últimas desventuras del leninismo descompuesto están ilustradas muy bien con el embarazo cómico del único grupo izquierdista que flotó siguiendo la corriente del movimiento en Vitoria («Las plataformas Anticapitalistas»): debieron sostener contra los estalinistas la disolución de las comisiones representativas para preservar su imagen asambleísta, y al mismo tiempo afirmar detentar con las asambleas la base de su mítica organización de masas (Orga-

nización de Clase Anticapitalista, OCA) que, de comisiones representativas en congreso de representantes, no dejará de tomar poder; mientras tanto estos anticapitalistas, después de que el 3 de marzo haya puesto fin a su margen de maniobra recuperadora con los comienzos de la violencia generalizada, se adhirieron modestamente al pacifismo más cristiano y a la versión democrática de los sucesos: «En Vitoria no hubo ningún enfrentamiento entre policías y manifestantes, lo que hubo fue un atentado brutal contra el respeto debido a un lugar sagrado y contra la persona humana.» (Manifiesto de la comisión representativa leído por Naves el 6 de Marzo).

Compañeros,

La revolución no es una demostración sino una ejecución. Los proletarios no necesitan justificaciones porque no tienen necesidad de convencer. Buscan su propia satisfacción y no actúan para satisfacer a otros. No pueden poseer toda su razón histórica si no la hacen vencer. Una vez más la definición necesaria y suficiente del Consejo moderno es la realización de sus tareas mínimas; que no son ni más ni menos que la liquidación práctica y definitiva de todos los problemas que la sociedad de clases es actualmente incapaz de resolver. El resto es parloteo de impotentes o diversión de manipuladores. Ningún formalismo jurídico puede garantizar a los trabajadores organizados en Consejos el ejercicio de su democracia total: sólo la grandeza les volverá grandes, y las mezquindades, mezquinos. La práctica de las asambleas vuelve todo posible pero no asegura nada. La única teoría de los Consejos de ex-trabajadores que hay que desarrollar es la teoría de su guerra contra todo lo que no sea ellos, y contra todo lo que en su interior les impide que sean el único poder; empezando por aquello que toman, que al condicionarles su apropiación les devuelve al pasado. En esta guerra todo es muy sencillo pero hasta lo más sencillo es difícil. Nadie tiene la experiencia de los problemas prácticos que se presentan en masa y se acumulan, y el tiempo que hace falta para adquirirla puede ser el tiempo que baste para perderlo todo. El proletariado se arma desarmando el enemigo, reapropiándose de sus propias fuerzas vueltas contra él. Pero sería muy cómodo hacer la historia y la revolución una especie de idilio si se tratase de un sólo golpe instantáneo, y si en suma el enemigo se encontrase, incluso antes de querer combatir, colocado en unas condiciones tales que combatir le fuese imposible. El límite de la ofensiva espontánea de los trabajadores siempre es la defensiva organizada del enemigo, que les obliga a organizarse según sus capacidades y medios. La conducta verdadera de la guerra social, el empleo libre, es decir, adaptado a las necesidades más particulares, de todos los medios disponibles que los trabajadores tienen a su alcance, ha pasado demasiado

tiempo por un asunto refractario a toda teoría, no dependiendo más que de la improvisación espontánea del momento. La mayor parte del tiempo estos problemas aparecen sólo de manera accesoria y anónima en memorias y relatos, porque los protagonistas se engañaron a sí mismos hasta no ver en su lucha más que una formalidad que acordaba al fin la realidad con el ideal; sabemos que tal ilusión ha reinado al más alto grado en los anarquistas, lo mismo bajo la forma de la concepción sindicalista -la cual supone resuelto el problema de la reapropiación revolucionaria- que bajo la de una organización militarizada exterior a la clase -la cual lo resolverá por un golpe de mano definitivo-. Los medios de la guerra social incluyen los medios obligatorios en toda guerra pero no se reduce jamás a éstos si la revolución no se reduce a aquélla, con la militarización que esto supone. Como decía un miliciano durante la guerra civil: «No es así como vamos a ganar nosotros». En conclusión, esta vez España deberá acordarse de que es el país clásico de la guerrilla, e inventar las formas superiores que convienen a su revolución moderna.

Compañeros,

Lo que hemos vivido ha sido sólo el principio aún suave, de lo que deberá venir y durará mucho tiempo. Para el nuevo movimiento revolucionario que nace espontáneamente del suelo de la sociedad española modernizada, se trata ante todo de organizarse y unificar coherentemente la base de su proyecto de subversión de la sociedad de clases. La crítica sin concesiones de las carencias aún no superadas del proletariado -a comenzar por sus ilusiones ideológicas respecto a sí mismo, a su lucha y a los que hablen en su nombre, y por su táctica predominantemente defensiva- y la crítica sin concesiones de la tentativa actual de adaptación capitalista, ligando su suerte a los actos proletarios radicales -que no tardarán en ser abundantes tras la decepción inevitable que sucederá a las elecciones-, y a su porvenir, debe aceptar compartir el aislamiento presente de los mismos. En el momento en que todos los traficantes de ideas muertas «salen de la clandestinidad» para apresurarse a coger un stand en el espectáculo político y cultural, esta crítica halla su medio de existencia en la nueva clandestinidad de la vida real, sin expresión oficial, donde se esbozan nuevas prácticas y nuevos gestos de rechazo. De este modo prepara, más allá de las ilusiones transitorias, el terreno en el que van a encontrase todos los que, sintiendo ya la necesidad de la verdad, buscan los medios de imponerla prácticamente. En primera fila de estos medios se encuentra el lenguaje crítico autónomo, sin el cual la revolución no puede comprenderse a sí misma sin mediación ideológica, ni nombrar a sus enemigos. Hay que terminar con la tradición obrerista que ha pesado demasiado tiempo en el movimiento revolucionario español,

su anti-intelectualismo. El rechazo de la actividad teórica justificado por la ideología más o menos disfrazada de ausencia de ideas, y que hoy le vuelve en forma de un sindicalismo sin nombre, sirviendo a los intelectuales obreristas y a los obreros intelectualistas, es tanto más criminal cuanto que hoy cuenta ante todo la conciencia de lo necesario, y las armas de la crítica acompañan a la crítica de las armas.

Aún más inmediatamente peligrosos son los burócratas de los sindicatos y partidos, quienes han tenido que tolerar la democracia obrera para ser ellos mismos tolerados por los trabajadores, sin poder asentar su sindicalismo. Ellos saben que tendrán que aplastar todas las manifestaciones de autonomía, so pena de ser ellos mismos aniquilados. El contraataque ya ha comenzado; sus calumnias, amenazas, delaciones y violencias contra revolucionarios aislados. En adelante ya no se trata para los burócratas sólo de abandonar a los trabajadores radicales a la represión, sino de entregarles y reducirles al silencio sea cual sea el medio empleado. La autodefensa contra toda la policía y servicio de orden del color que sea está a la orden del día. Y la sentencia de las barricadas de mayo del 37 también: la revolución no ha hecho hasta aquí más que transformar el estalinismo y sus aliados. Hoy se trata de destruirlos.

Compañeros,

Las armas que sirven para la defensa de los trabajadores en tando que asalariados serán las últimas armas de defensa del trabajo asalariado. Y para que el proletariado pase a la ofensiva con su método de guerra específico debe lograr su autonomía, separándose de todo lo que le une al viejo mundo: la lucha de conquista exige armas de conquista.

¡ABAJO LOS SINDICATOS Y LOS PARTIDOS!
¡ABAJO LA SOCIEDAD DE CLASES!
¡VIVA EL MOVIMIENTO DE LAS ASAMBLEAS!
¡VIVAN LOS PIQUETES!
¡VIVA EL PODER ABSOLUTO DE LOS CONSEJOS OBREROS!

Los incontrolados, 1977.

Revelaciones sobre el proceso de descomposición del Estado español y sobre los métodos aplicados para remediarlo.

I

Considerando la extravagante hipótesis según la cual aún quedase alguien aquí en España que creyese lo que la democracia postfranquista ha dicho de sí misma -y no nos referimos a los embusteros profesionales, a quienes se les paga para que finjan creerlo, de modo que consigan convencer a otros-, ese alguien hubiera quedado boquiabierto al descubrir que la hábil construcción del consenso negociado y la negociación consensual voceada todos los días como un cólico verbal de la política, se esfumaba ante un golpe de mano de la soldadesca, y que las instituciones democráticas, aun sin faltarles la devoción de hombre público alguno, parecían hallarse de un modo repentino a la merced de la vacilación de unos cuantos generales. Una credulidad así es muy poco probable que se haya dado en este país, donde cada cual veía de cerca la irrealidad alcanzada por la vida política, esa «escolástica de la vida popular», pero sin embargo desde más hacia fuera, cuanto más se ha juzgado la realidad española, de acuerdo con las declaraciones oficiales, menos se la ha comprendido, y mayor estupor se ha tenido al ver desaparecer de un día para otro la imagen apaciguante de una felicidad democrática que parecía tan bien atada bajo el reinado de un borbón casi tan bonachón como un rey escandinavo.

Y como de la ignorancia unida a la estupidez ordinariamente se pasa al desprecio petulante sin ningún esfuerzo, algunos hinchas europeos de democracia tan estupenda han llegado a insinuar que el pueblo español debía de haber alcanzado el grado último de apatía y de villanía para no lanzarse en defensa de un *statu quo* tan arrebatador, cuanto que sus representantes eran proa de la brutalidad antiparlamentaria de Tejero. Quienes en la ausencia de reacción de

las masas ante el golpe del 23 de febrero ven una prueba de su envilecimiento, mientras que por otra parte no han tenido reparos de descubrir pocos días más tarde algo así como un sostén popular a la monarquía parlamentaria en las manifestaciones orquestadas por todos los partidos asociados -la apatía muda a civismo cuando desfila tras los dirigentes-, son los mismos que inventan un pasado mítico a sus embustes al pretender que en 1936 el pueblo se levantó en defensa del Gobierno de la República. La verdad es, como todo el mundo sabe, que en julio del 36 los trabajadores de España tomaron las armas para defender la revolución que habían comenzado y a la que los militares querían arrollar sin contemporizaciones, contrariamente a los políticos del Frente Popular. Finalmente, con la ayuda de los estalinistas, estos acabaron con ella, mientras que los militares esperaban la cosecha de la derrota que sus adversarios sembraron.

En cambio hoy ocurre todo lo contrario; la amenaza revolucionaria creada por la intervención autónoma del proletariado en la guerra de sucesión abierta por la muerte de Franco, fue conjurada por la unión sagrada de todos los pretendientes de la herencia, y ahora los trabajadores, provisionalmente vencidos, saben que las trifulcas de sus enemigos respecto a la forma política que dar a la explotación que sufren, ni les van ni les vienen. Tanto es así que de nuevo, los movimientos de aquello que solemos llamar Estado han afectado tan escasamente al pueblo que éste se ha desentendido con gusto de ese dominio estanco de alternas pasiones y mezquinas intrigas de los cortesanos, de los militares, aventureros y del puñado de sedicentes estadistas, y no ha tenido razones importantes para arrepentirse de su indiferencia. En efecto, el resultado más indiscutible del 23 de febrero es el que todos esos pares de la democracia que antes no pudieron gobernar sin los militares, gobiernan hoy con los militares.

Para llegar a comprender cómo la «transición democrática» tenía que acabar en un gobierno *de facto* de la jerarquía militar, hay que adoptar un punto de vista que sobrepase los límites de la política española, pues las razones por las cuales resurgen del pasado las formas autóctonas de la contrarrevolución no son locales, sino universales. Si creyéramos las trivialidades periodísticas, el asunto no consistiría sino en una especie de arcaísmo, en último extremo folklórico -España y sus «viejos demonios»- pero no se trata de eso, sino de cómo ese arcaísmo es precisamente todo lo que la sociedad de clases puede producir de más moderno, y en todas partes. Es decir, cómo la dialéctica universal de la putrefacción y del fortalecimiento hace que todos los Estados avancen, al tiempo que las bases sociales de la dominación de clase se des-

componen catastróficamente, en marcha hacia su verdad totalitaria, en la que se juntan y aglomeran los autoritarismos y las ideologías movilizadas por el rechazo y el miedo a la historia, desde las más arcaicas a las más modernistas. Así pues, todos los poderes constituidos, todas las jerarquías y todas las iglesias, es decir todo lo que detenta una parcela de poder en la organización presente de la parálisis histórica, se apresuran en concluir, hoy que vuelve a caer en la sangre y en el barro de sus orígenes el modo de producción que garantizaba su dominación, un «compromiso histórico» universal, en el que cada cual sacrifica, desde los curas polacos hasta los estalinistas italianos, sus ambiciones particulares por el mantenimiento del mundo en donde acampan. Más allá de la variedad de «renovaciones», «transiciones» y «cambios» pretendidos por los Estados, sólo hay una tentativa de amalgama de los medios de opresión de todas las épocas de la sociedad de clases, bebiendo en cada país, en las fuentes locales: en un sitio será islamismo remendado de tercermundismo, en otro socialdemocracia escayolada con autogestionarismo. Todo transcurre como si la prehistoria humana debiera, por última vez, resumirse en una compilación exhaustiva de sus ignominias, para poder ser rechazada en bloque.

La configuración española de esa amalgama ha sido la unificación de los dos modelos de contrarrevolución que se enfrentaron durante la guerra civil, después de que fuera eliminada la posibilidad de una victoria autónoma del proletariado. Es la reconciliación de aquellos que proclamaban de viva voz su voluntad de abatir al proletariado y de aquellos que querían abatirlo pretendiendo lo contrario, la reconciliación de los que ganaron la guerra para vencer la revolución y de los que la perdieron por haberla vencido, de quienes despreciaban las apariencias y de quienes querían fundar su poder en ellas. «Cuando el franquismo deviene democrático todo lo que se sucedió ante el proletariado (...) debe serle opuesto ahora simultáneamente» (*Manuscrito encontrado en Vitoria*, abril 77). Esta combinación de todas las técnicas policiales, con la correspondiente división del trabajo represivo, esta movilización general de todas las fracciones del partido del orden («hacer que trabajen juntos» gobierno y oposición, según el programa de Suárez) permitió en principio contener a la ofensiva del movimiento asambleario que ya empezaba a instalar la democracia real en las fábricas españolas. Pero una vez adquirida esta victoria, la propia naturaleza de los medios que la habían hecho posible ha comenzado a reaccionar contra sus resultados impidiendo su explotación a fondo: no marchando ya presionado por su enemigo y teniendo que definirse por sí mismo, el partido del orden quedaba paralizado por el carácter heteróclito de sus diversos componentes. Y el gobierno Suárez, como vivía de la neutralización de intereses

divergentes y de la conservación de la parálisis subsiguiente haciéndola pasar por una estabilización política, volvióse la parálisis hecha Gobierno.

Después de las elecciones del 1º de marzo de 1979, el gobierno del partido de Unión de Centro Democrático se hallaba en un estado de euforia optimista que hubiese podido pasar por realismo político si su posición hubiese sido tan sólida como las apariencias parecían confirmar. Suárez decía en octubre del mismo año que tenía «UCD en el Gobierno para ciento siete años», y todavía en marzo de 1980 que «pagaría dinero por seguir en el poder». Gozaba de un símil de tranquilidad satisfactorio, adquirido con su propio esfuerzo y apuntalado con el ajeno. La impotencia de sus oponentes le resguardaba de su ambición, tanto como la mezquinería de aquellos le protegía de las malas consecuencias de sus desaciertos, y las ventajas que le proporcionaban los pactos políticos y sociales dábanle esperanzas de días todavía mejores, aplazados a causa de las batallas que había sido necesario librar contra el proletariado. Las dificultades que cabía esperar no tenían por qué ser enormes, supuesto lo esencial resuelto, las miserias consecuentes de la crisis de la vieja estructura económica -primer estadio en España de la crisis general de la economía espectacular de mercado- al tanto de ser redistribuidas entre los trabajadores en virtud de dichos pactos; y si el espíritu que guiaba a los dirigentes de la sociedad y el Estado hubiese ido tanto menos acompañado de rivalidades rencorosas como su situación de necesidades acuciantes, hubiera podido creerse que la clase dominante española había dejado atrás un gran bagaje de problemas y conflictos provenientes de la modernización del franquismo acabada de culminar, y que se preparaba para un reposo prolongado disfrutando de sus logros a la sombra de una relativa prosperidad.

Pero por más que sólo se oyeran los discursos del patriotismo democrático autorizado de los hombres públicos, cuyo oficio es ser demócratas y patriotas, patriotismo gesticulante pero prudente, es precisamente esa competencia establecida alrededor del culto del lugar común, del dogma político banal de veneración obligatoria, en medio de una mediocridad manifiesta y una afectación forzada, la que enseñaba a cualquier observador medianamente inteligente, que ese estadio de felicidad democrática ilusoria reposaba sobre un equilibrio de impotencias, y que tan inofensivo resultaba el griterío de los que hablaban, cuanto más amenazas contenía el silencio de los que callaban. Impotencia del Gobierno en evitar que su programa democrático se revelase vacío y engañoso en cuanto pasaba a la práctica, no sacando más provecho en sus triunfos que el que hubiera sacado en sus fracasos. Impotencia de los partidos políticos en esa obra de abastardamiento social que es la creación de

un pueblo a su imagen y semejanza, un pueblo que aceptase los preceptos que tienen por corolario el sometimiento, la obediencia pasiva y la resignación, y practicase la única virtud que le podían reconocer sus dirigentes: la docilidad; impotencia que ellos mismos han bautizado con el nombre de «desencanto» popular por la democracia. Impotencia de los militares acomplejados ante unas tareas de maquillaje democrático que no comprendían y que trastocaban todo su cuadro franquista de valores, usados como espantajo intimidatorio por el partido gubernamental en sus tratos políticos, y neutralizados con máximas de patriotismo constitucional y relegamientos de mandos reticentes. En fin, impotencia del proletariado y la burguesía, uno por no haberse dado objetivos precisos ni haber sabido organizar su fuerza y darle coherencia, la otra por no cumplir sus objetivos precisados, ni haber podido asentar su régimen en la debilidad de su enemigo; uno se batía en retirada mientras la otra se veía impedida de avanzar.

Terminando, una indiferencia y desprecio crecientes hacia las instituciones nuevas, apenas disimulado en la forma, pero reapareciendo en los detalles, ora en un incremento de la abstención electoral, ora en la desafiliación político-sindical, en una anécdota antiparlamentaria o en un chiste callejero, resultado de la imagen general que la población se hacía de la democracia y de la política, que significaban que el edificio estatal y la sociedad misma no se habían repuesto de sus achaques y que su curación constitucional se asemejaba a la salud ficticia de esos rostros rollizos, en los cuales una compostura risueña esconde las trazas de una enfermedad fatal. La impresión causada por el «cambio» de régimen podía muy bien expresarse en esta letrilla de Góngora:

Que anochezca cano el viejo
y que amanezca bermejo,
bien puede ser;
mas que a creer nos estreche
que es milagro y no escabeche
no puede ser;

En realidad la democracia, como patrimonio del Gobierno y de los partidos políticos parlamentarios, podía ser definida como la suma de privilegios que disfrutan los dirigentes del país, y en tanto que tal residía solamente en unos cientos de personas, incapaces de defenderse y menos aún de encontrar a nadie que las defendiera, y por tanto fáciles de eliminar en un golpe de mano. No podía extrañar que cuantos militares descontentos o políticos

apeados o apartados del poder hubiera reparasen en ello, y a la espera de propicios accidentes que evidenciasen el grado suficiente de parálisis e irrealidad del régimen, conspirasen en la sombra y trabajasen para que el peso de los poderes fácticos cayese en la balanza e inclinase el fiel del lado de la conjura.

«El mismo terreno en que están fundadas las fortalezas es su mayor enemigo. Por él la zapa y la pala (armas ya de estos tiempos) abren trincheras y aproches para su expugnación, y la mina disimula por sus entrañas los pasos, hasta que, oculta en los cimientos de las murallas o baluartes, los vuela con fogoso aborto» (Diego Saavedra Fajardo, *Empresas políticas*). Los asuntos públicos de la democracia negociada, al suscitar sólo débiles ecos en la vida cotidiana, no daban más que ligeras impresiones y de duración escasa, lo que podía dar pie a algunas adhesiones, pero no eran suficientemente fuertes para producir un efecto considerable. Sobre esos cimientos, con la zapa del desinterés y la pala del descrédito pueden excavarse todas las galerías que se quiera, y pasearse por ellas un golpe de Estado hasta la llegada de su hora.

Esta democracia iba de cabeza al desastre entonando marchas triunfales; bastaba ver la autosatisfacción de los partidos en los comicios electorales del 1º de marzo o las felicitaciones recíprocas que se enviaban los parlamentarios cuando la Constitución fue promulgada, de la que esperaban efectos casi milagrosos. La impotencia encontraba la salida como siempre creyendo en milagros, imaginándose triunfante sólo porque no era contradicha, mintiendo en todo y sobre todo, y terminando por perder toda comprensión del presente a fuerza de mentir y soñar. Habían usado tanto tiempo el chantaje de los militares -el Gobierno para amedrentar a los partidos y los partidos para atemorizar a sus electores- que habían terminado por no creer la realidad que podía existir detrás del mismo. A pesar de que 1980 fue un año de intensa actividad extraparlamentaria de los hombres públicos ligados a las altas esferas del poder junto con los militares, actividad que los partidos conocían perfectamente puesto que participaban en ella, y a pesar de que se escribían artículos de prensa exaltados, de que se pronunciaban en público discursos sediciosos, de que se conspiraba en múltiples reuniones, y de que los servicios secretos inmersos en el torbellino conspiratorio informaban a sus respectivas direcciones, todos los políticos creían que la agitación cuartelera finalizaría con la desaparición de lo que se tenía por su causa principal: el futuro duque de Suárez. Estos héroes de la neo-democracia hubiesen seguido haciendo eternamente piruetas en el aire si el golpe del 23 de febrero no les hubiese sorprendido e invitado a juzgar por lo sacrificado lo sacrificable.

Hay algo de verídico en el rostro compungido de Suárez en su despedida del poder; oscilando en el límite de dos etapas de la democracia parece lanzar en su mensaje un mentís a ambas y proclamar la igual impostura de los éxitos de la una y de las esperanzas de la otra: «Me voy porque ahora las palabras parecen no ser suficientes y hay que demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos». Esta confesión es a la vez un desafío a sus sucesores, un reto a los que piensan haber salido del paso sacrificándole; y si aún declara ritualmente que hay que «hacer todo lo necesario para que renazca la confianza, para que se disipen los descontentos y los desencantos», es porque demasiado bien sabe que aquellos no conseguirán más de lo que él consiguió. Suárez era sólo uno entre tantos seudohéroes y figurones de la democracia cuya grandeza reside simplemente en la aureola con que sus partidos respectivos les han rodeado de manera interesada, y todos ellos se vuelven como él, banales desde que las circunstancias les invitan a hacer prodigios. Mientras tanto, si es cierto que las palabras y el conjunto de las apariencias políticas no bastan ya al orden democrático y hace falta demostrar lo que en realidad es mediante la intervención de los aparatos represivos militares y policiales, dicha intervención actúa encubierta, jugando a las apariencias como todos: Suárez no dice *quién* le ha echado, ni los militares que le echaron toman visiblemente el poder.

Con una pertinencia crítica algo desencarnada, los militares que ponían la firma de «Almendros» bajo sus consejos imperativos a los políticos, denunciaban «la confusión de las apariencias y realidades» instaurada según ellos por Suárez. Pero dicha confusión no es el resultado de la política personal de Suárez sino una condición general del poder moderno, y de hecho ellos mismos han tenido que respetar por ahora las reglas del engaño social: en vez de imponer su programa abiertamente por la fuerza e instaurar el reino de la represión sin frases, han confiado la tarea a los políticos, permitiéndoles incluso presentar la cosa como una «victoria de la democracia». Si en julio del 36 los militares alzados rechazaban las promesas conciliadoras del Gobierno republicano, quien por su parte no se hallaba en condiciones de mantenerlas, hoy unos y otros, generales y políticos, tratan de entenderse porque se necesitan mutuamente y porque nadie quiere dar al proletariado pretextos y ocasiones de una nueva ofensiva.

En esta organización espectacular de la defensa del orden existente, en donde el reino social de las apariencias debe garantizar que ninguna cuestión central irá a plantearse abierta y honestamente a fin de que la solución revolucionaria quede impedida, de nuevo ha podido verificarse que lo verdadero era un momento de lo falso. El golpe de Estado visible, peripecia originada por

los sectores más imprevisibles del ejército y que venía a injertarse en el avance sin trompicones del auténtico golpe, ha visto su derrota escenificada por los propios militares, que sacrifican provisionalmente a una parte de sus extremistas para mejor disimulo de su toma del poder y para reanimación al tiempo del espectáculo democrático moribundo. Para que la política volviera a ser el drama nacional como corresponde a los países democráticos, ha sido necesaria una revitalización violenta de dicho espectáculo, primero precipitando en las llamas a su «Don Juan», Suárez, y después retransmitiendo la batracomiomaquia entre diputados y guardias civiles en las Cortes.

La Constitución, el Congreso, las minorías parlamentarias y las mayorías, el Gobierno, los ministros, los partidos, las declamaciones oratorias y las celebridades políticas, la prensa, el mercado de la edición, los intelectuales, la «transición democrática», el 1-m y el 15-j; todo ello quedó pendiente del revólver del teniente coronel Tejero, y si bien todo quedó como estaba, nada ha vuelto a ser lo mismo desde que enfundó el arma.

El ejército ha salvado a los demócratas del ejército. Y los políticos, valientes una vez pasado el peligro y audaces hasta donde marca la ley, rinden honores a sus héroes, los demócratas Gabeiras, Aramburu, Laina y Juan Carlos. Tales demócratas, tal democracia.

II

Todo el proceso de la famosa «transición» que no conducía más que al punto de donde partió después de haber recorrido el ciclo de la ignominia, desde los muertos de Vitoria hasta los de Almería, podemos definirlo como el *precipitado* realizado por la inmersión del Estado franquista en la organización moderna de las apariencias, cuando sus dirigentes comprendieron que en la nueva época de la lucha de clases ningún poder podía permitirse el lujo de ir a descubierto en la crisis social. Esta precipitación, en todos los sentidos porque se llevó a cabo bajo la presión del proletariado, ha forzado a amalgamarse en un vasto partido del orden democrático, a elementos sociales heterogéneos que conservando cada uno sus intereses particulares, fatalmente se oponían a cada momento pero sin llegar jamás al enfrentamiento, para de continuo reunirse pero sin unificarse nunca en realidad. La historia de la «transición» hasta su final oficial ante la pistola de Tejero, es pues la historia de las variaciones de la temperatura política que alternativamente hacía que se fusionasen las fracciones opuestas del partido del orden y luego descomponía el producto de la mezcla resultante en sus elementos primitivos. Y la impresión de irrealidad que

se desprendía de cada una de las fases era debida al hecho de que las negociaciones permanentes, con la corte de chantajes y faroles, de intimidaciones y regateos que las acompañaban, tenían que permanecer en secreto y maquillar sus resultados tal como disimulaban las realidades que estaban en juego. Todo lo tapaba el secreto de Estado puesto que ninguna de las fracciones del poder (administración, partidos, sindicatos, ejército, etc.) podía romper la solidaridad en el engaño, ni en caliente librar a la publicidad la menor parcela de verdad, en una época en la que la verdad puede volverse explosiva si cae en manos de la única clase que sabe cómo usarla, ya que no tiene nada que tratar con la infamia existente. Porque «hay muchas verdades que vale más callarlas en interés del que las sabe», ya que las masas sirven mejor al orden existente con lo que no saben que con lo que conocen, y «la guerra es puro ardid: si no puedes vencer, engaña» (*Memorias de Abd Allah*, último rey zirí de Granada).

Con el fin de poder ver mejor cómo los resultados del 23 de febrero constituyen la verdad de todo el proceso anterior, recapitulemos y recompongamos las fases recorridas por el Régimen desde la muerte de Franco, el día 20 de noviembre de 1975 hasta el día siguiente al 23 de febrero de 1981, cuando trata de recobrar el equilibrio alrededor de su centro de gravedad militar. Debemos distinguir tres períodos principales: 1. *El período del continuismo imposible*, que abarca toda la duración del gobierno de Arias Navarro y Fraga, hasta su fin el 1º de julio de 1976, y que termina con la derrota y disgregación final del franquismo ortodoxo. 2. *El período consensual o de la ilusión*, desde la caída de Arias hasta la aprobación del referéndum constitucional el 6 de diciembre de 1978, período del devenir democrático del franquismo, resuelto a través de pactos políticos y sociales, públicos y secretos, entre el gobierno de Suárez y Gutiérrez Mellado y la oposición político-sindical, y gracias a un desarrollo intensivo del terrorismo de Estado. 3. *El período constitucional o del desencanto*, que va desde las segundas elecciones parlamentarias, el 1º de marzo de 1979, al mes de febrero de 1981, cuando el régimen democrático va destartalándose progresiva e imparablemente, incapaz del parto sin dolor de un Estado policial con todas las apariencias democráticas bajo el pretexto del terrorismo, entre una estela de desastres políticos gubernamentales.

El primer período viene marcado por la agudización de las luchas sociales, las cuales, debido a la inexistencia de una burocracia político-sindical constituida en los lugares de combate, no paran de radicalizarse y evidenciar que la cuestión a resolver no es política sino social. Desde ese punto de vista puede considerarse como un prólogo revolucionario que se prolonga hasta el período siguiente; tiene sus comienzos en enero de 1976 con la huelga del metro

madrileño y su punto culminante en Vitoria (marzo 1976). Para los hombres todavía en el poder todo se reducía a una reforma electoral que ensanchase el círculo de privilegiados políticos hasta incluir un partido socialista en el seno del régimen, y al reparto de las tareas de la gestión estatal que hasta entonces estaban exclusivamente en manos de los franquistas. Pero como la presión proletaria alcanzaba niveles peligrosos que hacían insustituible un «partido del orden» en el seno mismo de los trabajadores, y que éste era imposible sin cumplirse todas las condiciones del espectáculo político llamado por los dirigentes «democracia», la continuación del franquismo, aunque fuera con retoques, resultaba inútil y perniciosa para la clase dominante. Es pues la clase obrera quien determinó la forma general de la nueva democracia.

Todos los partidos, todas las personalidades, todos los tinglados y todas las pandillas políticas que formaban la oposición, desde Gil Robles hasta Fernández Ordóñez, desde los demócratas cristianos a los ultraestalinistas de la ORT, encontraron un lugar reconocido en cualquiera de las plataformas que preparaban la negociación con el Estado, una negociación que diese forma burguesa a los resultados recientes de la lucha de clases y alejase de la escena pública a los verdaderos protagonistas, los proletarios. Las pretensiones de quienes parecían ser más apropiados fueron reconocidas por la apertura de conversaciones del Gobierno con la plataforma «de los nueve». Así, mientras el proletariado dejaba escapar la excelente ocasión que tenía ante sí, y que él mismo se había proporcionado, todos los poderes sociales dispersos por el franquismo decadente, se agrupaban, se reunían y se concertaban: un auténtico «partido del orden» constituido por el conjunto de los partidos políticos, la prensa, los sindicatos y las instituciones estatales, se erguía con el apoyo de todas las clases no proletarias del país, y celebraba su primer triunfo electoral, el referéndum de la Reforma política del 17 de diciembre de 1976.

El segundo período puede dividirse a su vez en dos mitades. La primera va de la llegada al poder de Adolfo Suárez, un oscuro burócrata franquista con un currículum casi en blanco, al Pacto de la Moncloa, el 27 de octubre de 1977, y transcurre bajo un acuerdo oficioso, una alianza no proclamada pero firme, entre el Gobierno y la oposición, con unos objetivos precisos: la contención del movimiento asambleario del proletariado y los primeros pasos de la transformación democrática del régimen, a saber, la disolución de las Cortes franquistas, del Consejo Nacional del Movimiento, del Consejo del Reino, del Tribunal de Orden Público y de la policía política; la legalización de los estalinistas, las elecciones parlamentarias y la amnistía total. La segunda mitad alcanza hasta el referéndum constitucional, y transcurre bajo un pacto social

oficial y una política de unión sagrada entre la oposición y el Gobierno denominada «consenso», que persigue la derrota final del movimiento asambleario sentada en las elecciones sindicales, y la elaboración de una «Constitución», verdadera carta magna de la modernización pactada del franquismo.

La «batalla» por la democracia no consistía más que en ganar tiempo para el incremento de los medios de coerción que le faltaban al franquismo (la informática policial y los GEO fueron una invención de la democracia). Esa era tarea de la oposición. El aparato represivo era el engranaje motor de la nueva maquinaria estatal construida con las mismas piezas que la vieja; la democracia, sistema político creado con el acuerdo del Estado y la oposición, no siendo más que un esfuerzo que la burguesía llevaba a cabo con el propósito de ensayar adaptaciones políticas que evitasen la revolución social, estaba condenada a evolucionar en la tradición del régimen que pretendía sustituir y buscar su consolidación en un suplemento de policía. La policía seguía siendo el aparato ortopédico para contener las hernias del sistema y por lo tanto fue respetada sin retoques. Para la clase dominante y por consiguiente para sus servidores, no podía tratarse verdaderamente de alcanzar un estado de beatitud democrática que acababa de desaparecer en el resto del mundo, sino de ponerse a tono con la decadencia general: las viejas democracias europeas volviéndose totalitarias cambiaban de contenido, el viejo totalitarismo franquista volviéndose demócrata cambiaba de forma. Así el Estado español simplemente se adaptaba a las necesidades del momento, que son las que le imponían la propia descomposición del viejo régimen y la subversión moderna. Eso explica el por qué la reforma política se detuvo a la puerta de los cuerpos represivos, por qué no penetró en las cárceles, por qué evitó el ejército, por qué los jueces permanecieron fascistas, y en definitiva por qué el armazón de la dictadura quedó intacto: porque los mismos bastiones que sostuvieron al general Franco, sostenían la monarquía parlamentaria. Y por lo tanto, lejos de intentar poner trabas legales a todas esas despreciables instituciones, la llamada «clase política» procuraba crear unas condiciones legales óptimas -intentando conseguir el mayor asentimiento de la población posible- para su libre desarrollo y para el logro de las mayores cotas de represión. ¡Cuántos luchadores no han muerto ya a manos de la policía, la guardia civil o los carceleros que ilustran con sangre este hecho! La oposición tenía que probar a la burguesía que el franquismo no tenía por qué añorarse, puesto que al rebasarlo en potencial represor el franquismo quedaba obsoleto. Y también convencer a sus votantes de que la democracia no podía salvarse si ella misma no hacía lo que sus hipotéticos enemigos querrían hacer contra ella. Así un Estado senil, mediante la legitimación democrática que le concedió una

oposición servil, hizo de España uno de los laboratorios de la contrarrevolución mundial, en donde al calor del ambiente se ha realizado la fusión de todas las técnicas policiales, empezando por los antiguos métodos de provocación e infiltración y terminando por el espectáculo moderno del terrorismo.

No hay salvación posible, para estas sociedades con pies de barro, que no repose en un enorme aparato coercitivo que coloque bajo la bota de los gobernantes a la totalidad de los individuos y las conciencias; huelga decir que el complemento indispensable de tal método de gobierno es un vasto sistema legislativo que regule los movimientos de los súbditos y retenga una a una todas las libertades concedidas de cara a la galería. Ese escudo para afrontar las luchas sociales es la Constitución, fruto de las alianzas y compromisos del «consenso» -el pánico de las clases poseedoras tomando forma parlamentaria-, de la política «de orden» consistente en llevar a la Cámara los problemas de la calle para allí ser cómodamente asfixiados. La Constitución nunca tuvo como finalidad un reordenamiento democrático del poder franquista, sino su asentamiento sobre las mismas bases, a través de una evolución represiva de su articulado. La Constitución es la codificación del orden existente y como ese orden es precario el articulado es ambivalente, susceptible de todos los desarrollos posibles. Es la articulación de un estado desarticulado de cosas. En la letra la libertad, en el espíritu su supresión. Y como corolario, mientras de palabra es respetada la libertad y solamente prohibida su práctica más allá de estrechos límites, marcados por la ley se sobreentiende, la existencia constitucional de la libertad queda asegurada, y su existencia real impedida. La Constitución existiría para que las libertades democráticas provisionalmente otorgadas, desapareciesen *constitucionalmente*.

Los mayores obstáculos de la salvación del franquismo fueron precisamente los más franquistas. El ejemplo de Torcuato Fernández Miranda, artífice del suicidio de las Cortes franquistas, renunciando a sus cargos oficiales una vez cumplido el cometido que se le asignó para morir silenciosamente de melancolía mal soportada meses más tarde, no se repitió a menudo. A los oligarcas se les tuvo que hacer entrar en razón mediante la «operación cromo», que más adelante explicaremos. Los generales planteaban problemas especiales: habiendo fijado el rumbo político del Estado durante cuarenta años, no accederían de grado a ser apartados de los ministerios, y siendo todos viejos combatientes de la guerra civil encuadrados en un ejército organizado según el concepto de «enemigo interior», es decir, en un ejército de ocupación, no se quedarían sin oponer resistencia a cada una de las reformas políticas contempladas como victorias del «enemigo». Pero el general más poderoso de entonces, De Santia-

go, tuvo el fallo de dimitir de la vicepresidencia del Gobierno a la primera de ellas, la que legalizaba los sindicatos, y fue sustituido por un hombre de Díez Alegría, el general Gutiérrez Mellado, sin arrastrar más solidaridad que la del general Iniesta, ni traer más consecuencias que sus pases a la reserva. Siguiendo la misma táctica los otros dos militares ministros se pusieron fuera de combate ellos mismos cuando la legalización del PCE, el 9 de abril de 1977. Y el máximo organismo representativo de la jerarquía militar, el Consejo Superior del Ejército, no hizo más que condenarla por principio y aceptarla por disciplina, o sea acallar la conciencia, reconocer su desorientación y curarse en salud. Cuando De Santiago, Álvarez Arenas, Coloma Gallegos, Prada Canillas, Pita, Milans y Campano se reúnen en Játiva (el 13 de septiembre) para elaborar una alternativa política a la reforma democrática, Gutiérrez Mellado ya tenía preparado un plan de relevos sorpresa y de ascensos imprevistos que sin necesidad de fulminantes ceses, peligrosos cuando no se tiene la autoridad suficiente para parar la reacción que provocarían, desmontó la intentona de dirigir el ejército contra la renovación pactada del franquismo. Los generales se daban golpes de pecho y Gutiérrez Mellado golpes de decreto: por decreto se suprimió el Alto Estado Mayor y se creó la JUJEM para sustituirle, que unificó la cadena de mando para engancharla en el Ministerio de Defensa, y desaparecieron por decreto los ministerios militares.

III

Sin poder lograr que las masas adorasen una neodemocracia que no les aportaba ningún provecho tangible, el Gobierno y los partidos recurrieron a la evocación de enemigos detestabilísimos, a fin de que en comparación el orden existente resultase tolerable e incluso gentil. Dos amenazas simétricas tenían que servir de incitación al apoyo de la democracia negociada: por un lado la conspiración de los militares nostálgicos del franquismo, y por otro lado el terrorismo de fanáticos extremistas. En realidad, esos enemigos imaginarios no sólo eran pretextos para imponer las medidas represivas necesarias a la existencia del régimen, amenazada por sus enemigos auténticos, sino que también eran la imagen falsificada de dichos enemigos, cuya simetría en el espectáculo debía servir para reforzar la mentira de la unanimidad democrática, mientras que su antagonismo en la práctica la ponía en peligro. Porque si, según la escolástica democrática, los extremos se neutralizan, para mayor gloria de la inercia existente, en la realidad se enfrentan y hacen avanzar la historia destruyendo cualquier equilibrio. Los enemigos auténticos del compromiso instituido eran

por una parte, no un puñado de militares fascistas, sino la inmensa mayoría de los cuerpos represivos militares y policiales, que, después de haber temido lo peor tras la muerte de Franco, habían visto con alivio que el nuevo personal político les consideraba y les cortejaba, y que seguían hablando fuerte con la cabeza alta, pues se sabían indispensables. Y por otra parte, en el otro extremo, estaban todos los que rechazaban la democracia regalada por los franquistas y que seguían luchando contra el Estado, bien para separarse como los abertzales vascos, bien para destruirlo como los trabajadores revolucionarios y los diversos grupos que practicaban la acción directa. Éstos eran enemigos muy diferentes, ya que el régimen a aquellos ni les quería ni les podía vencer y a éstos tenía, por encima de todo, que vencerlos: el compromiso era tanto más necesario con unos cuanto más imposible con los otros. En consecuencia, la escenificación del terrorismo ha sido la forma, incierta y plagada de conflictos, de la colaboración obligatoria del régimen con los primeros contra los segundos, a la vez que el sonajero del «golpismo», además de su función intimidatoria, correspondía a las tentativas del gobierno para disuadir a sus preocupantes «aliados» de no intentar aprovecharse excesivamente de su ventaja. Y con qué éxito, puesto que los militares tanto han asimilado la causa de la democracia que han terminado identificándola con su propio poder.

Todos los políticos y líderes sindicales, los intelectuales, los periodistas y las vedettes, se han esforzado y continúan esforzándose en persuadir a la población de que la «democracia» corre un gran peligro y de que no se trata sino de olvidarse de los intereses propios y abrazar incondicionalmente los del Estado. La condena de cualquier forma no integrada de disentimiento, es decir, de toda lucha real, el clamor hipócrita contra el terrorismo, la inseguridad ciudadana y los «desestabilizadores» infiltrados entre los militares, y la exaltación frenética de la monarquía, la policía y el ejército, son las tres etapas de un razonamiento circular repetido por todos hasta la saciedad. Y los medios de comunicación al servicio del embrutecimiento y la mentira, o sea todos los medios de comunicación, llamados así abusivamente ya que sólo difunden consignas del poder, han sido cómplices de todo el aparato intimidatorio montado alrededor del terrorismo, con el fin de que el Estado dispusiera de la unanimidad necesaria para su supervivencia. El terrorismo es el remedio de las cosas sin remedio, y como decía Ángel Pestaña cuando era joven y revolucionario, «el método de gobierno practicado por quienes aspiraron lo que ningún otro título podía concederles» (*Terrorismo en Barcelona*, 1924).

Si la burguesía española y su personal gubernamental tuviese memoria histórica, no hubiera necesitado inspirarse en el ejemplo de sus homólogos

italianos para confeccionar sus tramas terroristas, y por tanto no hubiera lamentado la ausencia del general Della Chiesa, uno de los estrategas del terrorismo de Estado, «una figura decisiva en Italia en los dos últimos años», como dice el repugnante Oneto en *Cambio 16* (30-3-81), capaz no sólo de conseguir para sus tramas el apoyo sino «el estímulo de todos los partidos del arco parlamentario». En efecto, la historia de la burguesía española desde la restauración borbónica ofrece numerosos ejemplos de la práctica del terrorismo de Estado y del terrorismo patronal, es decir, del ejercido por la burguesía directamente, manteniendo a sueldo bandas de pistoleros, como la del ex-policía Bravo Portillo y la del falso barón de Köning en los años 20.

«Es un fenómeno histórico incontrovertible que una clase en el poder, al sentir que abajo el enemigo va minando los cimientos, acude al terrorismo, cuyas formas varían, según las circunstancias» (Joaquín Maurin, *Los hombres de la dictadura*, 1930). A finales del siglo pasado la clase obrera sufrió incesantes provocaciones del Estado. La oligarquía agraria y financiera en el poder anhelaba suscitar una respuesta violenta desesperada para imponer la suspensión de las garantías constitucionales y destruir el movimiento obrero, reorganizado después de la disolución de la Internacional. Turbios y sospechosos atentados sirvieron de excusa para el montaje de los tristemente famosos procesos de Montjuich y de la Mano Negra, que sirvieron de tapadera a una sangrienta represión de trabajadores en Barcelona y en Andalucía. Un hombre de Estado, Prim, antaño fue eliminado en un ajuste de cuentas entre fracciones del poder rivales. Cuarenta años después, en 1912, otro hombre de Estado, Canalejas perdió la vida probablemente por razones similares a las que hicieron perderla a Aldo Moro, a saber, porque su política de acercamiento a los republicanos y la burguesía industrial, hizo cundir el pánico en los sectores que entonces detentaban el poder, la iglesia y los partidos agrarios, que pensaban de diferente manera con respecto a la solución de la crisis del Estado monárquico de principios de siglo. Efectivamente, en su lucha contra la burguesía industrial -reducida en su ámbito a Cataluña y por lo tanto apareciendo históricamente como partido catalanista-, el Estado de los «liberales» y los «conservadores», es decir, de los terratenientes andaluces y castellanos, inspiró en Barcelona un terrorismo endémico. La monarquía de Alfonso XIII respondió con las bombas colocadas por el provocador Rull, agente del Gobernador civil de Barcelona, a la agitación catalanista de la burguesía (Solidaridad Catalana, 1905-1907). Y siguió disparando contra patronos desde 1916, hasta que el miedo de una revolución social se apoderó de la burguesía catalana, y entonces los cañones de los terroristas, esta vez pagados por ella misma, apuntaron en otra dirección, en di-

rección de los «sindicatos únicos» de la CNT. Durante el período del terrorismo «blanco» y de la «ley de fugas» más de doscientos sindicalistas fueron ejecutados por policías y pistoleros, y las organizaciones obreras quedaron diezmadas.

Para mejor calibrar los progresos realizados en materia de lo que en Francia llaman *racket* estatal, detengámonos un instante en un artículo que publicó *Cambio 16* el 16-7-78: «Para llegar a 1984, sólo faltan seis años pero las profecías del autor de "Homenaje a Cataluña" están aún próximas, ¿culpable? Aparentemente uno: el terrorismo, germen planetario que ataca con especial virulencia a los regímenes democráticos de la Europa Occidental (...) El conjunto (de maquinaria policial comprada por Martín Villa, ministro del Interior, en Alemania) presenta una configuración fortísima. Lo que más sorprende es el lector de láser, los cuatro procesadores y la capacidad de almacenamiento en disco. Parece como si quisieran almacenar información de los 36 millones de españoles (...) si hay algo que justifique la acción clandestina del gobierno y la contrainteligencia y el espionaje, es el terrorismo». Esta revista, especializada en presentar como artículo de fe todo lo que el Estado quiere que se crea, sobre el terrorismo y sobre cualquier otro tema, nos promete un futuro aterrador de la mano del Estado, justificado con su aparentemente gran enemigo, el terrorismo, que presumiblemente nos conduce al mismo lugar. Pero ¿qué clase de salvador es este Estado, que nos condena a aquello de lo que nos quería proteger? ¿Qué clase de elección podemos hacer entre él y el enemigo que nos acecha si ambos nos reducen al mismo horror? La solución de esta aparente contradicción es muy sencilla, y podemos deducirla de la misma pregunta: *el Estado y el terrorismo son la misma cosa*.

El terrorismo es el método habitual de conservar el poder la clase dominante cuando los demás métodos no bastan. Es la parte más visible de un proceso que pretende desmoralizar toda tentativa de oposición real al régimen establecido: bajo Franco se perseguían «revolucionarios», bajo los demócratas se buscan «terroristas». La estrategia terrorista del Estado pretende despertar en la población temor, fatalismo, sentimientos de impotencia e inseguridad, y entrega psicológica al aparato policíaco. Como escribió el estadista de Felipe IV, Saavedra Fajardo: «El pueblo apremiado del peligro respeta las leyes (...) que en los ánimos flacos el mayor enemigo es la seguridad, y que los ciudadanos, como los pupilos, han de menester por tutor al miedo».

El chantaje del terrorismo ha servido para resucitar la policía política en el mismo momento que se proclamaba su disolución a principios de 1977; la vieja Brigada Político-Social era rebautizada con el nombre de *Brigada Central de Información*, dominando sobre una pléyade de Brigadas Regionales de Infor-

mación, y asimismo para crear un cuerpo de choque, los *Grupos Especiales de Operaciones*, GEO. El terrorismo es un buen neutralizador de la cuestión social, porque reduce los problemas sociales a un único problema de orden público, como en tiempos de la dictadura. Así no se plantean más soluciones que las policiales. El terrorismo de la primera etapa suarista fue un factor excelente de cohesión alrededor del gobierno de todos los partidos, a la vez que una cobertura pasable de todas sus mentiras y abusos. Salvo en los atentados relacionados con la «guerra sucia» contra ETA, el terrorismo de Estado no se ha dirigido directamente contra la población, sino principalmente contra las fuerzas del orden. Parece que no haya tenido más finalidad que la de dar a entender a los partidos mediante la tensión provocada, que su suerte es la del Estado. Cada vez que la tensión política es fuerte cesa la ofensiva, pero cuando los efectos remiten, un nuevo atentado eleva la tensión. Entonces los partidos, tenidos a la vista del peligro, se unen a la conservación del Estado y contribuyen de buena voluntad a que las leyes de excepción, introducidas en tanto que disposiciones transitorias, continúen vigentes cuando su plazo de duración ha sido superado, y con plena lógica democrática, porque, cuando el orden impera no molestan, y cuando está perturbado resultan necesarias. (La regla de oro de la democracia moderna es que hay que admitir todo lo que nos impongan a fin de conservar *el derecho* de admitir todo lo que nos quieran imponer).

De esta manera la ley Antiterrorista del 4 de diciembre de 1978, promulgada para un año, vio prevista su vigencia un año más con el decreto-ley de diciembre de 1979, para eternizarse convertida en una ley orgánica de Suspensión de los derechos individuales, el 1 de diciembre de 1980, siempre con los votos del PCE y del PSOE. Esta ley, verdadero exponente del lado bananero del Estado español, concede *diez días* de manos libres a la policía y la guardia civil sobre quien deseen aplicarla, auténtico cheque en blanco a todas las humillaciones y malos tratos permisibles, y crea el ámbito jurídico para la práctica legal de la tortura y el asesinato. A la sombra de esta ley, se han efectuado ejecuciones y defenestraciones simuladas, y han tenido lugar palizas, torturas por descargas eléctricas, agotamiento físico, privación del sueño, etc. Escudados con esa ley han sido asesinados no sólo etarras y grapos, como Arregui o Liñeira, sino jóvenes inocentes como los de Almería, confundidos con «terroristas» por la histeria persecutoria de la guardia civil. Además, al atribuir la instrucción y fallo de las causas a la *Audiencia Nacional* y sus juzgados, transforma de hecho a los mismos en jurisdicciones especiales, resurrección del Tribunal de Orden Público. Esa anomalía está prohibida por la Constitución, pero al fin y al cabo tales anomalías constitucionales son hoy la más firme garantía de la misma.

Estos resultados son la consecuencia de la puesta en escena del peligro terrorista. Detengámonos en ella. Para que la población creyese de verdad en ese peligro, era necesario que lo representase una organización, oculta y escurridiza, que actuase en fechas clave de la normalización democrática y que gozase de tales misteriosas influencias que la hiciesen invulnerable a la policía. Sus miembros, audaces cuando se les cerca, fáciles de atrapar cuando el gobierno tiene dificultades, inexplicablemente liberados cuando son detenidos y resurgentes cada vez que son desarticulados. En resumen, una organización con una caricatura de programa, sin bases, sin historia, cuya violencia reflejase la del Estado y no despertase simpatía alguna entre los explotados, y menos aún les incitase a la acción. Pues desde las desgracias del pope Gapon, los Estados saben que no es bueno excederse en la provocación so pena de verla triunfar más de lo conveniente.

No olvidemos que una acción subversiva auténtica puede servir también de pretexto al Estado para el refuerzo de sus medios represivos; sería no solamente aberrante sino deshonroso para los revolucionarios el uso del lenguaje de las amalgamas policiales y el etiquetar de «terrorismo» a todo lo que se opone mediante la violencia al orden existente. Pero una acción subversiva, precisamente por lo que es, es capaz de vencer la resignación, despertar la energía revolucionaria en las masas y mostrar el camino de la violencia eficaz. Por consiguiente el Estado en lugar de tener que hablar de sus enemigos reales, siempre preferirá disponer de una organización clandestina lo suficiente bien infiltrada por sus agentes como para poder manipularla y moverla a su guisa, e igualmente utilizarla en los ajustes de cuentas entre la clase dirigente, acompasando el ritmo de sus atentados con el de sus necesidades. Si el Estado español utiliza especialmente estos métodos para conjurar la realidad revolucionaria, es porque tiene muy malos recuerdos de la acción directa practicada en relación con la lucha del proletariado, y porque sabe que la domesticación sindical es frágil. Para montar la imagen del peligro terrorista a fin de aumentar la pasividad en las masas e imponer un mayor control policial, es necesario ocultar totalmente la acción de sus enemigos, o en su defecto realizar atentados absurdos atribuyéndoselos para desacreditarles. Así se ha obrado algunas veces contra ETA y contra los anarquistas; recuérdense los casos de la cafetería Rolando y la sala de fiestas Scala. Describiendo ya en 1864 las condiciones de la instauración de un despotismo moderno que respetase las apariencias de la democracia burguesa, Maurice Joly había definido la técnica de las conspiraciones ficticias usada para combatir las conspiraciones reales: «Habrá tal vez conspiraciones verdaderas, no respondo de ello, pero habrá ciertamente cons-

piraciones simuladas, puede ser un excelente recurso para estimular la simpatía del pueblo en favor del príncipe, cuando su popularidad decrece. Intimidando el espíritu público se obtienen, si es preciso, por ese medio, las medidas de rigor que se requieren, o se mantienen las que existen. Las falsas conspiraciones, a las cuales, por supuesto, sólo se debe recurrir con extrema mesura, tienen también otra ventaja: son ellas las que permiten descubrir las conspiraciones reales, al dar lugar a pesquisas que conducen a buscar por doquier el rastro de lo que se sospecha» (*Diálogo en los infiernos de Maquiavelo y Montesquieu*). Y en la sociedad actual el mayor complot lo constituye la existencia misma del proletariado. Si añadimos al cuadro de Joly los poderosos medios que posee el Estado para dar a conocer y difundir sus mentiras, obtenemos la definición general del espectáculo moderno del terrorismo y de su función.

Pero ¿quienes son los terroristas? No son ciertamente los gudaris de ETA o los Comandos Autónomos Anticapitalistas, organizaciones que cuentan con apoyo popular y combaten por un Estado nacional vasco, y que representan una especie de partido independentista armado en guerra contra el Estado español. Menos lo son aquellos obreros que han practicado la violencia armada en sus ajustes de cuentas con la clase dominante, ni tampoco los grupos libertarios descontentos con la metodología sindical de la CNT que llevaron a cabo expropiaciones. A los terroristas hay que buscarlos en las secciones especiales de los cuerpos de seguridad y los servicios secretos del Estado, desde donde se elabora la estrategia del terror de acuerdo con los sectores del poder con autoridad para utilizarlos. Todavía no se ha reconocido en toda su importancia, la actividad de los servicios secretos y de su extensa red de confidentes e infiltrados en la estabilización de la dictadura franquista. Recogiendo la información de otros servicios secretos y de sus propios indicadores, los *servicios de información de la segunda sección bis del Estado Mayor del Ejército de Tierra* (más conocidos por «segunda bis» o SIBE), que llegaron a tener una escuela de infiltración, controlaron a la oposición política y tuvieron en sus manos cargos importantes de todas las organizaciones clandestinas de la posguerra y del maquis. El SIE dependía del Alto Estado Mayor.

Bajo Franco se contabilizaron hasta once servicios secretos diferentes. Los tres ejércitos contaron con sus servicios de información militar, el SIM, y sus diferentes estados mayores las correspondientes segundas secciones; también varios ministerios, así como la Secretaría General del Movimiento y la Hermandad de Alféreces Provisionales, tuvieron sus propios servicios de información, pero los más omnipresentes fueron los de la policía gubernativa y de la guardia civil, la *Brigada Político-Social* y la *Brigadilla*. De esta última depende

la red de chivatos conocida como «el somatén» o la «Guardia de Franco», y en su haber tiene la organización de cuerpos parapoliciales disfrazados a menudo con la ideología de la extrema derecha, como por ejemplo el *Batallón Vasco Español*, y la *Triple A*. La modernización de los servicios secretos vino de la mano de Carrero Blanco, con la creación del *Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno*, el SECED, bajo la dirección del entonces comandante San Martín, uno de los cerebros del golpe del 23 de febrero, verdadera Okhrana del franquismo. Estaba compuesto por unos doscientos militares con graduación de oficial y se dedicaba a acumular información sobre todos los movimientos de oposición que le abastecían otros servicios o sus numerosos colaboradores, y llegó a disponer de un completo archivo de todas las personas consideradas influyentes -el fichero «Jano», hoy en paradero ignorado, comprendía diez mil expedientes-. Aún hoy, en todas las tramas oscuras y crímenes políticos suele consignarse la presencia de miembros o colaboradores del SECED. El SECED fue el brazo que empleó Carrero para detener la evolución democrática del franquismo, mediante una estrategia de provocaciones e infiltraciones en las organizaciones ilegales ejecutada por la Social y la Brigadilla.

La infiltración es una técnica común entre todas las policías del mundo que funcionan, y entre todas las policías que funcionan en el mundo. Cualquier agente provocador puede hallar un grupo adecuado para infiltrarse y arrastrarlo a una acción cuyos efectos no se preveían, pero que estaban inscritos en la lógica planeada por él. Tal fue el incendio del Scala preparado por Gambín en Barcelona. Es perfectamente posible infiltrarse en una organización clandestina jerarquizada, que recluta sus miembros de entre los más susceptibles de fanatizarse y aceptar una disciplina militarista, y después llegar a la dirección por medio de denuncias oportunas, intrigas escisionistas, hazañas preparadas, redadas precisas, y por caídas, amenazas, extorsiones o corrupción de los jefes originales. Una vez que tales organizaciones tienen a la cabeza agentes especiales, se convierten en instrumentos del Estado, que los manipula en función del momento. Así pues, partidos como el PCE(i) y el FRAP llegaron a ser dirigidos por gente trabajando para la policía, y a servir de trampolines de infiltración en otras organizaciones. En los años sesenta, dadas las condiciones de dictadura política, quienes dirigían el Estado sabían que era inevitable que desde la oposición se derivase a posturas radicales. Sus provocaciones trataban de forzar tácticas grotescas de las que resultaran inevitables catástrofes, con el resultado de docenas de militantes ingenuos encarcelados y «quemados», y el saldo subsiguiente de desmoralización y descrédito del antifranquismo. Aventuras políticas que diesen causa a la represión y que disipasen los ecos de la

tortura en las comisarías y en las prisiones. Pero pronto hubo que ir más lejos y llegar a los atentados. Entrados en 1975, la cercana muerte de Franco, casi muerto ya en realidad, hacía cundir el miedo en las esferas del poder temerosas de que una vez desaparecido el dictador sucediese lo imprevisible. Llegado el momento, interesaba que imperase más el temor que la expectación, y que la pasividad fuese tan grande que aplastase con su peso cualquier intento popular de ofensiva. La coyuntura fue elegida con minucia y en el verano de 1975, cuatro meses antes de la muerte clínica de Franco, los agentes de la policía Elena Odena y Raúl Marco que dirigían el FRAP, embarcaron a esta organización en una serie de atentados irracionales que se saldaron con las condenas de muerte de El Goloso y su liquidación total, lanzada a la «guerra popular» con sus jefes previamente denunciados, sin la más mínima preparación militar o técnica y sin infraestructura de ninguna clase. Algunos de estos atentados no fueron reivindicados públicamente, en particular los del 1º de octubre, que poco después se los adjudica una extraña organización, los GRAPO, brazo armado de un PCE(r), destinada a ir pegada a la democracia como siamés. Este grupo jamás tuvo que ver con el FRAP, salvo la coincidencia de la ideología ultraestalinista y la jerarquización vertical, pero sus acciones son similares. En realidad el GRAPO es el continuador de su obra, inservible el FRAP después de las maniobras del verano del 75. El GRAPO será utilizado por los sectores del Estado partidarios de la modernización del franquismo para presionar a los refractarios aferrados a las moribundas instituciones del régimen, y rehacer la unidad del régimen alrededor del nuevo equipo gubernamental encabezado por Suárez. La expulsión de Arias Navarro de la jefatura del Estado no es más que el debut de una maniobra que se anuncia con la explosión de 28 bombas en cinco capitales diferentes el 18 de julio de 1976, y que culminará con los raptos de José María de Oriol y Urquijo, el 11 de diciembre, dos días antes del referéndum de la Reforma, y del teniente general Agustín Villaescusa, el 24 de enero de 1977. La acción apuntaba a desembarazar de obstáculos la Reforma; uno era banquero y prominente miembro del Consejo del Reino, partidario de un régimen autoritario y financiero de la provocación de Montejurra, el otro presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y enemigo de la amnistía política; ambos tenían que convencer a las más altas instancias económicas y militares disconformes, y ceder ellos mismos en sus pretensiones, gracias a lo cual no fueron liquidados. Desde su secuestro, escribieron tres cartas dando su posición final obligada, que *El País* publicó el 5 de febrero. En una, Oriol escribe a su mujer: «Resulta que cuando yo no quise en ningún momento entorpecer el proceso de democratización que lleva el gobierno, y en el que le

deseo acierto y éxito, como lo hice constar por escrito y vosotros sabéis, me he convertido en piedra de escándalo, en estorbo (...). Pero yo no sé qué evolución va a tener esto». En una segunda carta, dirigida a Suárez, se pronuncia por la amnistía total sin aplazamientos, dando prisas al gobierno para su decreto. Por su parte Villaescusa le dirá a Gutiérrez Mellado: «si pensáis en el Gobierno dar la amnistía, creo que lo mejor es darla cuanto antes o manifestar que vais a darla y todo ello para evitar más complicaciones». Por su parte, la legalización del PCE, inscrita en los hechos, no ocurrió sin problemas. Los que habían perdido en el asunto exigieron garantías suplementarias de la docilidad del PCE y éste tuvo que pasar su examen de Estado, soportando estoicamente el asesinato de los cinco abogados laboralistas de Atocha por la mafia vertical del transporte, dirigida por García Carros, y no insistiendo en el precio de su legalidad. Aunque sabían quién ordenó realmente el atentado, no mostraron interés en el esclarecimiento de los hechos. Lo menos que podemos decir es que tuvieron razón en ser rastreros, contentándose con los magros resultados del juicio, y taimados sacrificando sin pestañear a cinco de los suyos, pues justamente en virtud de tales cualidades la burguesía les emplea.

La manera con que se efectuó la «operación cromo», es a grandes trazos la siguiente: en el verano del 76, después de las explosiones de las bombas, el habitual «servicio brillante» de la policía detuvo a 21 grapos, entre ellos a varios jefes, mientras que por otro lado se les infiltraba el policía González Pacheco «Billy el Niño». Durante los secuestros, el comisario Conesa, ex-jefe de la BPS, y relacionado con las investigaciones de los atentados de la cafetería Rolando, de Carrero y del FRAP, se entrevistó con uno de los jefes detenidos, Delgado de Codex. Miembros del GRAPO denunciaron el pacto que tuvo como fin la liberación de los rehenes, el 11 de febrero de 1977. La amnistía veraniega puso en libertad a muchos grapos, incluido Delgado de Codex, «por equivocación» del juez Chaparro, el mismo que liberó al fascista Lerdo de Tejada también «por equivocación», uno de los asesinos de Atocha. La segunda parte de la operación fue la cobertura de las pistas. Con esa excusa la desaparecida BPS volvió a aparecer a las órdenes de Conesa como «Brigada Operativa» y más tarde como Brigada Central de Información. El 11 de mayo de 1979, cuando llegó el juicio de los secuestros, en el que una vez más se contradijeron en sus declaraciones Oriol y Villaescusa, ningún testigo pudo presentarse: Delgado de Codex había sido abatido por los policías que fueron a detenerle, el entonces director general de Seguridad, Emilio Gutiérrez Román, agonizaba víctima de un atentado precisamente del GRAPO, a Conesa le sobrevenía un oportuno infarto y el policía Billy el Niño estaba dispensado de asistir por el ministro Martín Villa,

que poco después fue cesado. El magistrado Cruz Cuenca, primer investigador de los secuestros había sido liquidado aparentemente por el GRAPO, y un mes después del juicio eran eliminados, en París, en extrañas circunstancias, el fundador del GRAPO Martín Eizaguirre, y el tesorero Aurelio Fernández Cario, a cuyo cargo estaba la cuenta bancaria suiza donde se vertió el dinero pagado al GRAPO por su colaboración en los secuestros. Jamás se dijo en el Parlamento ni una palabra de todas estas muertes, ni de los secuestros, ni de la ausencia de testigos en el juicio, ni de la coincidencia de los golpes del GRAPO con los apuros políticos del Gobierno o con la proximidad de una convocatoria electoral. Los políticos no tienen interés en desenredarnos la madeja terrorista. Primero porque por su parte se aprovechan de ella como velo de sus concusiones con el poder, segundo porque en el fondo no están en desacuerdo con unos métodos que de haberlos necesitado no hubieran dudado en emplearlos, caso de haberse visto en el poder, ¿o es que se han olvidado las checas y los cadáveres de Nin, Berneri, Antonio Martín y tantos otros? Tercero y último porque en tanto que leales servidores nunca plantean a sus jefes cuestiones que éstos no desean responder. El detalle final de la operación fue la cárcel de Zamora, en donde «se recibieron órdenes superiores para flexibilizar el reglamento con los grapos», como dice un carcelero a *Cambio 16* (6-1-80), justo lo necesario para facilitar la fuga de los jefes restantes del GRAPO, el 17 de diciembre de 1979, dos de los cuales sucumbirían luego a las balas de la policía. Se comprende que un diario tan cuidadoso en no comprometerse imprudentemente con la verdad como *El País*, se viera obligado a confesar que «todos los esfuerzos oficiales para convencer a la opinión pública de que los GRAPO eran sólo, en efecto, un grupo terrorista de extrema izquierda exento de la siniestra manipulación que algunos servicios de información paralelos se empeñan en instrumentar en este país, han resultado baldíos -quizás irrazonable e injustamente-, pero en cualquier caso, baldíos, sin duda» (19-12-79). A la vez que la prensa tiene que dar a entender lo que todo el mundo sabe, aunque envolviéndolo con precauciones jesuíticas, mantiene la ficción de una manipulación «paralela», que se desarrolla *al lado* del Estado sin implicarle en nada. No tardaría mucho en comprobarse que la democracia no existía sino gracias a estas manipulaciones, y que los servicios que las llevaban a cabo no eran dirigidos desde algún punto oscuro del Estado sino desde su centro. Sin embargo no eran pruebas las que faltaban; al contrario, a cada asunto éstas se acumulaban. El GRAPO fue utilizado para establecer relaciones con los servicios argelinos, y precisamente a través de dos policías infiltrados, Antonio González Pérez y José Luis Espinosa, conocidos por anteriores provocaciones en medios sindicales. Y también para

combatir la reforma penitenciaria. La muerte de Haddad y el atentado fallido a García Valdés, responsables de una reforma desenmascarada en su día por cientos de motines han servido para llevarla a una vía muerta a ser sustituida por el rigor represivo de Segovia y Herrera de la Mancha. Puesto que en un período turbulento, es indispensable a un poder que no quiere pasar por ciertas reformas, la eliminación o disuasión de quienes se han comprometido en ellas, reformas que no pueden rechazarse públicamente pero que no es capaz de afrontar, porque no puede o porque las teme.

IV

Reanudemos ahora el hilo de los acontecimientos. La historia del *tercer período* democrático, el período constitucional, que va desde las elecciones del 1 de marzo de 1979 hasta la dimisión forzada de Suárez, el 29 de enero, es la historia del dominio y la ruina del suarismo, es decir, del estilo de gobierno que guió la «transición» y del equipo político responsable.

Suárez sostuvo la causa del poder, en el proceso de mutación democrática del franquismo, con un acierto inicial que aportaba tanta ventaja a su partido como aureola a su persona. Cualesquiera que fuesen sus méritos, como en política no cuentan sino los resultados, Suárez era tratado como son tratados los que triunfan, pues en principio no se puede saber si el éxito les viene de haber previsto las dificultades a vencer o de haberlas ignorado, de haberlas resuelto o de haberlas esquivado y diferido. No había olvidado que el medio de gozar de mucha consideración en las clases dominantes, era el de proporcionarles antes que nada un gran beneficio. Pero aquellos que se aventuran a modificar las instituciones de un Estado, sin más apoyo que la necesidad que se tiene de ello, les sobrevienen problemas por todas partes, nacidos de los intereses que lesionan y de los métodos que se ven obligados a practicar para consolidarse. Para 1979 una buena parte de generales franquistas acérrimos habían sido pasados a la situación B y las vacantes ocupadas por otros más condescendientes, pero el método y lo que venía detrás, es decir, la sumisión del poder militar al poder civil, habían causado la dimisión del teniente general Vega Rodríguez de su puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército, partidario de un ejército respetuoso pero independiente; con él la reforma militar perdía a un hombre fuerte, y lo que es peor, con su influyente defección el desorientado espíritu gremial de los militares se convertía en un puño cerrado dispuesto a caer sobre la tarta constitucional. Realizar en poco tiempo todos los cambios necesarios era peligroso, pues si en el momento la lentitud era inútil porque no satisfacía

a los apoyos populares que se querían ganar, la brusquedad era perniciosa porque alborotaba a todos los que se beneficiaban del anterior régimen, siendo enemigos de novedades, aunque fuesen necesarias. El ardid político exigía un intervalo entre dos innovaciones, pero obrando así, Suárez se obligaba a repetir equilibrios y renovar tretas constantemente, haciendo de los compromisos sin principios su principal principio de gobierno, hasta quedar atrapado en su red una vez pasado el tiempo de los compromisos. Los silencios que sucedieron a sus «puedo prometer y prometo» eran claros indicios de su desconcierto. Y mientras, su gobierno perdía el control de los militares, la policía, la guardia civil, los servicios secretos, los vigilantes de prisiones e incluso el de su propio partido. La única cosa que seguía controlando era la oposición, y ésta ya no era útil porque ni era oposición ni lo parecía.

Pero si Suárez no tenía ningún poder efectivo, como lo demostró su dimisión, ¿qué tenía entonces? Tenía el poder de la ilusión, que debía durar todo el tiempo que la situación necesitase de ilusión. Su gobierno no era la solución de las contradicciones de la clase dominante española, sino su cobertura provisoria, y ha vivido a costa de sus miserables artificios todo el tiempo que las fuerzas en presencia se han visto obligadas a aceptar por su debilidad, ese compromiso ilusorio. Si es verdad que los gobiernos no se mantienen sino por aquello que dio lugar a ellos, el suarista, nacido del miedo a la revolución de todas las fracciones del poder, tenía que mantenerse neutralizando indefinidamente por el miedo a los intereses y a las ambiciones contradictorias de todos los que lo habían aceptado a la espera de algo mejor, cada cual amparándose en él contra los demás. Prisionero del ilusionismo de los golpes teatrales dados, agitando siempre el espectro del terrorismo y del golpismo, el gobierno suarista se consideraba fuerte porque se le habían sumado los profetas desarmados del interés general de la dominación de clase, los políticos y sindicalistas de la oposición, que nunca hicieron otra cosa sino aparentar combatirle, sin hacerlo realmente nunca. Sentado en la «opinión pública» fabricada por él mismo, olvidaba que su suerte dependía de aquellos que le concedieron la existencia, no de aquellos a los que la existencia la había concedido él. Pues la respectiva debilidad de unos y otros, forzados a colaborar bajo la égida de Suárez, era de naturaleza muy diferente: subjetiva en los que, ante la amenaza revolucionaria habían sacrificado los principales signos exteriores de su fuerza en aras de las apariencias democráticas, y se habían quedado momentáneamente desorientados y privados de programa político e incluso de medios de intervención; y contundentemente objetiva en aquellos que, habiendo sacrificado su influencia en las masas en aras de su instalación en el Estado, no tenían fuerza ni en las

masas ni en el Estado, sino sólo en las Cortes. Y todo el mundo ha constatado qué fuerza era esa.

El equilibrio artificial entre los que habían sacrificado la imagen de su fuerza para conservarla y los que habían sacrificado su propia fuerza para adquirir su imagen, de toda evidencia no podía durar. Suárez imitando a Roosevelt, había declarado con énfasis que sólo había que tenerle miedo al miedo; y esta fórmula pedida prestada, era precisamente el reverso exacto de la verdad: el gobierno temía a todo y a todos, menos al miedo que le mantenía con vida, el que causaba a diestro y siniestro la manipulación de las intimidaciones recíprocas. Pero el equilibrio de chantajes se rompió cuando unos perdieron el miedo por que los otros lo conservaron: Suárez había hecho que los militares aprobasen la participación de la oposición aduciendo la necesidad de controlar el movimiento de masas; y la base de este argumento se desvaneció cuando la oposición se reveló inútil, bien porque las masas permaneciesen pasivas, bien porque fuesen activas pero en su contra, además de que al acumular las pruebas de su mansedumbre, la oposición indicaba la poca inquietud que podía dar su uso de los medios a su alcance y la mucha que daba su externa debilidad.

Ante esta amenazante evolución de la correlación de fuerzas en el interior del partido del orden, la cual contenía en germen su condena y la de la llamada «transición democrática», Suárez y sus partidarios con su política de bluff sistemático, desacreditaron todas las soluciones falsas que apuntaban al mantenimiento de un posible *statu quo*, hasta que la reorganización del poder alrededor de su centro de gravedad militar se impuso como la única tabla de salvación de los demócratas en transición, a partir de lo que el poder es realmente y no de lo que pretende ser. La confusión visible de la vida política de esta democracia era a la vez aparente y real. Aparente en tanto que maniobra de diversión y guirigay del Estado posfranquista para cubrir sus tentativas de reorganización y modernización represiva. Real porque era la expresión de las dificultades que hallaba en la empresa, de los mutuos ajustes de cuentas y de los trapicheos perpetuos dados a causa de ella entre las diversas fracciones del poder.

Esencialmente, sucede que la dominación de clase, que se perpetúa a través de la descomposición del espectáculo, es de punta a punta confusión de la apariencia y de lo real, a tal punto que ya no alcanza a distinguir para uso propio lo uno de lo otro. A este respecto, el mundo entero es como aquella Polonia del verano del 79 en la que los intelectuales reformistas del DIP decían estas cosas: «El juego de las apariencias se practica a tan gran escala que nadie, comprendidas las mayores autoridades del país, conoce ya la realidad».

Por consiguiente, el nuevo personal político de la burguesía española ha andado astutamente por el camino de la modernización democrática mostrándose pronto tan torpe e incompetente en sus mentiras como sus homólogos europeos más trastornados, y perdiéndose en el juego trucado de la «transición». En cuanto se refiere a la población, el cambio democrático quebraba a sus ojos: se prometían libertades mientras se iban suprimiendo legalmente las que ya existían, y crueles leyes de excepción, como la ley de Orden Público llamada después ley de Seguridad Ciudadana, suplantaban las felices cláusulas constitucionales. Las trivialidades destinadas a la galería tenían cada vez menos público: «La continua expansión de la marea negra del abstencionismo, fruto del tedio político y del desencanto democrático, tiene mucho que ver con las dificultades de los ciudadanos de distinguir entre múltiples opciones agolpadas en un mismo espacio político» (*El Periódico*, 16-12-79). O, más exactamente, como lo decíamos nosotros en 1977: «La demasiado evidente irrealidad de esta democracia política que nos cuelan, nacida senil, cuando se trata de lanzar al mercado las diversas variantes de programas gubernamentales entre los que el ciudadano será llamado a escoger, consiste en que el margen de maniobra social de los dirigentes o pretendidos tales, es tan reducido que si presentan ligeros matices plausibles de seudoelección, enormes dificultades les llueven» (*Manuscrito encontrado en Vitoria*).

De aquellos polvos esos lodos... Ya antes de las elecciones parlamentarias del 1 de marzo, en el referéndum constitucional, se tuvo que afrontar la creciente indiferencia y la abstención política que era la consecuencia directa, con la escenificación periodística del desbarajuste de una conjura militar, la «operación Galaxia», «descubierta» el 11 de noviembre de 1978, cuando un año antes había sido suficiente poner en circulación unos cuantos rumores golpistas. Pero el juego imprudente del Gobierno con la imagen de sus propias contradicciones mostraba un nuevo problema: el alejamiento de los cuadros militares.

El distanciamiento del estamento militar de la línea política gubernamental quedó patente con la magnanimidad de la justicia castrense para con Tejero y Sáenz de Ynestrillas en el juicio de la «operación Galaxia» el 8 de diciembre de 1979, y con la absolución del general Atares Peña, que parecía autorizar los insultos que éste dirigió a Gutiérrez Mellado. Los militares más hostiles a Suárez y sus colaboradores contraatacaban, colocando a sus incondicionales en los Estados Mayores de las Capitanías y de las unidades operativas, en las segundas secciones y en los servicios secretos. Estos movimientos camuflados de traslados y destinos, llegaron a ser tan continuos que arreciaron los ru-

mores golpistas, esta vez implicando a la Brigada Paracaidista, a la División Acorazada y a su jefe, general Torres Rojas, que fue destituido drásticamente (24-1-80). La novedad reside en que el pretendido golpe no tenía por cabeza a un fascista como De Santiago o Álvarez Arenas, sino al teniente general Vega Rodríguez, entonces presidente del Consejo Supremo de Justicia militar que se pronunció por la práctica absolución de Tejero e Ynestrillas. La escisión gobierno-militares derivó al enfrentamiento, librado en dos frentes: el de la reforma militar y el de los servicios secretos. Promulgada en abril del 80, la Ley Orgánica de Defensa Nacional no consigue desmilitarizar a la Guardia Civil, pese a lo cual las protestas de los militares son numerosas. La Reforma del Código de Justicia Militar no logra incluir en ella la amnistía de los antiguos miembros de la UMD; la ley de la Reserva, que preveía la jubilación anticipada de militares a Juicio del gobierno, queda totalmente bloqueada. El control de los servicios secretos llevaba implícito el de la clave terrorista. El SJBE, «la segunda bis», antaño brazo de control político de los militares, había desaparecido en parte sustituido por el SECED, y su gente había sido dispersada en las segundas secciones de las capitanías generales. Gutiérrez Mellado creó en noviembre de 1977 el Centro Superior de Inteligencia de la Defensa, CESID, con personal de SECED y de los servicios del Alto Estado Mayor, hasta entonces en manos exclusivas de militares. Era un servicio coordinador de varios departamentos dedicados a la lucha «contra el terrorismo», es decir, a la elaboración de la estrategia terrorista, y a cargo «de la vigilancia de posibles movimientos de involución política en el país», es decir, del mantenimiento del chantaje golpista mediante el sacrificio dosificado de unos cuantos oficiales extremistas. Pero el flamante CESID se dedicó más bien a vigilar los posibles movimientos de evolución política y no precisamente a cuenta del gobierno. Como consecuencia dos jefes seguidos fueron destituidos, pero el ministerio de Defensa de Rodríguez Sahagún no pudo controlar al CESID, al fracasar su intento de colocar un civil al mando, y desde agosto de 1980 quedó el servicio sin jefe: disponer de un CESID bien organizado significaba gozar de un poder como el que tuvo Carrero Blanco, y el hecho de que los generales no consintieran que el gobierno lo amasase evidenciaba ya dos cosas: que los militares desconfiaban del equipo suarista, y que no descartaban una intervención correctiva para «regenerar» la situación. El gobierno había desaprovechado la ocasión que le brindó la conjuración del peligro de la ofensiva proletaria para fortalecerse y extender su poderío, y los militares iban deslizándose hacia el pronunciamiento, para abreviar de forma abrupta la existencia de las contradicciones de la clase política.

Pero antes de llegar a este extremo, hacía falta que estas contradicciones, tanto las de dentro de la clase política como las existentes entre sus intereses particulares y los intereses generales de la dominación de clase, se desarrollasen plenamente hasta la parálisis del régimen. Era necesario que el conglomerado de arribistas políticos de la democracia fuese incapaz de hallar en sí mismo los medios exigidos por la reorganización del poder, la tarea principal y más urgente de la democracia, y que en consecuencia los hechos le contradijesen hasta provocar las iras del propio poder, cuyos atributos no discutió nunca, de impotente que se vio ante ellos. El proceso empezaría con la descomposición del partido del orden que formaron el gobierno de UCD y los demás partidos frente al movimiento asambleario.

V

El segundo triunfo en las urnas de UCD obligó a la burguesía a modificar su estrategia política basada en una previsible alianza UCD-CD, que la derrota electoral de la «Coalición Democrática» hacía imposible, y dar su apoyo a un gobierno monocolor; la gran patronal CEOE que hasta entonces había prestado apoyo al partido de Fraga y su coalición, cambió de opinión y se decidió por UCD y la fraseología democrática. El viraje de la patronal hizo variar la política del partido que gobernaba: el consenso del período preconstitucional fue roto, y la UCD abandonó el pacto que le ligaba al PCE y al PSOE para decidirse por alianzas tácticas menores con los partidos autonómicos, CIU, PNV, PSA, o con los socialistas, según le conviniera. La derecha franquista, fuera prácticamente de todas las decisiones, adoptaba la actitud beligerante propia de los partidos testimoniales. Pero el hecho más significativo de la nueva táctica del gobierno fue la exclusión de los estalinistas del partido del orden. La historia del período constitucional suarista es pues también la historia de la descomposición del PCE a causa de su marginación forzosa. Si los estalinistas fueron viles e implacables cuando hubo que emplearse contra el proletariado, con la misma proporción fueron pusilánimes y cobardes cuando se les echó de los cenáculos patronales y gubernamentales. No es cuestión de relatar aquí la lamentable historia de su derrumbamiento, ni la de la volatilización de las nueve décimas partes de su partido, o la de la reducción a cero de su influencia. Hoy ya no son más que fantasmas que sólo parecen animarse cuando se les deja vislumbrar la posibilidad de participación en la unión sagrada de la mentira democrática.

Dice Clausewitz que «al término de su avance la situación del asaltante es en efecto a menudo tal que incluso una batalla *ganada* puede obligarle a

retirarse, porque le falta aliento para recabar y explotar su victoria, y porque no está en condiciones de reemplazar las tropas perdidas». Y bien, esas tropas de pacificación de la burguesía, partidos y sindicatos, han quedado reducidas a su esqueleto burocrático. Han sido usadas tan a fondo que se han agotado, y ahora, no pueden reponerse para sacar provecho de su triunfo: «¿Para qué sindicarse y pagar cuotas si el magistrado y el delegado de trabajo defienden al trabajador con infinita mayor eficacia que el mejor sindicato de turno? Resultado: la afiliación de los sindicatos baja peligrosamente para el país (...) una cosa está muy clara: si el empresario manda poco, el sindicato pinta menos» (*Cambio 16*, 17-6-79). La precariedad del estado político de las clases poseedoras ha obligado a los sindicatos a prescindir de la comedia del abogado defensor puesto que ya no se trataba de establecer un precio negociado de la fuerza de trabajo, sino de impedir por todos los medios que dicha fuerza escapase del mercado. El proletariado no podía contar con la eficacia de una ofensiva local; le era necesario concentrar sus fuerzas y hacerlas sentir en grandes movimientos huelguísticos, cuyas victorias les protegerían de los contragolpes del enemigo. Pero salvo en el País Vasco, los obreros asamblearios no supieron actuar de ese modo. Los sindicalistas, con una labor de hormiga, fueron minando el poder asambleario, e impidieron que surgiera allí donde no había nacido. El paro creciente, las elecciones sindicales y el endurecimiento de la legislación laboral variaron las condiciones de la lucha social. Pero si el gobierno no impuso entonces el despido libre, la generalización de los expedientes de regulación del empleo o el bloqueo de salarios, erigiendo la victoria en ley, fue porque si osaba aplicar en bloque todas esas medidas, tenía que atreverse a afrontar un posible renacimiento de los movimientos huelguísticos. En 1979, a pesar de que se agotaba la ofensiva por la autonomía proletaria lanzada por los trabajadores cuatro años antes, varias huelgas violentas y radicales como las de la hostelería de Madrid y Málaga, la de los hospitales de la Seguridad Social, la de Fasa-Renault de Valladolid, antracitas de Fabero en León, la de Astilleros de Cádiz, construcción de Salamanca, las generales de Valencia, Vergara y el Bierzo, la del transporte asturiano, el sector tabaquero canario y la de AEG de Tarrasa (Barcelona), reflejaban la correlación de fuerzas existentes. Una encuesta de la revista oficiosa de la democracia oficial, *Cambio 16*, sobre «lo que piensan los obreros» (26-8-79) era aún más clara con tanto cuidado como ponía en ser oscura: «La primera respuesta de los obreros es aplastante: el 94% de ellos asegura que las asambleas son fundamentales para los trabajadores». Si contamos además, los amotinamientos ocurridos a raíz de las muertes causadas por la policía armada, como el de Parla (4 de marzo

de 1979), el de varias ciudades de Navarra y el País Vasco por el asesinato de Gladys del Estal, el 5 de junio, el de Rentería el 31 de junio, y el de Donosti, el 3 de septiembre del mismo año, comprobaremos que la derrota fue vendida cara.

Los sindicatos, al no tener margen de maniobra, se veían reducidos al papel de simples auxiliares de la política patronal. La patronal, teniendo los sindicatos a su merced, pensó en eliminar bocas inútiles, y favorecer al sindicato más conforme con sus intereses. Las relaciones privilegiadas Suárez-Carrillo y Gobierno-Comisiones Obreras que habían marcado el pacto de la Moncloa y el consenso constitucional, terminaron cuando la patronal exigió su fin a cambio de apoyar a la UCD, y decidió llevar al PCE «al ghetto de sus dimensiones parlamentaristas y electorales». Altos directivos de la CEOE confesaban que «no podemos seguir apoyándonos en los hombres de CCOO aunque sean los negociadores más serios» (*Cambio 16*, 2-12-79), aunque «sin duda, el sindicato de Comisiones es, hoy por hoy, quien mejor cumple y con quien mejor nos entendemos en la empresa» (*Cambio 16*, 22-7-79).

La UGT estaba en las condiciones óptimas de servir con eficacia la política de la patronal, pues bastaba un acuerdo privado con el PSOE para volver cualquier proyecto del Gobierno imparable en el Parlamento. El pacto del verano del 79 UGT-CEOE, firmado el 10 de julio, fue la consecuencia de los resultados electorales por un lado, y por otro, de la necesidad de ir preparando el «nuevo marco de relaciones industriales», o sea, el cuadro jurídico que restaurara las viejas reivindicaciones de los empresarios como el despido libre, la productividad como determinante de los convenios, la represión del absentismo, etc. La inclusión de CCOO hubiese hecho el pacto mucho más laborioso, y los estalinistas no hubieran dudado en reforzar a costa de él la posición del PCE. Al pretender los estalinistas un pacto como resultado de la negociación entre partidos, brindó a la patronal y a la UGT una ocasión de oro para distanciarse de un aliado cuyo abrazo resultaba ya molesto. Así, los estalinistas eran relegados también en el terreno sindical y forzados a organizar movilizaciones que ni deseaban, ni en muchos casos tenían fuerzas para llevarlas a cabo. Carrillo mismo había declarado que «no nos negaremos a hacer sacrificios, a aumentar la productividad y a reforzar la disciplina de las empresas» (29-9-79). Simplemente reclamaban su salario de infamia, ¿dónde se puede ver una policía que no cobre por sus servicios? Ni ellos ni los empresarios querían llegar a un enfrentamiento que alumbrase las ascuas mal apagadas de la guerra social. Así, a medio camino entre un posible movimiento huelguístico otoñal y unas leyes laborales de dureza provocadora, los estalinistas aflojaban sus pretensiones y

reclamaban una «unidad de acción» con los empresarios, el Gobierno y los socialistas. Pero la era del consenso y de los pactos de la Moncloa había quedado definitivamente atrás. Si antes era un lujo costoso tenerles en la oposición, ahora no se les quería como aliados, de baratos que se ofrecían; ellos ofrecían más que nunca, aunque bien es cierto que menos que nunca tenían fuerzas para garantizar su oferta. Y así el pacto que hubieran querido firmar, el PSOE y el Gobierno lo adoptaban en el Parlamento en forma de un *Estatuto de los Trabajadores*, el 20 de diciembre de 1979, verdadera expresión jurídica de la derrota más completa experimentada por la clase obrera, si esta legislación antilaboral hubiese sido tan fácil de imponerse como de escribirse.

Con eso a sus espaldas el empresariado se dejaba querer sin dar demasiado amor, y mientras se disponía a firmar el acuerdo complementario del Estatuto de los Trabajadores con la UGT, se permitía hablar con una ligereza sólo comprensible por el grado tan avanzado de impotencia y servilismo a que habían llegado los sindicatos. Las palabras que pronunció Ferrer Salat, presidente de la gran patronal, en una reunión de empresarios, el 19 de diciembre de 1979, son de un cinismo sin desperdicio: «Si no firmamos el acuerdo-marco nos cargamos a la UGT. Toda la estrategia de la UGT se vendría abajo, y perderíamos un posible aliado en la banda sindical. Si no hay acuerdo, UGT no resistirá la lucha convenio a convenio, porque tiene menos organización y virulencia que CCOO. El quid de la cuestión es el tema salarial. Hay sólo un 1% de diferencia entre lo que pide UGT y lo que ofrecemos nosotros. La salida que vamos a ofrecer para que UGT pueda vender a sus bases el acuerdo-marco es que se pacte un 1% más por encima del 15%, en caso de acuerdos de productividad y absentismo. Este 1%, les permitirá salvar la cara delante de su gente. CCOO, siguiendo directrices del PCE quiere «italianizar» nuestro país, es decir, destrozar a los socialistas. Esto me lo ha dicho el propio Carrillo; UGT, hace un año estaba en situación crítica. Un año más y desaparece. En abril dieron el giro y rompieron con CCOO, en junio firmamos el acuerdo CEOE-UGT y se rompió el frente sindical. En el Estatuto de los Trabajadores hemos obtenido facilidades para el despido en la pequeña y mediana empresa. Hemos conseguido que se pueda despedir con una reducción del 20%, y no se paguen los salarios de tramitación en el despido improcedente. Otra ventaja es el silencio administrativo de la Dirección General de Trabajo para resolver los expedientes de regulación del empleo. Le basta no contestar y se resuelve positivamente y se puede despedir. También son positivos los contratos a tiempo parcial. El convenio-marco servirá para romper por arriba la escalada de negociaciones colectivas y de reivindicaciones». El pacto social de la UGT y la CEOE fue firmado dos semanas

después de esta conferencia, el 5 de enero de 1980, con el nombre de *Acuerdo Marco Interconfederal*. Con ese acuerdo, la UGT se empeñaba en combatir el «asambleísmo», la baja productividad, el absentismo, la indisciplina, y en imponer un recorte de salarios, una prolongación de los convenios a dos años y una jornada laboral congelada; pero lo más asombroso es que por primera vez en España, un sindicato aceptaba que se dedujera del salario la repercusión del precio de la gasolina en las arcas patronales.

Los estalinistas, con ser llamados a negociar con la UGT, veían que no habían mejorado su posición, antes bien, cubrían una operación cuyo resultado sería el fin de su supremacía sindical. Y esa supremacía era ya su única carta política de valor. Así pues, aunque el fracaso de sus movilizaciones controladas de junio, octubre y noviembre les habían desacreditado considerablemente, los estalinistas no tuvieron más remedio que cumplir sus amenazas y trabajar para desbordar en las fábricas el acuerdo de CEOE y UGT al que entretanto se adhería USO, la central del Ministerio de Trabajo. La ruptura de hostilidades empezó en una empresa en la que gozaban de fuerte implantación y pensaban salir airosos del «duelo sindical»: la Seat. Un dirigente de Seat de las CCOO declaraba a *El País*: «En esta huelga no está en juego solamente el problema de Seat, sino también la política de la CEOE y el futuro del movimiento obrero y sindical en España. El control sindical de la fábrica es nuestro» (11-1-80). Pues bien, si en Seat se jugaron su futuro lo perdieron, porque, víctimas de su propia estrategia, se vieron sumergidos en una huelga asamblearia y violenta, y verificaron una vez más que no se les cree más que cuando hacen sentir la fuerza de los trabajadores, y casi siempre su interés está en que se crea más que en que se sienta. Tuvieron que detener la huelga con toda clase de maniobras y con la ayuda de la CSUT, que cuñaba con la felonía característica su última aparición sindical. Cómicamente gritaban: «Apoyaremos las decisiones de la asamblea, no del asambleísmo» (*El País*, 19-1-80). Y el inevitable comentarista fariseo comentaba: «La única explicación que podría encontrar este aparente contrasentido radica en los riesgos de un asambleísmo, sin justificación en el nuevo marco democrático que tanto CCOO como UGT han propiciado, y justo es reconocerles el mérito. Justo es también constatar aquí cómo, una vez superada la apasionante tarea de *traer la democracia*, la desafiliación parece ser la respuesta generalizada a la actuación de las centrales en la nueva etapa» (*El País*, 18-1-80). Una manera elegante de exponer el drama de los estalinistas. En esta pelea de lagartijas, la UGT llevaba la mejor parte, porque mejoraba el marco de su representación burocrática con sólo firmar los convenios unilateralmente y a espaldas de los comités de

empresa sindicales, de los cuales formaba parte, y CCOO empeoraba el suyo lanzando contra los acuerdos que la marginaban huelgas que la destrozaban.

La campaña de huelgas de CCOO, fue un fracaso que puso de relieve su disminuida capacidad de convocatoria y la pérdida de protagonismo a los ojos de la patronal. Por una parte quedaron en evidencia ante las huelgas incontroladas que no consiguieron abortar a tiempo como las de Seat, los estibadores portuarios, el metal de Álava, el transporte de Vizcaya, la construcción de Madrid, laminaciones de Lesaca, Orbegozo y sector papelero guipuzcoano..., ni pudieron evitar que se formase en Bilbao una *coordinadora de delegados* de las fábricas en huelga al margen de los sindicatos, que realizó importantes movilizaciones y obligó a la patronal a ceder más allá de lo acordado con las centrales. Por otra parte no lograron impedir que el 80% de los convenios suscritos en 1980 se ajustasen al contenido del AMI, y sólo una mínima parte de los restantes quedó por encima de la barrera del pacto. CCOO además, reflejaba los estertores del PCE, y su aparato se descomponía aceleradamente en una cascada de querellas, divisiones, expulsiones y escisiones. Entonces los estalinistas dieron un giro de 180º, liquidando su política de hostilidad para lanzarse en brazos de UGT, no sin provocar nuevas luchas internas. Carrillo, en una reunión en Madrid en mayo, se lamentaba de todas estas desgracias: «Se utilizan los órganos de CCOO como un lugar donde se dirimen querellas de partido y hasta como un instrumento de presión para invertir desde el sindicato la política del partido (...) hubo comunistas que acogieron la ausencia de la confederación en el acuerdo-marco con un suspiro de alivio, como una victoria. Pero con "victorias" así, la confederación correría el riesgo de perder su posición mayoritaria con la que podría alzarse UGT». También los empresarios empezaban a dudar de «victorias» como la de UGT: ni se había reducido el absentismo ni había crecido la productividad, y si la conflictividad había disminuido era al precio de no haber sido avaros en el AMI. Lo acordado estaba pendiente de ser confirmado con un triunfo de la UGT en las *segundas elecciones sindicales* deseadas y animadas por la propia patronal más que por las centrales, como así sucedió. Los estalinistas habían alentado la actitud corporatista y gremial entre los trabajadores, y ahora comprobaban que habían preparado la cama para UGT, porque la mayoría de los trabajadores se desafiliaban y preferían abstenerse en las elecciones, y la minoría corporatista, disgustada por las huelgas demagógicas y por los vaivenes sindicales de CCOO, se volcaba a los socialistas. UGT ganó primero allí donde intentaron perderla, en Seat, y fue desplazando a los estalinistas en empresas decisivas como Hunosa, Fasa, Ensidesa, Babcock Wilcox, Uralita, Pirelli, Marconi, etc. La preeminencia de CCOO tocaba su fin, y el partido estalinista se iba

cuesta abajo, pasando de 200.000 militantes declarados en su IX Congreso de abril de 1978, a unos 15.000 a finales de 1980.

Pero a decir verdad, todo esto ni interesaba, ni mucho menos entusiasmaba al grueso de los trabajadores; la costumbre que tenían de la comedia sindical explicaba su indiferencia ante los infortunios de un sindicato o las tribulaciones del otro. Además, no sentían ningún respeto por las instituciones; bastó una ocupación del Parlamento Vasco por los trabajadores de Nervacero, el 26 de junio del 80, para que el conjunto del tinglado democrático quedase en ridículo: la cara lívida de Garaicoechea balbuceando disculpas ante los insultos de los obreros, el secretario del partido de la «revolución» vasca, Onaindía, reprochando a los trabajadores sus ideas revolucionarias «de mayo del 68», el estalinista Lerchundi, «legítimo representante de la clase obrera» secuestrado por sus representados; y en fin, el fascista Florencio Arostegui, diputado por AP, pronunciando a su pesar la frase más verídica de su vida: «Cuando el Parlamento se convierte en una asamblea de fábrica, ya no hay democracia». Si, cuando la noria interminable de discursos y declaraciones que predican la sumisión y la miseria se ve interrumpida por la clase obrera, eso significa que la farsa ha terminado, que la verdadera democracia corre a imponerse, la de las asambleas obreras insurgentes.

Sin embargo, no estábamos en ese punto; la acción de los proletarios de Nervacero aunque meritoria, era una acción aislada que formaba parte de su lucha particular contra el plan de viabilidad de su empresa. Comenzaba una nueva estrategia patronal-sindical tendente a reducir las negociaciones de los convenios al seguro de las actuales plantillas o a una reducción pactada. El bloqueo de la Ley de Huelga, favorecía las medidas vigentes al respecto, de corte autoritario y más represivo que el que podría ofrecer dicha ley. Los trabajadores, acorralados por el paro, no tienen más opción que aceptar planes de saneamiento y regulación suscribiendo compromisos draconianos con la empresa, o pasar a «engrosar la lista de los españoles cuyos derechos están protegidos por el ordenamiento legal, es decir, al paro», como lo planteó Abril Martorell a la comisión de Nervacero, el 11 de julio. La ley Básica del Empleo de octubre de 1980, reduciendo las prestaciones del paro, elevaba la opción a rango de ley. Los trabajadores tenían que renunciar a todas las ventajas conseguidas en los últimos años, o el gobierno y la patronal dejaban que las empresas en crisis se hundiesen. Las propuestas son deliberadamente duras con el fin de facilitar a los sindicatos una «vía intermedia» que prestigiase la negociación de despacho. Una larga estela de planes de reestructuración y viabilidad han sido aprobados sin remedio en fábricas que se señalaron por una alta combatividad en tiempos

no muy lejanos, y algunas como Ascon, Bultaco, Echevarría, Duro-Felguera o Potasas de Navarra, de gran significación para la lucha de clases.

El proletariado siempre procuró un avance cada vez que la lucha parecía tomar nuevos ánimos, pero desde 1978, cada vez con menos energía y resultados menores. La crisis económica fue vuelta contra ellos con la complicidad abierta de los sindicatos, hasta quedar a merced del gobierno y la patronal, y ser vapuleados a placer con medidas que les llevaban a las peores condiciones de trabajo posibles, cuando no a la pérdida del mismo. En lo sucesivo, los proletarios no contarán ya entre las principales preocupaciones del poder, que en esos momentos se aprestaba a salir del avispero de la política regional de Suárez.

VI

El acuerdo de Suárez con el PNV para la promulgación del Estatuto Vasco, el 17 de julio de 1979, fue su último éxito político, tras el cual se cantaba «la definitiva estabilización de la democracia». La cuestión vasca, entremezclándose con todos los fermentos revolucionarios que sacudían la sociedad de clases, desde el movimiento de las asambleas hasta la agitación antinuclear, y agravada con la presencia de organizaciones armadas de fuerte arraigo popular y con gran experiencia de guerrilla urbana, llegó a unos extremos tales que se convirtió en una cuestión de Estado, obligando a introducir al PNV en el consenso constitucional; una vez que éste condenó de forma convincente al nacionalismo armado en la manifestación anti-ETA del 28 de octubre del 78, no habían objeciones. El PNV, ha practicado siempre invariablemente la misma táctica política: esperar que el Gobierno perdiera el control de la situación y se viera obligado a dejarle a su cargo el poder en Euzkadi. El PNV sabía que era indispensable mientras el Gobierno buscase soluciones políticas al problema vasco, máxime cuando las soluciones policiales habían hasta la fecha resultado baldías. En las elecciones del 1º de marzo se mantuvieron las posiciones del nacionalismo integrista y moderado -PNV y EE- pero se contrayeron las de UCD y PSOE, y apareció pujante el nacionalismo intransigente «abertzale». Las manifestaciones de abril de 1979 contra la represión, en Bilbao, fueron un éxito de movilización de nacionalistas y abertzales, que refrendaron la debilidad de los demás partidos. El PNV quedó árbitro de la política en el país vasco, y en la medida en que era árbitro, recuperaba su papel del 36, convirtiéndose en «el baluarte de la burguesía en Euzkadi, a expensas de los partidos estatales, contra proletarios y abertzales». Su existencia como partido autonomista burgués,

católico y reaccionario, enraizada en las tradiciones retrógradas de la región y ligada a la de un sindicato corporatista que practica la colaboración de clases como ELA-STV, se hacía imprescindible cuando que de las mismas tradiciones se reclamaba un frente político populista e independentista que intentaba recuperar el movimiento obrero radical en función de sus intereses. Herri Batasuna era un crisol donde se mezclaban los elementos más heteróclitos empujados hacia abajo por la clase dominante: los nuevos cuadros subempleados, los intelectuales rústicos, la joven generación estalinopatriota, el viejo integrismo católico nacionalista, el clero obrerista, la clase media rural proletarizada, la emigración desarraigada que combatía el complejo de extranjero con un patriotismo sin convicción; en resumen un conglomerado variopinto que no podía haberse erigido sino ante un Estado descompuesto y despreciable, al que un extremismo abstracto le oponía otro Estado imaginario y de menor talla.

De siempre, la configuración del Estado español como un centro político administrativo y una periferia económico-industrial, ha hecho que la capital no tenga un peso decisivo en la vida política del país, y que las crisis sociales hayan tenido siempre un carácter centrífugo y anticentralista. En principio, la debilidad económica y los fracasos políticos de la revolución liberal decimonónica y de la Primera República fueron responsables de que la burguesía reapareciera políticamente como partido regional autonomista, el partido de los industriales textiles catalanes. El enfrentamiento de los intereses textiles con los del trigo y el aceite se traduciría políticamente en una lucha autonomista, porque la burguesía catalana fue incapaz de disputar el poder del Estado a los terratenientes liberales y conservadores, y porque la burguesía española fue incapaz de organizarse en un partido político específico salvo en Cataluña, y en menor escala, en el País Vasco. La prolongación de las tradiciones políticas campesinas vascas, hostiles a la industrialización y al liberalismo dieron lugar al PNV, que a lo largo de su existencia evolucionó hasta convertirse en el partido de la burguesía vasca y en el partido vasco de la burguesía, sin desprenderse de su bagaje clerical y tradicionalista.

La democracia resucitó para conjurar el presente a todos los fantasmas del pasado, y estos cadáveres del 36 reaparecieron al lado de los otros muertos vivientes, el PSOE, la CNT, el PCE, disputándose la parte en la recomposición de las apariencias. Como la comedia sucede a la tragedia, la reaparición de 1976, no fue ni siquiera la expresión falsificada de una lucha real, sino tan sólo una farsa: ni Convergencia i Unió, ni el Partido Nacionalista Vasco representan a una hipotética burguesía nacional catalana o vasca, ni sus aliados Esquerra Republicana de Cataluña o Euskadiko Ezquerra son los representantes de

una pequeña burguesía nacionalista, sino simples pandillas de comediantes y traficantes de ideales muertos, corrillos de ambiciones sin principios ni bandera, vulgares paquetes de acciones políticas sin valores permanentes. No hay mercado nacional vasco a defender de una oligarquía devoradora. Los intereses que estos partidos representan son los mismos que representan la CEOE y el Gobierno: los intereses de la dominación de clase, en su caso teñidos de folklore. Su resurrección no es más que la consecuencia de la política regional azarosa en la que se empeñaron los que tenían en sus manos la transformación del franquismo, porque creyeron que sus intereses necesitaban una política específica en Cataluña y el País Vasco.

Los partidos nacionalistas enterraron para siempre su separatismo, y su táctica apunta a la conquista de parcelas del Estado, por medio de la descentralización de sus funciones represivas, financieras y administrativas. Ése es el «Estado de las Autonomías», y aquellos, los brazos regionales del poder, la parte autonomista del partido del orden, que dicho sea de paso, se descompone desde el centro.

La política de las autonomías seguida por Suárez fue su mayor resbalón, y fue tan catastrófica, que se convirtió en una de las determinantes del golpe de Estado. Suárez permitió las autonomías porque le supusieron una ayuda para desalojar a los socialistas de regiones periféricas clave, sin prever que él iba a perder mucho más. Pues quien habla de un Estado federalista presupone una determinada cesión de poderes que implica a su vez una multiplicación de instituciones regionales, y una multiplicación también de las ocasiones de pelea y de las negociaciones de pasillo. El Gobierno llegó a no poder seguir tomándose a broma el «Estado de las Autonomías» porque sus promesas y pactos lo habían comprometido, y si se lo tomaba en serio, tenía que prepararse para una fragmentación del poder en beneficio de las nuevas burocracias regionales, dentro de un Estado que en lo esencial permanecía fuertemente centralista. El corolario final sería la acentuación de la división de la clase dirigente en grupos de presión, cada cual tratando de mejorar su posición a expensas de los otros.

La obsesión de los golpes dados por ETA militar y recibidos por los militares, hizo que todos los partidos respaldasen la negociación y el acuerdo final entre UCD y el PNV sobre el Estatuto, celebrado como el principio del fin de los abertzales y de la lucha armada. Creían que los sectores moderados de HB variarían su postura y que los irreductibles quedarían aislados, faltos de perspectivas políticas realizables. El Estatuto tenía que ser una victoria moral del PNV y por idénticas razones, una derrota moral de HB. Sin embargo, el homicidio de Iñaki Quijera por la policía provocó un amotinamiento en San

Sebastián, el 3 de septiembre de 1979, que estropeó el impacto político del Estatuto. La provocación policíaca, la condición de no negociabilidad con ETA y las reticencias en la creación de una policía autonómica a cargo del Consejo General Vasco obstaculizaban la pacificación que debía conseguir el PNV. La solución de un problema político le creaba al gobierno otro mayor, el tener que dotar al PNV de un poder apreciable y abdicar de él en el País Vasco, sin que ETA se resintiese. El Gobierno no podía hacer tal cosa sin encontrar la perdición, lo que explica las vacilaciones constantes y la lentitud del Gobierno en los traspasos de competencias de materias autonómicas, paralizadas finalmente a principios del 80. El PNV, viendo en lo poco que había obrado el Gobierno, lo poco que quería obrar, abandonó el Parlamento el 18 de marzo y no volvió hasta junio, cuando ya los atentados de ETA (p-m) a los políticos ucedistas y los de ETA (m) a los militares añadieron una nueva razón para el retorno de las soluciones policiales, como el envío de los GEO. La solución de la cuestión vasca terminaba en un fiasco.

La política autonómica le proporcionó al partido gubernamental tres sonoros fracasos, en el referéndum de la autonomía andaluza, el 28 de febrero de 1980, en las elecciones al parlamento vasco, el 9 de marzo de 1980, y en las del parlamento catalán, el 20 de marzo de 1980, que traslucían el desmoronamiento de la base electoral de la UCD, lo que fraccionó el partido en «corrientes» y puso en duda el liderazgo de Suárez. En principio, los nacionalistas tenían algo que ganar con UCD, y ésta creía que no tenía nada que perder con que ganasen; pero «nunca juega el tahúr la pieza que el contrario presume y menos la que desea» (*Oráculo Manual y Arte de Prudencia*, Gracián). Los redactores de la Constitución adoptaron un sistema ambiguo de acceso a la autonomía y de competencias transferibles: cualquier región podía aspirar a la autonomía por diferentes caminos y su gobierno regional pedir todas las transferencias posibles. Esa ambigüedad se volvió contra el Estado, pues la propia dinámica del proceso autonómico comportaba un sistema de pujas y contrapujas entre el Gobierno y los entes regionales, dispuestos a lograr la cota máxima de poder a costa de limitar el del Estado; y además favorecía la formación de partidos regionales amparados con sus correspondientes grupos de presión, daba alas a quienes explotaban electoralmente las resistencias del Estado y aumentaba las tensiones regionales dentro del partido gubernamental, tentando a la escisión.

La forma de gobierno de Suárez, improvisada, de silencios y apariciones, usando intermediarios en los problemas arduos y molestos e interviniendo directamente en los problemas cuya solución comportase aplausos, fáciles

de resolver ya que él mismo los provocaba, le conferían un aire de inepto y desorientado, cuando un año antes se lo daba de hábil y astuto. «Es esa la mayor usura de los políticos, obrar sólo en aquellas cosas de que se satisfacen, por no repartir la gloria del acierto con ninguno, y ayudarse de otros en aquellas que temen, por descargarse con ellos de la vergüenza que sigue a los ruines acontecimientos» (F. M. de Meló, *Historia de los movimientos y separación de Cataluña*), Los socialistas vieron con el estallido de la UCD la puerta abierta del poder, que los militares no les iban a cerrar, y contribuyeron con la moción de censura, en mayo del 80. El Gobierno, puesto en la picota, sacrificó a Abril Martorell en agosto, chivo expiatorio de los errores de Suárez, e incorporó a los «barones», los jefes de fracción del partido. La operación salvó a Suárez sólo por unos meses. El Gobierno ladeaba a cada instante bajo el peso de sus pasos dados en falso, de sus vicios heredados, de su inercia, ante cada dificultad, minado a pesar de su escaso rodaje por ese mal que de ordinario ataca a los viejos gobiernos, especie de debilitamiento general, de consunción senil, que no podía definirse de otro modo que como la dificultad de ser. Los esfuerzos que se dirigían contra él no parecían suficientes para derrocarlo, pero él iba perdiendo la fuerza de tenerse en pie. La abstención crecía en cada convocatoria, superando el 40% en las elecciones municipales y regionales. El Gobierno y los partidos sembraban la indiferencia donde no prendía la indignación, y plantaban odio donde no cuajaba la obediencia. El país no tenía fuerza ni energía para precipitar al Gobierno en el abismo pero se mostraba cada vez más unánime en dejarlo caer en él. La abstención alcanzaba ya el 80% en las elecciones parciales al senado en Sevilla y Almería (noviembre del 80), y en el referéndum gallego de diciembre del 80. La política había consumido su capital y la caída de Suárez se daba por segura: la frase de que «Suárez sirvió para hacer la transición política, pero no sabía qué hacer frente al asentamiento de la democracia» planeaba en todos los cenáculos donde los políticos debatían «operaciones» y especulaban con hipotéticas combinaciones de gobierno; Osorio tenía su plan, Lavilla el suyo, y también González, Carrillo, Pujol, etc., y cada cual explicaba su álgebra a quien quisiera escucharle.

Los socialistas creían llegada la hora de gobernar, una vez atollada la política autonomista de UCD, y en sus ataques al Gobierno se esconde un deseo incontenible de entrar en coalición con el partido en el poder. Suárez era el obstáculo, por lo que si ponían tanto empeño en su caída era porque ello suponía el camino libre a la Moncloa. La búsqueda de la aquiescencia de los poderes fácticos les había llevado a una alianza táctica con la derecha franquista, todo «un entendimiento de alta política que no consiste en una pinza coyuntural

para tirar a Suárez, sino de carácter institucional», como dirá Osorio. A medida que este pacto PSOE-CD prospera, apoyado por los estalinistas, la operación contra Suárez cristaliza en una «operación De Gaulle», rumoreada desde septiembre, consistente en proponer al Parlamento como salida constitucional de una nueva moción de censura, a un general que encabece un gobierno de «gestión» o de «unidad», con participación de todos los partidos. Salen los nombres de un cierto tipo de generales como Armada, Vega, González del Yerro, Lacalle, Soteras..., antisuaristas y partidarios de una reconducción autoritaria del régimen, pero no de abolir la Constitución.

Pero no iban por ahí las fuerzas que una vez puestas en acción derrocarían a Suárez y pondrían punto final a la «transición». En el período constitucional el terrorismo de Estado había cambiado de dirección, dirigiéndose menos a los partidos o a la población que al propio Gobierno, a quien se le forzaba a detener el proceso autonómico, a terminar con ETA y a ceder ante el ejército en la disputa por la reforma militar y el control del CESID. Desde el 5 de marzo de 1979, día del atentado del GRAPO en el que muere el general de brigada Agustín Muñoz Vázquez, apenas acabados de conocer los resultados de las segundas elecciones parlamentarias, las pistolas apuntan a los militares, a los que se quiere obligar a intervenir menos constitucionalmente. Cuando en julio del 80 ocurre el atentado contra el general Criado, ya son muchos los generales que desafían al Gobierno sin que éste pueda nada, y Milans del Bosch condena en nombre de todos el nuevo régimen: «El balance de la transición no presenta un saldo positivo». El GRAPO elimina en Barcelona al general Briz Armengol y la detención en Valencia de Brotons Beneyto el 20 de septiembre, uno de los grapos fugados de la cárcel de Zamora, permite poner en circulación un supuesto plan de secuestro de Antonio Garrigues Walker, capitalista liberal muy conocido en los medios financieros nacionales e internacionales, que incluye la eliminación de Gabeiras, jefe del Estado Mayor del ejército de tierra, y persona fiel a la monarquía. Una «operación cromo nº2». Verdadero o falso, en todo caso está en ciernes una segunda operación de apuntalamiento del Estado como la que tuvo lugar con los raptos de Oriol y Villaescusa, pero de signo contrario.

Tratado por los medios de comunicación con igual desenvoltura que cuando el espantajo del «golpismo» no era más que un bluff del Gobierno, la realidad del pronunciamiento que se prepara empieza a filtrarse entre los intersticios de la falsificación institucionalizada. El informe Quintero sobre el golpe de Estado turco circula profusamente entre los militares, y en el diario *El Alcázar*, convertido en portavoz del alzamiento, aparte de su programa com-

pleto (los artículos de «Almendros»), se leen frases de una claridad meridiana: «La larga lista de secuestros y asesinatos es la prueba más evidente de que aquí no hay autoridad, y por tanto, hay que restablecerla. Los partidos políticos no representan a nadie en estos momentos» (8-1-81). Y los militares podían permitirse el lujo de tachar de maniobra del Gobierno, las informaciones concernientes a sus preparativos: «La guerra de las galaxias - El Gobierno busca una Galaxia-2, aunque la primera quedase en que de verdad no lo era. Podría servirles para lograr dos objetivos: disciplinar a las escuálidas huestes de UCD y disciplinar a la izquierda. La Galaxia-2 estallará antes de que finalice el mes de enero o podrá demorarse dos meses. También existe un consenso con el Gobierno para montar esa campaña de intoxicación de cara a crear en las Fuerzas Armadas una especie de complejo. Misteriosos y oficiosos "emisarios" que dicen estar al corriente de todo, andan estos días comunicando a conocidos personajes del mundo de la información y del mundo de las finanzas que *el golpe está al caer, que antes de dos meses estará todo zanjado*» (24-1-81). Contra intoxicación, intoxicación al cuadrado.

VII

Una vez más en la historia contemporánea de España, se daba el espectáculo de una sociedad en donde la política, desinteresando completamente a la población, se convertía en asunto de militares, quienes organizaban complots en público mientras los diarios elucubraban sobre el futuro de Suárez y la UCD, y Gobierno y oposición se obstinaban en las rutinas parlamentarias. Querían convencer de la salud del régimen y de la conveniencia de sostenerlo. Deseo vano y conveniencia fingida que nace de una pérdida del sentido de la realidad, que anuncia que los problemas lejos de haberse acabado, van a precipitarse. Sus razones tenía el ejército español para pensar que la política era una cosa demasiado importante para ser confiada a los políticos. Había soportado con malhumor la tentativa postfranquista de democratización superficial a la espera de que la democracia, en tanto que método de combinación de todas las mentiras y de todas las técnicas policiales, sacase las castañas al Estado español. Sin embargo, ahora los militares ya no dudaban en pronunciarse contra la democracia que, a falta de no resolver problema alguno, se contentaba con falsificarlos todos y escenificar sus fracasos en una comedia de equívocos en la que con sus semisinceridades la mentira de Estado «pretende engañar con la misma verdad; muda de juego por mudar de treta y hace artificio del no artificio fundando su astucia en la mayor candidez» (*Oráculo Manual*). Suárez

fue expulsado del poder, como Arias, y del poderío que gozó podemos decir como la máxima de Francisco de Moncada, que «no hay poder que pueda de sí propio asegurarse, porque las causas de su acrecentamiento son las mismas de su ruina» (*Expedición de catalanes y aragoneses*). Habiendo gobernado sin discusión en unto que fiador del equilibrio necesario de las contradicciones de la sociedad española, había olvidado que la necesidad es siempre agradecida, pero con el beneficio que recibe se acaba. Ostentosos discursos sobre la investidura del heredero y el porvenir de la democracia tuvieron lugar en las tribunas, mientras los militares iniciaban una campaña de prestigio de la figura del rey, situando la monarquía por encima del resto de las instituciones. Cada régimen ha producido sus sofistas, y mientras él moría, aquellos se encargaban de probar que era inmortal.

Sin ser brillantes estrategas ni profundos políticos, los militares veían que cuando llegaba la parálisis del régimen a proporciones inquietantes y los políticos se limitaban a utilizar la crisis de UCD en beneficio de sus intereses rutinarios, nadie disponía de un programa sencillo y nadie tenía medios para aplicarlo más que ellos mismos: no era que buscasen elevarse por encima de la sociedad, sino que sucedía que alrededor de ellos todo se empequeñecía hasta convertirles en la única fuerza capaz de poner fin a la confusión en las filas del poder, en la única realidad en la que se encarnaban los sueños autoritarios de la clase dominante. En la historia, es decir en las luchas que la constituyen, la cuestión reside en evaluar siempre el tamaño relativo de las fuerzas presentes, pues basta ser sólo un poco más fuerte que los contrincantes para vencerlos, aun siendo también débil. El ejército español no tenía más claros ahora sus proyectos políticos que en el 36; pero la clase política los tenía todavía menos. Y aquél sabía al menos lo que no quería soportar, ni el gobierno le podía imponer. Con Suárez dimitido, la impotencia del personal político de la burguesía española fue evidenciada al máximo, y una serie de provocaciones -la visita del rey al país vasco, el asesinato de Arregui, la detención de los policías que le torturaron, la dimisión de altos cargos de la policía en respuesta a la detención- aumentaron la presión hasta el punto que la parte de la clase dominante que exigía una intervención directa del ejército, la patronal que seguía a Olarra y Fernández de la Mora, el Opus Dei, la gran banca influida por José María Oriol y por Aguirre Gonzalo, los oscuros intereses agrarios representados por Silva Muñoz, y las fortunas amasadas a la sombra de Franco, como las de Girón, Solís y Utrera, no encontraba oposición en la otra.

La transición democrática terminó oficialmente con la victoria de las instituciones sobre los militares golpistas, para mejor ejecutarse mediante una tran-

sacción secreta de poderes a la Junta de Jefes de Estado Mayor y al Consejo Superior del Ejército. El verdadero contenido de la transición no había sido nunca otra cosa que la búsqueda de una estabilización del Estado, desequilibrado por el sacrificio forzoso de los sectores menos viables del aparato franquista; y como ninguna fuerza política era capaz de reunificar bajo su dirección los medios de opresión heredados del franquismo y los que las circunstancias imponían, de nuevo tenía que surgir el ejército como la única fuerza de centralización donde se podían enganchar todas las fracciones de la clase dominante asustadas por la descomposición del régimen. Aunque la situación designase al ejército como organizador del descontento, era ante todo el de su propio descontento: la unidad de España ha sido siempre el pundonor ideológico de la represión interior -tarea exclusiva del ejército español-, y el complemento espiritual del estado de excepción cuya proclamación periódica confirmaba su papel de guardián de la sociedad franquista. La convicción del ejército de tener por misión histórica la salvaguarda de la integridad del Estado -la lucha contra su disgregación, o sea contra la historia que ya lo ha condenado-, fue de nuevo proclamada a partir de diciembre del 80, en el programa de un grupo de oficiales agrupados bajo el seudónimo de *Almendros*, y capitaneados presumiblemente por el coronel San Martín, con una lucidez que demostraba la superioridad de los que nada han olvidado sobre los que sólo han aprendido a contentarse con palabras.

Los militares, siendo la fuerza que periódicamente es reconocida como la última ratio del orden existente, en buena lógica tenían que terminar pensando que en lugar de los salvamentos momentáneos de la sociedad realizados en beneficio de la burguesía, de escaso resultado para ellos, más valdría «salvar» la sociedad de una vez por todas. Liberar a la sociedad burguesa de la preocupación de gobernarse a sí misma, mediante políticos abrumados por esa preocupación, es lo que proponen los oficiales que firman como *Almendros* en su segundo artículo del 22 de enero de 1981: «¿Puede el desguazador reconstruir la misma nave que ha desmantelado? En este imperativo se detiene nuestra reflexión. Ahora bien, cuando nadie en el Estado parece poder desarrollar esta función, quizá sea la hora, no de apelar a congresos, partidos, Gobierno, de los que nada decisivo puede salir, sino a las restantes instituciones del Estado». Días después, cuando se ha cumplido la primera parte del programa, la dimisión de Suárez, serán todavía más explícitos: «Se ha emplazado a la Corona ante la oportunidad histórica de iniciar una sustancial corrección de rumbo, el reiterado golpe de timón que posibilite la formación de un gobierno de regeneración nacional asistido de toda la autoridad que precisan unas circunstancias tan excepcionales como las que vivimos. Un Gobierno que se vea respaldado

por las instituciones, cuya fuerza procede de su propia condición y que son las llamadas históricamente a garantizar la paz y la subsistencia nacional en los momentos de peculiar delicadeza. Lo que es posible acometer con el mínimo quebranto de las instituciones democráticas en el supuesto que se reconozca la imperativa necesidad de *abrir el proceso de la reforma constitucional*», de lo contrario se «instauraría la oportunidad para una legítima intervención de las Fuerzas Armadas». ¿No es éste el lenguaje de la razón de Estado, tan racional como pueda serlo un Estado, y particularmente el español, cuando comprende que para consolidarse no tiene por qué debilitar métodos consabidos a cambio de otros inciertos, y dejar la realidad de la autoridad por la sombra de la unanimidad? Podemos comprobar cuán falso es presentar a esos «almendros» cuidadosos de florecer en la primavera de la contrarrevolución como si fueran un puñado de fanáticos nostálgicos. Pues sus artículos exponen con la mayor sangre fría y el convencimiento más realista el programa mínimo de todas las conspiraciones que en esos momentos atraviesan el Estado, la plataforma común de las distintas fracciones de los poderes «fácticos»; o bien esos «políticos erráticos» que tanto desprecian hacen lo que se les mande sin chistar, o se les dejará de lado. Esta misma alternativa será formulada más brutalmente el 23 de febrero, con el resultado que todos sabemos.

El golpe del 23 de febrero ha sido el resumen de cinco años de democracia; ha resuelto la confusión creada en las filas del poder y encarrilado la política nacional por su trazado lógico, dada la realidad crítica de la sociedad española y de la clase que domina en ella. Ha sido una lección de constitucionalismo: acabó con un régimen ilusorio, y dio legalidad a lo que ya existía y pugnaba por crecer, la dictadura extraparlamentaria de los poderes bien llamados «fácticos», puesto que los otros son ficticios, manteniendo sin embargo las apariencias de su pretendido fracaso y de la ficción constitucional. El pronunciamiento oculto que después de eliminar a Suárez buscaba la vía de salida entre la madeja de conspiraciones entrecruzadas, ha encontrado en la iniciativa combinada de Tejero, Milans y Armada, la ocasión de su unificación y el pretexto que permite dar a su victoria la forma legal necesaria «con el menor daño de las instituciones democráticas». Así lo que estaba en gestación ha podido cristalizar, y la victoria tenida sobre el golpe visible, imponer el programa del golpe real, negociado entre la Zarzuela y Vitrubio.

El golpe del 23 de febrero sirvió para revelar claramente la fuerza real de cada fracción del poder y las alianzas que eran posibles, mientras sus representantes se permitían «liberarse de compromisos y adherencias anteriores» (Almendros): un cierto despliegue de fuerzas debía tener lugar para que las

fracciones del poder negociasen, no sobre suposiciones sino sobre realidades. El golpe ha creado una interrupción de las instituciones que ha permitido a las distintas fracciones del poder ponerse de acuerdo en imprimir un nuevo rumbo a la política, en la línea del programa golpista enunciado desde las páginas de *El Alcázar*, y para calcular el número de sacrificios necesarios para el simulacro de resistencia requerido por las apariencias de la victoria democrática.

Los militares se decantaron por no consagrar su actuación con título alguno ni dar fundamento jurídico a su poder instaurando una nueva legitimidad; se decidieron por la conservación del régimen, bien que alterándolo mediante una reforma constitucional, porque así obtenían una continuidad administrativa y algo que ni la dictadura ni el retorno del franquismo podían ofrecer: el ejercicio del poder sin compartir las responsabilidades. Satisfechas sus ambiciones particulares y las necesidades del orden, no iban a abrir abismos innecesarios. La cúspide militar ajena a las reivindicaciones de la extrema derecha, no podía ilusionarse con la perspectiva de una dictadura *de jure*, dispuestos como estaban los políticos a darle los atributos del poder tan pronto como los reclamase. No venían los militares a imponer un nuevo derecho sino a llenar un hueco, por lo que dejaron a todos sus títulos guardándose el poder, para ejercer su tutela a discreta distancia.

Igual que la última novedad de la producción de mercancías ha sido un envenenamiento al cual la necesidad de serenar ánimos sigue aún llamando «neumonía», como si se tratase de algo familiar que la imposibilidad de curarse obligó a llamar en un principio «atípica», pues hay que admitir que la enfermedad no tiene nada de natural ni nada de enfermedad, igual la sucesión de mentiras circulando para maquillar y disimular la miserable amabilidad de los políticos con los poderes fácticos ha producido el actual régimen democrático tan «atípico» que, por un lado conserva la etiqueta y por el otro reduce todas sus libertades a la libertad de ser desposeído de ellas suavemente, y que da por normales las peripecias rocambolescas que jalonan su descomposición, y por incomprensibles las más previsibles consecuencias de su vertiginoso descrédito, cuando la brutalidad de Tejero atravesó el muro de las apariencias y obligó a admitir que la vida del Estado democrático no era ni tan normal ni muy apacible. El aire contaminado de los tiempos trae a las enfermedades sociales en compañía de los demócratas que dirigen esta sociedad enferma, demócratas que de todas maneras, vistos los resultados atípicos de la producción de mercancías y los de la política represiva que la protege, se darían por satisfechos si pudiesen vestir su funambulesca y espantadiza gestión, de despacho de asuntos corrientes, rutinario y pacífico, de un proceso para ellos cada día más insólito e

incontrolable. Todos, pero los socialistas más que nadie, puesto que han estado más que nadie complicados en las maniobras subterráneas pregolpistas, han declarado indescifrables los orígenes del golpe. Esperan de esta forma esconder la política de aguijoneo que todos los partidos practicaron con los generales antimelladistas a lo largo de 1980, a quienes ataviaban de demócratas, pensando cubrir su participación en operaciones «no constitucionales» con una capa de terminología. Fieles a su venalidad han demostrado su adhesión a las instituciones respetando la ley del silencio que las guarda, rota sólo de vez en cuando por el desdén de los estalinistas al no habérseles permitido servir de instrumento del Gobierno. Según tal ley, la dimisión de Suárez fue un incidente cualquiera de la vida democrática y la tutela militar no existe.

El achantamiento de los políticos en los días posteriores al golpe fue la revelación sin equívocos de la esencia íntima de toda su valentía democrática anterior. En el Parlamento los diputados se aprestaban a «defender la Constitución» bien asumiendo el programa del golpe, bien disponiéndose a aprobar una legislación que dotara al Estado de unos medios de control social colosales. Excitada su abyección, competían en una emulación de la infamia: unos tachaban a los discrepantes de «extremistas», otros acusaban de «subversivas» las libertades; Carrillo proponía ilegalizar los partidos abertzales, Múgica «concienciar» a la población para instruirla en la soplonería, y obtener reacciones como «las que se produjeron en Alemania para la detención de la banda Baader-Meinhoff» (*El País*, 1-4-81) y todos en fin invitaban a encorvarse bajo el yugo y a pervertirse con la servidumbre. Los políticos, como manecillas del reloj empujadas *manu militari*, daban las horas que les obligaban a dar. El rey les había advertido de no practicar su vil vehemencia con los aparentes responsables del golpe, más allá de los cuales todo habían de ser rosas: «Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las fuerzas políticas contra los que cometieron los actos de subversión de las últimas horas, pero aún resultaría más contraproducente extender dicha reacción con carácter de generalidad, a las Fuerzas Armadas y a las de seguridad (...) de lo ocurrido será preciso extraer meditadas consecuencias para determinar futuras normas de conducta» (reunión del 26 de febrero). «Unanimidad en este primer tema de concertación» contará después *Cambio 16*: al día siguiente se leía al final de la manifestación de Madrid la siguiente nota: «El pueblo español sabe también que no puede confundir a grupos sediciosos, por diversas que fueran sus complicidades, con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes en su conjunto asumieron eficazmente las misiones que la Constitución les atribuye en relación permanente y disciplinada con el poder civil».

Nunca el Parlamento ha sido un reflejo tan fiel de lo que en efecto es. Allí era investido el nuevo presidente Calvo Sotelo, verdadero modelo de hombre-engranaje, representando perfectamente esa ausencia de poder de la jefatura del Gobierno, simple intérprete de la cadena de altos mandos militares que le asesoraba en el desarrollo autoritario del régimen, una vez apartados Gutiérrez Mellado y los más destacados suaristas. Este desarrollo debía venir de la mano de una coalición no gubernamental de la UCD y el PSOE que germanizase el Estado, es decir, que adoptase el modelo alemán del Estado policíaco basado en el control electrónico y la delación. La *concertación* UCD-PSOE ha producido un Mando Unificado Antiterrorista, eufemismo de la policía política dirigido por el franquista Ballesteros, y varias leyes. Unas destinadas a terminar con la preponderancia de los nacionalistas en Cataluña y el País Vasco impidiéndoles ampliar su campo de acción, interfiriendo en competencias exclusivas y anulando la potestad legislativa de los entes autonómicos, para no dejarles ni la consolación de los fetiches nacionalistas cuyo uso queda igualmente «armonizado». La ley de Defensa de la Constitución apunta al control de la información y dicta libertad de expresión vigilada; esta ley define jurídicamente con ambigüedad las figuras del cómplice y apologista del «terrorismo», a determinar no por el juez sino por el fiscal, o sea por la policía. Pero donde el partido parlamentario del orden destruye las condiciones de su propio régimen es con la ley de los estados de excepción, alarma y sitio, conjunto de mandatos constitucionales para tomar medidas que cubran situaciones «anormales» o de emergencia política, se trate de una huelga o de una simple inundación. El estado de sitio se erige en remedio de todos los males sociales. Supone la suspensión de la Constitución y la desaparición de la autoridad civil en provecho de la militar: es el golpe de Estado legal, la legalización del golpe de Estado. Lo mismo que la defensa de la Constitución supone la supresión de la Constitución, la seguridad y la tranquilidad de la burguesía suponen la supresión de las formas políticas clásicas de su dominación. Y viendo la prisa que se dieron los diputados tramitando toda esa legislación, parecía que estaban impacientes de volver a la nada de donde nunca salieron del todo. La notoriedad de los contactos del PSOE con el general Armada y la llamada a la «serenidad» que dirigió a la población el día del golpe, o sea, a detener cualquier posible iniciativa popular para contrarrestarlo, ya revelan una complicidad que la presencia de socialistas en el gobierno que proponía Armada no puede sino confirmar. De triunfar la «solución Armada», la UCD probablemente se hubiera roto para formar un partido conservador tradicional con AP, y el PSOE se hubiera convertido en el gran partido del Gobierno, la quinta rueda del carro burgués. Tanto tras la

caída de Suárez como después de la investidura de Calvo Sotelo, los socialistas se ofrecieron al «poder fáctico» para gobernar en coalición; la solución Armada con o sin Armada. Porque lo que estaba claro es que el PSOE tomaría partido por los vencedores, fuesen quienes fuesen, y sólo se declararían públicamente por la fracción que hubiese ganado; esa ha sido siempre la clave del patriotismo de los partidos, mudarse al bando más poderoso, los militares, «la más importante fuerza política del país» al decir de Carrillo, «ca como ellos tromparen, así conviene dançar» (*Rimado de Palacio*).

Los estalinistas se conformaban con el papel de pariente pobre en las mesas del PSOE, y por tanto aportaron su sincera colaboración al proceso de canonización de los resultados del golpe de Estado. Un comunicado conjunto PCE-PSOE llamaba «a la colaboración del pueblo con las fuerzas de seguridad» (1-4-81) suscribiendo la política de chivatos imperante, y el PCE había votado la ley de Defensa de la Constitución. Sus reticencias posteriores no se debieron a un prurito arqueodemocrático: «El líder comunista no ocultó el descontento de su grupo por haber ofrecido al Gobierno su colaboración para estabilizar la situación política y no haber encontrado ofrecimientos de concertación» (*El País*, 24-4-81). Entregados a un proceso de descomposición sin remedio, su desmoronamiento es un hecho relevante en la política española, pues la burguesía pierde una defensa que hasta hoy ellos cubrían.

Los nacionalistas, que en los últimos días de Suárez se habían acercado de nuevo al Gobierno para regatearle competencias a cambio de los votos en el parlamento, veían desvanecerse su valor de cambio ante la actitud antiautonómica de los militares, y se predisponían a todas las concesiones aun sin habérselas solicitado. «Existe una identificación total» con el Gobierno, dirá Garaicoechea (26-3-81), y Pujol lo mismo: «Nadie podrá negar nuestro sentido de Estado y nuestra disponibilidad hacia todo cuanto representase la consolidación y el progreso de España» (21-4-81). En adelante tenían que dedicarse más a conservar lo adquirido que a pedir lo acordado.

La manifestación más acusada de la disgregación del régimen democrático sin embargo, no la constituye la secesión de los militares, sino el alejamiento de la burguesía. «La política es algo demasiado importante como para dejarla sólo en manos de políticos profesionales o de los burócratas» (declaraciones de Ferrer Salat al ser elegido presidente de la CEOE a primeros de septiembre). La patronal se prepara a intervenir directamente en política, poniendo su fuerza económica al servicio de sus intereses privados. Dicho de otro modo, se pronuncia por la dictadura aunque tenga que ir disimulada con una coalición bipartidista o con un nuevo conglomerado de detritus políticos con una cierta

técnica electoral, llámese «mayoría natural» o «gran derecha». El sincronismo de los socialistas con el estado de ánimo de la patronal es tan notable que Felipe González invitaba a los militantes de su partido a comprender que «o asumimos nosotros el papel transformador de la sociedad y del Estado que en Europa ejercieron los partidos burgueses, o de lo contrario es posible que en España no haya nunca democracia» (*El País*, 7-4-81). Tres días antes, UGT y CCOO habían firmado con los empresarios un Acuerdo Nacional del Empleo, pacto social que prácticamente suprimía los convenios y las huelgas, e instauraba en las fábricas técnicas de arbitraje sindical de corte fascista.

La transición democrática no habrá sido sino la democracia transitoria de una dictadura a otra. El nuevo período abierto el 23 de febrero no es el último de la democracia sino el primero de la dictadura. El partido del orden, después de expulsar a los estalinistas y separarse de la derecha franquista, excluye a los nacionalistas. La sociedad burguesa se salva paralelamente a la contracción del círculo de sus dirigentes, cuando un interés más exclusivo se defiende contra otro más amplio. Toda reivindicación fuera del partido del orden será perseguida como si atentase contra el Estado. Pues la democracia no está en estado de sitio, es ahora el estado de sitio: «La democracia en sí está elaborada» dirá Calvo Sotelo dos días después del golpe, y hasta podía haber recitado al parlamento la coplilla de Sebastián de Horozco:

Señor Gómez Arias
vos me trajistes
y en tierra de moros
vos me vendistes.

VIII

El golpe no fue el resultado de una sola conjura tendente a destruir la democracia postfranquista y volver a la dictadura. Fue la combinación de varias operaciones existentes, cuyo desenlace se debió a variaciones del momento que alteraron la correlación de fuerzas en el sentido que determinó la serie de sucesos que todos conocemos.

En primer lugar existía una conspiración de ultraderechistas, disconformes con todo lo que no fuese una dictadura militar ornada con los sonajeros patriótico-fascistas del régimen de Franco y entregada a una represión sin freno. Teniendo como cabezas visibles al teniente coronel Tejero Molina y al ex- ministro Girón, el resto del iceberg lo formaban los partidos de la extrema

derecha, la mafia vertical, las bandas parapoliciales y algunos viejos generales en la reserva. Estas aguas residuales del franquismo más achacoso habían fructificado en los pantanos de la represión, y así tenían cierta fuerza entre la guardia civil y la oficialidad de algunos regimientos y algunos servicios secretos. El hecho mismo de la variedad de toda esta museografía fascista, dispersa y llena de rivalidades, y el que no dispusiera de al menos un militar de alta graduación en activo para poner al frente de la conspiración indica que, aunque muchas fuerzas eran ya para disimularse, pocas resultaban para ponerse en movimiento, puesto que ni eran bastantes para asegurar el éxito ni fuertes para resistir el contragolpe. Las experiencias pasadas convencieron a la ultraderecha de la necesidad del apoyo directo del Ejército, y esto lo tenían que proporcionar generales que estuvieran dispuestos a encabezar el golpe y conseguir la adhesión de una buena parte del estamento militar. En consecuencia, se decidieron a sumarse a la conspiración de Armada y Milans del Bosch con tal de que ésta quisiese entronizar un gobierno de militares, sabiendo que siempre podrían servirse de su participación para favorecer sus pretensiones una vez que el golpe triunfara.

De «operación De Gaulle» se ha tachado la confabulación de Armada y Milans, como si se quisiera señalar con ello la perpetua aspiración al poder supremo de los soldados de fortuna. Para nadie era un secreto la opinión de Milans sobre los cambios políticos producidos, y su inclinación a practicarla ya le había costado la dirección de la Acorazada y la jefatura del Estado Mayor de Tierra. Producto típico de la tradición militar franquista no podía concebir virtud pública que se diferenciase del afecto a la disciplina de cuartel, y miraba a los políticos con el sentimiento que despiertan aquellos cuya existencia pende de hilos que se pueden romper cuando plazca; si añadimos que a su alrededor se había formado una corte de la alta sociedad que aprovechaba cualquier circunstancia para hacerle sentirse salvador de la patria, comprenderemos por qué este general Mola prefirió ir hacia el poder antes que esperar a que se le acercase. El general Armada, por la red de amistades que poseía en el ejército, sus conexiones con los partidos y la carta de legitimidad que le brindaba la protección del rey, quien había refrendado la caída de su enemigo Suárez y le había aupado en el ascenso a segundo jefe del Estado Mayor del ejército de tierra, es el hombre que se presentaba para, venido el momento, ponerse a la cabeza del pronunciamiento con los mejores triunfos en la mano. A medida que ganaba en vanidad de poder, había perdido en realidades, encontrando entonces perfectas para encumbrarse como salvador las fuerzas que los conjurados le ponían en la mano. Creía tener la ocasión y los medios; se consideraba

prestigiado en las altas esferas y preferido por el rey, y por tanto, dispuesto a mandar en un Parlamento venal e incapaz que Tejero le devolvería atemorizado. Pensaba hacer de forma que ni los conjurados, ni el régimen, ni el país mismo pudiesen subsistir sin él. Así sus proyectos le destinaban la cabeza del Estado, cosa que un Parlamento secuestrado tenía que sancionar, presidiendo un gobierno de salvación con los partidos.

Consideraba Armada de que muchos de los generales que se hallaban dispuestos a secundarle no lo harían mientras no viesen al Gobierno en trance de inminente caída. Había pues que empezar por unificar el movimiento conspirativo, contra el Gobierno en el que entrasen todos, incluidos los ultraderechistas, tanto por impedir que sus entusiasmos les empujasen a un golpe precipitado que le pusiera en guardia, como por aquello de que a más espadas más seguro el éxito de la operación. Lanzaba el cable de unos a otros, prometiendo todo cuanto pudiera servir para comprar el apoyo de los descontentos, y menos cohibido que los otros, prometía cosas en las que no tenía ningún interés, dejando imaginar a los conjurados, a unos la resurrección del franquismo, a otros la de sus privilegios políticos abolidos, sin prejuzgar expresamente su propia solución. Por un lado se resistía a jugar una sola carta y por otro no estaba dispuesto a comprometerse seriamente con los demás bandos conspiradores, teniendo más por objetivo, que los indecisos no se inclinaran por la legalidad y los ultras por sus delirios. A Armada le interesaban Tejero y los otros como fuerza de choque; Tejero por su parte necesitaba de Armada para llevar a cabo la integración de elementos que él sólo no conseguiría y para el papel a jugar cara a la jerarquía castrense. Pero ni la mutua necesidad ni la diplomacia conspiratoria de Armada podían compensar el recelo recíproco y la profunda discrepancia existente entre los conjurados, lo cual privaba a la conspiración de una jefatura firme. Como se verá luego, todos se pasaban de cautos. Y «más bien paga el escote quien en tales bodas yanta», en palabras del Canciller López de Ayala (*El Rimado de Palacio*).

Si las prisas de Tejero arrastraron el «golpe blando» de Armada a una acción dura, detuvieron en cambio una operación más profunda y ambiciosa, que venía fraguándose desde finales del 79, y cuya detección causó una serie de destituciones y relevos como los de los generales Torres Rojas, Fontenla, Armada y Mariñas, fruto de la necesidad del Gobierno de asegurarse los puestos clave del ejército y la guardia civil con militares leales. Esta tercera conspiración que aspiraba a salir adelante con modos menos aparatosos, había expuesto su programa en *El Alcázar* bajo el seudónimo de *Almendros* y contaba con toda clase de apoyos en los poderes «fácticos» y según se supo a causa de

las preguntas que inspiró la declaración de Haig y la actitud expectante de la administración norteamericana, con el asentimiento de la CÍA y del Pentágono. En su haber figuraba la dimisión de Suárez y la dirigían los «gaullistas» cuyos nombres habían sido aireados el año anterior con motivo de rumores de operaciones antisuaristas. Salvo los más extremistas, Torres Rojas, San Martín y Pardo Zancada, los demás no se comprometieron con Tejero y Armada, sea porque no viesen su solución clara, sea que creyesen que una vez comprometidos se les haría ir por donde no querían; más verosímilmente se ha dicho que simplemente les disgustaba la transferencia de todo el poder a Armada y Milans, de quienes no querían depender. Pero habían llegado a tal punto las cosas, que nadie podía evitar ya que sucediesen.

La ocupación de las Cortes por casi trescientos guardias civiles a las órdenes de Tejero fue coordinada por la sección de operaciones especiales del CESID, a cargo del comandante Cortina y su segundo, el capitán Gómez Iglesias, hombres del staff de Armada. Después se sublevó Milans en Valencia y se puso en movimiento la Brunete. Fue el primer acto durante el cual los distintos protagonistas tenían que dirimir sus diferencias. La oscuridad de este proceder provocó desconcierto y estupor en los cuerpos de seguridad, dudando entre brindar con champaña o tomar medidas de contrainsurgencia: misteriosas conversaciones mantenían los coches patrulla de la Policía Nacional, mientras el Director de la Seguridad del Estado, Laina, decía a micrófono abierto momentos después de la ocupación, «¡Quiero saber de qué lado estoy!».

El Gobierno, perdida del todo la autoridad de mandar y de prohibir, no era ya Gobierno, sino solamente la causa de la pelea. La retención del parlamento colocaba a los militares fieles y al rey en la cúspide del poder legítimo, así que fue en la Zarzuela y la calle Vitrubio, sede de la JUJEM, donde empezaron a funcionar las armas que habitualmente resuelven esta clase de golpes: los teléfonos. Las Redes Permanentes, que controlan todas las comunicaciones militares, estaban bajo el mando del coronel Miguel Iñíguez, fiel a Gutiérrez Mellado. El carácter de batalla de los teléfonos que tenía el golpe fue tan predominante que un oficial de la División Acorazada se lamentaba de que «el golpe fracasó por no cortar las antenas de la Zarzuela».

Todos los generales coincidían, sin necesidad de arduas negociaciones, en poner coto a la debilidad del Gobierno y del sistema mediante una reforma restrictiva de la Constitución, pero en cuanto a los medios, muy pocos eran los dispuestos a embarcarse en la aventura de Armada, y menos con Tejero, porque la misma precariedad del régimen democrático les brindaba la posibilidad de implantar su autoridad por medios más suaves y reglamentarios.

Los militares leales a la Constitución, porque se hallaban en la cumbre de la jerarquía militar precisamente a causa de los relevos forzosos y destituciones de los descontentos y conspiradores, y sabían que «un golpe duro» invertiría el orden jerárquico en proporción a la lealtad pasada; el rey y los almendristas porque su interés no podía diferir del de los leales, pues si bien un fracaso conspiratorio les haría perder mucho, un triunfo por esa vía no les beneficiaría demasiado, toda vez que la disminución del Estado les traería aparejada la ruina, y que del mismo modo que se decidían a empuñar las armas, tendrían luego que no deponerlas, ya que no se hallarían seguros en el poder tras haberlo violentado, ni se consolidarían fácilmente con todos los elementos contradictorios que se les habrían sumado; en fin, los inevitables indecisos porque preferían una elevación para más tarde, pero sin peligro, a acontecimientos prematuros que arriesgaban perderles, poco decididos a dar el paso aunque quedando en posición de ver venir los sucesos para sumarse a ellos cuando su final pareciera asegurado. Armada tenía que ver que el rey no seguiría su partido sino en tanto le forzase a ello una guarnición, y que aunque no descartase su colaboración en el caso de que su operación se llevara a cabo con éxito, no podía esperar de él ayudas para su realización. Los leales tenían por objeto principal impedir que los generales conspiradores y hostiles sostuvieran el golpe, pues el rey y los cuerpos de seguridad del Estado irían declarándose en contra del régimen, y el mejor modo era llevarles a una negociación, cuya sola noticia detendría a los que faltaban por levantarse, y haría cambiar de opinión a cuantos estaban dispuestos de una u otra forma a unirse al golpe. Aramburu director de la guardia civil, y Sáez de Santamaría inspector jefe de la Policía Nacional, se instalaban en el hotel Palace, preparando a los GEO, menos para lanzarlos al Congreso que para disuadir a los tejeristas de toda resistencia al asalto. Quintana Lacacci capitán general de la I Región lograba convencer al general Juste para detener la ocupación de Madrid y evitar que se iniciase la de Zaragoza por la Acorazada Brunete nº1. Con ello estaba malograda la posible sublevación de Elicegui Prieto, capitán general de la V Región militar, que con otros golpistas indecisos, Merry Gordon y Campano López, capitanes generales de la II y la VII Regiones Militares, y Saavedra, jefe de la División de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno nº2, se retiraba a sus bastiones, a fin de que su área de mando le ayudase a hacerse valer en el lado que venciese, no sabiendo aún a cuál unirse. Lo cierto era que entregaban a los golpistas a sus propias fuerzas, para si las cosas redundaban en su favor no verse comprometidos, y, si se volvían en su contra, no encontrarse en mala situación con el bando ganador.

El general Ignacio Alfaro desde la JUJEM, el general Gabeiras desde el Estado Mayor del Ejército de Tierra y los generales Fernández Campos y Valenzuela desde la casa real mantenían una gran actividad telefónica, mientras Armada trataba de contrarrestarles aumentando los temores y las irresoluciones de los generales con informaciones exageradas, y señalando su nombre invocado por los golpistas para hacer ver que en sus manos estaba el retrasar los pretendidos progresos golpistas a cambio de que se le autorizase para asumir la presidencia del Gobierno. Los partidos políticos consentirían en ello pues ninguno estaba en disposición ni tenía voluntad de oponerse, dada su insignificancia presente y el abatimiento en que les dejaba Tejero, además algunos partidarios se encontraban en los escaños, y es sabido cuántas indignidades están dispuestos a cometer los partidos cuando se les permite tras un golpe, seguir en la legalidad. Pero los generales rebeldes a la Constitución ya consideraban un éxito la negociación con los generales leales en donde se acordaba cumplimentar su programa «Almendros». El más influyente de ellos, González del Yerro, capitán general de la región insular de Canarias, el antiguo director general de prisiones y el que hizo dimitir con la pistola a Suárez, se había inclinado por dejarle al gobierno su título y repartirse el poder con los leales, y su actitud habían decidido la suerte de la conspiración. El rey ya no podía hacer por Armada, más que permitirle proponer su solución «a título personal». Armada entonces, acudió a Tejero para que se prestase a la parodia de nombramiento, pero Tejero no tenía tiempo de escuchar proposiciones que no quería poner en obra. Para él no era cuestión de dejar que los partidos siguieran gozando de alguna autoridad cuando tan fácil le parecía quitársela, y repugnándole una solución de la que era enemigo, arruinó los últimos naipes de los conjurados. Armada cometía el último error olvidando que «ninguno debe cargar sobre sí obligación determinada, que el cumplirla, o el estorbo de ella esté en mano de otro» (Hurtado de Mendoza, *Guerra de Granada*). Milans abandonó, y Tejero, solo, tuvo que rendirse.

Tejero y Armada unificaron sus conspiraciones pero mantuvieron cada uno sus respectivos fines, que eran encontrados, pensando imponerlos desde la fuerza de sus posiciones ocupadas en el golpe. La posición de Tejero, aislada, valía lo mismo que los generales partidarios de Armada, vacilando, demorándose, y conteniéndose prudentemente. La resolución del conflicto vino pues del acuerdo entre las otras dos facciones: la de los generales leales, que siendo demócratas de nombre, estaban dispuestos a sacrificar la democracia en aras de una política de orden, y la de los generales desleales, que siendo antidemócratas, estaban dispuestos a permitir un *statu quo* formal en aras de lo mismo.

Los compromisos y los pactos de rendición trataron de reducir al mínimo los sacrificios, quedando para después establecer la magnitud, en tanto que se silenciaba lo referente al colectivo «Almendros». De ahí que quedaran fuera del sumario del golpe los guardias civiles con rango inferior a oficial que asaltaron el congreso; todos los oficiales de la Brunete incluido su jefe, el general Juste, salvo el jefe de su Estado Mayor coronel San Martín y los cinco que se unieron a Tejero en las Cortes; el general León Pizarro, jefe de la División Motorizada Maestrazgo nº3, que ocupó Valencia; el Estado Mayor de la III Región Militar, exceptuados el teniente coronel Mas y el coronel Ibáñez; el grupo que al mando del coronel Garchitorena intentó tomar el gobierno militar de Madrid; y, en fin, el propio Girón y los demás ex ministros de Franco que constituían el equipo político de relevo, el cadáver que seguiría en el armario.

IX

«Las malas nuevas o poco prósperas para sus cosas, cuando menos las dejare divulgar y verificar el príncipe, tanto más prudentemente procederá para que no causen revolución y pensamiento de novedades a quien las oye» (Arias Montano, *Aforismos*). La tarea siguiente al acuerdo entre los militares era la organización de la invisibilidad de su existencia y por lo tanto de la existencia de cualquier conspiración o disentimiento grave, fuera del de los procesados, «para resaltar que las Fuerzas Armadas españolas y los Cuerpos de Seguridad dejaron patentes, en su conjunto, durante tan dramáticas horas, su disciplina, lealtad y obediencia a los mandos constitucionales» (Comunicado del Gobierno, 27-2-81). Pero antes había que vencer la desconfianza con el método de los círculos militares, excitados y desconcertados por los acontecimientos, a quienes el rey exhortaba en su discurso de la Academia Militar de Zaragoza a acatar la Constitución «y comprender que no se contribuye a la seguridad de la patria con acciones irreflexivas que colocan a las Fuerzas Armadas y al Estado en general en situaciones críticas, para las que no puede haber una salida digna ni una continuidad normal dentro del mundo en que vivimos» (28-2-81). En el de la Escuela de Alto Estado Mayor pedía «disciplina y sacrificios» (9-3-81), es decir, sacrificados. Los recelos son importantes porque incluso desde el propio ministerio de la Defensa se admitía que «puede ocurrir que algunas de las formulaciones (de los golpistas), en cuanto puedan ser auténticamente patrióticas, sintonicen con nuestros sentimientos» (declaraciones del teniente coronel Fernández Monzón, director de la oficina de Información de la Defensa, al diario *ABC*), y hasta el 17 de marzo no se dictaba acta de procesamiento contra

el general Torres Rojas, día en el que el ministro Oliart lee en el Congreso la versión oficial de los hechos, confirmada con el rechazo de los recursos de los procesados de una institución como el Consejo Supremo de Justicia Militar, que siempre había sido comprensiva con golpistas y rebeldes. Los Consejos Superiores de los Ejércitos recuperan su perdida representatividad y se perfilan como los organismos negociadores entre los generales, la JUJEM y el Gobierno. En la reunión del 24 de marzo el rey les aseguraba «que los sentimientos de quienes integran las Fuerzas Armadas pueden ser conocidos y valorados» pero a cambio de cesar en la costumbre conspiratoria: «Es preciso pensar en los resultados, en las situaciones que no tienen salida o que pueden conducir a verdaderas tragedias. Y no olvidemos tampoco que a esos resultados trágicos, fruto de un impulso súbito y exaltado, puede llegarse también por desgracia, a través de un proceso más lento de descomposición, de falta de autoridad, de desbordamiento paulatino de las normas constitucionales (...) debemos estar persuadidos de la necesidad de cumplir las leyes que constituyen nuestro ordenamiento jurídico. Porque la ley sólo puede perder su vigor cuando las circunstancias conducen a modificarla o derogarla por los procedimientos legalmente establecidos, pero no por la fuerza o la inobservancia. El mismo respeto es necesario mantener hacia las instituciones, que tienen apoyo en dichas leyes». En forma farisea, el rey dibujaba la realidad de la conducta militar en los últimos cinco años. Y de la misma forma le respondería el primer golpista ascendido, el teniente general Fontenla, en la toma de posesión de la capitanía de la IX Región Militar: «Se impone actuar con prudencia y sensatez», «menos exigencias y rigor en las reclamaciones de derechos», «el mejor servicio a la patria, al rey y al Ejército, sobre la base de nuestro acatamiento y nuestro respeto a la Constitución» (1-4-81).

Pero si los generales demostraban que eran de fiar con tal que su ambición quedase satisfecha, los ultraderechistas y los demás golpistas derrotados consideraban los hechos juzgándolos según su criterio usual, y notaban que les había sucedido lo que frecuentemente sucede en ocasiones semejantes, a saber: que no han sabido aprovechar ciertos momentos favorables y decisivos. Pero se consolaban de haber perdido tan buena ocasión con la esperanza de aprovechar otra cuanto antes. Una Unión Militar Española distribuye en los cuarteles un documento titulado *Informe general extraordinario para las Fuerzas Armadas* que retoma la doctrina almendrista, y a la redacción del progubernamental *Diario 16* llegan los papeles internos que revelan el estado de opinión entre los oficiales de la Brunete. Estos se inquietan por una temida depuración y por la suerte de los implicados oficiales «que gozan de gran prestigio en

todo el Ejército, quien les considera como verdaderos patriotas y hombres de honor» (20-4-81). Pero la purga denunciada se reduce al cese del ayudante de Armada y de dos tenientes coroneles del servicio de Milans, y al relevo del general Juste del mando de la Brunete. El Gobierno necesita ser benévolo con los sacrificados y prepara el aislamiento de los tejeristas intentando incluirlos en una causa aparte, pero la maniobra fracasa al facilitar a la prensa «un antiguo miembro del SECED» la declaración de Tejero al juez militar que *El País* publica (1-5-81); por primera vez aparece en público el verdadero papel de Armada, que el informe Oliart trató de ocultar, su relación con el rey y los socialistas, su liderazgo en la conjura, la implicación del comandante Pardo de Santayana, del capitán Gómez Iglesias, planeador de la ocupación del Parlamento y del comandante Cortina, el contacto con el PSOE. Inexplicablemente sólo Cortina es procesado y casi un mes más tarde. Poco después resucita el terrorismo de Estado, y el GRAPO elimina en Madrid al general González de Suso, un melladista, y en Barcelona a dos guardias civiles. Se pone de relieve una lucha subterránea librada por medio de los servicios secretos. Ha sido nombrado nuevo director del CESID el teniente coronel Alonso Manglano, un hombre de González del Yerro y se negocia otro, el general Marinas, para sustituir a Gabeiras; segundo del CESID es nombrado el comandante Casinello, antiguo ayudante de San Martín en el SECED y actual director de la Brigadilla, nombramiento que tiende a relacionar ambos servicios. El 23 de mayo se entrevistan González del Yerro y Calvo Sotelo culminando la nueva alianza «ese abrazo entre las Fuerzas Armadas y las instituciones del nuevo régimen que se planea esta semana en Barcelona (...) ese pacto de hermandad entre la monarquía constitucional y los ciudadanos armados del país» (*Cambio 16*, 25-5-81). Y ese mismo día, los golpistas disconformes dan su andanada contra el abrazo que consagra su inmolación: el asalto de la sede del Banco Central en Barcelona, tomando más de doscientos rehenes, preparado por dos hombres del SECED buscados por su relación con el 23 de febrero: el capitán Sánchez Valiente y el sargento Montero, antiguo infiltrado en el FRAP. Las sucesivas versiones que da el Gobierno de la personalidad de los asaltantes demuestran sus dudas entre contar la verdad del asalto, que iluminaría otras verdades que importa más que se desconozcan, o negociar con quienes han enviado el comando. Tanto ha proclamado la unidad y la fidelidad de las Fuerzas Armadas que tiene que presentar a los disidentes como inasibles fantasmas, poderosos y omnipresentes, de oscura e imprevista índole. Los asaltantes serán presentados como vulgares atracadores, aunque dos de ellos Martínez Gómez y Ots Jiménez hubiesen sido desenmascarados como provocadores y confidentes de la Brigadilla, el primero

por el grupo autónomo libertario de Madrid en 1978, y el segundo por la CNT de Valencia en 1977.

¿Desde dónde se pulsan los resortes del terrorismo de Estado, ahora que el propio Estado parece renunciar al terrorismo? El Gobierno tendrá que confesar la verdad a través de su órgano oficioso, *Cambio 16*: son parte de sus mismos servicios secretos controlados por la fracción estatal golpista hostil a los acuerdos del 23 de febrero. «Aunque el SECED está desmantelado desde hace tres años, en Madrid hay todavía unas oficinas donde periódicamente se reúnen sus miembros para cambiar impresiones y analizar la situación política. (...) El Gobierno, que piensa que la "mano negra" desestabilizadora se encuentra entre los antiguos funcionarios del SECED lo tiene muy difícil. Porque se necesita todo un ejército de policías para averiguar qué hacen y dónde están ahora los 260 miembros de la policía supersecreta de Carrero Blanco, la mayoría de ellos miembros de las fuerzas armadas» (1-6-81). Unos están en prisión como San Martín y Pardo Zancada, y los capitanes de la guardia civil Muñecas, Abad y Acera, que acompañaron a Tejero. Los demás forman una red paralela dentro de los servicios secretos oficiales, principalmente el CESID y la División de Inteligencia del Cuartel General del Ejército, sucesora del SIBE, otro servicio teóricamente disuelto. Con cautela el Gobierno indica hacia dónde hay que mirar: «Como opina un alto colaborador del Ministerio del Interior, los "delincuentes" comunes tal vez sean la punta del iceberg, incrustado en la Administración, en los servicios de inteligencia o en los de información, con vinculaciones difíciles de establecer» (*Cambio 16*, 8-6-81). El Gobierno, poco seguro de los servicios existentes, pondrá en marcha uno nuevo, *la brigada Antigolpe*, al mando del comisario Emilio Sánchez, en realidad la vieja «brigada operativa» de Conesa y Billy el Niño, cuyos componentes, «hombres de exacerbado pensamiento conservador» como dice *El País*, languidecían en puestos burocráticos secundarios desde que el asunto GRAPO los enfangara. Pero a ingenio ratero, montaje menguado; quienes tan ineptos fueron fabricando grapos no podían ser linces fabricando tramas negras, y a tal punto de cartón se compuso la seudoconspiración del día de San Juan, que ni la jurisdicción militar ni la civil quisieron encargarse del caso, teniendo el ministro Rosón que dejar a la amalgama de ultraderechistas capturados en libertad por falta de pruebas convincentes. Sin embargo, hechos como la detención de Gómez Iglesias, la sanjuanada, la petición de procesamiento de los suboficiales y números de la guardia civil que asaltaron el Congreso, y el acoso a Girón y a los tenientes generales en la reserva son signos de la actual ofensiva del Gobierno, que quiere tener cercados a los recalcitrantes y asociados a los

disconformes. Si la desagregación del partido gubernamental no fuera tan palmaria, los esfuerzos que los perdedores emplean en la desestabilización del poder serían vanos, no teniendo la dictadura declarada ningún futuro cuando igual trabajo puede hacer la dictadura encubierta, pero como el curso de los acontecimientos les brinda esperanzas siguen porfiando, porque todo derrotado sabe que «es grande conveniencia de las armas, después de la derrota, poner en ejecución todos los actos de osadía y emprender todos los intentos que entonces la imaginación ofendida señalare; porque sobre el nombre del vencido no hay acción que pueda dañar la opinión, y tal podía ser que se enmendase con ella la suerte pasada; de manera que, en tales tiempos, es justo abrazar cualquier remedio, aunque no sea el más fundado en la razón, pues importa poco que a lo perdido se añada algo más, e importaría mucho cualquier buen suceso después de juzgados por perdidos» (F. M. de Meló, *Política Militar*). El Gobierno, por su lado, procura romper aquellos compromisos secretos de rendición que el 23 de febrero y el 24 de mayo le sacaron a la fuerza, toda vez que la fuerza que obligó a contraerlos ya no subsiste, y parapetarse con aquellos otros de reparto que le fortalecen, dando favores y promociones a sus adversarios. Si el resultado conduce a una dictadura disimulada o a una democracia bajo fianza, eso es algo que puede importar poco al Gobierno y a la clase dominante, puesto que una empresa económico-política en liquidación como es la democracia postfranquista necesita un Estado policíaco. La ley de la Reserva Activa viene a ser el relevo pactado de la cúpula militar, el instrumento de reparto de posiciones entre el gobierno, la JUJEM y los Consejos Superiores de los Ejércitos, ahora un organismo colegiado de los tenientes generales. Viejos duros han sido apartados, como Merry Gordon, Campano, Elicegui o León Pizarro, pero otros han ascendido: los generales Lacalle y Saavedra rigen las capitanías de la VII y II Regiones, el golpista Caruana la V, el general Urrutia, pasa del estado mayor de Milans al de Quintana, el general Hermosilla, otro colaborador de Milans, es nombrado subdirector general de la guardia civil. Valencia Remon, coronel del regimiento golpista Villaviciosa, es puesto al mando del gobierno militar de León, el general Sáez Larumbe, partidario de Armada, en el de Barcelona, y el antiguo jefe del SIBE, Sáenz de Tejada, en el de Pamplona.

No podemos, sin embargo, decir que la conspiración ha terminado y que el partido del orden se recompone con la soldadura militar. Los movimientos realizados por el gobierno y los militares en los últimos meses no añaden ciertamente motivos de estabilidad a una situación de suyo incierta. La democracia tutelada es sólo una tregua entre los políticos y los militares bajo los auspicios

del miedo y del interés, pero como todas las treguas, no resuelve la cuestión, aplaza las dificultades. Todo lo que constituye la democracia oficial: gobierno, partidos, parlamentos, autonomías, sindicatos, prensa, es el esqueleto de un organismo nacido muerto, y si queda en pie es debido a la inercia de los huesos, no al último soplo de vitalidad que se escapa del cadáver. El apartamiento continuo de la política por parte de la población, la senilidad precoz de los dirigentes, la desintegración de los partidos, la mutación de los gobernantes en fantasmas frente a la policía y al ejército, tienen un nombre y hay que dárselo: es el fin de la reforma pactada del franquismo, el fin del disfraz democrático, de sus hombres, de sus ideas, de sus maneras, de sus organizadores, y hasta de su léxico. Si aún no ha habido entierro oficial, es a causa de que sus sepultureros, los militares, prefieren de momento un reparto amigable y dejan flotar sus restos carcomidos. Pero el orden que reina es cáscara de orden, letargo y apatía social generados por la transición, no hay adhesión ni conformidad, y la pervivencia del régimen encorsetado con bayonetas, se debe a las dudas de los generales en enviarle al hoyo. El Gobierno no va a tener el mínimo arresto para juzgar a los golpistas procesados si no es para exculparles; si el juicio tiene que pronunciar condenas habrá que sentar a militares en el ejecutivo, y si el juicio no se celebra, los militares tendrán que recoger los pedazos del Estado que como un peso inerte caerá por sí solo. Porque lo que es indudable es que el futuro del Estado español va a estar cada día más ligado al único poder real que existe en España, el ejército, al que un simple accidente bastará para convertirlo en el único poder oficial.

X

La historia ha dado la razón a quienes decían que la democracia española no era más que el repugnante aborto nacido de la unión de los dos modelos de contrarrevolución que se enfrentaron en la pasada guerra civil. Sin embargo, poca satisfacción tendrían si no pasaran de la mera afirmación, porque la historia les retiraría la razón al empeñarse en tenerla de ese modo. Demasiado confortable sería recordar hoy el antiguo sofisma que nos aconsejaba esperar a que la contrarrevolución se acabe para que la revolución comience. En realidad, lejos de ser un resultado mecánico por llegar, la contradicción que corroe la sociedad no ha cesado de actuar y contrarrestar los proyectos de apuntalamiento, de forma que el refuerzo del Estado no ha impedido que la base social de la dominación de clase se pudra aceleradamente.

El desprestigio de las instituciones es la mayor evidencia del naufragio de

la democracia burguesa y el agente secreto de su proceso de desintegración. El sistema es *res nullius* y nadie identifica sus intereses con su continuidad. El contraste entre su realidad y los resultados prometidos por quienes lo aclamaron y cooperaron con él es abrumador, y en ningún momento vemos que su situación, ahora que se ha equipado con mayores medios represivos, sea más estable que antes; al contrario, parece constantemente en peligro y como en el aire, y, aunque tiene asegurado el presente, está obligado a vivir al día sin que a nadie se le ocurra imaginárselo proyectado en el futuro. Es un resultado y no un comienzo, una táctica y no una solución. Es una prevención, es la consecuencia contrarrevolucionaria de un prólogo revolucionario abortado. Pero no conviene interpretar eufóricamente tal declive porque no se corresponde con un avance del proletariado sino con un progreso de la dictadura. No obstante ésta no tiene fuerza en sí misma, sino que se la proporciona el retroceso de aquél. En el seno del proletariado no hay una conciencia total de la degradación y sí una cierta degradación de la conciencia que sería fatal si hoy no fueran tantas cosas posibles, buenas y mejores. Sin confianza en sí mismo, la autonomía obrera no puede brotar y adopta la forma de un sordo resentimiento, presos los trabajadores de un fatalismo que les obliga a aceptar la realidad vigente sin adherirse a ella. Esa es la causa verdadera del abstencionismo actual y no una supuesta lucidez política; la abstención es la prueba de que no fijan su entusiasmo en las elecciones ni tampoco su atención, pero la lucidez sólo les vendrá de su capacidad de imponer en la práctica sus intereses de clase y sus métodos autónomos contra la mentira democrática oficial.

El franquismo y el antifranquismo retrasaron la aparición en España de ciertos conceptos teóricos nacidos de la crítica revolucionaria más moderna, básicos para la creación de un nuevo lenguaje con el que nombrar una realidad histórica diferente de la del 36 y aún de la de los 60, y hacer comprensible su oculta esencia. En consecuencia tal creación no se produjo. El instrumento principal para revelar el sentido profundo de los hechos es «el lenguaje crítico autónomo, sin el cual la revolución no puede comprenderse a sí misma sin mediación ideológica, ni nombrar a sus enemigos» (*Manuscrito encontrado en Vitoria*) y con un vocabulario limitado perteneciente a una época caduca, las apariencias son forzosamente equívocas y en vez de constituir un idioma que expresa directamente la realidad, se traban en un jeroglífico que la oculta. Y si consideramos que en los últimos años este vocabulario quedó resumido a la mínima expresión, comprenderemos la atroz ausencia de ideas y pensamiento revolucionario que se han dado cuando tantos gestos radicales y tantas luchas han tenido lugar. Un lenguaje pobre y banalizado no permite ni el razona-

miento ni la profundidad, ni la luz ni el calor, y la vida misma queda condenada a una ruin vulgaridad.

Tres hechos podemos aducir para demostrar que los trabajadores no han sido vencidos más que por sus propias faltas y carencias: primero, que el enorme bagaje de medidas preventivas contra posibles acciones suyas como son las leyes de excepción y la política exagerada de control policial llamada por el poder «antiterrorista», indica que la clase propietaria y sus defensores estiman su triunfo como provisional, y lo que viene a ser lo mismo, que toman la derrota del proletariado por provisional; segundo, que la represión apenas ha empleado el mínimo de su potencialidad, ya que no hay en las cárceles más que unos cientos de nacionalistas radicales y un puñado de revolucionarios, principalmente los miembros de los «grupos autónomos», cuya liberación tiene que ser obligatoriamente el primer punto de todo programa revolucionario en España; tercero y último, que los enemigos se le caen solos, como el gobierno ucedista, como los partidos y como las centrales sindicales a quienes el Estado y la Banca han tenido que salvar de la quiebra y la disolución con préstamos y donativos que sobrepasan los mil millones de pesetas anuales. Con el ANE se encaminan hacia un sindicalismo por arriba que para ser vertical sólo le falta un estatuto de funcionarios.

En la situación que se encuentra el proletariado, su objetivo no puede ser más que la formación de una línea de defensa flexible que haga dar en el aire las iniciativas de sus adversarios, con el fin de agotarlos completamente con derroches inútiles de su escasa energía. Una pasividad bien calculada puede lograr algún progreso de la situación fatigando a sus enemigos sin permitirles mejorar la posición, pero una victoria no se consigue sin un ataque, porque si no se hace más que esperar los golpes, más pronto o más tarde éstos dan en el blanco, forzando a los trabajadores a la entrega moral y a la desbandada. La pasividad estratégica total es perniciosa; una defensa eficaz tiene que incluir contraataques más o menos fuertes en proporción a los efectivos disponibles; así pueden acumularse fuerzas o no perderse las que se tienen en la inacción, y se pueden soportar las pérdidas que sucedan. Una circunstancia exterior puede modificar la correlación de fuerzas presentes en favor del proletariado, y ésta es el triunfo de la clase obrera en otros escenarios de la guerra social. La campaña polaca de la revolución europea y la irrupción violenta del proletariado inglés no han tenido todavía la repercusión que les corresponde. En estos dos países se concentra la realidad histórica mundial, hecha de la incapacidad de todos los poderes, de sus saltos en el vacío, de sus escapes hacia delante. Los proletarios polacos no dejan gobernar a nadie contra ellos, y los ingleses emprenden

el mismo camino; en España estamos aún en la primera fase del proceso, en la que son la parálisis y la descomposición quienes no dejan gobernar. Pero la agitación revolucionaria no necesita buscar pretextos y objetivos lejos de donde se halla, porque están en todas partes. Ora en los planes antilaborales, ora en los programas represivos, ora en las prisiones donde permanecen olvidados los revolucionarios atrapados. En Segovia y otras cárceles, se consumen una cincuentena de libertarios, a los que una campaña lanzada en septiembre del 80 no pudo poner en libertad a falta de no haber encontrado ecos suficientes en la Península. Una ocasión perdida para el surgimiento de una corriente revolucionaria en España y una vergüenza para quienes debieron apoyar la campaña y no lo hicieron. Queda el llamamiento «*A los libertarios*» de donde entresacamos un excelente consejo sobre las formas de acción: rechazando las peticiones respetuosas y las prácticas electorales, «todas las formas de acción son buenas, y las que más escándalo hagan, las mejores». La organización social existente no ha dejado de agravar la insatisfacción reinante relativa a ella y hoy mismo simplemente se trataría de que los revolucionarios prendiesen fuego allí donde ésta segrega aceite tóxico, demostrando que todo lo que se pretende hacer tragar a la población, desde la versión oficial del golpe de febrero hasta la alimentación cotidiana, se halla adulterado de igual manera, y que el aceite que engrasa los rodamientos de esta democracia militarizada, no es menos nocivo que el otro.

En estos momentos la guerrilla revolucionaria tiene que hacer efectivas todas sus posibilidades de intervención y aprender así a conocer con exactitud las fuerzas de que dispone el enemigo. A mayor conocimiento, mayor será la eficacia de las trampas que el guerrillero prepara a su contrincante. Pero como dice Clausewitz, «incluso en la defensiva, no podemos ganar mucho si no es jugando fuerte» (*De la Guerra*).

Los incontrolados, Noviembre 1981.